



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA

Serie D:
GENERAL

20 de febrero de 2020

Núm. 37

Pág. 1

ÍNDICE

Página

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

- 161/000082** Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la defensa de la identidad de Navarra 14

Comisión de Asuntos Exteriores

- 161/000018** Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España 15
- 161/000019** Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de los derechos de las personas LGTBI y la promoción de la persecución de aquellos que vulneren derechos fundamentales de este colectivo ante la Corte Penal Internacional 16

Comisión de Justicia

- 161/000040** Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la elevación de categoría de los partidos judiciales de Roquetas de Mar y El Ejido y establecer que los Juzgados de Primera instancia e Instrucción sean servidos por Magistrados 17
- 161/000126** Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación y dotación efectiva de la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores 18

Comisión de Defensa

- 161/000107** Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas que pasen a la situación administrativa de la reserva 20
- 161/000108** Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora de la sanidad militar 21
- 161/000142** Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mantener informado al Congreso sobre los contingentes militares de Irak y Líbano tras los últimos acontecimientos en Irán 22
- 161/000145** Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ascensos del personal militar en situación de Reserva 23

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 2

161/000181	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la recuperación para uso civil de bienes del patrimonio de Defensa de interés histórico-artístico, ambiental o en desuso pero de utilidad pública o social demandada por la sociedad, en particular de los solares sitos en el Campo de A Estrada (A Coruña)	25
161/000182	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la recuperación para uso civil de bienes del patrimonio de Defensa de interés histórico-artístico, ambiental o en desuso pero de utilidad pública o social demandada por la sociedad	25

Comisión de Hacienda

161/000015	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la lucha contra el fraude en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido	27
161/000016	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la rebaja del IVA en los libros electrónicos y prensa digital	29
161/000094	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre incentivos fiscales al arrendamiento de vivienda	29
161/000098	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública	31
161/000151	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la acuñación de monedas conmemorativas del Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de Lugo	32
161/000160	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al cobro de la deuda del Estado a las Comunidades Autónomas por impago de la recaudación del IVA de diciembre de 2017	33
161/000179	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la ampliación de un IVA reducido para los espectáculos culturales pirotécnicos	34

Comisión de Interior

161/000001	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la ampliación y la agilización en la concesión de las ayudas de los afectados por la DANA	35
161/000002	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Daniel durante los días 16, 17 y 18 del mes de diciembre, a su paso por la provincia de León	37
161/000017	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la adopción de medidas que permitan reducir la tasa de suicidio policial entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	39
161/000049	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Daniel y Elsa durante los días 20 y 21 de diciembre de 2019 a su paso por la provincia de Albacete	41
161/000050	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos y daños de las inundaciones en Asturias en el mes de diciembre de 2019	43
161/000051	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por las borrascas durante la semana del día 16 al 22 de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Ávila	45

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 3

161/000052	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Elsa durante este mes de diciembre a su paso por la provincia de Burgos	47
161/000053	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos en la provincia de Cáceres por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019	49
161/000054	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Elsa durante los días 19 y 20 de diciembre de 2019 a su paso por la Comunidad Autónoma de Cantabria	51
161/000055	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Elsa a su paso por la provincia de Jaén los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2019	53
161/000057	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien en la segunda quincena de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Soria	54
161/000058	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Fabien el día 21 del mes de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Toledo	56
161/000059	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos en la provincia de Valladolid por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019	58
161/000060	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien desde el día 16 del mes de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Zamora	60
161/000061	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos en la provincia de Palencia por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019	62
161/000063	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno al desarrollo del Protocolo de actuaciones firmado el 4 de abril de 2018 por el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la nueva ubicación del cuartel de la Guardia Civil	65
161/000083	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra	65
161/000121	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la Unidad de Prevención y Reacción en la comisaría de Pontevedra	66
161/000122	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la creación de una USECIC en la comandancia de la Guardia Civil de Ourense	67
161/000124	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el estado de tramitación de las ayudas dispuestas en el Real Decreto-ley 11/2019, por los daños ocasionados por la DANA en septiembre del pasado año	68
161/000129	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por el temporal Gloria en la Comunidad de Aragón	70

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 4

161/000134	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Gloria entre los días 19 y 23/01/2020	70
161/000138	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los daños ocasionados por la borrasca «Gloria»	72
161/000139	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mantener la Guardia Civil en todas las regiones y pueblos de España	74
161/000143	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a declarar profesión de riesgo a los policías locales y su inclusión en el Real Decreto 1087/2015	75
161/000144	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la Unidad de Prevención y Reacción en la comisaría de la Policía Nacional de Lugo	76
161/000149	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Gloria en la provincia de Málaga, entre los días 24 y 25 de enero de 2020	77
161/000159	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a prohibir los homenajes a terroristas así como cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo y a aumentar la pena de inhabilitación a los condenados por delitos de esta naturaleza	78
161/000169	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la declaración del municipio de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, de acuerdo con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil	80
161/000170	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el mantenimiento de las Salas del 091 de la Policía Nacional en las comisarías de Ourense y Lugo	81
161/000172	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la no utilización de la Guardia Civil y sus familias como moneda de cambio en los pactos políticos y su no expulsión y permanencia en todo el territorio de España como elemento esencial de su vertebración	82
161/000173	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la declaración de profesión de riesgo de los policías locales para su inclusión en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social	83
Comisión de Educación y Formación Profesional		
161/000007	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el refuerzo de la Alta Inspección educativa y la creación e impulso de un sistema de autorregulación para garantizar la calidad de los libros de texto	84
161/000008	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de la renta de las familias con hijos en colegios concertados	86

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 5

161/000009	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación e impulso de un sistema de formación MIR para el profesorado	87
161/000084	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la promoción y mejora de la formación de la ciudadanía en reanimación cardiopulmonar (RCP)	89
161/000120	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el refuerzo de la Alta Inspección educativa y la creación e impulso de un sistema de autorregulación para garantizar la calidad de los libros de texto	90

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

161/000109	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre impulso turístico en la provincia de Palencia	91
161/000152	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo al turismo de cruceros en Illes Balears	92
161/000156	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo a la competitividad y futuro de los puestos de trabajo en las factorías que la multinacional Alcoa tiene en San Cibrao (Cervo)	93

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/000003	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar el reclutamiento de tripulantes y afrontar el relevo generacional en el sector pesquero	95
161/000004	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a eliminar las incoherencias en la gestión diferenciada de la anchoa en las zonas VIIIc y IXa y la separación de los TAC (Total Admisible de Capturas)	96
161/000005	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la costera del bonito	97
161/000086	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reconocer el valor estratégico del sector cinegético y a impulsar el marco orientativo y de coordinación para su ordenación a escala nacional	97
161/000089	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora del etiquetado de la miel y de la información que sobre sus productos reciben los consumidores	99
161/000110	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la plantación de choperas en la cuenca del río Carrión	100
161/000112	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para poner solución a los problemas que provoca la actual crisis estructural del sector hortofrutícola almeriense	101
161/000114	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del sector agroalimentario andaluz y, en particular, almeriense, frente a los incidentes en La Junquera	103
161/000123	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el estado de tramitación de las ayudas dispuestas en el Real Decreto-ley 11/2019, por los daños ocasionados por la DANA en septiembre del pasado año	104

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 6

161/000137 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los daños ocasionados por la borrasca «Gloria» 105

161/000165 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas a adoptar en relación con el control de la plaga *Delotococcus Aberiae* 107

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/000081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a rectificar el acuerdo suscrito entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE 108

161/000140 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a declarar profesión de riesgo a los policías locales y su inclusión en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social 109

Comisión de Cultura y Deporte

161/000006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo del Gobierno de España a la creación del Consorcio Monumental del casco antiguo de Badajoz 110

161/000178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la ampliación de un IVA reducido para los espectáculos culturales pirotécnicos 111

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/000030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un portal web de empleo público universitario 112

161/000031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España 113

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la protección de los cooperantes en el exterior 114

161/000022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la integración de la Agenda 2030 en los programas de reformas del Gobierno de España 117

161/000087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto ambiental y social de la explotación minera en la cuenca del río Orinoco 118

Comisión de Igualdad

161/000020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de los derechos de las personas LGTBI y la promoción de la persecución de aquellos que vulneren derechos fundamentales de este colectivo ante la Corte Penal Internacional 120

161/000027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) en materia de lucha contra la discriminación racial y étnica 121

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 7

161/000028	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la incorporación de medidas de fomento de la igualdad para la mujer en el nuevo Proyecto de Ley de Deporte	122
161/000035	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la respuesta institucional contra la trata de personas	124
161/000036	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento y la visibilización de los logros obtenidos por las deportistas españolas	125
161/000037	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el estudio y seguimiento estadístico de la violencia sexual	127
161/000038	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la lucha contra la violencia sexual	128
161/000092	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la prohibición de los métodos, programas y terapias de aversión, conversión o condicionamiento de la orientación sexual o de la identidad o expresión de género	130
161/000146	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la igualdad social de las personas mayores LGTBI y sobre la normalización de la diversidad en centros residenciales de personas mayores	131
161/000171	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la erradicación de la mutilación genital femenina	132

Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

161/000066	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a promover el curriculum vitae anónimo o ciego en los procesos de selección	133
161/000067	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a instaurar ficheros positivos de solvencia para el colectivo de los trabajadores autónomos	134
161/000068	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a promover la implantación de medidas que mejoren la satisfacción de los trabajadores en las empresas	135
161/000069	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a retomar la creación de un grupo de trabajo para la elaboración del Libro Blanco sobre el Futuro del Trabajo	137
161/000070	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a aprobar un Plan de Apoyo al Empleo y al Emprendimiento en territorios de escasa población y zonas rurales	138
161/000077	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que los autónomos que tengan deudas con la Seguridad Social, puedan cobrar el 50 % de la pensión y el restante 50 % se derive a amortizar la deuda	139
161/000091	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento de la plena compatibilidad de la pensión de jubilación contributiva con la realización de trabajos por cuenta propia o ajena	140
161/000100	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a establecer un coeficiente reductor de jubilación para el colectivo de vigilancia física de la instalación nuclear de El Cabril	142

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 8

161/000101	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a dispensar una protección especial a los afectados de linfedema	143
161/000127	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley General de la Seguridad Social para garantizar el reconocimiento del tiempo de prestación del Servicio Social de las mujeres, a efectos de cotización a la Seguridad Social	144
161/000135	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos al objeto de avanzar hacia su equiparación efectiva con la acción protectora por desempleo de los trabajadores por cuenta ajena	145
161/000147	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la elaboración de un estudio que determine el impacto sobre el empleo y la competitividad de la economía española provocado por las últimas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI)	147
161/000157	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes ante el incremento de inmigrantes irregulares que están llegando a las Islas Canarias	148
161/000163	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora de los permisos por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave	149
161/000166	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a establecer la compatibilidad entre la actividad de creación artística con la inclusión en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, la percepción de pensiones no contributivas o el cobro de pensiones por incapacidad absoluta permanente	151
161/000168	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la garantía del mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social	153
161/000180	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la publicación de un informe periódico sobre el estado del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores	154

Comisión de Sanidad y Consumo

161/000034	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes	155
161/000041	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora y a la armonización de las retribuciones de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud	156
161/000042	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de la seguridad del paciente en el Sistema Nacional de Salud	157
161/000043	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ordenación, la gestión y la planificación de las plantillas de médicos en el Sistema Nacional de Salud	159
161/000044	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al nuevo reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud	160

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 9

161/000045	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la gestión y la planificación de profesionales sanitarios en el ámbito rural	162
161/000046	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un plan con el que renovar el equipamiento tecnológico en el Sistema Nacional de Salud	163
161/000047	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una estrategia nacional en humanización del Sistema Nacional de Salud	164
161/000048	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la financiación del Sistema Nacional de Salud	166
161/000065	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al convenio marco con las organizaciones de pacientes	167
161/000072	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria	169
161/000073	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la contratación centralizada de servicios en el Sistema Nacional de Salud	170
161/000074	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la sustitución de las líneas telefónicas 901 y 902 por líneas gratuitas en el suministro de información sobre servicios públicos	171
161/000085	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la promoción y mejora de la formación de la ciudadanía en reanimación cardiopulmonar (RCP)	173
161/000088	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar el cumplimiento de la normativa publicitaria sobre medicamentos en los contenidos de redes sociales y plataformas digitales	174
161/000090	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora del etiquetado de la miel y de la información que sobre sus productos reciben los consumidores	175
161/000095	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la ampliación de la cobertura pública de los tratamientos contra el tabaquismo en el marco del Sistema Nacional de Salud	176
161/000096	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la inclusión del cribado neonatal para la detección de inmunodeficiencias severas en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud	178
161/000097	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la instalación completa de todas las máquinas de diagnóstico y tratamiento oncológico donadas por la Fundación Amancio Ortega y su puesta en funcionamiento al servicio de todos los usuarios de la Sanidad pública en toda España	179
161/000115	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al Calendario de Vacunación Infantil en la Ciudad de Ceuta	179
161/000116	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consolidación y el desarrollo del modelo de formación sanitaria especializada en el Sistema Nacional de Salud	180

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 10

161/000118	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el mantenimiento por parte del Estado de las competencias sobre la formación sanitaria especializada	182
161/000158	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la prevención de riesgos laborales del personal sanitario relacionados con la manipulación de fármacos peligrosos	183
161/000164	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora de los permisos por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave	184

Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

161/000013	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el plan de renovación de las industrias de cogeneración y energía eólica	187
161/000014	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear	189
161/000032	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación de la Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA) para la mejora del reciclado de envases y vidrio	190
161/000064	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Convenio de Obras Hidráulicas con Canarias	191
161/000106	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reforma de la fiscalidad en la factura de la luz	192
161/000128	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las infraestructuras hidráulicas del río Segura	194
161/000136	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los daños ocasionados por la borrasca «Gloria»	195
161/000150	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la limpieza y mantenimiento de cauces y márgenes de ríos	198
161/000153	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre una actuación urgente, sostenible, estructural y definitiva para la protección del litoral de Balerna y Guardias Viejas en el municipio de El Ejido	199
161/000154	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las instalaciones de desalación en la provincia de Castellón	199
161/000155	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación del tómbolo sobre el que se asienta el castillo y la ciudad de Peñíscola y la adopción de medidas para garantizar la estabilidad y seguridad del acantilado y del conjunto histórico-artístico de Peñíscola	201
161/000174	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio	202
161/000177	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la cogeneración en el sector cerámico	207

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

161/000010	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre aumento y mejora del servicio ferroviario en la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches	208
------------	---	-----

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 11

161/000011	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la conversión en autovía de la carretera N-432 Badajoz-Córdoba-Granada	209
161/000012	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la declaración de Obligación de Servicio Público en el servicio ferroviario de Cercanías en el Valle del Guadalquivir (Córdoba)	210
161/000024	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el análisis exhaustivo de las posibilidades de cambio de ancho de vía	211
161/000025	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la red denominación del aeropuerto de Valladolid a «aeropuerto de Valladolid-Miguel Delibes»	213
161/000026	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar los Corredores Atlántico y Mediterráneo en España	214
161/000039	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la línea de AVE Madrid-Granada	216
161/000062	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las conexiones ferroviarias de Talavera de la Reina	217
161/000075	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación del puerto de Fonsalía en Tenerife	219
161/000076	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del Convenio de Carreteras con Canarias	219
161/000078	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ampliación del aeropuerto Tenerife Sur	221
161/000079	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora de la Alta Velocidad ferroviaria en la línea Salamanca-Madrid a través de Medina del Campo	222
161/000102	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a los servicios ferroviarios deficientes y discriminatorios en Galicia y a las medidas urgentes que debe impulsar el Ministerio de Fomento	223
161/000103	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la total gratuidad de la autopista AP-7 en todos los tramos de su recorrido	226
161/000111	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la creación de una estación ferroviaria de mercancías en el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas	227
161/000113	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso y a la ejecución del Proyecto «Tercer Carril» en la autovía A-7 entre Roquetas y Almería (tramo enlace 429-enlace 438)	227
161/000130	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar mejoras en los servicios ferroviarios convencionales que presta RENFE en Galicia	228
161/000131	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a restituir el servicio de autobús por carretera que une Casas Bajas (Valencia) con Teruel (VAC-218)	229
161/000132	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la vivienda en Andalucía	231

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 12

161/000133	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en defensa del trazado más accesible y sostenible de la línea ferroviaria del Tren de la Costa a su paso por la comarca de la Safor en Valencia	232
161/000175	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante	234
161/000176	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la mejora del parque central de Alicante	236
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital		
161/000023	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre una ambiciosa Agenda Digital para España	237
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad		
161/000029	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la prohibición de la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente	240
161/000033	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la desprotección de menores y colectivos vulnerables por el retraso en la elaboración de los informes psicosociales	242
161/000093	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la prohibición de la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente	243
161/000105	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el restablecimiento de los fondos estatales para la atención de menores extranjeros no acompañados	245
161/000117	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para reforzar los protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de abuso, agresión y explotación sexual como las que han tenido lugar de manera continuada en centros de menores tutelados dependientes del Consell de Mallorca, y sobre las actuaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en torno a la presunta agresión sexual cometida por varios jóvenes a una menor en Palma la madrugada del 24 y 25/12/2019	245
161/000125	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación y dotación efectiva de la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores	247
161/000141	Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación y a la puesta en marcha de una estrategia nacional con la que mejorar la prevención y el abordaje de la soledad crónica en las personas mayores	248

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Hacienda

181/000010	Pregunta formulada por el Diputado don Néstor Rego Candamil (GPlu), sobre previsiones acerca de dar cumplimiento a la reclamación que realiza la Xunta de Galicia sobre los 370 millones que se le adeudan, 200 millones del IVA correspondiente al año 2017 y 170 de los incentivos habilitados para las autonomías cumplidoras de la regla de gasto, así como de la reforma del sistema de financiación autonómica	250
-------------------	--	-----

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 13

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

181/000001	Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre motivos por los que el Ministerio de Fomento está demorando continuamente las actuaciones necesarias para impulsar las autovías A-76 entre Ourense y Ponferrada y A-56 entre Ourense y Lugo	250
181/000002	Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre cumplimiento de los compromisos contraídos en relación con las partidas inversoras que afectan a la red estatal de carreteras en la provincia de Ourense, que no fueron respetados en el año 2019	251
181/000003	Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre motivos del incumplimiento del cronograma para la conclusión antes de que finalizase el año 2019 de las obras de la LAV a Galicia entre Pedralba de la Pradería y Ourense, así como fecha de su finalización	251
181/000004	Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre cumplimiento de los compromisos contraídos en relación con las partidas inversoras que afectan a la red estatal de carreteras en la provincia de Ourense que no fueron respetados en el año 2019	251
181/000005	Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre fecha prevista y hoja de ruta para poner en práctica la limitación de los precios del alquiler de viviendas	252
181/000006	Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre conclusiones y soluciones a las que se ha llegado en la «cumbre del Transporte» celebrada en el mes de enero acerca del abaratamiento de los billetes aéreos de territorios extrapeninsulares	252
181/000007	Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre plazos previstos para el desarrollo de las dos actuaciones específicas en Santa Cruz de Tenerife y en Telde dentro del Plan 20.000 viviendas, así como opinión del Gobierno acerca de si esa será la medida «estrella» para resolver la escasez de oferta de vivienda en Canarias y en el resto del territorio español	252
181/000008	Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre situación en la que se encuentra y previsiones acerca de los proyectos de electrificación entre Lugo y Monforte de Lemos, así como de los de renovación de la vía en el trazado entre Lugo y Ourense, incluyendo la correspondiente a las variantes previstas de Os Peares, Canabal y Rubián	253
181/000009	Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre normativas o textos legales que piensa modificar el Gobierno para impulsar la bajada de los precios de alquiler de viviendas	253

Otros textos

PREMIOS

292/000007	Premio «Josefina Carabias» de periodismo parlamentario. <i>Designación de los miembros del Jurado. Corrección de error</i>	253
-------------------	---	-----

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 14

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Propositiones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

Comisión Constitucional

161/000082

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposition no de Ley sobre la defensa de la identidad de Navarra, para su debate en la Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

No son nuevas las agresiones de distinta naturaleza que la Comunidad Foral de Navarra viene sufriendo provocadas por el nacionalismo vasco. La pretensión de integrar Navarra en el País Vasco, así como la autodeterminación o ruptura con España, es su objetivo principal. Para ello, existe una estrategia que pasa, entre otras acciones, por imponer una lengua común, símbolos y cultura también comunes.

Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la Nación española y solidaria con todos sus pueblos, como reza el artículo 1 del Amejoramiento del Fuero. Asimismo, la Constitución Española, en su disposición adicional primera, ampara y respeta el régimen Foral.

El Tribunal Constitucional ya sentenció que la Comunidad Autónoma Vasca no podrá incluir en su escudo oficial el emblema de Navarra, obligándole a quitarlo definitivamente después de haberlo incluido como si Navarra formara parte de Euskadi. La sentencia tardó en cumplirse muchos años, y ahora quieren regular que las cadenas de Navarra formen parte de su escudo y que la Ikurriña, bandera del País Vasco, esté presente en las instituciones de Navarra.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposition no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Rechazar cualquier injerencia en el estatus jurídico y político de la Comunidad Foral de Navarra, definido y amparado en el Amejoramiento del Fuero y en la Constitución Española.
2. Rechazar igualmente los ataques a la identidad de Navarra.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.—**Ana María Beltrán Villalba**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 15

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000018

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El interés estratégico de las relaciones científicas y tecnológicas con ciertos países es hoy, más que nunca, fundamental. Los asuntos científicos y tecnológicos están en la frontera de los nuevos escenarios asociados a la innovación y a las inversiones en general (económicas, comerciales, empresariales, etcétera).

El apoyo a la internacionalización de la ciencia y tecnología españolas es una necesidad de primer orden, ya que constituye un elemento básico a nivel científico y académico que, además, tiene una repercusión evidente en la internacionalización de las empresas españolas. El objetivo de la llamada «diplomacia científica» es el de facilitar el intercambio mutuo de información entre instituciones científicas de los distintos países, a la vez que se promueve la participación conjunta en proyectos de investigación y de movilidad, la generación de sinergias y el fomento de la cooperación en ciencia y tecnología.

El apoyo a la internacionalización de la ciencia y tecnología españolas es una necesidad de primer orden, ya que constituye un elemento básico a nivel científico y académico que, además, tiene una repercusión evidente en la internacionalización de las empresas españolas. El objetivo de la llamada «diplomacia científica» es el de facilitar el intercambio mutuo de información entre instituciones científicas de los distintos países, a la vez que se promueve la participación conjunta en proyectos de investigación y de movilidad, la generación de sinergias y el fomento de la cooperación en ciencia y tecnología.

Sin embargo, en la mayoría de embajadas de nuestro país no se atienden los temas científicos ni tecnológicos de un modo integral. Si bien es cierto que algunas embajadas disponen de oficinas que se ocupan de temas científicos, como sucede por ejemplo con la «Office for Cultural and Scientific Affairs» de la embajada española en Reino Unido, no se trata de una práctica extendida y mucho menos mayoritaria.

Para solventar esta situación, se propone la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, tal y como existe en países de nuestro entorno como Italia o Francia. La labor del agregado científico y tecnológico abarcaría, aunque no exclusivamente, la organización de actividades y eventos que refuercen la excelencia científica y tecnológica, así como el apoyo a proyectos desarrollados por universidades y empresas, participando activamente en colaboración con el Instituto Cervantes o las oficinas comerciales españolas. También incluiría el apoyo y el desarrollo de la cooperación bilateral, la negociación y la aplicación de acuerdos específicos, la promoción de la ciencia y la tecnología españolas, la provisión de información acerca del sistema y las políticas científicas aplicadas por los distintos países y la promoción y la gestión de contactos entre investigadores españoles residentes en el extranjero e investigadores extranjeros.

Por otra parte, esta figura se encargaría de realizar las tareas de asesoramiento al embajador sobre cuestiones científicas y técnicas, informando sobre desarrollos científicos en el exterior, a la vez que actuaría como un portavoz en asuntos científicos en el extranjero, asistiendo con este a eventos relacionados con la ciencia y la tecnología en colaboración con las academias de ciencia y tecnología, la industria y las autoridades gubernamentales de su país de residencia.

Además, el apoyo decidido de las embajadas a la ciencia y la tecnología abriría las puertas a poder participar en proyectos de dimensión internacional, proyectos que suponen una fuente potencial de ingresos, prestigio y capacidad de influencia en los mercados internacionales.

Con el fin de poner en valor y capitalizar los sectores de excelencia en la investigación científica y tecnológica y apoyar el avance de las empresas españolas que operan en sectores de tecnología avanzada, se hace necesario contar con una figura como la del agregado científico y tecnológico. La administración cuenta con un amplio sector del personal ya formado en este contexto que procede de los distintos centros y organismos de investigación y las universidades.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 16

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear e impulsar la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, con el objetivo de llevar a cabo tareas de asesoramiento y promoción de la ciencia y la tecnología españolas, así como fortalecer y profundizar en las relaciones de cooperación científica y tecnológica internacionales, apoyando la internacionalización de nuestros investigadores y empresas y las participación de estos en proyectos de dimensión internacional.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000019

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de los derechos de las personas LGTBI y la promoción de la persecución de aquellos que vulneren derechos fundamentales de este colectivo ante la Corte Penal Internacional, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos somos plenamente conscientes de que la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia continúan siendo formas de discriminación presentes en el día a día de nuestras sociedades, y de la existencia de miles de personas que, todavía hoy, continúan siendo perseguidos, encarcelados y condenados a trabajos forzados, castigos físicos e incluso a la pena de muerte en razón de su mera orientación sexual e identidad de género en terceros países.

Recordando el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia (International Day Against Homophobia and Transphobia, IDAHOT), que desde fechas recientes se viene celebrando cada 17 de mayo, coincidiendo con la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17 de mayo de 1990.

Teniendo también en cuenta que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y la Constitución Española proclama los derechos fundamentales de toda persona, entre ellos el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y su dignidad inherente, así como los Principios de Yogyakarta ratificados por la Comisión Internacional de Juristas para la aplicación de los instrumentos internacionales en relación a la orientación sexual y la identidad de género.

Recordando que conforme al artículo 7.1.h) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional «se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil [...] h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte» y que conforme al artículo 7.2.g) del mismo texto «por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad», siendo la persecución penal de un colectivo la persecución «generalizada o sistemática» por excelencia.

Recordando, del mismo modo, que conforme al artículo 7.2.a) de tal Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por «ataque contra una población civil» se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de

conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política», y que el artículo 7.1.a) penaliza los asesinatos y ejecuciones de miembros del grupo perseguido, y el artículo 7.1.e) la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos estamos decididos a no guardar silencio ante nada estas situaciones, así como a contribuir desde el Congreso a la defensa de los Derechos Humanos de todas esas personas, cruelmente perseguidas, encarceladas, sometidas a trabajos forzados y castigos físicos, e incluso condenadas a muerte de forma por su orientación sexual o identidad de género, y por ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

«1. El Congreso de los Diputados expresa su solidaridad con los miles de personas en el mundo que, en pleno siglo XXI, continúan siendo cruelmente perseguidas, encarceladas, sometidas a trabajos forzados, castigos físicos e incluso, en los casos más atroces, condenadas a muerte, o asesinadas, en razón de su mera orientación sexual o identidad de género, y reconoce tales conductas como formas de crímenes contra la humanidad.

2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, urgentemente:

a) Promueva, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, haciendo uso efectivo de las facultades que le confiere el artículo 14 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, una investigación oficial e independiente de la persecución que vienen sufriendo miles de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales en distintos lugares del mundo, en tanto que crimen de lesa humanidad del artículo 7.1. h) del Estatuto de Roma en relación a sus artículos 7.1. a) y e) y 7.2 g).

b) Inste, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2018-2020, una resolución que promueva el cese de la inhumana persecución penal de todas estas personas en razón de su mera orientación sexual o identidad de género, así como para promover su completa protección ante otros actos de persecución igualmente inhumanos por parte de actores no estatales.

3. El Congreso de los Diputados manifiesta su pleno compromiso de seguir trabajando en la eliminación de todas las barreras y formas de discriminación que, todavía hoy, siguen afectando a homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales en el día a día, así como a seguir trabajando en la construcción de una sociedad más comprometida y respetuosa con los Derechos Humanos.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Sara Giménez Giménez, Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

Comisión de Justicia

161/000040

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la elevación de categoría de los partidos judiciales de Roquetas de Mar y El Ejido y establecer que los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción sean servidos por Magistrados, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

Los partidos judiciales más complejos de la provincia de Almería son los de los municipios de El Ejido y Roquetas de Mar. Así lo destacan año tras año en sus memorias el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, los Decanos de los Jueces de ambos partidos judiciales, los Colegios de Abogados y Procuradores, además de otros operadores jurídicos y

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 18

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no dejan de solicitar el aumento de la planta judicial y, de forma insistente desde hace una década, que los Juzgados de estos partidos judiciales sean servidos por Magistrados.

Actualmente, ambos partidos judiciales cuentan con seis Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que tienen que hacer frente a una importante carga de trabajo año tras año. Según la Memoria del TSJA de 2018, el Partido Judicial de El Ejido ha ingresado en 2018, 3.478 nuevos asuntos civiles y 5.476 penales, mientras que el de Roquetas de Mar, ha afrontado 4.215 nuevos asuntos civiles y 5.845 penales.

La complejidad de estos partidos judiciales no deriva solamente de contar con una población superior a los 150.000 habitantes durante la temporada estival o al elevado número de nuevos asuntos al año, sino que es provocada por la excepcional variedad y dificultad de los asuntos que llegan a los Juzgados.

La dificultad que presentan, muchos de los asuntos que llegan a los Juzgados de estas ciudades obedece a circunstancias que tienen que ver con la situación geográfica de ambas (en la frontera marítima del sur de Europa con África), con la población inmigrante flotante, con la problemática social, policial y judicial que provoca su pertenencia al potente cordón económico y turístico de la costa mediterránea oriental, y a una circunstancia singular de estas dos localidades: una actividad económica agroindustrial exportadora sin comparación posible en Andalucía.

Aunque la creación, en 2018, de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Roquetas de Mar y de El Ejido ha contribuido a mejorar la situación, aún no se ha solucionado el problema de la excesiva movilidad de los Jueces en dos destinos que requieren especial cuidado y a los que esta movilidad afecta negativamente. Tanto es así, que los ayuntamientos de ambos municipios han llevado a sus Plenos esta pretensión que demandan también los empresarios, comerciantes y vecinos.

Esta demanda que no es nueva ha sido apoyada recientemente por el Parlamento de Andalucía, con la aprobación por unanimidad de una Proposición no de Ley en la Comisión de Justicia. Así mismo, el Consejo General del Poder Judicial, en su última reunión, ha aprobado solicitar al Ministerio del Interior que se eleve la categoría de ambos partidos judiciales.

Por todo lo anterior, presentamos la presente Proposición no de Ley en la que solicitamos la elevación de categoría de ambos partidos judiciales conforme al artículo 21.2 y 3 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, que posibilita los Juzgados mixtos que cumplan los requisitos que enumera sean servidos por Magistrados: «2. El Ministro de Justicia podrá establecer que los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sean servidos por Magistrados, siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija». Requisitos que, como se ha podido comprobar, son ampliamente cumplidos por Roquetas de Mar y El Ejido.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer que los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de los partidos judiciales de El Ejido y Roquetas de Mar sean servidos por Magistrados.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Juan José Matarí Sáez, Miguel Ángel Castellón Rubio y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000126

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación y dotación efectiva de la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

El 8,5 % de la sociedad española presenta algún tipo de discapacidad, lo que supone que más de cuatro millones de personas tengan que enfrentarse, en su día a día, a numerosas barreras para vivir su vida con plena autonomía, arquitectónicas, cognitivas, sensoriales y también, no menos importantes, socioeconómicas. Es por ello que la accesibilidad universal representa un objetivo trascendental, pues no se trata simplemente de favorecer las condiciones de vida de un colectivo necesitado de apoyos específicos, sino de garantizar la plena inclusión y la igualdad social de las personas con discapacidad con el resto de ciudadanos, permitiendo con ello el pleno desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Teniendo esto presente, resulta necesario poner en valor la labor realizada por las Secciones de Protección de Personas Vulnerables del Ministerio Fiscal español. Estas se constituyeron a raíz de la nueva configuración dada a la institución fiscal por la Constitución española de 1978, que, en su artículo 124, y sin perjuicio de sus funciones en el proceso penal, confiere a la Fiscalía la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados. Esta labor naturalmente incluye la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores, la cual se garantiza de manera expresa en los artículos 49 y 50 del texto constitucional, en estrecha relación con el mandato que el artículo 9.2 de nuestra Norma Fundamental hace a todos los poderes públicos de promover las condiciones de libertad y de igualdad para todos los ciudadanos y de remover los obstáculos que impidan o dificulten que estas sean reales y efectivas.

De este modo, el Ministerio Fiscal no actúa únicamente ante los tribunales penales, sino también fuera de ellos, ante la jurisdicción civil, al objeto de señalar aspectos, hechos o circunstancias que puedan estar limitando los derechos de las personas vulnerables, mediante escritos realizados a instancias de los particulares en los que se advierten incumplimientos o insuficiencias subsanables. Tales escritos reciben el nombre de «diligencias informativas», que pueden concluir con un «decreto», cuando se refieren a hechos o personas individuales, o con un «dictamen», si se refieren a un fenómeno o situación generalizada.

Estas funciones se han consolidado con el paso del tiempo gracias al empeño de los sucesivos Fiscales Generales del Estado, que han entendido que esta faceta corresponde al Ministerio Fiscal tanto como la penal. En ese sentido, el Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes, contempla la creación de una «Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores».

Sin embargo, esta Fiscalía de Sala, pese a su previsión reglamentaria, aún no se ha creado de modo efectivo, ni existe previsión de dotación, lo que incluye su correspondiente memoria económica y la adscripción de Fiscales adjuntos, como el resto de Fiscalías de Sala penales.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos entendemos que resulta injustificable que la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores no se encuentre creada y dotada de forma efectiva, sobre todo teniendo presente que su ámbito de actuación concierne a colectivos vulnerables especialmente numerosos, como las personas con discapacidad y las personas mayores, cuya protección viene amparada, como se ha señalado, en los artículos 49 y 50 de la Constitución, y por ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar todas las medidas que sean necesarias para proceder a la creación y dotación económica efectivas de la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, con la finalidad de consolidar la protección por el Ministerio Fiscal de los derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores en ámbitos no penales.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2020.—**Sara Giménez Giménez**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 20

Comisión de Defensa

161/000107

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas que pasen a la situación administrativa de la reserva, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

Dentro de las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los miembros de las Fuerzas Armadas se encuentra la de la Reserva; situación contemplada en el artículo 113 de la vigente Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en el que se distinguen los distintos supuestos en los que se accede a esta situación.

Precisamente, dicho artículo 113 destaca en su apartado 4 que los militares de carrera de las categorías de oficiales y suboficiales pasarán en todo caso a la situación de reserva al cumplir sesenta y un años de edad; a diferencia de los militares de tropa y marinería, quienes pasarán a la situación de reserva una vez cumplidos los cincuenta y ocho años. El apartado 10 del mismo artículo, contempla las retribuciones que, con carácter general, percibirá el personal militar en situación de reserva, señalando que conservarán las retribuciones del personal en servicio activo sin destino hasta cumplir la edad de sesenta y tres años. Se señala también que, a partir de ese momento, las retribuciones del militar profesional estarán constituidas por las retribuciones básicas y por el complemento de disponibilidad que se determine en las normas que regulen el sistema retributivo del personal de las Fuerzas Armadas.

Dicho complemento de disponibilidad se especifica en el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre. Esta norma en su artículo 9 indica que cuando el pase a la situación de reserva se produzca por alguna de las causas previstas en el artículo 113 de la citada Ley de la Carrera Militar, se percibirán las retribuciones del personal en servicio activo señaladas en el artículo 5.2, hasta cumplir la edad de sesenta y tres años. A partir de esa edad, se percibirán las retribuciones básicas y un complemento de disponibilidad equivalente a la suma del 80 % del complemento de empleo y del 80 % del componente general del complemento específico. Dicho complemento de disponibilidad sustituye así al complemento de empleo y al componente general del complemento específico, y es de menor cuantía que la suma de estos.

Además, en los meses de junio y diciembre se percibirá una paga adicional del complemento específico por un importe igual al 80 % de la que se perciba por el componente general del complemento específico por el personal en situación de servicio activo.

Cabe destacar que el Observatorio de la Vida Militar, en su Informe del año 2016, constató que los miembros de las Fuerzas Armadas experimentan una disminución significativa en sus retribuciones al pasar a la situación de reserva. Dicha disminución supone además un agravio comparativo respecto a otros funcionarios.

Esta cuestión, además, ya fue considerada por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas a propuesta de la Asociación de Suboficiales ASFASPRO; una propuesta del día 23 de julio de 2015 remitida el 8 de septiembre de 2015 al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que continuase su tramitación por ese departamento. Desde entonces, nada más se ha sabido.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que el personal de las Fuerzas Armadas que pase a la situación administrativa de reserva por aplicación de los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar,

perciba las retribuciones del personal en servicio activo previstas en el Reglamento de retribuciones aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, hasta cumplir la edad de retiro.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Pablo Cambronero Piqueras, María Carmen Martínez Granados y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000108

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejora de la sanidad militar, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

La sanidad militar ha sufrido un fuerte retroceso en los últimos años, lo que ha mermado y debilitado una de las más importantes capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Esto es un hecho conocido y reconocido por todos, pero al mismo tiempo dejado en un segundo plano.

Los factores que han influido son múltiples y variados. Sin duda, un factor influyente común con el resto de capacidades, es el descenso en los últimos años en el importe del capítulo presupuestario de Defensa. El problema no solo afecta a los medios materiales y personales, sino también de una deficiente gestión de los que se disponen. Como ejemplos se pueden citar el hospital de campaña sin utilizar al no existir capacidad para trasladar estos al terreno donde sean precisos (ROLE 4) o la Cámara Hiperbárica de San Fernando (Cádiz), que siendo propiedad de la Armada, permanece localizada en el Hospital de San Carlos de esa localidad, que fue transferido al Servicio Andaluz de Salud, y que está infrutilizada debido a la falta de personal y a la ausencia de un Convenio de colaboración actualizado.

En el capítulo de personal, la realidad no es más halagüeña. En lo que afecta a especialidades médicas denominadas «críticas», cirujanos, anestelistas, intensivistas y traumatólogos, las disponibilidades de efectivos son escasas. El estricto régimen de incompatibilidades tampoco favorece la llamada y permanencia del personal. Los profesionales que integran la Sanidad Militar además de médicos, como los farmacéuticos, enfermeros, veterinarios, psicólogos y odontólogos, necesitan una formación y reciclaje permanente que exige convenir con las Comunidades Autónomas.

La propia Ley de la Carrera Militar ampara una discriminación porque prevé dos Escalas de Sanidad Militar, una para enfermeros y otra para el resto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar un estudio riguroso sobre las carencias de la sanidad militar, tanto en medios materiales como personales.
2. Suscribir convenios con las distintas Comunidades Autónomas para el reciclaje del personal de sanidad militar.
2. Suscribir convenios para el uso de material sanitario militar por parte de los hospitales de las Comunidades Autónomas, como es el caso de la cámara hiperbárica de San Fernando (Cádiz).
4. Potenciar la figura del reservista voluntario incentivando económica y profesionalmente a personal civil para prestar al servicio de forma temporal en las Fuerzas Armadas en periodos de necesidad.
5. Realizar un estudio para flexibilizar el régimen de incompatibilidades del personal sanitario de las Fuerzas Armadas.
6. Estudiar la posibilidad de reducir las dos escalas de Sanidad Militar a una sola escala.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Pablo Cambronero Piqueras, María Carmen Martínez Granados y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 22

161/000142

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a mantener informado al Congreso sobre los contingentes militares de Irak y Líbano tras los últimos acontecimientos en Irán.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de informar de forma regular a la Comisión en relación con el objeto de la misma se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mantener informado al Congreso sobre los contingentes militares de Irak y Líbano tras los últimos acontecimientos en Irán, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

El pasado 13 de diciembre de 2019, el Consejo de Ministros en funciones prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 la participación de unidades y observadores militares españoles en operaciones de apoyo a la paz en el marco de la ONU, la OTAN y la UE, manteniendo su presencia en las mismas operaciones salvo algunos ajustes.

Las Fuerzas Armadas españolas están presentes en diecisiete misiones en el exterior con 2.800 militares y guardias civiles desplegados en cuatro continentes. Los contingentes más numerosos se encuentran en el Líbano, con 620 cascos azules, y en Irak, con 575 efectivos.

Un total de 60 países, bajo el liderazgo de Estados Unidos forman parte de la Operación «Inherent Resolve», la Coalición Internacional contra el yihadismo que está tratando de frenar el avance del Daesh en Siria e Irak. Esta coalición internacional surgió, en la cumbre de la OTAN de septiembre de 2014, en respuesta a una solicitud de ayuda del Gobierno iraquí al secretario general de la OTAN para intentar frenar el avance del Daesh.

Dentro de la Coalición más de 500 militares y guardias civiles españoles se ocupan de adiestrar y capacitar al Ejército iraquí. Los militares españoles de Operaciones Especiales también desarrollan actividades de adiestramiento en Bagdad, Al Taqaddum y Taji, así como los militares pertenecientes a la «Task Force Toro» (Unidad de Helicópteros) cuya misión principal es proporcionar transporte aéreo a las tropas de la Coalición.

En octubre de 2014, el Congreso de los Diputados autorizó la participación de España en la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL). Los cascos azules de la ONU patrullan en el sur de Líbano para evitar hostilidades desde Líbano hacia Israel. Las Fuerzas Armadas españolas desplegaron en Líbano en septiembre de 2006.

El contingente español en Líbano que llegó a contar con un máximo de 1.100 militares, tiene a día de hoy, alrededor de 620 militares desplegados. Desde el inicio de la misión, han fallecido en Líbano quince militares españoles.

El pasado 7 de enero, diez militares españoles de los tres mil que había desplegados en Bagdad como parte de la operación de la OTAN en Irak tuvieron que salir en dirección a Kuwait después de que la OTAN decidiera repositionarlos temporalmente en otras localizaciones como medida de precaución por la escalada de la tensión tras el ataque estadounidense como consecuencia del cual falleció el general iraní Soleimani. Alemania, Eslovaquia y Canadá también han evacuado parte de su contingente en Irak.

Los informes de los servicios de inteligencia sustentan el blindaje de las tropas y la paralización de actividades. Por eso se ha dado la orden a las tropas de permanecer en el interior de las bases militares y reducir el trato con la población local. En las dependencias militares se ha tenido que reforzar la seguridad por lo que pudiera ocurrir.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

— Informe regular y convenientemente a esta Comisión de la evaluación del riesgo en que pueda encontrarse el personal militar español desplegado en dichas misiones.

— Comunique a esta Comisión las directrices que fije la OTAN o la ONU en estas operaciones y la forma en la que afectan a nuestras Fuerzas Armadas.

— Transmita el reconocimiento de esta Cámara a la abnegada y eficaz labor que desempeñan nuestras Fuerzas Armadas en la zona, en una situación de alta tensión en la región.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.—**Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y María Valentina Martínez Ferro**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000145

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre ascensos del personal militar en situación de Reserva, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

En el apartado quince del artículo único de la Ley 46/2015 de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se da nueva redacción a la disposición transitoria séptima de la citada ley, referida al ascenso de suboficiales al empleo de teniente, quedando redactada en su apartado 1 de la siguiente manera:

«1. Todos los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento a partir del 1 de enero de 1977 y con anterioridad al 20 de mayo de 1999, fecha de entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, y que no tuvieran limitación legal para alcanzar el empleo de subteniente, podrán obtener, previa solicitud, el empleo de teniente de las escalas de oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que se les concederá con la fecha en la que hubieran pasado o pasen a la situación de reserva en los términos establecidos en esta ley, con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha de ascenso, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 2 y 3 siguientes.»

Tras la publicación de la Ley 39/2007, como después de su modificación, se produjeron un elevado número de ascensos al empleo de teniente de la escala de oficiales por parte de Suboficiales en situación

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 24

de reserva, independientemente de que hubieran accedido a la misma directamente desde la situación de servicio activo o de la hoy en día no existente situación de reserva transitoria.

De esta posibilidad de ascenso se vieron excluidos un número de suboficiales de la Escala de Banda del Ejército de Tierra por condicionantes poco coherentes y mal justificados ante los solicitantes (117), quedando sus expedientes depositados en las oficinas de la Jefatura del Mando de Apoyo al Personal del ET, sin que hasta el día de la fecha hayan obtenido una motivación clara sobre las razones que les apartaron del procedimiento de ascenso al que sí accedieron sus compañeros de otras especialidades (unos 4.000), así como algunos de su propia escala (270, aproximadamente).

Los 117 suboficiales solicitantes recibieron en febrero de 2016 una Comunicación/Resolución de la Jefatura de Ascensos y Situaciones del Mando de Personal (MAPER) del Ejército de Tierra en la que se les informaba de que se accedería a lo solicitado cuando concurriesen las circunstancias legalmente previstas para ello, quedando custodiada su solicitud, mientras tanto, en su expediente personal. Según se pudo posteriormente conocer, dichas circunstancias legalmente previstas, según el MAPER, pasaban por su inclusión en el punto 3 del apartado 15 del artículo único de la Ley 46/2015, en el cual se dice textualmente:

«3. Los suboficiales mencionados en el apartado 1 que hubieran pasado o pasen a la situación de reserva en aplicación del artículo 113.3 (se sobreentiende que de la Ley 39/2007) podrán obtener, previa solicitud, el empleo de teniente de la escala de oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, cuando cumplan los requisitos necesarios para el pase a la reserva establecidos en la disposición transitoria octava o en el artículo 113, apartados 1.b y 4, todos de esta ley, computando a estos efectos el tiempo en reserva.»

A los suboficiales solicitantes, sin embargo, no se les puede aplicar dicho precepto, habida cuenta de que no pasaron a la situación de reserva en virtud de dicho artículo de la Ley 39/2007, sino que lo hicieron con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley e, incluso, de la precedente 17/1999, de 18 de mayo, ya que les fue de aplicación la Resolución 22/1999, de 20 de enero, del Subsecretario de Defensa.

Por otra parte, en lo que concierne a la posible existencia de alguna limitación legal para alcanzar el empleo de subteniente, que les impediría acceder al ascenso a teniente solicitado, la norma se refiere a la existencia de limitaciones legales positivas tal y como queda consignado, al menos, en dos sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (SAN 4106/2011 y SAN 1670/2019), ambas resueltas con fallo estimatorio para los demandantes declarando el derecho de ambos al solicitado ascenso a teniente.

En ambas se consigna que, conforme al criterio establecido por la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa, se ha de entender que la limitación legal puede venir determinada por dos situaciones: bien porque a resultas del régimen de ascensos establecido en la normativa anterior hubiera sido declarado no apto con carácter definitivo para el ascenso al empleo de subteniente o se hubiera renunciado al ascenso al citado empleo, o bien, porque se trate de aquellos Cabos Primeros Veteranos de la Armada que, acogidos a la disposición adicional tercera del Real Decreto 1928/1991, accedieron al empleo de sargento con la posibilidad de obtener posteriormente el de sargento primero, siendo este el último empleo de su Escala. Ninguno de ambos supuestos es de aplicación a los 117 solicitantes.

Por último, la especificación que se hace en la norma citada, conforme a la cual el ascenso «se les concederá con la fecha en la que hubieran pasado o pasen a la situación de reserva [...]» implicaría, en el caso de los Suboficiales solicitantes, una retroactividad de efectos de más de 16 años, lo cual podría hacer económicamente impracticable el objeto final de su solicitud que es el ascenso al empleo de teniente de la Escala de Oficiales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

— Impulsar la revisión del punto 1 del apartado quince del Artículo único de la Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007 de 19 de noviembre, de la carrera militar, de manera que donde dice: “se les concederá con la fecha en la que hubieran pasado o pasen a la situación de reserva [...]” diga: “se les concederá a partir de la fecha de publicación de esta ley independientemente de que el acceso a la situación de Reserva se haya producido desde la situación de servicio activo o desde la extinta Reserva Transitoria”.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 25

— Disponer la revisión de los expedientes personales de los 117 Suboficiales de la Escala de Banda del Ejército de Tierra solicitantes de ascenso al empleo de teniente de la escala de oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, para promover su ascenso al mencionado empleo con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la entrada en vigor de la Ley 46/2015.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.—**Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000181

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la recuperación para uso civil de bienes del patrimonio de Defensa de interés histórico-artístico, ambiental o en desuso pero de utilidad pública o social demandada por la sociedad, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

La semana pasada se hizo público que el Ministerio de Defensa, a través del INVIED (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa) vendió dos solares de la Maestranza (Campo de A Estrada) a la promotora vasca Gesarqus ingresando por la operación 11,8 millones de euros.

De este modo el Ministerio de Defensa hizo caso omiso de distintos pronunciamientos del Ayuntamiento reclamando la cesión gratuita de estos terrenos a la ciudad (el último, una moción aprobada el 7 de noviembre de 2019, pero ya en 1840 y 1858 el Ayuntamiento de A Coruña reclamaba su devolución), para preservar la titularidad pública y destinarlos a espacios públicos y dotacionales.

El Ministerio de Defensa también ignoró las recomendaciones de la propia Comisión de Defensa del Congreso, que el 27 de junio de 2017 aprobaba una Proposición no de Ley instando la devolución gratuita al Ayuntamiento de A Coruña de los terrenos y parcelas referidas, para su uso público, por considerar que son bienes pertenecientes a la ciudad desde su fundación. Estos terrenos originariamente eran comunales, fueron ocupados por las monarquías absolutistas para la construcción de instalaciones militares y posteriormente usufructuados por el entonces Ministerio de Guerra.

Además, estos terrenos (ahora sin instalaciones militares) están situados en el ámbito de protección de bienes de interés cultural como son los restos de los sistemas defensivos medievales y barrocos de la ciudad.

Por todo lo expuesto con anterioridad, el BNG (GP Plural) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso insta al Gobierno a agotar los mecanismos a su alcance para revertir la venta de los solares sitos en el Campo de A Estrada (A Coruña) y cedérselos al Concello de A Coruña.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.—**Néstor Rego Candamil**, Diputado.—**Laura Borràs Castanyer**, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

161/000182

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la recuperación para uso civil de bienes del patrimonio de Defensa de interés

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 26

histórico-artístico, ambiental o en desuso pero de utilidad pública o social demandada por la sociedad, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

El patrimonio inmobiliario afectado al Ministerio de Defensa goza de un régimen jurídico especial, cuyo origen se remonta a la creación de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, por Ley 28/1984, de 31 de julio.

El propósito inicial de esa norma consistía en la creación de un instrumento gestor del patrimonio adscrito al Ministerio de Defensa, para acompañar la transformación de las Fuerzas Armadas durante el período de mayor intensidad. Su actividad se prolongó durante diez años más de los inicialmente previstos, al prorrogarse la vigencia de la Gerencia por la Ley 32/1994, de 19 de diciembre. Finalmente, el régimen jurídico patrimonial especial de los bienes afectos a la Defensa se consolidó a través de la regulación del artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

En la actualidad, es el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento para la Defensa, resultante de la reorganización aprobada por la disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, el organismo encargado de gestionar el patrimonio perteneciente al ámbito de la Defensa, en base a su peculiar régimen jurídico, puesto que esa especialidad normativa se vio confirmada por las disposiciones adicionales sexta y séptima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que prevén su extinción transcurridos quince años desde la entrada en vigor de esta norma reguladora del régimen jurídico patrimonial del sector público en toda su extensión.

De la cronología jurídica relatada se desprende que el régimen jurídico especial del patrimonio afectado por Defensa, a pesar de que tiene su origen en un momento singular, de inicio de una profunda modificación de las Fuerzas Armadas y con el objetivo de ser una herramienta para favorecer ese proceso, permanece hasta la actualidad manteniendo esa especialidad, aun cuando el proceso de cambio en el modelo militar tiene culminado sus principales etapas. Por otro lado, al patrimonio afectado por Defensa tampoco le fue aplicable, otra legislación promulgada en los últimos veinticinco años que también regula aspectos patrimoniales de bienes públicos que reúnen características especiales, como es el caso del patrimonio histórico o cultural, o aspectos relativos al uso y gestión de bienes de alto valor ecológico, paisajístico o natural.

Al margen de que por el simple hecho de que transcurrieron ya más de dos décadas desde el período en que se llevaron a cabo las modificaciones más relevantes en las Fuerzas Armadas, por lo que la principal justificación de un régimen especial en la gestión inmobiliaria no concurre en la actualidad. Resulta incomprensible que se mantenga un régimen que persigue, sobre todo, posibilitar la enajenación patrimonial para obtener recursos en los presupuestos del Ministerio de Defensa, y más en un momento de escasa actividad inmobiliaria, y más cuando existen además otras prioridades que atender desde el sector público.

Así, esta iniciativa, en la que se insta a que se realicen los cambios legales necesarios en el régimen jurídico especial otorgado al Ministerio de Defensa sobre el patrimonio inmobiliario, centrándose en aquellos bienes que forman parte del patrimonio afecto al Ministerio de Defensa que tienen características especiales (por formar parte del patrimonio histórico o cultural, o estar situados en zonas de especial interés natural), o que están en desuso (pudiendo dárseles otra utilidad pública atendiendo a las necesidades y las demandas sociales), para que pasen a tener un régimen específico que asegure su permanencia como bienes de titularidad pública, evitando con eso su enajenación, tanto por las escasas posibilidades de materializarla con ánimo de lucro, como para permitir su traspaso ordenado a otras administraciones públicas, donde se sitúan esos bienes con el fin de que puedan ser acometidos proyectos de recuperación, restauración y revalorización para usos públicos.

Con esto se pretende evitar que se prolongue el deterioro de los citados bienes, debido a una afección a un uso militar ahora innecesario y, además, contraproducente, al no optimizarse las distintas posibilidades de aprovechamiento de estos bienes que en su día formaron parte del armazón militar pero que en estos momentos no tienen ese uso, además de estar claramente infrautilizados, acelerándose su pérdida de valor. Ese deterioro se evitaría si se produce una nueva afección de esos bienes a usos públicos de carácter civil.

Sería también necesario que se modificara parcialmente el régimen jurídico otorgado al Ministerio de Defensa sobre el patrimonio inmobiliario, de forma que su gestión se lleva a cabo de acuerdo con los

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 27

principios de gestión patrimonial de los bienes públicos, para hacerla más transparente y para conseguir además una mayor eficacia y mejor aprovechamiento en el uso de muchos recintos, que sin tener un especial valor histórico-artístico o ambiental, dado que no tienen un uso militar, se regule que sea preferente su uso público para fines sociales antes que la enajenación de los mismos por parte del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento para la Defensa.

Por todo lo expuesto con anterioridad, el BNG (GP Plural) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«Para instar al Gobierno a:

Modificar el régimen jurídico especial otorgado al Ministerio de Defensa sobre su patrimonio inmobiliario con la finalidad de proceder a:

1. La desafectación, readscripción y cesión de bienes del patrimonio adscrito a Defensa de valor histórico-artístico, ambiental o en desuso que tengan utilidad pública o que puedan servir para cubrir necesidades sociales, para su gestión por otras administraciones públicas o entidades sociales.

Con tal fin, el Ministerio de Defensa des afectará los bienes inmuebles afectados a un uso militar pero que tengan un valor histórico artístico, por ser bienes que de interés cultural o reunir características que aconsejen su conservación, por ser bienes situados en espacios naturales que fueran declarados protegidos bajo alguna de las modalidades de la legislación ambiental o que reúnan valores ambientales dignos de protección. También se aplicará el mismo criterio para el caso de bienes en desuso que puedan tener utilidad pública para otros fines públicos o sociales.

2. Una vez producida la desafectación, los citados bienes mantendrán, en todo caso, su titularidad pública, que pasará a depender del Ministerio de Hacienda para ser afectados a cualquier otro servicio público, pudiendo para ello cederlos a otras Administraciones Públicas de carácter local o autonómico. A estos efectos, las Administraciones Públicas podrán solicitar al Ministerio de Hacienda su afectación y cesión, para lo que deberán presentar un plan de protección, conservación, restauración y usos. El Ministerio de Hacienda acordará esta cesión, vinculada en todo caso al mantenimiento del carácter público de los citados bienes. Se la solicitud la realizase otro servicio de la Administración General del Estado, se procederá conforme a lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio de las Administraciones públicas.

3. La cesión se realizará a título gratuito y sin compensación, sin que sea exigible ningún ingreso o compensación presupuestaria al Ministerio de Defensa o al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento para la Defensa.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.—**Néstor Rego Candamil**, Diputado.—**Laura Borràs Castanyer**, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

Comisión de Hacienda

161/000015

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de lucha contra el fraude en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

Según los últimos datos comparables disponibles, España perdió un total de 1.806 millones de euros de ingresos por IVA en 2017 como consecuencia del fraude y le elusión fiscal en este impuesto.

Si bien España se encuentra entre los países de la UE con menor fraude por este tributo (equivalente al 2 % de la recaudación esperada, frente a países que superan el 30 %), el grado de elusión que sufre y su enorme influencia sobre otros operadores económicos, hacen que Bruselas esté reclamando una reforma global integral de dicho impuesto con carácter urgente y más cooperación entre los Estados

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 28

miembros. Así, en el conjunto de la UE, la pérdida de ingresos por fraude de IVA superó los 137.500 millones de euros en el último ejercicio del que se tienen datos finales (2017).

En los últimos años, y gracias a la actuación de la Guardia Civil en cooperación con la Agencia Tributaria, se han logrado frustrar tramas de fraude fiscal masivo en el ámbito del IVA.

Por poner solo algunos ejemplos, muy recientemente, la UCO desarticuló una trama de carburantes que comercializaba al por mayor de manera fraudulenta millones de litros de combustible en nuestro país, centrando su actividad delictiva en el impago del IVA, para cuya facturación se valían de un entramado de más de 300 sociedades instrumentales y testaferros; la operación «Drake». Este es, hasta ahora, el mayor fraude de IVA detectado en este sector, con una cifra superior a los 150 millones de euros. Para ilustrar lo que supone un fraude de impuestos de esta magnitud, la UCO puso algunos ejemplos: «con la cantidad defraudada se podrían haber construido 25 km de AVE, o 50 km de autovía [...] Si se hubiera tratado de un grupo de narcotraficantes, podrían haber comprado 25 toneladas de cocaína, lo que les habría supuesto ser una de las principales organizaciones a nivel mundial».

De igual manera, también recientemente, ADINE —la asociación de distribuidores e importadores de neumáticos— ha presentado tres denuncias a la ONIF contra varios vendedores de neumáticos por utilizar empresas pantalla para evadir impuestos e incurrir en el conocido como «fraude carrusel» y, a mediados del año pasado, la Udef cifró en más de 200 millones de euros el volumen de dinero estafado a Hacienda, en concepto de IVA, por una trama internacional de facturas falsas con sede en Elche.

El fraude y la elusión fiscal en el IVA tiene su máxima expresión en el llamado «fraude carrusel», en virtud del cual se crean entramados empresariales de ámbito intracomunitario con sociedades pantalla operativas solo el tiempo suficiente para cometer el delito.

Las consecuencias de este tipo de estafa se extienden más allá del mero descenso recaudatorio, aún siendo este importantísimo. Además de obtener beneficios millonarios al no declarar e ingresar en la Hacienda pública un IVA sí repercutido a sus clientes, este hecho les ofrece la ventaja competitiva de operar en el sector a precios muy inferiores al normal del mercado, ejerciendo una competencia desleal inasumible para operadores y negocios cumplidores con la ley, lo que muchas ocasiones les supone la expulsión del mercado.

Es cierto que la Comisión Europea ha puesto el foco últimamente en el fraude tributario en materia de IVA como uno de los principales riesgos fiscales que afronta la UE, y para ello ha lanzado una herramienta que ofrece información ágil sobre las operaciones transfronterizas con el fin de evitar el menoscabo de un impuesto que aporta el 7 % del PIB comunitario. Sin embargo, en palabras del propio Comisario Europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, «si bien la nueva herramienta aumentará la rapidez con la que las autoridades pueden descubrir actividades sospechosas, estos avances no disminuyen la necesidad de una reforma más profunda y fundamental del sistema del IVA en la UE que pueda afrontar las enormes cantidades de operaciones comerciales transfronterizas en la UE».

Los términos en los que la Comisión Europea se plantea la reforma y armonización del IVA giran en torno a conceder mayor libertad a los países para fijar los tipos o garantizar un tipo mínimo medio, entre otras medidas. En el ámbito concreto del «fraude carrusel», se eliminaría la exención de tributación en las operaciones intracomunitarias con el fin de que el vendedor de un país pudiera repercutir el IVA al comprador de otro, que se lo deduciría.

Si bien tanto la UE como el Estado español reconocen la gravedad del problema y se han tomado algunas medidas en la dirección correcta, se hace necesario adoptar con carácter urgente medidas adicionales eficaces que reduzcan en lo posible el fraude en este impuesto cuya recaudación supone, junto con la de IRPF, la principal fuente de financiación de nuestro país.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar una reforma global e integral del IVA, de acuerdo a las directrices remitidas por Bruselas y en coordinación con el resto de Estados miembros, con el fin de dificultar, en lo posible, su utilización fraudulenta.

2. Aumentar los recursos humanos en todos los cuerpos dedicados a la lucha contra el fraude de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, especialmente en aquellos centrados en tramas de delincuencia fiscal organizada, así como incrementar los fondos dirigidos a mejorar y aumentar los medios materiales de los organismos correspondientes.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 29

3. Promover la elaboración de un informe por parte del Ministerio de Hacienda sobre la economía sumergida y fraude fiscal relativo al IVA y las tramas carrusel.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Edmundo Bal Francés y María Carmen Martínez Granados**, Diputados.

161/000016

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la rebaja del IVA en los libros electrónicos y prensa digital, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

El pasado año, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (ECOFIN) acordaron aprobar una norma por la que se permitirá a los Estados miembros de la Unión aplicar un tipo de IVA reducido a los libros y publicaciones digitales.

Esta es una reivindicación del sector que cuenta con un amplio consenso entre las fuerzas políticas como ha quedado reflejado en varios debates e iniciativas en el Congreso de los Diputados durante los últimos años.

No obstante, las limitaciones de la normativa europea hacían imposible esta modificación tributaria a los libros y publicaciones electrónicas. Incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó a emitir sentencias contra Francia y Luxemburgo por adoptar normativas que permitían aplicar un IVA reducido de forma unilateral.

Desde Ciudadanos consideramos esta noticia como positiva pues permitirá que los consumidores de libros y publicaciones electrónicas, que crece cada año según datos oficiales, se beneficien directamente. También así la cultura, permitiendo una mayor difusión de todo tipo de obras y contenidos. Por último, la libertad de prensa es una pieza clave irrenunciable para cualquier democracia plena. El desarrollo de la sociedad de la información en el entorno digital ha supuesto para los medios de comunicación y prensa una auténtica revolución, en buena medida todavía en curso.

La aplicación de un tipo de IVA más reducido contribuirá a mejorar la rentabilidad de la prensa y editoriales digitales y de este modo fortalecerá su independencia económica y por tanto la libertad de prensa.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice las modificaciones legales precisas para que, en el plazo más breve posible, se aplique el Acuerdo del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea de 1 de octubre de 2018 para la aplicación del IVA superreducido a los libros y publicaciones electrónicas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Edmundo Bal Francés y María Carmen Martínez Granados**, Diputados.

161/000094

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre incentivos fiscales al arrendamiento de vivienda, para su debate en la Comisión de Fomento.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 30

Exposición de motivos

El objetivo principal de la política de vivienda en España debe ser que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y adecuada a precios asequibles acordes a la capacidad económica de las familias.

Los últimos datos de la vivienda en España reflejan que las rentas de alquiler se han disparado casi un 50 % desde el 2013, una subida que no se ha visto acompañada por la subida de los salarios, generando un grave desequilibrio especialmente en algunas Comunidades Autónomas donde la tendencia de alquiler es mayor que la de compra como método general de acceso a la vivienda. Así, en Canarias, con un 32,8 %, Baleares con un 31,8 % Cataluña con un 28,1 % y Madrid con un 27 % superan la media nacional del 23 %, y los precios del alquiler ya han superado la media nacional.

Los últimos datos disponibles, según el portal Fotocasa, reflejan que el precio de la vivienda en alquiler en nuestro país registró en el último trimestre de 2019 un incremento mensual del 0,3 % (un 2,1 % interanual) y sitúa el precio de la vivienda en 8,54 euros/m² al mes. Este dato nos sitúa nuevamente en niveles de 2009 y muestra el fracaso de las medidas adoptadas por el gobierno socialista que no atacan la raíz del problema, que es la escasez de oferta.

Desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, entendemos que la solución está en poner en marcha medidas que aumenten la oferta existente, incentivando a los propietarios para que pongan en el mercado viviendas que actualmente están vacías por diversas circunstancias, no solo de fondos y entidades financieras sino del grueso del mercado del alquiler que son los particulares. Y, por otra parte, suavizar la presión que vive el mercado del alquiler creando bolsas de vivienda social y asequible y generando suelo finalista. No se trata de adoptar medidas aisladas, como un Plan de Vivienda o un Decreto de alquileres, ni de adoptar medidas sancionadoras que castiguen a los propietarios de viviendas vacías. Es necesaria una política de vivienda a medio y largo plazo, basada en la realidad socio económica actual y en las previsiones de futuro.

Ya han transcurrido más de seis años desde que el Gobierno del Partido Popular impulsara la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que logró el equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para la incorporación de viviendas al mercado, propiciando un aumento del porcentaje de alquiler en nuestro país superior al 23 %. También han sido exitosos los últimos planes de vivienda del Partido Popular, que incluían programas tanto de ayudas al alquiler —especialmente para jóvenes y colectivos más desfavorecidos— como de ayuda a la promoción de vivienda en alquiler, tanto pública como privada.

Siendo necesario mantener los criterios del Plan de Vivienda, a efectos de incentivar determinadas actuaciones y encauzar los principios fundamentales de una política de vivienda, entendemos que es necesario ir más allá y articular otros mecanismos que, a medio y largo plazo, sean capaces de incidir en la realidad socioeconómica actual y permitan reaccionar ante los cambios que puedan producirse.

Desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, mantenemos un firme compromiso con los segmentos de población que más dificultades tienen para acceder a la vivienda —jóvenes y mayores de 65 años— y proponemos la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio, para establecer los siguientes incentivos fiscales al alquiler:

La reducción del 100 % del rendimiento neto derivado del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda para arrendatarios entre 18 y 30 años. La reducción del 100 % cuando el arrendatario tenga una edad superior o igual a 65 años y sus únicos ingresos procedan de prestaciones o pensiones de cuantía mínima.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2020.—**Ana María Zurita Expósito**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 31

161/000098

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

El artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) establece que «El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales acompañado de las recomendaciones y del informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo. En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno. Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento».

El 20 de julio de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el «Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019» estableciendo la siguiente senda de déficit: -2,7 % en 2018, -1,8 % en 2019, -1,1 % en 2020 y -0,4 % en 2021.

Esta senda no solo incumplía las Recomendaciones para España aprobadas por el ECOFIN solo un mes antes, el 15 de junio de 2018, sino que —en esencia— retrasaba un año el ajuste presupuestario y ralentizaba la reducción de deuda, haciendo más vulnerable nuestra economía en un contexto de incertidumbres y desaceleración económica. Recordemos que la Decisión (UE) 2017/984 del Consejo instaba al Gobierno de España a reducir el déficit de las administraciones públicas al -2,2 % en 2018, -1,3 % en 2019, -0,5 % en 2020 y alcanzar un superávit del 0,1 % del PIB en 2021, que es la última senda formalmente aprobada por Europa.

A pesar de ello, el 27 de julio de 2018 se sometieron a votación los nuevos objetivos propuestos por el ejecutivo socialista, y estos fueron ampliamente rechazados por el Congreso de los Diputados: 88 votos a favor, 86 abstenciones y 173 votos en contra.

El Gobierno socialista volvió a aprobar en diciembre la misma senda que había sido rechazada en julio. Sometida nuevamente a votación fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 20 de diciembre de 2018 (176 votos a favor, 168 votos en contra), pero fue rechazada en el Senado tan solo una semana después, el 27 de diciembre de 2018, por una amplia mayoría de esta Cámara: 97 votos a favor, una abstención y 150 votos en contra.

Tras este segundo rechazo, la realidad es que el último objetivo vigente sigue siendo el que fue aprobado por el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017, posteriormente ratificado tanto por el Congreso como por el Senado, que establece un déficit del -1,3 % en 2019, -0,5 % en 2020 y superávit del 0,1 % del PIB en 2021.

El Gobierno socialista lleva más de un año incumpliendo la LOEPSF y nuestros compromisos con Bruselas; no solo incumple la obligación legal de traer a las Cámaras la senda de déficit y los objetivos de deuda, sino que además utiliza una senda rechazada por las Cortes como base, primero del Plan Presupuestario enviado a Bruselas, y segundo, de los PGE 2019 que fueron tumbados en el Congreso.

El propio Gobierno socialista ha ido cambiando los objetivos de déficit en una verdadera ceremonia de confusión en la que solo hay una cosa clara: el Partido Socialista es incapaz de reducir el déficit público y va a superar incluso sus peores previsiones. Solo a modo de ejemplo:

— El objetivo de déficit oficial para 2019 es de -1,3 %, el ejecutivo socialista aprobó en Consejo de Ministros un -1,8 %, en el Programa de Estabilidad 2019-2022 y en el Plan Presupuestario 2020 fijó el -2,0 % y Banco de España estima que se irá al -2,5 %.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 32

— El objetivo de déficit oficial para 2020 es $-0,5\%$, el ejecutivo socialista aprobó en Consejo de Ministros $-1,1\%$, en el Programa de Estabilidad 2019-2022 fijó ese mismo nivel, pero en el Plan Presupuestario 2020 lo elevó a $-1,7\%$ y Banco de España estima que se irá al $-2,1\%$.

No se entiende el empeño del gobierno socialista en incumplir el objetivo de déficit, y menos aún que lo venda como una garantía para mejorar la vida de los españoles, en un momento en el que nuestra principal vulnerabilidad es el alto endeudamiento de las AAPP. No podemos repetir los errores del pasado en los que la actitud irresponsable de gobiernos que intentan ganar popularidad gastando lo que no tienen, fiándolo todo al endeudamiento, generan graves desequilibrios macroeconómicos que acaban en paro, desigualdad y pobreza.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a volver a la senda de la disciplina fiscal para no poner en riesgo la credibilidad de nuestra economía y presentar, de forma urgente, unos objetivos de déficit y deuda que cumplan con los requisitos acordados con Bruselas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.—**Mario Garcés Sanagustín**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000151

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la acuñación de monedas conmemorativas del Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de Lugo, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La Ruta Jacobea Primitiva, también conocida como Camino Primitivo, es el Camino de Santiago que discurre por el interior de Asturias y Galicia. Se trata de la primera ruta de la que se conservan referencias históricas, que se remontan al siglo IX, cuando el monarca Alfonso II el Casto realizaba este trayecto para visitar el sepulcro del Apóstol, que acababa de ser descubierto.

Pese a su dureza, pues mantiene el trazado original, cada año es mayor el número de peregrinos que eligen esta ruta para llegar a Compostela. El trayecto se inicia en Oviedo y entra en Galicia por A Fonsagrada, en Lugo, para llegar a la capital de la provincia. Lugo es el primer punto del Camino Primitivo desde el que se puede obtener la preciada «Compostela», un aspecto muy valorado por muchos peregrinos a la hora de organizar su recorrido, para poder entregar en la ciudad compostelana su credencial sellada.

Por otra parte, la ciudad de Lugo posee numerosos restos arqueológicos y, sobre todo, su emblema monumental por la que es conocida, su muralla romana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, título del que también gozan la Catedral y el propio Camino Primitivo, tras la ampliación de bienes individuales (n.º ref. 669bis-008) que la Unesco incluyó en el Patrimonio de la Humanidad de los Caminos de Santiago de Compostela, en 2015.

Precisamente la ruta en Lugo se inicia saliendo por su muralla romana, por la puerta de Santiago hasta el puente romano sobre el Miño. El Camino Primitivo continúa por tierra lucense, hasta unirse con el Camino Francés, realizando toda la ruta hasta Compostela en solo cuatro o cinco etapas.

Desde el año 2003, la nueva normativa en relación con las monedas conmemorativas y de colección, de conformidad con la terminología utilizada en las disposiciones y normativa europea, establece que, «a partir de enero de 2004, se denominarán monedas conmemorativas en euros, las monedas de 2 euros destinadas a la circulación, cuya cara nacional será diferente a la habitual y estarán destinadas a

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 33

conmemorar un acontecimiento o personalidad relevante. Dichas monedas se emitirán con la periodicidad, el volumen y en las condiciones requeridas por su normativa europea».

Así, desde el año 2010, de acuerdo con la Orden EHA/3423/2009, de 9 de diciembre, se iniciaba la emisión de monedas temáticas de monedas conmemorativas destinadas a conmemorar bienes o lugares incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Por monedas conmemorativas se entienden las monedas destinadas a la circulación cuya finalidad sea conmemorar un hecho concreto. Hasta la fecha los bienes o lugares representados han sido: Centro histórico de Córdoba; Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada; Catedral de Burgos; Monasterio de San Lorenzo el Escorial; Parque Güell; Altamira; Acueducto de Segovia; Santa María del Naranco; Casco histórico de Santiago de Compostela; Centro histórico de Ávila; y, para el año 2020, la arquitectura mudéjar de Aragón.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento (UE) número 651/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la emisión de monedas en euros, que regula la emisión de monedas conmemorativas, cada Estado miembro cuya moneda sea el euro solo podrá emitir dos monedas conmemorativas al año.

Por otra parte, el Reglamento (UE) n.º 729/2014 del Consejo, de 24 de junio de 2014, relativo a los valores nominales y las especificaciones técnicas de las monedas en euros destinadas a la circulación, regula los principios comunes de los diseños usados en las caras nacionales de las monedas en euros destinadas a la circulación y las normas para acuñar monedas conmemorativas.

El próximo año 2021 se celebra año Xacobeo o año Santo Jubilar Compostelano, momento de máximo apogeo del Camino de Santiago. Una ocasión adecuada para destacar el rico patrimonio monumental de la ciudad de Lugo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Acordar la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de dos euros conmemorativas dedicada a los monumentos Patrimonios de la Humanidad de Lugo (Muralla, Catedral y Camino Primitivo), que se pongan en circulación durante el año 2021.

2. Realizar, acorde a las normas de diseño establecidas en los Reglamentos Europeos, y en colaboración con las Administraciones Locales y Autonómicas, un concurso de ideas sobre el diseño de la moneda conmemorativa.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2020.—**Joaquín María García Díez**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000160

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José María Mazón Ramos, Diputado del Partido Regionalista de Cantabria, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al cobro de la deuda del Estado a las comunidades autónomas por impago de la recaudación del IVA de diciembre de 2017, para su debate en esta Comisión.

Exposición de motivos

El Ministerio de Hacienda se ha negado hasta el momento a abonar a las comunidades autónomas los 2.500 millones de euros de la recaudación del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017, de cuya cantidad corresponden 42 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiteró el pasado 28 de enero, al término del Consejo de Ministros, que el Gobierno no piensa devolver esas cantidades y culpó al «bloqueo del Partido Popular

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 34

al proyecto de Presupuestos Generales de 2019 que corregía los cambios normativos del anterior ministro, Cristóbal Montoro».

Estas son las razones del impago:

Cristóbal Montoro implementó en 2017 el Suministro Inmediato de Información del IVA, lo cual implicó que el plazo de pago de las autoliquidaciones pasara del 20 al 30 de cada mes.

Esa medida supuso que el pago del IVA mensual de diciembre de 2017 entrara en caja en enero de 2018. Por lo tanto y en términos de caja, en 2017 solo se contabilizaron once meses de ingresos de las autoliquidaciones del IVA.

El impacto de ese cambio normativo llegó en 2019, cuando se liquidó el ejercicio de 2017 (se hace a los dos años). Fue entonces cuando se hizo evidente que en 2017 solo se ingresaron once meses de IVA.

En Cantabria ha supuesto dejar de percibir alrededor de 42 millones de euros.

El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó en el fallido proyecto de Presupuestos Generales de 2019 un nuevo cambio normativo en el IVA: la idea era adelantar la autoliquidación que se abona en diciembre del 30 al 20, para generar el efecto contrario que en 2019. Argumentaba que de esta forma, en términos de caja, se contabilizarían los ingresos de 13 meses, compensando así los once meses de 2017.

Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado no lograron salir adelante, por lo que en este momento todas las comunidades autónomas siguen sin percibir unos ingresos que les corresponden.

Por lo expuesto se formula ante la Comisión de Hacienda la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Convocar con carácter urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera para articular una solución que permita la devolución a las comunidades autónomas de la mensualidad de IVA impagada en 2017.

2. Adoptar todas las medidas necesarias para que ese pago se produzca en el ejercicio presupuestario de 2020.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2020.—**José María Mazón Ramos**, Diputado.—**Albert Botran Pahissa**, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000179

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, la siguiente Proposición no de Ley, sobre la ampliación de un IVA reducido para los espectáculos culturales pirotécnicos, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

La pirotecnia es sin ningún tipo de dudas uno de los elementos más preciados del rico patrimonio cultural valenciano. Su uso, permanentemente vinculado a un inmenso listado de manifestaciones de la más diversa cultura festiva valenciana, se remonta siglos atrás de nuestra historia y, entre otras consideraciones, constituye uno de los elementos reconocidos en el expediente que el pasado 30 de noviembre de 2016 posibilitó la inclusión de la fiesta de las Fallas como Patrimonio inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

En paralelo al desarrollado y arraigo histórico del arte pirotécnico y de sus manifestaciones rituales, al si de la sociedad valenciana, se ha consolidado igualmente la creación de una importante industria pirotécnica valenciana, en muchas ocasiones vinculada a empresas de tradición familiar, que para su creatividad e importancia han adquirido en muchos casos un amplio reconocimiento no solo en el ámbito valenciano y estatal, sino también a nivel internacional. Este reconocimiento generalizado ha favorecido que en muchas empresas autóctonas puedan participar con su arte en muchas manifestaciones festivas y culturales, así como en eventos sociales de gran importancia en todo el mundo.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 35

Con todo, los efectos de la reciente crisis económica y las derivadas propias de las normativas de contratación y de seguridad han tenido como consecuencia la agravación de unos tiempos que ya de por sí son complicados para el sector desde el punto de vista económico a pesar que, como podemos comprobar habitualmente en las citas del calendario festivo, su capacidad tiene un gran impacto positivo en la economía por su considerable retorno en determinados sectores de la hostelería y el turismo.

A estas problemáticas cabe sumarle el abusivo aumento del IVA cultural que perpetró el expresidente Mariano Rajoy en el año 2012, pasando del 8 % al 21 %, y que acaparó igualmente la industria pirotécnica valenciana. En los últimos años, este IVA se ha rebajado al 10 % en algunos sectores culturales del cine, la música, la danza o el teatro. No obstante, una de las industrias valencianas más auténticas y populares, como es la pirotecnia, continúa padeciendo esta excesiva carga.

Por todo lo anteriormente expuesto, presento la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso insta al Gobierno a:

1. Impulsar a todos los efectos posibles el reconocimiento artístico a los espectáculos pirotécnicos por su innegable valor cultural y la creatividad que cada uno de los profesionales de la pirotecnia utiliza para su diseño y ejecución.

2. Iniciar los trabajos y estudios necesarios para aplicar un tipo de IVA reducido, equivalente al denominado como IVA cultural, para la contratación de espectáculos pirotécnicos por su innegable carácter cultural.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.—**Joan Baldoví Roda**, Diputado.—**Laura Borràs Castanyer**, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

Comisión de Interior

161/000001

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y doña Marta Martín Llaguno Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ampliación y la agilización en la concesión de las ayudas de los afectados por la DANA, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El pasado mes de septiembre, entre los días 9 y 14, la provincia de Alicante, así como las de Castellón y Valencia en la Comunidad Valenciana, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, las provincias de Almería, Granada y Málaga en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la provincia de Albacete en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y la Comunidad Autónoma de Madrid, sufrieron la influencia del fenómeno climatológico conocido como DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), causándose números daños y pérdidas en bienes públicos y privados, así como incluso el fallecimiento de siete personas. En el caso de la provincia de Alicante, el momento de mayor incidencia se produjo entre los días 12 y 14, con gran afectación, sobre todo, a las comarcas de la Vega Baja del Segura y parte de las del Vinalopó.

Pese a la inmediatez de la respuesta de los servicios de emergencias y protección civil, incluidos medios de la Unidad Militar de Emergencia y otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la magnitud del fenómeno causó grandes daños en inmuebles y terrenos, afectando gravemente de manera muy especial al sector de la agricultura.

Desde el Gobierno de España se aseguró, con la visita personal a las zonas de varios representantes del mismo, aun en funciones, incluido su Presidente, Pedro Sánchez, ayuda suficiente y urgente para paliar los daños ocasionados a bienes y personas.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 36

El 20 de septiembre, mediante Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, se dispuso una serie de medidas valoradas económicamente en su presentación ante la ciudadanía por la Portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, en 744 millones de euros, tras la procedente declaración de las zonas afectadas como de «afectadas gravemente por una emergencia de protección civil», al amparo de lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en su artículo 23, determinándose las medidas adoptadas concretas por el Consejo de Ministros en dicho decreto ley contenidas a fin de paliar daños personales y materiales en viviendas y establecimientos, beneficios fiscales, medidas laborales y en materia de Seguridad Social, ayudas a corporaciones locales, a la producción agrícola y ganadera o para la restauración forestal y medioambiental, e igualmente actuaciones especiales en el dominio público hidráulico y marítimo terrestre, así como en otras infraestructuras de titularidad pública. En cualquier caso, y como consta en el propio decreto ley, las medidas adoptadas se refieren a todo tipo de catástrofes naturales ocurridas en diferentes puntos de España desde el 1 de abril de 2019, y no exclusivamente a la DANA de septiembre de este mismo año.

El referido Real Decreto-ley fue convalidado en fecha 22 de octubre pasado, siguiendo el trámite previsto por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, tras la disolución de las Cámaras el día 23 de septiembre, aunque sin permitirse por el voto mayoritario de los grupos, a excepción del Popular y de Ciudadanos, que se pudieran introducir enmiendas de mejora y ampliación de las medidas previstas inicialmente a través de su tramitación como Proyecto de Ley urgente. Cabe destacar que en diversos ayuntamientos municipios de la Vega Baja del Segura se habían aprobado por sus Plenos respectivos diferentes mociones instando al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados, a través de su Diputación Permanente, a permitir la tramitación de enmiendas al decreto ley original, mociones que fueron desoídas a excepción de Partido Popular y Ciudadanos en el Congreso, con el pretexto, precisamente, de la necesidad de ser aplicadas las referidas medidas con carácter urgente en el menor lapso de tiempo, sin más demoras.

Pese a estas circunstancias y las justificaciones esgrimidas por grupos políticos como el socialista o el de Unidas Podemos en la Diputación Permanente, a fecha de hoy las ayudas siguen sin llegar a sus destinatarios, pese a la urgencia y necesidad de paliar los daños sufridos. Por ello, a las quejas en su día ya puestas de manifiesto ante la imposibilidad de permitir la ampliación de, por ejemplo, los beneficios fiscales de carácter local a otros tributos más allá del IBI o del IAE, como al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica o el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, o de cubrir daños en segundas viviendas, garajes y sótanos, o de aumentar los excesivamente bajos límites por ingresos familiares para acceder a las ayudas, se añaden ahora las protestas de agricultores y ganaderos que siguen sin recibir ayuda alguna.

En fecha reciente se ha hecho pública la queja de la entidad AVA-ASAJA en la Comunidad Valenciana, denunciando la falta de ayudas y el olvido del Gobierno de España de dicho sector, que ha sido el más afectado, perdiéndose en algunas zonas hasta el 100 % de las cosechas y explotaciones por efecto de las inundaciones. Por parte de esta entidad y otras similares en las CCAA. de Murcia y Andalucía se han manifestado igualmente este tipo de quejas ante el retraso en la concesión de ayudas y en la clarificación de los propios trámites para obtenerlas, dado que no se han concretado ni fechas ni procedimientos por el Ministerio de Agricultura.

El sector agrario en su conjunto ya mostró en su momento su descontento al comprobarse que la aplicación de las medidas del decreto ley dejaba fuera a prácticamente más del 90 % de los agricultores y ganaderos afectados, ante la falta de seguro agrario provocado en las últimas campañas por la subida de los precios de las pólizas.

En los últimos días, incluso, se ha conocido la queja del sector de la apicultura, en concreto de hasta dieciocho explotaciones de la Vega Baja del Segura y del Campo de Elche, en ambos casos en la provincia de Alicante, de haber sido excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 11/2019 y no tener cobertura tampoco por la aseguradora privada al tratarse de una situación catastrófica y excluirles el Consorcio de Compensación de Seguros de cualquier cobertura por riesgos extraordinarios.

Proposición no de Ley

«Por todo ello el grupo Ciudadanos insta al Gobierno a:

Primero. Reconsiderar la adopción de medidas para paliar los daños causados por la DANA de septiembre de 2019 en bienes y personas, poniendo en marcha, mediante los procedimientos oportunos,

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 37

nuevas y más amplias medidas a las ya adoptadas, a fin de dar cobertura a un mayor número de afectados por aquellos hechos.

Segundo. Agilizar los trámites necesarios para hacer eficaces las medidas ya adoptadas en el decreto ley 11/2019, de 20 de septiembre, permitiendo el acceso a las mismas a los afectados, determinándose fechas y plazos así como procedimientos para su concesión.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre 2019.—**Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000002

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Daniel durante los días 16, 17 y 18 del mes de diciembre, a su paso por la provincia de León.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para paliar los daños producidos por la borrasca Daniel durante los días 16,17 y 18 del mes de diciembre, a su paso por la provincia de León, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Como consecuencia de la entrada por el noroeste de la península de la Borrasca Daniel, los pasados días 16, 17 y 18 de diciembre se produjo un gran temporal de lluvia en la provincia de León que, unido al deshielo provocado por dichas lluvias en la nieve acumulada durante las últimas fechas, produjo el desbordamiento de más de diez ríos de la cuenca del Duero en la provincia de León. En la propia capital, se produjo el desbordamiento de los ríos Bernesga y Torío, produciendo cortes de carretera e inundando amplias zonas de recreo.

El desbordamiento del Río Torío provocó, asimismo, el cierre de los tres puentes que comunican los distintos pueblos del municipio, por el gran riesgo de ruptura de los mismos, a causa del acúmulo de ramas y árboles a su paso por los puentes en las localidades de Manzaneda, Garrafe y Villaverde de Arriba, localidad esta última en la que se tuvo que evacuar a los vecinos de mayor edad puesto que en sus viviendas el agua alcanzaba los 40 cms.

En La Robla, la Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvo que desplegar 91 militares y 18 vehículos para frenar los daños causados por las inundaciones provocadas por el río Bernesga y por el agua proveniente de una mina cercana que provocó lo que los vecinos denominaron «río de carbón». Esta agua

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 38

negra afectó al centro de la localidad, bajando desde los desagües de una mina ubicada en la Corta Pastora de la extinta empresa hullera Vasco-Leonesa y anegó calles, plazas y viviendas, provocando graves daños materiales incluso poniendo en riesgo la integridad física de las personas que allí se encontraban.

Asimismo, se produjeron interrupciones de la circulación en distintas carreteras de la provincia: LE-315 en Vegacervera, LE-473 en Beberin, LE-321 en La Vecilla, N-630 en Santa Lucía de Gordón, CL-626 en Sena de Luna o CL-624 La Vega de Boñar.

También el sector agrario ha sufrido daños importantes, especialmente naves anegadas, fincas sembradas de cereales de invierno, de maíz sin recolectar y de remolacha, así como daños en infraestructuras de riego.

Algunos expertos han calificado esta como una situación excepcional en la provincia, puesto que a los daños debidos a la propia borrasca Daniel se han sumado los del deshielo de las últimas nevadas y el desbordamiento del agua de la mina antes mencionada.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal originado por la borrasca Daniel y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de León, durante los días 16, 17 y 18 del mes de diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo 1.3 del mismo, y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.

— Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Duero a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 39

8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2019.—**María del Carmen González Guinda y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputadas.

161/000017

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas que permitan reducir la tasa de suicidio policial entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La cifra de suicidios no ha dejado de crecer en los últimos años y, en función de las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 habrá más de millón y medio de muertes por esta causa.

En lo que respecta a España concretamente, la tendencia no deja de crecer, especialmente en el colectivo policial. A pesar de lo dificultoso que resulta hacer un análisis exhaustivo sobre los suicidios en los cuerpos policiales ante la opacidad informativa y documental que sigue habiendo al respecto y la ausencia de un registro, se calcula que la tasa policial de suicidios es nueve veces mayor que la de la población española; lo que quiere decir que un agente se suicida cada 43 días. Y esto es así, a pesar incluso de las pruebas psicológicas a las que se deben someter los agentes para ingresar en sus respectivos cuerpos policiales, y pese a contar —algunos de ellos— con un grupo de trabajo sobre «Conductas Anómalas» que, como se ha podido constatar hasta el momento, adolece de eficacia.

Así, el suicidio policial sigue siendo una de las actuales lacras de los cuerpos policiales, con una gran dimensión internacional además, dada la universalidad de la profesión. A niveles de Unión Europea, España se situaría por detrás de Francia como uno de los países con mayor tasa de suicidio policial. Sin embargo, esta elevada tasa contrasta con la opacidad con la que se sigue abordando esta problemática por parte de las autoridades españolas competentes, hasta el punto de haber sido considerada como un «tabú» sobre el que poco se ha podido debatir públicamente.

Conviene además recordar el desgaste psicofísico que supone la profesión de policía, una profesión puramente vocacional en la que —paradójicamente— está presente una «mochila emocional» ante la que no todos los agentes saben reaccionar adecuadamente, principalmente por la falta de medios y asistencia que se detallarán a continuación.

Así pues, nos encontramos ante un problema que afecta a todos los niveles de la escala policial, y a la totalidad de fuerzas policiales existentes en España: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fundamentalmente, pero también a las policías autonómicas y locales existentes en nuestro país. Teniendo en cuenta que la Administración General del Estado es competente para dar solución al suicidio policial únicamente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, centraremos esta iniciativa en este colectivo.

La profesión policial constituye una profesión de riesgo extremo en la que llama sumamente la atención el número de suicidios policiales registrados. Especialmente trágico fue el año 2017 en cuanto a número de suicidios registrados, con una media de más de un caso de suicidio al mes. En lo que respecta a la Guardia Civil, según datos del Ministerio del Interior, el número de suicidios registrados en el año 2017 ascendió a quince casos (siendo los meses de julio y agosto los meses en los que más casos se registraron); aunque según las asociaciones representativas de la Guardia Civil, el número de casos registrados ascendió a veintidós casos en la Benemérita. Al margen de esta disparidad en cuanto al número de casos de suicidio, el escenario sigue resultando alarmante y no difiere mucho del escenario que presenta la Policía Nacional, donde en 2017 se registraron en torno a 15 casos de suicidio —según fuentes oficiales—, siendo también los meses de julio y agosto el periodo en el que más casos se registraron.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 40

Estadísticas similares se han sucedido a lo largo del ejercicio 2018. Este alto índice de suicidios coincide además con la reducción del servicio de psicología con el que cuentan estos cuerpos policiales. Por ejemplo, en el caso de la Guardia Civil y según datos del Gobierno, para atender a los más de 77.000 agentes, el Instituto Armado cuenta únicamente con 62 psicólogos cuyas plazas no se están renovando una vez dejan de prestar su servicio en el Instituto Armado. De acuerdo con estas cifras, se extrae así una media de un psicólogo por cada 1.242 agentes; una cifra tremendamente alarmante si tenemos en cuenta además el incremento de bajas psiquiátricas que se han estado registrando en los dos últimos años.

Sin embargo, a pesar de estas preocupantes cifras, el Gobierno de la nación sigue de brazos cruzados y no adopta medidas reales y efectivas que permitan reducir este dramático escenario. A esto se suma además, la escasa información que el Ministerio del Interior facilita al respecto, especialmente a nivel de tentativas de suicidio que no siempre son tratadas oficialmente como tal. Hasta el momento, el Gobierno está achacando como causa principal de este alto índice, a las situaciones personales de los agentes así como a la tenencia de armas. No tiene en cuenta así, cuestiones tan relevantes como son: el mal clima laboral que existe ocasionalmente en algunas unidades; la falta de externalización de los servicios psicológicos; la inadecuada utilización de la escala de mando (especialmente en el Instituto Armado); la reiterada aplicación del Código Penal Militar en el caso de la Guardia Civil; o la falta de evaluación de los riesgos laborales a los que están expuestos los agentes.

Es importante recordar también que ante esta falta de reacción y transparencia por parte de un Gobierno que parece más preocupado por preservar su imagen que por dar soluciones a este problema de salud pública, distintos sindicatos y asociaciones representativas de la Guardia-Civil y Policía Nacional llevan meses reclamando la necesidad de abordar este problema de forma prioritaria, y algunos de ellos incluso, como la asociación policial ARP, ha presentado una propuesta de Plan de Prevención contra el suicidio policial.

De forma generalizada, sindicatos y asociaciones representativas han planteado la necesidad de crear una comisión de estudio multidisciplinar en la que —además de los propios miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional— participen asociaciones, técnicos especializados ajenos a estos dos cuerpos policiales, la Dirección General de la Guardia Civil y la Dirección General de Policía, así como representantes parlamentarios.

Precisamente, desde este grupo parlamentario hemos reivindicado en numerosas ocasiones la necesidad de externalizar e incrementar los servicios de psicología si queremos acabar con esta lacra. Desde su creación, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han demostrado profesionalidad y respeto por las instituciones, y los ciudadanos españoles así se lo reconocen año tras año en las encuestas del CIS. Es precisamente por este reconocimiento y profesionalidad que las fuerzas políticas debemos instar al Gobierno a que encuentre soluciones a este acuciante problema de salud pública.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Actualizar el Protocolo Anti-suicidios del que dispone la Guardia Civil y aprobar otro Protocolo para la Policía Nacional, de forma a acrecentar su eficacia a la hora de detectar posibles casos de suicidio, con el objeto de conseguir una mayor democratización de las políticas de recursos humanos de nuestros cuerpos policiales y promoviendo la mejora de la salud mental, así como la conciliación personal y laboral de los agentes.

2. Crear un Organismo Independiente formado por miembros ajenos a la Administración General del Estado que analice urgentemente las causas objetivas del alto índice de suicidios y los riesgos psicosociales en los puestos de trabajo, que establezca una metodología de trabajo que permita reducir los casos de suicidio, y que prevea unas herramientas de trabajo eficaces para reducir en el futuro las tasas de suicidio policial.

3. Incrementar la asistencia psicológica de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de grupos de profesionales independientes y a través de un sistema sanitario público y de calidad.

4. Incrementar la periodicidad de las revisiones psicológicas a través de una planificación de protocolos de ayuda y de seguimiento, así como de la evaluación de salud mental de los agentes, sin que estos mecanismos puedan desatar consecuencias de carácter punitivo.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 41

5. Realizar un estudio sobre clima laboral en el que trabajan los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que sea elaborado por un organismo independiente, y en el que puedan participar además las distintas asociaciones representativas y sindicatos de estos dos cuerpos policiales.

6. Aplicar de forma efectiva la correspondiente normativa de riesgos laborales de Guardia Civil y Policía Nacional.

7. Reforzar el estudio y seguimiento de casos de tentativa de suicidio.

8. Incorporar contenidos formativos sobre gestión del estrés y mecanismos de detección de conductas potencialmente suicidas en la formación académica que reciben las FCSE.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Inés Arrimadas García, Edmundo Bal Francés, Pablo Cambronero Piqueras y Guillermo Díaz Gómez**, Diputados.

161/000049

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Daniel y Elsa durante los días 20 y 21 de diciembre de 2019 a su paso por la provincia de Albacete.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por la borrasca Daniel y Elsa durante los días 20 y 21 de diciembre de 2019 a su paso por la provincia de Albacete, para su debate en Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Como consecuencia de la entrada en la Península Ibérica de la borrasca Daniel y Elsa, los pasados días 20 y 21 de diciembre, se produjo un gran temporal de lluvia en la provincia de Albacete que desbordó el cauce del río Segura y de su afluentes el río Mundo, unido al deshielo provocado por dicha lluvia y el río Tus produciendo cortes de carretera e inundando amplias zonas de recreo.

La cabecera del Segura ha recibido en las últimas horas intensas lluvias de más de 100 litros por metro cuadrado (l/m²) en ese río y en afluentes como el Mundo en la provincia de Albacete, donde ambos cauces se han desbordado en la mañana del sábado día 21 de diciembre, por Yeste y Riópar,

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 42

respectivamente. Según la Confederación Hidrográfica del Segura, este río llevaba un caudal de 283 metros cúbicos de agua por segundo justo antes del desbordamiento en Yeste y se han recogido 118 l/m² en los pluviómetros de la zona del río Tus en ese término municipal. La lluvia ha sido más copiosa en Riópar, con 153, y se han superado los 118 en Santiago de la Espada, con 86 en otro punto de esa localidad albaceteña, Las Juntas, mientras que en otras partes de Yeste se han alcanzado los 76, a 61 han llegado en Paterna del Madera y a 46 en Bogarra.

También el sector agrario se ha visto muy afectado sobretodo tierras anegadas y daños en fas siembras de cereales. Algunos expertos han calificado esta como una situación excepcional en la provincia no solo por los inconvenientes temporales causados a la población sino por los daños materiales a las infraestructuras de comunicación y a los cultivos de la zona.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar a la mayor brevedad posible el informe sobre los daños producidos por el temporal Daniel y Elsa durante los días 20 y 21 de diciembre en la zona este de la provincia de Albacete determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios afectados de la provincia de Albacete como Yeste, Riopar, Ayna y Lientor.

3. En atención a la declaración de zona afecta gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones aplicando el Real Decreto Ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas según lo establecido en el artículo 1.3 del mismo.

Y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación de servicios o bienes.

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.

— Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas implicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Evaluar, si procede las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Segura a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 43

8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.—**Carmen Navarro Lacoba y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputadas.

161/000050

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los efectos y daños de las inundaciones en Asturias en el mes de diciembre de 2019.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos y daños de las inundaciones en Asturias en el mes de diciembre de 2019, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Como consecuencia de las borrascas sufridas en el mes de diciembre en Asturias (hasta cinco en esta temporada, de especial relevancia «Elsa», «Daniel» y «Fabién») con alta pluviometría, algunas de las cuales concentradas en cortos espacios temporales y lugares concretos, y en especial por el temporal «Elsa» se han producido en diversas zonas de Asturias cuantiosos daños materiales, así como más importante, fallecimientos de personas.

Principalmente la borrasca Fabién dejó rachas de vientos en torno a los 140 km/h, ocasionando daños importantes en el suroccidente: Tineo, Cangas de Narcea, Salas, Belmonte o Ibias, entre otros. También se ocasionaron problemas por desprendimientos en el noroccidente con cortes de carreteras en Valdés o El Franco y en el interior en Taramundi y la comarca de Los Oscos. Así mismo, en la zona central: Oviedo, Gijón, Avilés o Castrillón sufrieron importantes daños materiales y varios heridos. Cabe señalar los cortes en la circulación ferroviaria tanto en cercanías y como en la conexión con la meseta con Pajares.

La borrasca «Elsa» ocasionó importantes daños por desprendimientos en carreteras y el fallecimiento de un vecino de Aller y al igual que la borrasca «Daniel» las incidencias que ocasionaron, obligó a cortar

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 44

varias líneas ferroviarias de cercanías y el corte de la línea a la meseta por Pajares. Los desprendimientos y argayos fueron especialmente visibles en Parres o Castrillón.

A las Proposiciones no de Ley sobre prevención de riesgos de inundaciones, mapas de riesgo, limpieza de cauces y riberas y planes de emergencia ya tramitadas, se propone que ante esta situación excepcional se actúe con el fin de paliar los efectos en todos los ámbitos: económicos personales, medio ambientales, en infraestructuras, en agricultura, dotación de medios [...]

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por las borrascas acontecidas en el mes de diciembre y las inundaciones a las que han dado lugar en la Comunidad Autónoma de Asturias, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo 1.3 de mismo, y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.

— Aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los Ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales.

5. Activar, en todo caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Cantábrico a que, en coordinación entre todas ellas, tomen las medidas necesarias de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.

8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.—**Paloma Gázquez Collado y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputadas.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 45

161/000051

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por las borrascas durante la semana del día 16 al 22 de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Ávila.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por las borrascas durante la semana del día 16 al 22 de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Ávila, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Durante la semana del 16 al 22 de diciembre, se produjo un gran temporal de lluvia y viento en la Península Ibérica y que dejó huellas bien visibles en la capital y, sobre todo en la provincia de Ávila, especialmente en la zona sur, en las comarcas Tiétar, Alberche, Barco de Ávila-Piedrahíta y Gredos.

Como consecuencia del temporal que ha azotado a Ávila, la capital abulense vivió una situación muy complicada por el fuerte viento. Los servicios de emergencias de la ciudad atendieron más de medio centenar de incidencias. El temporal obligó a activar el CECOP (Centro de Coordinación Operativa). Como consecuencia de las lluvias, se cortaron accesos al parque de El Soto por el desbordamiento del río Adaja.

El temporal, dejó, copiosas lluvias en la zona sur de la provincia de Ávila, un vendaval con fuertes rachas de viento cercanas a los 90 kilómetros por hora, espectaculares crecidas y desbordamientos de ríos, especialmente el Tormes pero también del Alberche, que causaron numerosas incidencias, desprendimientos en la red de carreteras provincial, especialmente en la comarca de Piedrahíta-El Barco y el Tiétar, caída de tejas de edificios daños en numerosos árboles, señales y otros objetos, así como arrastres de tierras e inundaciones en algunas carreteras, que obligó a varios cortes de carreteras, desprendimientos en edificios y puentes, y que obligaron a intervenir a los equipos de emergencia, bomberos y cuerpos de seguridad.

Las lluvias más copiosas se acumulaban en el Puerto del Pico, casi 300 litros por metro cuadrado. La red de control de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró rachas de viento por encima de los 80 kilómetros por hora en El Pico y se registraron casi 300 litros por metro cuadrado en 24 horas, y Muñotello, y de 90 en El Barco de Ávila, donde se decretó la situación de alerta en el río Tormes a su paso por Barco, con niveles por encima de los cuatro metros y un caudal de más de 690 metros cúbicos por segundo que propiciaron inundaciones en el parque de La Alameda. El caudal de muchos ríos, arroyos y vaguadas de la provincia subió bastante, como por ejemplo el río Arenal a su paso por Arenas de San Pedro o la garganta de Santa María en Candeleda. En esta zona también la Garganta de Chilla se

desbordó a la altura del paraje del Horco, lo que propició que se cortara en la noche del jueves la CL501 entre Candeleda y Madrigal de la Vera. Hubo también crecidas en el Alberche, en puntos como Navaluenga, donde llegó a desbordarse el río.

También el sector agrario ha sufrido daños importantes. Las precipitaciones ocurridas entre los días 19 y 20 de diciembre han ocasionado daños de diversa consideración en diversas localidades de la provincia de Ávila, daños en caminos y pistas forestales, también el sector agrario ha sufrido daños relevantes, así como en varios puntos de la Red de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León en la provincia de Ávila, especialmente en la zona del valle del Tiétar. Además de un buen número de incidencias y daños en las carreteras provinciales.

La afección más importante la ha sufrido la carretera AV-924 en el P.K. 1+950. En este punto la carretera se encuentra cortada por la erosión sufrida por el terraplén que ha provocado la formación de un cortado vertical al borde de la calzada.

Por otra parte, en el P.K. 89+900 de la CL-501 el desbordamiento de la Garganta de Chilla ha ocasionado una fuerte erosión en ambos márgenes de la carretera, en un tramo de unos 50 metros, así como la demolición de unos 50 metros de cuneta revestida de hormigón.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Ávila, durante la semana del 16 al 22 de diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo 1.3 del mismo, y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.

— Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

7. Instar a las Confederaciones Hidrográficas a que se tomen medidas de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 47

8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.—**Alicia García Rodríguez y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputadas.

161/000052

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Elsa durante este mes de diciembre a su paso por la provincia de Burgos.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por la borrasca Elsa durante este mes de diciembre a su paso por la provincia de Burgos, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

A lo largo del mes de diciembre del año 2019, diferentes fenómenos atmosféricos de mayor o menor magnitud han provocado importantes daños personales y materiales a su paso por la provincia de Burgos. Especialmente significativa ha sido la borrasca Elsa, cuya virulencia ha provocado el desbordamiento del río Ebro, afectando a la Comarca de las Merindades que también ha sido sacudida por rachas de viento de hasta 125 km hora causando múltiples caídas de árboles, cortes en los suministros de agua y luz así como incidencias en diferentes carreteras comarcales.

El desbordamiento de los ríos Brulles, Odra y Pisuerga, también ha provocado importantes daños en la comarca Odra-Pisuerga, donde se anegaron tierras de cultivo ya sembradas, viviendas, garajes y provocaron el desalojo del Instituto de Educación Secundaria de Melgar de Fernamental.

Tampoco la comarca del Arlanza fue ajena al paso de la borrasca Elsa. En municipios de la cuenca se produjeron importantes desbordamientos que afectaron a Palacios de la Sierra, Salas de los infantes, Barbadillo del Mercado y otros con mayor o menor magnitud.

El impacto económico y personal que estos hechos han provocado en la provincia de Burgos requiere a juicio del Grupo Parlamentario Popular, la adopción de una serie de medidas que permitan calibrar en su magnitud y con total diligencia cuantas actuaciones se requieran para paliar dichos daños así como para analizar posibles actuaciones que permitan prevenir con mayor eficacia fenómenos de este tipo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal originado por la borrasca Elsa y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Burgos durante el mes de diciembre del año 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo 1.3 del mismo, y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.

— Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas, Confederación del Duero y Confederación del Ebro a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.

8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.—**María Sandra Moneo Díez, Jaime Miguel Mateu Istúriz y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 49

161/000053

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos en la provincia de Cáceres por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 10 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos en la provincia de Cáceres por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Como consecuencia del temporal que ha castigado a la provincia de Cáceres durante los pasados días 18 a 22 de diciembre se han producido múltiples inundaciones y desastres asociados al gran temporal de lluvia y fuertes vientos que ha provocado cortes de carreteras, inundaciones, destrozos de todo tipo (mobiliario público, viviendas y caminos), cortes en el suministro eléctrico, desbordamiento del río Jerte, etc.

Los desbordamientos, fuertes vientos e intensas lluvias han provocado daños de diferente consideración en todos los municipios a su paso, de los que se relacionan a continuación algunos de los más reseñables (a los que se deben añadir otros muchos que continúan siendo cuantificados):

— Las inundaciones han sido tan graves que se han tenido que realizar cinco rescates de personas en localidades como Valdastillas, El Torno, Navaconcejo, cruce de la Fatela y Jaraíz de la Vera.

— La provincia ha sido gravemente afectada por las lluvias (el pluviómetro dejó, por ejemplo, 95.8 litros por metro cuadrado en Hervás).

— Una de las regiones de Extremadura más afectadas por la borrasca Elsa ha sido el Valle del Jerte donde destaca la localidad de Navaconcejo donde además de inundar sus calles el viento ha arrancado el césped artificial de las instalaciones deportivas).

— Los cortes eléctricos afectaron a multitud de municipios de la provincia siendo seriamente afectados algunos como Guadalupe, Robledillo de Gata, Descargamaría y Pinofrankeado.

— El temporal ha tirado árboles, vallas publicitarias y ha provocado desprendimientos de cornisas por toda la provincia.

— Se han registrado varios accidentes de tráfico relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos.

— El sector agroganadero ha sufrido daños importantes, fincas totalmente anegadas, daños en infraestructuras de riego e inundación de naves ganaderas con pérdidas sustanciales. Caminos rurales

totalmente destrozados que impiden el tránsito de maquinaria para hacer las más elementales labores. Solamente en el Valle del Ambroz 600 hectáreas anegadas y más de 150 agricultores afectados.

A estos ejemplos se deben añadir otros muchos que continúan siendo cuantificados a día de hoy. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Cáceres, durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo 1.3 del mismo, y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.

— Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Tajo a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares. Especialmente instar a la CHT a mantener limpios los cauces de los ríos, tal y como se determina en la normativa reguladora de sus funciones.

8. Instar al Ministerio de Agricultura a agilizar y dotar de partidas suficientes todas las obras de regadío planificadas en la provincia de Cáceres.

9. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

10. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.—**Alberto Casero Ávila y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 51

161/000054

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Elsa durante los días 19 y 20 de diciembre de 2019 a su paso por la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por la borrasca Elsa durante los días 19 y 20 de diciembre de 2019 a su paso por la Comunidad Autónoma de Cantabria, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El pasado 19 de diciembre la Comunidad Autónoma de Cantabria comenzó a notar el paso de Elsa, una borrasca que había entrado por el noroeste de la península y que se hizo patente en nuestro territorio con un gran temporal de lluvia y vientos de hasta 138 km/h. No obstante, fue en la madrugada del 20 de diciembre cuando la comarca de Campoo y la zona Vega de Liébana sufrieron una de las peores noches que se recuerdan en los últimos 250 años.

Las localidades de Matamorosa y Cañeda en el municipio de Campoo de Enmedio; Reinosa, capital de la comarca Campoo-Los Valles, y el municipio de Vega de Liébana fueron las zonas gravemente afectadas por las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento que no provocaron daños personales pero que dejaron tras de sí cuantiosos daños materiales en bienes particulares, suministro eléctrico, conexión ferroviaria con la Meseta, de especial repercusión en el tráfico de mercancías, así como numerosos desperfectos en fincas y accesos.

En la comarca de Campoo se desbordaron los ríos Híjar e Izarilla, taponando al río Ebro. El Híjar pasó de tener 59 centímetros de agua en la medianoche del día 19 de diciembre a tener un nivel histórico de 3,59 metros. El mismo escenario se repetía en uno de sus afluentes, el río Izarilla, y con el río Ebro. Los vecinos de Campoo veían impotentes como el río fluía por sus calles, se inundaban bajos, soportales, garajes y todas las viviendas y negocios que el río desbordado encontraba a su paso. La fuerza del agua arrastraba vehículos y todo cuanto encontraba en su camino, un escenario desolador en el que, en algunas zonas como la Avenida de La Naval y el Barrio Sorribero, ni los bomberos ni protección civil podían hacer nada porque era imposible acceder con los vehículos de emergencias.

En Liébana los protagonistas fueron los ríos Quiviesa y Riofrío. El crecimiento desmesurado de estos dos ríos hizo que varias personas tuvieron que abandonar sus hogares, el polideportivo y la piscina de La Vega quedaron totalmente inundados al igual que algunas bodegas, [...] ante la impotencia

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 52

de sus gestores, unos alcaldes preocupados por sus vecinos pero sin saber cómo poner solución a este tipo problemas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal originado por la borrasca Elsa y las inundaciones que han tenido lugar en varios municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante los días 19 y 20 del mes de diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo 1.3 del mismo, y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.

— Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Ebro a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.

8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.—**Diego Movellán Lombilla, Elena Castillo López y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 53

161/000055

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Elsa a su paso por la provincia de Jaén los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2019.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por la borrasca Elsa a su paso por la provincia de Jaén los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2019, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Como consecuencia del paso de la borrasca Elsa por la provincia de Jaén se han registrado más de 477 incidencias a través de los servicios del 112, incidencias que se han traducido en cortes de tráfico por obstáculos en la vía, desprendimientos y caídas de objetos, anegaciones de viviendas y del viario público, cortes de vías de tren, interrupciones en suministros de luz y fuertes pérdidas en el ámbito de la agricultura.

Las fuertes rachas de viento provocaron interrupciones en el suministro eléctrico en las comarcas de Segura, Las Villas y El Condado, sufriendo la comarca del El Condado, un apagón que se prolongó durante varias horas en la tarde del sábado 21 de diciembre.

El tráfico ferroviario en la provincia de Jaén fue interrumpido en dirección Sevilla y Madrid como consecuencia de la lluvia que ha causado inundaciones de las vías entre Marmolejo y Arjonilla, así como entre Jaén capital y Espeluy.

Asimismo, se han producido el corte de distintas carreteras secundarias por acumulación de balsas de agua, lodo y desprendimiento de piedras, en la A-6000 (Mengíbar, kilómetro 23), JV-2031 (Lopera-antigua N-IV), JV-2930 (topera), JV-2931 (Lopera-Cañete de las Torres), JA-3404 (Arjona-La Higuera), JA-3409 (Villanueva de la Reina-La Higuera), JA-3100 (Las Infantas-Villargordo) y la JA-2321 (Andújar-Villanueva de la Reina).

Por su parte, las pérdidas en agricultura, motivadas por las fuertes rachas de viento y las lluvias, se han traducido en el deterioro de caminos rurales y la pérdida de cosecha de aceituna, por su caída y pérdida del fruto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal originado por la borrasca Elsa y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Jaén durante los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 54

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas según lo establecido en el artículo 1.3 del mismo y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.

— Aplicar medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias en toda la provincia de Jaén.

7. Instar a las distintas administraciones locales y autonómica para que en coordinación tomen las medidas necesarias de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.

8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015 de 9 de julio.

9. Comparecer en el congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.—**Juan Diego Requena Ruiz y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000057

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien en la segunda quincena de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Soria.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 55

la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para paliar los daños producidos por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien en la segunda quincena de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Soria, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Las últimas borrascas Daniel, Elsa y Fabien se dejaron sentir en Soria en forma de grandes temporales de viento y lluvia que afectaron a toda la provincia. Los efectos de estas borrascas se vieron agravados por el deshielo provocado la nieve acumulada durante las últimas fechas, lo que tuvo como principal consecuencia el desbordamiento del cauce de varios arroyos y ríos de la cuenca del Duero.

Los mayores problemas afectaron al cauce del río Duero, con desbordamientos importantes a su paso por las localidades de Salduero y Molinos de Duero, pero también se vieron afectados los municipios de:

- Vinuesa: por la crecida del río Revinuesa, que mantuvo el nivel rojo de alerta.
- Tardesillas: por el desbordamiento del río Tera.
- Navapalos: los incidentes que se produjeron en los ríos Ucero y Duero.
- Garray: se produjo el desbordamiento de los ríos Tera y Duero, con cortes de carreteras e inundaciones en zonas de recreo.
- Burgo de Osma: la crecida del río Ucero a su paso por esta localidad fue significativa y el aumento de caudal inundó los jardines públicos situados cerca de las murallas. También hubo que intervenir para retirar escombros de fachadas que se habían desplomado por las fuertes precipitaciones.
- San Esteban de Gormaz: hubo que retirar árboles caídos en carreteras del municipio de Villálvaro y ramas que cayeron sobre el tejado del Ecomuseo Molino de los Ojos, en el paraje natural del mismo nombre en la localidad. El paraje del Sotillo fue acordonado para prohibir el paso ante la crecida del Duero a su paso por la localidad, que inundó las islas centrales. El viento que llevó asociado este temporal y la lluvia también provocaron inundaciones en el paraje de La Rambla y la Alameda. Se acordonaron los paseos ante la presencia de socavones que aparecieron a causa de las fuertes lluvias.
- Soto de San Esteban en dirección a Langa de Duero: el aumento del caudal del Duero y su desbordamiento provocó el corte de la SO-P-4009.

Además, el viento que llevó asociado este temporal provocó problemas en multitud de municipios, alcanzando las rachas de viento una velocidad de 111 Km/h en La Riba de Escalote, de 102 km/h en Arcos de Jalón, de 90 Km/h en Ólvega y de 70 Km/h en Soria capital, lo que provocó numerosas intervenciones de bomberos y protección civil.

También el sector agrario ha sufrido perjuicios importantes, especialmente con naves anegadas, el embolsamiento de agua en fincas sembradas de cereales de invierno, y daños en infraestructuras de riego.

Estos son solo algunos ejemplos de los efectos que han producido las borrascas Daniel, Elsa y Fabien en la provincia de Soria durante las últimas fechas, unas borrascas que provocaron inundaciones y desperfectos por las fuertes rachas de viento en prácticamente todas las comarcas sorianas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal originado por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien, así como por las inundaciones que han tenido lugar en

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 56

la provincia de Soria, durante la segunda quincena de diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo 1.3 del mismo, y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.

— Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

7. Instar, a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Duero a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.

8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.—**Tomás Cabezón Casas y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000058

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Fabien el día 21 del mes de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Toledo.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 57

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para paliar los daños producidos por la borrasca Fabien el día 21 del mes de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Toledo, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La borrasca Fabien se ha dejado sentir en Toledo en forma de fuerte temporal de viento y e intensas lluvias que afectaron a toda la provincia.

El mayor problema se produjo el día 21 de diciembre en el municipio sagreño de Yeles como consecuencia de las inundaciones de las parcelas y viviendas en la Urbanización Los Cisneros provocada por el desbordamiento del arroyo Guatén, cuenca del río Tajo.

La inundación de las parcelas cubrió de agua los sótanos y alcanzó la altura de medio metros en algunas viviendas lo que obligo a la evacuación de 20 personas.

Las inundaciones en Yeles han sido recurrentes y también fueron muy graves en julio de 2017.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal originado por las borrascas Fabien, así como por las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Toledo, durante la segunda quincena de diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo 1.3 del mismo, y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 58

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.

— Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

7. Instar, a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Tajo a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.

8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.—**Carmen Riobos Regadera, Vicente Tirado Ochoa y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000059

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos en la provincia de Valladolid por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 10 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 59

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos en la provincia de Valladolid por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Como consecuencia del temporal que ha azotado a la provincia de Valladolid durante los pasados días 18 a 22 de diciembre se han producido múltiples inundaciones y desastres asociados al gran temporal de lluvia y fuertes vientos que, unido al deshielo y la falta de capacidad de almacenamiento de agua en Valladolid, ha provocado inundaciones en la capital y municipios de la provincia como consecuencia del desbordamiento de ríos y afluentes como el Pisuerga, el Cea o el Valderaduey entre otros.

Los desbordamientos e intensas lluvias han provocado daños de diferente consideración en todos los municipios a su paso, de los que se relacionan a continuación algunos de los más reseñables (a los que se deben añadir otros muchos que continúan siendo cuantificados):

- Caída de árboles y derrumbe parcial de una vivienda en mal estado en Medina del Campo. Derrumbe de una vivienda en Torrecilla del Valle.

- Inundaciones, caída de árboles y derrumbe de la tapia del cementerio en Valdestillas.

- Caída de árboles y destrozos en el cementerio de Peñafiel, destacando la caída del conocido como «Pino Macareno», símbolo del municipio de gran valor. Desprendimientos de fachadas y tejados en toda la comarca de Peñafiel, y derrumbe de una pérgola en Padilla de Duero.

- Desprendimientos de piedra en el lienzo sur del Castillo de Urueña.

- Especialmente afectado se ha visto el norte de la provincia por las crecidas de los ríos Cea y Valderaduey, con inundación de naves ganaderas en Saelices de Mayorga, que han provocado el ahogamiento de medio centenar de ovejas; cortes de carreteras y daños en parcelas agrícolas, caminos o zonas recreativas en los municipios de Melgar de Arriba, Mayorga, Santervás de Campos, Villavicencio, Bolaños, Cabezón de Valderaduey y Castroponce, entre otros.

- Desbordamiento del río Pisuerga a su paso por la ciudad de Valladolid, anegando zonas recreativas y deportivas. Necesidad de realizar labores de urgencia para la limpieza del puente romano de Simancas ante el aumento del caudal del río y la acumulación de troncos y maleza. Desbordamiento del río Duero a su paso por Tordesillas anegando la zona recreativa de la localidad.

- Acumulación de árboles caídos a su paso por carreteras y puentes en múltiples localidades con el riesgo asociado a este fenómeno para el tránsito y comunicación entre pequeños municipios habitados fundamentalmente por personas mayores.

- Zonas deportivas, recreativas y de ocio anegadas (como por ejemplo en Santovenia), cuyo uso es frecuente y quizá más necesario en las fiestas navideñas.

- Cortes en el suministro eléctrico en numerosos municipios, afectando a particulares, empresas e industrias en la zona de Medina del Campo.

- El sector agroganadero ha sufrido daños importantes, fincas sembradas de cereales de invierno totalmente anegadas, daños en infraestructuras de riego e inundación de naves ganaderas con pérdidas sustanciales. Caminos rurales totalmente destrozados que impiden el tránsito de maquinaria para hacer las más elementales labores. Llama la atención que es precisamente el sector agroganadero el que repetidamente viene demandando la construcción de balsas que permitan almacenamiento de agua en momento de exceso para poder utilizarlo en épocas de sequía o necesidad para los cultivos, contribuyendo de este modo al aprovechamiento de este recurso.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Valladolid, durante los días 18/22 del mes de diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 60

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo 1.3 del mismo, y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.

— Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Duero a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares. Especialmente instar a la CHD a mantener limpios los cauces de los ríos, tal y como se determina en la normativa reguladora de sus funciones.

8. Instar al Ministerio de Agricultura a agilizar y dotar de partidas suficientes todas las obras de regadío planificadas en la provincia de Valladolid.

9. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

10. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.—**José Ángel Alonso Pérez, Eduardo Carazo Hermoso y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000060

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien desde el día 16 del mes de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Zamora.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 61

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 7 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien desde el día 16 del mes de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Zamora, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Como consecuencia de la entrada por el noroeste de la península de las borrascas Daniel, Elsa y Fabien, desde el pasado día 16 de diciembre se produjeron grandes temporales de lluvia y viento en la provincia de Zamora que, unido al deshielo provocado por dichas lluvias en la nieve acumulada durante las últimas fechas, produjo el desbordamiento de varios ríos de la cuenca del Duero en la provincia de Zamora. En la propia capital, se produjo el desbordamiento del río Duero, produciendo inundaciones de amplias zonas de paseo.

El desbordamiento de los ríos Eria, Órbigo y Tera en la zona de Benavente y los Valles provocó miles de hectáreas de cultivo anegadas, tuvieron que cortarse accesos a distintas localidades y produjo destrozos en localidades como Morales de Rey, Manganeses de la Polvorosa, Mozar de Valverde, Milles de la Polvorosa, Vecilla de la Polvorosa, Bretó, Santa Cristina de la Polvorosa, Villaferrueña, Coomonte de la Vega, Fresno de la Polvorosa, Santa María de la Vega, Arrabalde o Alcubilla de Nogales y otras, además de en caminos agrícolas y carreteras.

En Benavente, el Órbigo anega la vega y el Prado de las Pavas, arrasando con ejemplares de árboles en crecimiento y la zona conocida como las huertas.

En la zona de Aliste y Alba, la crecida del río Aliste obligó al corte de la carretera ZA-P-1405 Zamora-Mahide, quedando bajo las aguas el puente de Domez de Alba, arrancando su capa de rodadura y anegando zonas urbanas de los pueblos por donde pasa, Mahide, Pobladura, San Vicente de la Cabeza, Gallegos del Río, etc. dejando bajo las aguas calles, paseos, jardines, zonas deportivas y parques infantiles.

En la zona de Sanabria las fuertes crecidas del río Tera provocaron inundaciones en diferentes localidades, siendo necesario cortar varias carreteras en la zona, al mismo tiempo que se producían desprendimientos de tierra, caídas de tapias y árboles.

En Toro y su alfoz, la crecida del Duero produjo inundaciones con daños en caminos, paseos fluviales, fincas agrícolas e invernaderos de la vega de Toro.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal originado por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien; y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Zamora, desde el día 16 del mes de diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 62

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo 1.3 del mismo, y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.

— Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Duero a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.

6. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

7. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.—**Elvira Velasco Morillo y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputadas.

161/000061

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos en la provincia de Palencia por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 11 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 63

la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos en la provincia de Palencia por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Como consecuencia del temporal que ha azotado a la provincia de Palencia durante los pasados días 18 a 22 de diciembre se han producido múltiples inundaciones y desastres asociados al gran temporal de lluvia que, unido al deshielo y la falta de capacidad de almacenamiento de agua en Palencia, ha provocado inundaciones en la capital y municipios de la provincia como consecuencia del desbordamiento de ríos y afluentes como el Carrión, Pisuerga, Arlanza, Ucieza, Camesa, Lucio, Burejo y Valdavia entre otros.

Los desbordamientos e intensas lluvias han provocado daños de diferente consideración en todos los municipios a su paso:

- Inundación, cierre y derrumbe de puentes con el consiguiente bloqueo de comunicaciones, como en Villaescusa de las Torres o Palencia capital.

- Hundimiento de tejados en edificios y naves como el caso del municipio de Polentinos en que el agua ha provocado la caída del tejado de la nave que custodiaba varios tractores de vecinos con la consiguiente pérdida de maquinaria y el riesgo de problemas eléctricos.

- Acumulación de árboles caídos a su paso por carreteras y puentes en múltiples localidades con el riesgo asociado a este fenómeno para el tránsito y comunicación entre pequeños municipios habitados fundamentalmente por personas mayores.

- Edificios históricos inundados como el claustro del Monasterio de Sta. María la Real en Aguilar de Campoo, San Andrés del Arroyo, o el Puente Romano de Nestar declarado BIC y que ha desaparecido totalmente.

- Zonas deportivas y de ocio anegadas, cuyo uso es frecuente y quizá más necesario en las fiestas navideñas.

- Desalojo de personas dependientes con dificultades de movilidad en el municipio de Barruelo de Santullán, que ha provocado serios problemas a estas personas que tuvieron que ser trasladadas a un hotel para su realojo y atención.

- Problemas en el abastecimiento y depuración de aguas.

- El sector agro ganadero ha sufrido daños importantes, fincas sembradas de cereales de invierno totalmente anegadas, daños en infraestructuras de riego e inundación de naves ganaderas con pérdidas sustanciales, caminos rurales totalmente destrozados que impiden el tránsito de maquinaria para hacer las más elementales labores. Llama la atención que es precisamente el sector agro/ganadero el que repetidamente viene demandando la construcción de balsas que permitan almacenamiento de agua en momento de exceso para poder utilizarlo en épocas de sequía o necesidad para los cultivos, contribuyendo de este modo al aprovechamiento de este recurso.

En el caso concreto de este sector, es importante destacar que sigue pendiente de realizar la regulación del Carrión/Valdavia por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, y ello a pesar de estar contemplada tanto en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, como en los compromisos asumidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en su momento. Esto determina que siga sin licitar la obra construcción conocida como Balsas de las Cuezas que permitiría

a Palencia almacenar el agua del Valdavia y que en momentos como el actual no solo se desaprovecha, sino que contribuye a perjudicar a quienes deberían beneficiarse de ella.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Palencia, durante los días 18/22 del mes de diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo 1.3 del mismo, y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.

— Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Duero a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares. Especialmente instar a la CHD a mantener limpios los cauces de los ríos, tal y como se determina en la normativa reguladora de sus funciones.

8. Instar al Ministerio de transición ecológica y a la CHD a agilizar y licitar con carácter urgente la obra conocida como Balsas de Las Cuezas.

9. Instar al Ministerio de Agricultura a agilizar y dotar de partidas suficientes todas las obras de regadío planificadas en la provincia de Palencia.

10. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

11. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2019.—**Milagros Marcos Ortega, Miguel Ángel Paniagua Núñez y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000063

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno al desarrollo del Protocolo de actuaciones firmado el 4 de abril de 2018 por el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la nueva ubicación del cuartel de la Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El municipio de Roquetas de Mar, provincia de Almería, tiene una extensión aproximada de 60 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de más de cien mil habitantes según los datos del padrón municipal, llegando a superar los 200 mil habitantes en los meses estivales. Cuenta, además, con una población inmigrante procedente de más de cien países que representa el 45 % del total. Y tiene como última característica que sus habitantes se distribuyen en ocho entidades o núcleos de población.

Corresponde a la Guardia Civil la prestación, a través del Puesto Principal existente en el mismo, de los servicios públicos de seguridad ciudadana y de protección de los derechos y libertades, precisando para ello disponer de los recursos humanos y de las infraestructuras y medios adecuados, en función de las características propias del municipio de Roquetas de Mar.

Tanto el Ministerio del Interior como el Ayuntamiento consideraron necesario poner en marcha mecanismos de colaboración orientados a resolver los problemas que, tanto en materia de recursos humanos como de infraestructuras, tiene planteados el Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar y que, sin duda, redundarían en la mejora de la calidad de los servicios públicos a sus habitantes.

Para cumplir estos objetivos, el 4 de abril de 2018, el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar firmaron un Protocolo de actuaciones para la ubicación de las dependencias oficiales del Cuartel de la Guardia Civil e incremento de efectivos.

El incremento de efectivos, aunque sin concluir totalmente, se ha ido materializando conforme a las previsiones contenidas en el citado Protocolo, incremento que ha repercutido positivamente en la mejora de la seguridad del municipio de Roquetas de Mar, habiéndose producido un descenso en el número de delitos registrados.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha cumplido las obligaciones contenidas en el Protocolo y está en condiciones desde hace meses de llevar a cabo las actuaciones necesarias que hagan posible la nueva ubicación de las dependencias del Cuartel de la Guardia Civil.

Sin embargo, no se ha producido todavía la firma del Convenio que ha de posibilitar la ejecución de ese Protocolo firmado en abril de 2018 y con ello la reubicación de las dependencias oficiales del Puesto Principal de la Guardia Civil.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al desarrollo del Protocolo de actuaciones firmado el 4 de abril de 2018 entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) para la ubicación de las dependencias oficiales del Cuartel de la Guardia Civil e incremento de efectivos.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020.—**Juan José Matarí Sáez y Miguel Ángel Castellón Rubio**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000083

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 66

de Ley en la defensa de la Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El pasado 30 de diciembre de 2019 se hizo público el acuerdo suscrito entre el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el Presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortúzar, por el cual los nacionalistas vascos se comprometían a votar favorablemente la investidura del señor Sánchez.

En ese acuerdo, el candidato a Presidente y el Gobierno que se forme se compromete, entre otras cosas, «a proceder en seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su día a la Comunidad Autónoma Vasca».

Guardia Civil y Policía Foral llevan muchos años colaborando y trabajando conjuntamente, y son decenas los agentes de la Guardia Civil de Tráfico afincados en Navarra durante toda una vida profesional y personal. En Navarra no se olvida la gran labor que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan en todos los ámbitos, pero especialmente durante los conocidos como «años de plomo», poniendo su vida y seguridad al servicio del bienestar, libertad y seguridad de los ciudadanos navarros.

Ahora, y como consecuencia del acuerdo suscrito, sin respetar a los navarros y a sus instituciones, la Guardia Civil que ejerce las labores de tráfico en las carreteras navarras, deberá cesar su actividad en el plazo de seis meses.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Rechazar el acuerdo suscrito el día 30 de diciembre de 2019 entre Pedro Sánchez y Andoni Ortúzar relativo a ceder la transferencia en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra en el plazo de seis meses.

2. Solicitar que la Guardia Civil de Tráfico y el resto de unidades, se quede en Navarra, porque son parte importante de la Comunidad Foral.

3. Manifestar el reconocimiento y afecto a la Guardia Civil por el trabajo que desarrollan en Navarra y en el conjunto de España.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.—**Ana María Beltrán Villalba**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000121

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de la Unidad de Prevención y Reacción en la Comisaria de Pontevedra, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Las Unidades de Prevención y Reacción se conciben como Unidades destinadas a la prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana, dotadas de una estructura prefijada y medios suficientes para acometer con solvencia las funciones específicas que le son propias.

Estas Unidades se emplearán prioritariamente cuando sea precisa la intervención de Unidades de sus características, adecuadamente estructuradas y dotadas de una notable capacidad operativa.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 67

Sus funciones se concretan, en líneas generales, en las siguientes:

1. Dispositivos especiales de prevención de la delincuencia.
2. Mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.
3. Apoyo a otras Unidades, Servicios o Instituciones, en dispositivos puntuales.
4. Reacción e intervención ante cualquier situación que requiera una actuación inmediata.

Estimamos necesaria una U.P.R. en Pontevedra por los siguientes motivos:

— Es una ciudad donde es necesario y urgente establecer las actuaciones a que se refieren muchas de las funciones enumeradas.

— En Pontevedra no se establecen controles habituales por carecer de este tipo de Unidades. Y los que se están haciendo lo realizan unos pocos funcionarios y sin los medios necesarios para ello.

— No existe en Pontevedra una Unidad que pueda hacer frente, con la dotación de medios humanos y materiales, y con la preparación técnica adecuada, a grandes concentraciones o manifestaciones. Por lo que hay que utilizar unidades de otras plantillas.

— Lo mismo ocurre con los dispositivos de seguridad en espectáculos públicos, deportivos, eventos sociales o concentraciones de masas en general.

Es de destacar la utilidad de las UPR para colaborar con Unidades de lucha contra la droga y el crimen organizado, ya implantadas en Pontevedra, como el GRECO Galicia y la UDYCO, o la Brigada de Extranjería en relación con la inmigración ilegal.

De suma importancia resultaría la implantación de la UPR en Pontevedra como refuerzo, en determinados momentos, a otras Comisarías de la zona norte de la provincia de Pontevedra, como Marín y Vilagarcía, ya por sí muy disminuidas de personal. Ni que decir tiene su reacción e intervención ante hechos imprevistos de suma gravedad, atentados o amenazas terroristas o ante catástrofes públicas.

No se puede obviar la utilidad de este tipo de Unidades en la labor preventiva ante determinadas actividades delictivas y actuación en puntos negros, como el tráfico de drogas (trapicheo), armas blancas, identificación de sospechosos o reclamados por la justicia, vehículos robados, intervenciones en inmediaciones colegios, etc.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear una Unidad de Prevención y Reacción en la Comisaría de Policía de Pontevedra.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2020.—**María Pilar Ramallo Vázquez, Diego Gago Bugarín, Javier Bas Corugeira, Ana Belén Vázquez Blanco y Ana María Pastor Julián**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000122

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de una USECIC en la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La Unidad de Seguridad Ciudadana, es la Unidad básica de despliegue de la Guardia Civil en el territorio y la que recoge los objetivos genéricos que tiene encomendado el Cuerpo, como la prevención de la delincuencia y el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad y el orden público en su ámbito.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 68

En las Unidades territoriales de Seguridad Ciudadana recae la responsabilidad de la prevención, de la investigación de gran parte de las infracciones penales y de la atención y asistencia próxima al ciudadano. Tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos mediante la prevención y primera investigación de las conductas delictivas, así como el auxilio y atención a los requerimientos de la población las 24 horas del día, durante todos los días del año.

Las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, se conciben como Unidades creadas en las cabeceras de las Comandancias de la Guardia Civil con la especialidad de seguridad ciudadana, realizando controles de carácter antiterrorista, de identificación de personas y vehículos, prestando apoyo a las compañías de toda la provincia.

Es un grupo multifunción que además de lo anteriormente mencionado dan apoyo al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) para la prevención de incendios forestales, un servicio de crucial importancia en la provincia de Ourense, que año tras año sufre la barbarie de los incendios y que con la creación de esta Unidad se vería reforzada la prevención.

Al mismo tiempo, es importante la creación de esta Unidad por ser la provincia de Ourense fronteriza con Portugal y que reforzaría aquellas zonas fronterizas en las que hay Cuarteles con un número escaso de Agentes de la Guardia Civil.

Por último, la provincia de Ourense concentra el 70 % de su población en el rural lo que también hace necesaria y urgente la creación de la USECIC que reforzaría la seguridad en zonas de escasa población. El Gobierno del Partido Popular estaba realizando ya los estudios procedentes sobre la creación de esta Unidad y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Guardia Civil en la provincia de Ourense con la finalidad de cubrir dichos puestos, comprobando que resultaba posible y además necesaria su creación. Al mismo tiempo que solicitada por todas las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil en Ourense.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de una Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil en la Comandancia de Ourense.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2020.—**Ana Belén Vázquez Blanco y Celso Luis Delgado Arce**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000124

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el estado de tramitación de las ayudas dispuestas en el Real Decreto Ley 11/2019, por los daños ocasionados por la DANA en septiembre del pasado año, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El pasado mes de septiembre, entre los días 12 a 16, alcanzaba la península ibérica desde el Mediterráneo una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), de efectos devastadores sobre bienes y personas, con el resultado de seis personas muertas en las provincias de Alicante (dos), Granada (una), Almería (una) y Albacete (dos), y numerosísimos daños materiales en bienes así como pérdidas económicas de elevada cuantía en todos los sectores afectados. Se dictaba así, con fecha 20 de septiembre 2019, el Real Decreto Ley 11/2019, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, referidos a los ocasionados por diferentes episodios desde el 1 de abril.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 69

El Gobierno de España, en la comparecencia de su Portavoz Isabel Celaá, valoró el total de medidas previstas en 774 millones de euros, tras declararse «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» las provincias de Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma de Illes Balears y la Comunidad de Madrid, por los graves sucesos ya referidos del mes de septiembre del año 2019.

Los daños han sido especialmente graves en el sector de la agricultura y la ganadería en las provincias del sureste español. Actualmente, pese a la «urgencia» declarada de las ayudas previstas, las mismas no se han hecho efectivas a sus posibles perceptores, como han denunciado públicamente asociaciones agrarias.

Desde Ciudadanos se puso inmediatamente de manifiesto, tras la publicación del RDL de referencia, la insuficiencia de las medidas, así como lo escaso de su cobertura. De hecho, en el caso de las ayudas a producciones agrícolas, la exigencia de que los perjudicados acreditaran tener en vigor póliza de seguro agrario ha venido a dejar fuera de cualquier tipo de ayuda, por ejemplo, a más del 90 % de los productores de hortalizas afectados, cuando la gravedad y lo extraordinario de lo sucedido debiera hacer ampliar y extender la cobertura de la atención del Gobierno de España a quienes por causa fundamentalmente de su alto coste hubieron de prescindir de pólizas de seguro agrario sobre sus producciones.

En este sentido, entidades como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), entre otras, han reclamado una ampliación de las ayudas a productores del sector agrícola y ganadero no cubiertos con póliza de seguro, o en cuanto a daños inicialmente no indemnizables por los seguros de que se dispusiese.

Igualmente, y en general, se denunció por Ciudadanos la falta de ayudas en forma de exenciones o bonificaciones de tributos locales como el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), cuando muchos afectados, precisamente sufrieron daños en inmuebles y vehículos, debiendo actualmente bien abonar a los ayuntamientos el preceptivo impuesto para proceder a reparaciones y reformas de los primeros, o igualmente abonar el impuesto de los segundos a pesar de quedar inutilizados totalmente por las inundaciones. Diversas iniciativas a nivel local en municipios de la comarca alicantina de la Vega Baja, mediante mociones aprobadas por los respectivos Plenos, incidían precisamente en esas fechas en reclamar una ampliación de las ayudas inicialmente previstas en tales supuestos.

Por todo lo anterior, puede concluirse que la sensación entre los afectados, y así se ha puesto de manifiesto en las últimas semanas, es que las ayudas, pese a ser «urgentes», son escasas y, lo que es más grave, siguen sin llegarles.

Por parte de la Diputación Provincial de Alicante incluso se previó la disposición de fondos para completar las ayudas estatales, sometiéndose ésta al plan del Estado a presentar por el Gobierno, a fin de agilizar su tramitación. Sin embargo, la falta de desarrollo del procedimiento por parte del Gobierno central para la percepción de las ayudas ha ocasionado un bloqueo de facto de los fondos previstos por la propia Diputación Provincial de Alicante.

Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Agilizar urgentemente los trámites de concesión de ayudas previsto en el RDL 11/2019, a fin de garantizar su pronta recepción por los afectados,
2. Ampliar el catálogo de ayudas previsto inicialmente en el RDL 11/2019 para los afectados, y en concreto, al menos, para la cobertura de los daños sufridos por productores del sector agrícola y ganadero aun sin seguro agrario, o a afectados en general mediante exención y/o bonificación de otros tributos locales más allá de los originalmente previstos, tales como el ICIO o el IVTM.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2020.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 70

161/000129

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por el temporal Gloria en la Comunidad de Aragón, para su debate en Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Desde el pasado lunes día 20 de enero de 2020, el temporal «Gloria» azota a gran parte de la geografía española produciendo daños de grandes magnitudes en los territorios afectados.

Un temporal de carácter extraordinario que ha dejado multitud de pueblos incomunicados, sin accesos, derrumbes de torres eléctricas dejando sin electricidad a multitud de personas en sus casas e industrias, afectando a servicios básicos para la población. Derrumbe de naves industriales, hundimiento de tejados de casas particulares, desprendimiento de carreteras, deslizamiento de laderas, etc...

En definitiva, una situación muy grave que ha provocado grandes daños materiales produciendo grandes pérdidas económicas y patrimoniales.

El 23 de enero, el Presidente Sánchez en declaraciones a los medios de televisión afirmó que iban a crear una línea de ayudas, subvenciones e indemnizaciones para paliar los daños materiales producidos. En sus afirmaciones concretó que este tipo de ayudas iban a estar dirigidas exclusivamente para las comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Comunidad de Murcia y Andalucía.

En tales afirmaciones obvia nombrar a la Comunidad de Aragón, siendo las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel muy afectadas por el temporal.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

— Que incluya a la Comunidad de Aragón en la línea de ayudas anunciadas como comunidad damnificada por el temporal “Gloria”.

— La línea de ayudas sea implantada y llegue a la mayor brevedad a todos los damnificados a la mayor urgencia para paliar los grandes desperfectos sufridos en las infraestructuras por este temporal.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2020.—**José Alberto Herrero Bono, Mario Garcés Sanagustín, Eloy Suárez Lamata y Pedro Navarro López**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000134

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por la borrasca Gloria entre los días 19 y 23 de enero de 2020, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El día 17 de enero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) bautizaba con el nombre de Gloria la primera borrasca del año 2020. Gloria se convertía en la séptima borrasca con gran impacto de la temporada 2019-2020, tras Amelie, Bernardo, Cecilia, Daniel, Elsa o Fabien.

Las previsiones de fuerte viento, intensa lluvia, copiosas nevadas y fenómenos costeros adversos durante los días siguientes y afectando a gran parte de la península, obligaron a activar los avisos de

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 71

alerta roja en varias regiones del arco mediterráneo, así como el aviso naranja y amarillo para gran número de provincias.

Desgraciadamente, las previsiones se han ido cumpliendo, incluso han sido superadas entre los días 19 y 23 de enero, sin descartar las reactivaciones puntualmente fuertes en algunas zonas durante los días siguientes.

Gloria ha batido récords históricos de oleaje, rachas de viento y precipitaciones. Ha provocado la pérdida de, al menos, diez vidas humanas, heridos y varios desaparecidos.

El temporal ha causado numerosos estragos en el litoral mediterráneo destrozando playas, provocando inundaciones costeras, la crecida de los caudales de los ríos y arroyos y el cierre de varias instalaciones portuarias. Además la lluvia, la nieve y el viento en zonas más interiores provocaron incidentes en la actividad cotidiana: clases suspendidas, carreteras cortadas, retrasos e interrupciones en la circulación ferroviarias o vuelos desviados.

En definitiva, el temporal invernal, catalogado por algunos como uno de los peores del último siglo, deja un paraje desolador, con innumerables daños materiales, destrozos en infraestructuras, cortes en el suministro eléctrico, pérdidas en las producciones agrarias, desprendimientos y árboles caídos, numerosas inundaciones y pendientes de evaluar el impacto de aludes y la crecida de los ríos por deshielo y las lluvias.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal invernal de la borrasca Gloria, entre los días 19 y 23 de enero de 2020, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo 1.3 del mismo, y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.

— Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Afrontar la recuperación y restauración de los impactos sobre las zonas costeras dañadas.

7. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2020.—**Mario Garcés Sanagustín**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000138

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los daños ocasionados por la borrasca «Gloria», para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El paso de la borrasca «Gloria» que ha azotado durante la última semana el este de la Península Ibérica, con especial incidencia en las costas del litoral mediterráneo, ha dejado tras de sí un balance devastador, con más de la mitad de los municipios catalanes afectados y más de 200 municipios en la Comunidad Valenciana, entre otros muchos afectados también en Aragón, Murcia y Andalucía.

Con este temporal se han llegado a acumular hasta 800 l/m², vientos con rachas de hasta 180 km/h, nieve que ha llegado a alcanzar los 90 centímetros de espesor, granizadas y olas que han superado los 10 metros de altura.

Doce personas han perdido la vida y cuatro están desaparecidas tras el paso de la tormenta Gloria por el este de España entre el domingo y el jueves de la semana pasada. Las pérdidas alcanzan cifras millonarias en sectores estratégicos como el de la agricultura y el turismo de nuestras zonas costeras. El temporal marítimo ha sido de tal intensidad que ha dañado gravemente numerosas construcciones y edificaciones en todo el litoral, ha hecho desaparecer playas y paseos marítimos de nuestras costas y ha afectado a innumerables infraestructuras que se han visto seriamente dañadas.

Nuestros principales destinos turísticos de playa se han visto afectados sufriendo gravísimos daños de incalculables consecuencias económicas. Las pérdidas a consecuencia del temporal «Gloria» se acumulan a escasos dos meses de la Semana Santa, fecha que marcará el inicio de la actividad turística de 2020. Por este motivo, resulta necesario y urgente una respuesta inmediata y coordinada desde todas las administraciones públicas para restaurar los daños producidos en nuestras costas.

De igual forma, los daños en el campo han sido generalizados debido al viento y al granizo, afectando a los cultivos y a las infraestructuras agrarias con distinta intensidad, pero causando también pérdidas millonarias en todo el este peninsular. El cultivo de cítricos, en su segunda parte de la campaña, es el más afectado. La misma suerte han sufrido los cultivos de hortalizas de invierno acabadas de plantar. Las principales pérdidas en las infraestructuras agrarias se localizan en invernaderos, caminos, sistemas de riego, rotura de naves, granjas, márgenes o mataderos.

En resumen, numerosos incidentes de cuantía incalculable que han provocado la alteración de la actividad cotidiana de los vecinos de las zonas afectadas con la supresión de la actividad escolar, rescates, desalojos, cortes de carreteras, interrupción del servicio ferroviario, el desbordamiento de ramblas, arroyos y ríos que han anegado calles y tierras de cultivo, o el fuerte oleaje que obligó al cierre de los puertos comerciales.

Lamentablemente, el temporal «Gloria» no ha sido el único que ha azotado nuestro país en los últimos meses. Es el cambio climático, según los expertos, el responsable de que se originen estos temporales que devastan todo a su paso: el Temporal Dana (septiembre 2019), el Temporal Elsa (diciembre 2019) y Temporal Gloria (enero 2020).

Desde Ciudadanos creemos que, aunque estos fenómenos son naturales y por ello poco predecibles y controlables, las diferentes administraciones e instituciones de nuestro país deben implantar medidas preventivas de mantenimiento dirigidas a que tanto las ciudades como las zonas rurales estén preparadas para la llegada de estos temporales.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 73

Todas las medidas de prevención que se implanten, no solo harán que no sean tan graves sus efectos, sino que influirán en la creación de empleo directo en zonas rurales, ayudando a reducir las tasas de paro, y ayudará a la fijación del territorio en zonas donde existan problemas de despoblación.

Entre estas medidas, que dependen de diferentes administraciones, creemos que son muy importantes, y las mínimas imprescindibles:

1. La limpieza y adecuación de los cauces fluviales que evite desbordamientos futuros como los que suceden cada año. Con actuaciones constantes en épocas de tranquilidad climática. Son las Confederaciones Hidrológicas, dependientes del Ministerio de Transición Ecológica (MUECO), las que tienen la obligación de realizar estas labores de mantenimiento.

2. Protección de entornos urbanos afectados por su proximidad a los cauces para evitar que riadas o desbordes afecten a los hogares y los destruyan, así como mantenimiento preventivo del alcantarillado de las localidades cercanas por parte de sus ayuntamientos.

La falta de limpieza y adecuación de los cauces fluviales y de las infraestructuras relacionadas provocan numerosos desbordamientos de los cauces de los ríos de las zonas afectadas, que a su vez provocan inundaciones de tierras y pérdida de cosechas y graves daños a infraestructuras y otros bienes, a causa de roturas de muros de contención dispuestos, precisamente, para evitar esos desbordamientos.

Son muchas las cuencas que necesitan obras de infraestructura para evitar o paliar daños en caso de crecida de los ríos, mediante las soluciones técnicas que deban analizarse y abordarse y que resulten las más eficientes, bien mediante el dragado y/o ampliación de dichos cauces, bien mediante el desvío del propio cauce en determinados puntos de su recorrido.

Las asociaciones agrarias españolas han reclamado en numerosas ocasiones a los ministerios correspondientes que las Confederaciones Hidrográficas que cumplan con sus obligaciones de mantenimiento de los cauces y de las infraestructuras hidráulicas, pero como hemos comprobado una y otra vez en los últimos años con los distintos temporales que ha sufrido España, las actuaciones son muy deficientes y, en muchos lugares, inexistentes.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Determinar y cuantificar, a la mayor brevedad posible, el alcance real de los daños causados por las lluvias, nevadas, granizo, vientos, tormentas, temporal marítimo e inundaciones sucedidas en todas las zonas afectadas por el temporal "Gloria".

2. Declarar las áreas afectadas como Zona Gravemente Afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

3. Conforme al artículo 24 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, adoptar todas las medidas necesarias para la compensación de daños a las personas y propiedades en las zonas decretadas como afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil.

4. Elaborar y ejecutar de forma inmediata un plan de recuperación urgente de playas, así como de infraestructuras accesorias, para que se encuentren en pleno rendimiento en la próxima campaña turística de Semana Santa 2020.

5. Habilitar todos los recursos necesarios para la reparación de las infraestructuras viarias (carreteras, puentes, ...) y ferroviarias afectadas.

6. Facilitar a los ayuntamientos y vecinos afectados el apoyo necesario e imprescindible para la tramitación de ayudas, partes de daños y seguros con el fin de recibirlos con la mayor rapidez.

7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una Comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

8. Realizar la evaluación correspondiente de la habitabilidad de los edificios de las zonas afectadas, proporcionando igualmente recursos necesarios para ofrecer temporalmente alternativas habitacionales a las familias que hayan perdido su vivienda.

9. Realizar una labor de coordinación con el resto de Administraciones implicadas para cooperar tanto en la prevención de futuros daños como la mitigación de los efectos de los temporales que está afectando a determinadas zonas de nuestro país.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 74

10. Adoptar y cumplir medidas concretas para asegurar un debido mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas vinculadas a los cauces de los ríos españoles en momentos de tranquilidad climática a fin de evitar o paliar lo máximo posible los daños producidos tras los temporales.

11. Ejecutar las obras de infraestructura hidráulicas necesarias en las diferentes zonas fluviales de nuestro país, a fin de evitar o paliar lo máximo posible los daños producidos tras los temporales.

12. Elaborar planes formativos para las FCSE y las Policías Locales para lograr establecer operativos rápidos y efectivos en el tratamiento y actuaciones en estas catástrofes y lograr así una efectiva coordinación a través de un Plan Integral que incluya a la Unidad Militar de Emergencias, indicativos de Protección Civil, bomberos y servicios sanitarios.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000139

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mantener la Guardia Civil en todas las regiones y pueblos de España, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El día 13 de mayo de 1844, por Real Decreto de S.M La Reina Isabel II, se fundó la Guardia Civil. 0 año 2019 se han cumplido 175 años de historia desde su fundación en los que han sido innumerables y extraordinarios los servicios prestados a nuestra sociedad. No en vano, gracias a la entrega de los guardias civiles, mediante Real Decreto de 4 de octubre de 1929, se le concedió a la Guardia Civil la Gran Cruz de la Beneficencia, consolidando el título de BENEMÉRITA, que desde su fundación se había ganado gracias a sus numerosos servicios de auxilio y ayuda a la población en toda clase de catástrofes y desgracias.

Desde su creación, sus hombres, y desde hace treinta años sus mujeres, han sido garantes de la seguridad pública, protegiendo nuestros caminos y carreteras, pueblos y ciudades, nuestro mar territorial, permitiendo, en fin, que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos y libertades con paz y seguridad. Es por eso necesario dar reconocimiento desde las instituciones a la gran labor que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en todo el territorio, exigiendo para ellos las dotaciones y los medios que garanticen la eficacia de su labor.

La Guardia Civil, los guardias civiles, son depositarios de valores que quizás en nuestros días podríamos pensar que están en retroceso e incluso en desuso pero que, sin embargo, ellos cultivan cada día como una parte fundamental de su acervo: el honor, su principal divisa, que preservan como el mayor tesoro de su profesionalidad, porque una vez perdido, no se recupera jamás. La lealtad, la disciplina, la entrega y el sacrificio, entregando si fuera necesario, hasta la última gota de su sangre por los demás, como han demostrado en miles de ocasiones a lo largo de su historia. Valores que han hecho que la Guardia Civil sea la Institución más valorada por el conjunto de nuestra sociedad y un cuerpo policial eficaz y de referencia en todos los órdenes a nivel internacional. Sus hombres y mujeres contribuyen hoy en España a garantizar nuestra libertad, nuestra seguridad y el ejercicio de los derechos constitucionales que como ciudadanos nos corresponden.

La Guardia Civil ejerce sus misiones y funciones a través de diferentes Unidades y especialidades, siendo todas ellas necesarias para el eficaz desarrollo de sus cometidos en su conjunto y en armonía y colaboración con otros cuerpos policiales y el resto de Unidades de la Guardia Civil de España, así como en eficaz colaboración con los cuerpos policiales de nuestros países vecinos Portugal y Francia.

El Gobierno debe defender la presencia de la Guardia Civil, uno de los cuerpos policiales más preparados y modernos del mundo y que cumple con honor la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad en nuestras calles, carreteras, caminos, pueblos y costas, de ahí la necesidad de apoyar su permanencia en todos los pueblos y regiones de España y especialmente

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 75

en la España Rural pues su conocimiento del terreno y de la sociedad de la que forman parte es el mejor exponente para garantizar la seguridad en estas zonas despobladas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Apoyar y reconocer la labor que realiza la Guardia Civil, comprometiéndose a mantener su presencia en todas las Comunidades Autónomas y apoyar especialmente su permanencia en la España rural, dotándola de más medios personales y materiales.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.—**Isabel María Borrego Cortés, Carlos Rojas García y Ana Belén Vázquez Blanco**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000143

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para declarar profesión de riesgo a los policías locales y su inclusión en el Real Decreto 1087/2015, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El reciente Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración Local, ha supuesto un paso adelante en el reconocimiento y equiparación de los policías locales con otros colectivos integrados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como muestran los indicativos por las funciones que realizan y las situaciones a las que diariamente se enfrentan.

Pese a que ese paso es importante, consideramos que no solo les corresponde la aplicación de unos coeficientes reductores para adelantar la edad de su jubilación, sino que debemos considerar a este colectivo como ejerciente de una profesión de riesgo, por lo que creemos que es de justicia eliminar esta discriminación e incluir al colectivo con el resto de policías del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicos, e incluirlos en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.

El servicio que presta el Cuerpo de Policía Local, como el resto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es fundamental en nuestra democracia para garantizar la convivencia en libertad, que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos y libertades con paz y seguridad, debiendo enfrentarse en numerosas ocasiones a situaciones que entrañan el mismo grado de peligrosidad y penosidad que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Igualmente, hay que tener en cuenta la degradación en las condiciones de calidad de vida y trabajo que sufren como consecuencia del envejecimiento de las plantillas, lo que conlleva el paulatino deterioro del operativo en los Cuerpos de Policía Local, y, por ende, de la eficacia de los servicios públicos de seguridad que se les tiene encomendados.

Esa peligrosidad y penosidad en el desarrollo de la labor de los policías son dos factores determinantes en el importante incremento del número de accidentes laborales que sufren, que derivan en muchos casos en incapacidades totales que impiden el desarrollo de la labor policial y que suponen el reconocimiento de una pensión solo del 55 %, lo que aboca al policía local que sufre este tipo de situación a un evidente desamparo económico.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 76

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar profesión de riesgo a la Policía Local y su inclusión en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.—**Isabel María Borrego Cortés, Carlos Rojas García y Ana Belén Vázquez Blanco**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000144

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de la Unidad de Prevención y Reacción en la Comisaría de la Policía Nacional de Lugo, para su debate en la Comisión de interior.

Exposición de motivos

Lugo viene padeciendo un grave problema de falta de efectivos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que podría paliarse parcialmente con la creación de, al menos, una Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que son unidades de intervención rápida para apoyo en cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana. Las Unidades de Prevención y Reacción se conciben como Unidades destinadas a la prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana, dotadas de una estructura prefijada y medios suficientes para acometer con solvencia las funciones específicas que le son propias.

Estas Unidades se emplearán prioritariamente cuando sea precisa la intervención de Unidades de sus características, adecuadamente estructuradas y dotadas de una notable capacidad operativa. Sus funciones fundamentales consisten en dispositivos especiales de prevención de la delincuencia; mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana; apoyo a otras Unidades, Servicios o Instituciones, en dispositivos puntuales: reacción e intervención ante cualquier situación que requiera una actuación inmediata, etc.

Estimamos necesaria una U.P.R. en Lugo por ser una ciudad donde es necesario y urgente establecer las actuaciones a que se refieren muchas de las funciones enumeradas. También porque en Lugo no se establecen controles habituales por carecer de este tipo de Unidades. Y los que se están haciendo los realizan unos pocos efectivos y sin los medios adecuados.

Igualmente cabe destacar que no existe en Lugo una Unidad que pueda hacer frente, con la dotación de medios humanos y materiales, y con la preparación técnica adecuada, a grandes concentraciones o manifestaciones por lo que hay que utilizar unidades de otras plantillas. Lo mismo ocurre con los dispositivos de seguridad en espectáculos públicos, deportivos, eventos sociales o concentraciones de masas en general, como suelen ser frecuentes en festividades locales de gran afluencia de público, citando a modo de ejemplo el Arde Lucus o las festividades de San Froilán.

Es de destacar la utilidad de las UPR para colaborar con otras unidades policiales, algunas ya implantadas en Lugo, como la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Lugo en relación con la inmigración ilegal.

De suma importancia resultaría la implantación de la UPR en Lugo como refuerzo, en determinados momentos, a otras Comisaría de la provincia de Lugo, como Viveiro y Monforte, ya por sí muy disminuidas de personal. Ni que decir tiene su reacción e intervención ante hechos imprevistos de suma gravedad, atentados o amenazas terroristas o ante catástrofes públicas.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 77

No se puede obviar la utilidad de este tipo de Unidades en la labor preventiva ante determinadas actividades delictivas y actuación en puntos negros, como el tráfico de drogas (trapicheo), armas blancas, identificación de sospechosos o reclamados por la justicia, vehículos robados, intervenciones en inmediaciones colegios, etc.

Finalmente destacar que esta demanda no solo la hemos planteado desde el Partido Popular, sino que también han sido muchas las voces de sindicatos policiales o de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Provincia de Lugo las que se han sumado a reclamar la creación de al menos una de estas unidades en la provincia, entendiendo que debería ser en una primera instancia en la capital, Lugo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear una Unidad de Prevención y Reacción en la Comisaría de Policía de Lugo.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.—**Joaquín María García Díez y Jaime Eduardo de Olano Vela**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000149

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por la borrasca Gloria en la provincia de Málaga, entre los días 24 y 25 de enero de 2020, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El día 17 de enero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) bautizaba con el nombre de Gloria la primera borrasca del año 2020. Gloria se convertía en la séptima borrasca con gran impacto de la temporada 2019-2020, tras Amelie, Bernardo, Cecilia, Daniel, Elsa o Fabien.

Las previsiones de fuerte viento, intensa lluvia, copiosas nevadas y fenómenos costeros adversos durante los días siguientes y afectando a gran parte de la península, obligaron a activar los avisos de alerta roja en varias regiones del arco mediterráneo, así como el aviso naranja y amarillo para gran número de provincias.

Desgraciadamente, las previsiones se han ido cumpliendo, incluso han sido superadas entre los días 19 y 25 de enero, sin descartar las reactivaciones puntualmente fuertes en algunas zonas durante los días siguientes.

Gloria ha batido récords históricos de oleaje, rachas de viento y precipitaciones. Ha provocado la pérdida de, al menos, diez vidas humanas, heridos y varios desaparecidos.

El temporal ha causado numerosos estragos en el litoral mediterráneo destrozando playas, provocando inundaciones costeras, la crecida de los caudales de los ríos y arroyos y el cierre de varias instalaciones portuarias. Además la lluvia, la nieve y el viento en zonas más interiores provocaron incidentes en la actividad cotidiana: clases suspendidas, carreteras cortadas, retrasos e interrupciones en la circulación ferroviarias o vuelos desviados.

En definitiva, el temporal invernal, catalogado por algunos como uno de los peores del último siglo, deja un paraje desolador, con innumerables daños materiales, destrozos en infraestructuras, cortes en el suministro eléctrico, árboles caídos, numerosas inundaciones y la crecida de los ríos por las lluvias.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal invernal de la borrasca Gloria, entre los días 24 y 25 de enero de 2020, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 78

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados de la provincia de Málaga, especialmente en la barriada de Campanillas de la capital malagueña, al ser una de las más afectadas por las inundaciones.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo 1.3 del mismo, y en concreto:

— Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

— Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

— Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.

— Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

— Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.

— Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Afrontar la recuperación y restauración de los impactos sobre las zonas costeras dañadas.

7. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2020.—**Pablo Montesinos Aguayo, Carolina España Reina y Mario Cortés Carballo**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000159

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para prohibir los homenajes a terroristas así como cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo y para aumentar la pena de inhabilitación a los condenados por delitos de esta naturaleza, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Con demasiada frecuencia se celebran en España homenajes a terroristas condenados que, a mayor abundamiento, nunca han pedido perdón ni han dado muestras de arrepentimiento. Antes al contrario, se

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 79

lanzan impunemente al enaltecimiento de sus delitos, que son presentados ante la ciudadanía como actos heroicos a los que procede prestar respeto y reconocimiento social.

Sin perjuicio de lo atroz e intolerable que resulta este comportamiento desde el punto de vista ético, así como del hecho de que estos terribles actos conduzcan a una división social irreconciliable, es preciso tomar en consideración que los responsables de tan cobardes y crueles delitos son criminales que, sin embargo, en muchos casos, después de cumplir su pena tienen acceso a la representación pública. Qué duda cabe de que, si para el ciudadano común ya resulta inexplicable, para las víctimas de terrorismo, que son obligadas a ver cómo criminales condenados ostentan cargos públicos en instituciones mientras en ellos siguen peleando hacer justicia, es absolutamente descorazonador.

La Eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha trasladado a la Comisión Europea una iniciativa con el objetivo de armonizar a nivel jurídico europeo las penas relativas a la inhabilitación para cargo público. Hay que recordar que la Unión Europea es competente para la armonización de las cuestiones relativas a los delitos de terrorismo, también y especialmente en materia de tipos penales y sanciones que se derivan. Es la Directiva 2017/541, de 15 de marzo de 2017, permitía la armonización en este sentido.

Conviene tomar en consideración que el tipo de delitos de los que hablamos son de especial gravedad, por lo que una sanción de inhabilitación resulta acorde con dicha gravedad y proporcional a la naturaleza, bien jurídico protegido y circunstancias de aquellos. Cabe recordar, además, que la finalidad de la pena de inhabilitación es evitar que el condenado pueda integrarse en las estructuras «políticas, constitucionales, económicos o sociales» que pretendía desestabilizar o destruir con los actos por los que ha sido condenado, algo que sí ocurre con la legislación actual.

El objetivo de esta iniciativa es, por tanto, doble; por una parte, impedir que una persona condenada por delitos de terrorismo utilice la función pública para obtener los fines que en su día buscó con la acción terrorista y, por otra, evitar que las víctimas de esos delitos sufran una victimización secundaria por la acción directa de los victimarios instalados en las administraciones públicas.

Hay que tener en cuenta que los delitos vinculados con terrorismo tienen muchas especificidades. Una de ellas es precisamente la búsqueda de propaganda por quienes los cometen. Estas personas quieren imponer sus creencias a todo el conjunto de la sociedad, doblegar un espacio democrático y de derecho libre y eliminar la libertad de conciencia. Es necesario para resguardar el bien jurídico del Estado de Derecho democrático y de la libertad de conciencia que personas vinculadas con graves delitos de terrorismo sean inhabilitadas para la función pública. De lo contrario, los poderes públicos estaríamos dando un ejemplo muy equivocado e injusto a la sociedad, en tanto en cuanto terroristas no reinsertados seguirían utilizando los mecanismos del sistema para su propaganda y objetivos de control social.

La actualidad de los homenajes a terroristas se pone de manifiesto de forma cotidiana. No en vano un Magistrado de la Audiencia Nacional ha ordenado la detención de varias personas por presuntos hechos relacionados con la apología del terrorismo en actos y homenajes que provocan un inmenso dolor a las víctimas. Y estas no solo tienen que cruzarse con ellos sino también ver cómo el dinero de sus impuestos va directamente a los bolsillos de criminales que tanto dolor les han provocado.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Proposición no de Ley

1. Impulsar una reforma del Código Penal al objeto de aumentar las penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para los condenados por delitos de terrorismo y enaltecimiento de estos delitos.

2. Habida cuenta de su intención de revisar a la baja las penas establecidas para determinados delitos contra la Constitución, como los de rebelión o sedición, tomar las medidas necesarias para prevenir e impedir los homenajes a los terroristas a través de los dispositivos necesarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2020.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 80

161/000169

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración del municipio de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, de acuerdo con la ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El pasado día 22 de octubre de 2019 en el término municipal de Sant Antoni de Portmany (Ibiza), se registró un episodio de viento intenso que llegó a alcanzar una fuerza de 120 kilómetros por hora, acompañado de lluvias, que provocaron importantes daños materiales en el entorno afectado.

Tras una inspección aérea, la Consejería de Medio Ambiente del Govern de les Illes Balears calcula que la afectación del fenómeno alcanzó entre 250 y 300 hectáreas de áreas forestal y derribó o dañó a un volumen aproximado de cien mil pinos. Asimismo, se registraron importantes daños en cultivos agrícolas, principalmente almendros y algarrobos. Superaron el centenar las parcelas de terreno y viviendas afectadas en sus estructuras y en sus vallados perimetrales por el derrumbe de pinos. Más de una veintena de vehículos resultaron también dañados.

Por otra parte, ha resultado dañada una serie de infraestructuras públicas que se han dejado de proporcionar servicios a los usuarios debido al grave deterioro de sus elementos estructurales. Es el caso del Polideportivo «Can Coix», cuya cubierta es necesario sustituir, así como la superficie de parquet de la pista polideportiva que resultó gravemente afectada por el agua que penetró en el interior del recinto. Además de esto, han quedado totalmente inutilizadas dos pistas de pádel anexas al recinto polideportivo. En este mismo sentido, cabe destacar también los daños provocados en dos colegios de primaria, un colegio infantil, mobiliario urbano señales de tráfico, contenedores de residuos, elementos de jardinería y líneas de baja tensión.

El artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, regula el procedimiento de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, y prevé que la declaración mencionada, que corresponde al Consejo de Ministros, la puedan solicitar las Administraciones Públicas interesadas. Del mismo modo, del apartado 2 del artículo 23, en relación con el apartado 2 del artículo 20, se desprende que corresponde dictar esta declaración, en todo caso, cuando se produzcan daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada y la magnitud del cual requiera la intervención del Estado, por medio de las medidas de recuperación correspondientes, con objeto de restablecer la normalidad de la zona siniestrada.

Con fecha 25 de octubre de 2019, el Consejo de Gobierno del Govern de les Illes Balears adoptó un acuerdo a través del cual se instaba al Consejo de Ministros a que declarase el territorio de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, y que la declaración incluyera todas las ayudas y las medidas económicas que prevé la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. En el mismo sentido, con fecha 31 de octubre de 2019, el Pleno del Ayuntamiento de Sant Antonio de Portmany (Ibiza) se dirigió al Consejo de Ministros.

La valoración de los daños sufridos supera ampliamente la cantidad de siete millones de euros, todo ello según el informe que debidamente se presentó en la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Ibiza para su traslado al Ministerio del Interior a efectos de valoración de cara a una eventual declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y la ayuda económica que de esta pudiera venir asociada.

A pesar de los esfuerzos desplegados sobre el terreno, especialmente por las Administraciones locales e insulares, para recuperar la normalidad en la zona afectada quedan por cubrir las consecuencias económicas que el fenómeno meteorológico ha provocado.

Meses después del desastre, y a pesar de las reiteradas peticiones de ayuda al Gobierno de la Nación, inexplicablemente estas siguen sin atenderse y con ello todos los afectados, instituciones públicas y propietarios particulares, no disponen de colaboración económica alguna que permita hacer frente a los daños registrados en sus propiedades.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 81

Sentado todo lo anterior, urge que el Gobierno acuerde atender a la mayor brevedad las peticiones del Ayuntamiento de Sant Antoni Portmany y el Gobierno de las Illes Balears remitidas pocos días después de registrarse el fenómeno meteorológico.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«1.º El Congreso de los Diputados insta a que, con carácter de urgencia, los Ministros de Hacienda, de Política Territorial y Función Pública, y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, propongan al Consejo de Ministros la declaración del municipio de Sant Antoni de Portmany como zona afectada gravemente por una emergencia, todo ello de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 17/2015, por razón de daños materiales causados por el episodio de fuertes vientos y lluvia el día 22 de octubre de 2019.

2.º El Congreso de los Diputados insta al Consejo de Ministros a incluir en la declaración todas las ayudas y medidas económicas que prevén los artículos 21, 22, y 24 de la Ley 17/2015, en relación con la disposición adicional cuarta de esta misma Ley y el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el cual se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.

3.º El Congreso de los Diputados insta al Consejo de Ministros a adoptar las medidas complementarias a las indicadas en el apartado anterior que procedan para contribuir a la recuperación íntegra de los daños sufridos en el territorio del municipio de Sant Antoni de Portmany como consecuencia del episodio de vientos y lluvia mencionado.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2020.—**Miguel Ángel Jerez Juan y Margarita Prohens Rigo**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000170

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el mantenimiento de las Sala del 091 de la Policía Nacional en las Comisaría de Ourense y Lugo, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

En la actualidad, las Comisaría de Ourense y Lugo cuentan con Salas del 091, en funcionamiento 24 horas al día, 365 días al año, que atienden a más de 200.000 vecinos en las ciudades de Ourense y Lugo.

Estas Salas son el órgano de coordinación operativa por excelencia, como servicio más próximo al ciudadano, que recibe los avisos de los ciudadanos y distribuye los efectivos policiales, y están dotadas de avanzados equipos de comunicaciones y medios técnicos para afrontar con eficacia las situaciones de emergencia.

En el área de telefonía, los agentes atienden las llamadas, recogen los datos precisos y activan de forma telemática los recursos necesarios para resolver la incidencia. El tiempo medio de espera de las personas que solicitan el auxilio policial a través del 091 hasta que su llamada es atendida se sitúa en torno a los 6 segundos.

La zona de radio es la que recibe la información del suceso a través de los operadores y se encarga de contactar con las patrullas más próximas al lugar donde se requiere la presencia de agentes con el objetivo de disminuir los tiempos de respuesta policial.

Los operadores de la sala del 091 son los responsables de comisionar los servicios y requerimientos operativos a las unidades y dotaciones en servicio. También centralizan y dan respuesta a las peticiones y consultas a las bases de datos de interés policial solicitadas por los agentes en servicio, y transmiten las instrucciones oportunas relativas al cumplimiento de las normas de aplicación de las órdenes judiciales de

alejamiento y protección de las víctimas de violencia de género. Además, desde este centro de operaciones se asume la coordinación operativa en caso de situaciones de riesgo inmediato, emergencias y dispositivos especiales. Tenemos noticias a través de los Sindicatos Policiales y de los vecinos afectados de que el Gobierno pretende trasladar A Coruña las Salas del 091 de Ourense y Lugo lo cual mermaría de manera importante el movimiento y eficacia de este servicio perjudicando la seguridad en ambas ciudades, debido a la cercanía y al conocimiento que deben tener los agentes de la zona de influencia. Siendo este un servicio que requiere de proximidad para que el tiempo de reacción sea lo más rápido posible, con un conocimiento exacto de cada rincón de la ciudad.

Así mismo las Comisarías de Policía Nacional de Ourense y Lugo cuentan con un déficit de 49 y 41 agentes respectivamente, lo cual hace necesario y urgente cubrir el total de las plantillas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener las Salas del 091 de la Policía Nacional en las Comisarías de Ourense y Lugo, y así mismo aumentar los medios humanos y materiales con los que cuentan dichas Comisarías provinciales.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2020.—**Jaime Eduardo de Olano Vela, Joaquín María García Díez, Ana Belén Vázquez Blanco y Celso Luis Delgado Arce**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000172

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la no utilización de la Guardia Civil y sus familias como moneda de cambio en los pactos políticos y su no expulsión y permanencia en todo el territorio de nuestra Nación española como elemento esencial de su vertebración, para su discusión en Comisión.

Exposición de motivos

El 13 de mayo de 2019 se cumplieron 175 años desde la creación del Cuerpo de la Guardia Civil.

Hoy, más que nunca, se hace necesario recordar los motivos de su creación. Hoy, más que nunca, se hace preciso proteger la Memoria de nuestra Nación. Sobre todo, después de la ardua labor que han realizado en los últimos años para combatir la barbarie terrorista y demostrándonos que el amor a España es mucho más fuerte que el odio de aquellos que siempre han pretendido romperla.

La Guardia Civil nació en un período de constantes motines y sublevaciones. Tras el fin de la guerra de los Siete Años (1840), España se había convertido en un territorio asolado por el bandolerismo y por la inseguridad. De ahí la necesidad de fundar un Institución que se encargara de responder a la necesidad de sosiego de los españoles.

Puede afirmarse con rotundidad que, desde la creación del Cuerpo por el Duque de Ahumada, el orden comenzó, por fin, a imperar: los caminantes cruzaban sierras y caminos con mayor confianza, la presencia en los caminos de sus miembros eran garantía de seguridad, los cortijos dejaron de convertirse en fortalezas cuando eran violentados por malhechores y objeto de violaciones y pillaje, y los arrieros podían seguir su monótono camino sin la intranquilidad y la desazón que antes les acompañaba.

Fue, finalmente, el 14 de abril de 1844 cuando el Gobierno sometió a la firma de la Reina Isabel II el Decreto de creación de la Guardia Civil. En su exposición a la Reina el Ministerio en pleno hizo valer «la imprescindible necesidad de contar en lo sucesivo con una fuerza armada que debía proteger a las personas y a las propiedades», labor que a día de hoy siguen ejerciendo con ahínco.

En un primer momento, se contempló la creación de 14 tercios, tantos como distritos militares, formando un conjunto de 20 escuadrones y 103 compañías, pero el General Narváez decidió prestar una mayor atención a la creación del nuevo Cuerpo y el 13 de mayo refrendaba el Real Decreto referente a la Creación y Organización de la Guardia Civil y que fue obra del Duque de Ahumada.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 83

Don Francisco Javier Girón y Ezpelet, quinto Marqués de las Amarillas y segundo Duque de Ahumada, fue el encargado de organizar la creación del Cuerpo de la Guardia Civil en 1844 introduciendo notables y profundas mejoras en el primitivo plan que concibió para el Instituto Armado don Facundo Infante.

El Duque de Ahumada continuó al frente del Benemérito Cuerpo hasta 1854, fecha en que triunfó el pronunciamiento de Vicálvaro donde fue sustituido en su cargo. No obstante, agradecido el Cuerpo de la Guardia Civil a quién fue su fundador, se erigió por suscripción una estatua inaugurada en 1892 en el Colegio de Guardias Jóvenes en Valdemoro, hoy denominado Colegio de Guardias Jóvenes «Duque de Ahumada».

El Duque de Ahumada, a través de una Circular fechada el 16 de enero de 1845, sintetizó en un Código denominado la «Cartilla del Guardia Civil», formado por 34 artículos, un auténtico compendio del honor y la moral que se exigía a los miembros del Benemérito Cuerpo, y que sigue, en la actualidad, sigue plenamente vigente.

Desde su creación hasta ahora, el Cuerpo de la Guardia Civil se ha encargado de velar por la seguridad de los ciudadanos en su persona y bienes, si bien, con el enorme logro de su paulatina modernización y la adaptación del Instituto Armado al contexto histórico de cada momento preservando los valores que siempre han distinguido al Cuerpo. Fruto de ello, es también el alto grado de especialización del Cuerpo con más de 76.000 efectivos en sus filas.

En este proceso es preciso destacar como hito fundamental la Incorporación efectiva de la mujer al Cuerpo de la Guardia Civil hace ya 31 años.

Agradeciendo su servicio a nuestra Patria, el GPVOX transmite al Instituto Armado el testimonio de su más distinguida consideración y manifiesta su voluntad y apoyo a la presencia y permanencia del Cuerpo de la Guardia Civil en todo el territorio de nuestra Nación porque, especialmente allí donde se producen los ataques más frontales a nuestro Estado de Derecho, es constante y unánime la reivindicación de su expulsión por quienes abogan por romper España.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:

No utilizar a la Guardia Civil y a sus familias como moneda de cambio en los pactos políticos y asegurar su no expulsión y permanencia en todo el territorio de nuestra Nación española como elemento esencial de su vertebración.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2020.—**Santiago Abascal Conde y Francisco Javier Ortega Smith-Molina**, Diputados.—**Macarena Olona Choclán**, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

161/000173

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Javier Ortega Smith-Molina y doña Macarena Olona Choclán, en sus respectivas condiciones de Diputado y Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Declaración de Profesión de Riesgo de los Policías Locales para su inclusión en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, para su discusión en Comisión.

Exposición de motivos

Los Cuerpos de Policía local son Institutos armados de naturaleza civil que prestan un servicio público esencial, velando por la seguridad y la convivencia en libertad de todos los ciudadanos, en los Municipios respectivos.

En el desarrollo de sus funciones, los funcionarios integrantes de los Cuerpos de Policía local, se enfrentan, cada día, a situaciones de enorme peligrosidad que, en no pocos casos, comporta un riesgo para la propia vida y la integridad física.

Esta situación de exposición, equiparable, en sus ámbitos competenciales respectivos, a la que experimentan colectivos integrados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no tiene, en la actualidad, una adecuada tutela en nuestro ordenamiento jurídico, dado que, a diferencia de estos últimos colectivos, los Policías Locales no están incluidos en el ámbito del Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.

La diferencia de trato expuesta comporta que, pese al incremento de accidentes laborales que experimentan los Cuerpos de Policía local, en el desarrollo de sus funciones de servicio público, la situación de incapacidad laboral total en que desembocan dichos accidentes, da lugar al reconocimiento de una pensión del 55 %, lo que supone una situación de agravio y desamparo económico para los agentes afectados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a reconocer los riesgos inherentes a la función de servicio público desempeñada por los Cuerpos de Policía local, procediendo a la declaración de Profesión de Riesgo y, en aras de poner fin a la situación de discriminación actualmente existente respecto de otros colectivos, incluir a los citados funcionarios policiales locales en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2020.—**Francisco Javier Ortega Smith-Molina**, Diputado.—**Macarena Olona Choclán**, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/000007

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el refuerzo de las Alta Inspección educativa y la creación e impulso de un sistema de autorregulación para garantizar la calidad de los libros de texto, para su debate en la Comisión de Educación.

Exposición de motivos

El pasado 5 de septiembre, el diario «El Mundo» publicaba la información con el siguiente titular, los editores: «Cataluña presiona para que no hablemos de los Reyes Católicos en los libros de texto». La noticia daba cuenta de que los editores de libros de textos de primaria y secundaria denunciaban que varias CC.AA. les presionan para incluir y destacar las peculiaridades territoriales y omitir hechos históricos, en particular, los comunes, los que nos une como Nación, por motivos ideológicos.

Los profesionales que trabajan en el ámbito de las editoriales de libros de texto afirman que los Consejeros de educación de algunas CC.AA., entre las que mencionan específicamente Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, «presionan» para modificar los contenidos de los materiales educativos. En los últimos tres años las Comunidades han aprobado 450 normativas diferentes entre leyes, decretos, órdenes y resoluciones en relación con los libros de texto: 1.820 normas en los últimos

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 85

ocho años. Según la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto de España (Anele) la imposición ha llegado hasta tal punto que una Comunidad Autónoma como Cataluña ha apremiado que se debe suprimir la referencia y el estudio de hechos históricos como el reinado de los Reyes Católicos. Es manifiesto el empeño con fines ideológicos y de adoctrinamiento en nuestras escuelas públicas a través del material educativo. Además, este proceder supone un incremento de gastos en la elaboración e impresión, y una dispersión educativa que genera desigualdades entre los alumnos de distintas comunidades autónomas.

El informe «El libro Educativo en España 2019-2020» de la asociación Anele afirma que «nos aproximamos más a tener diecisiete sistemas educativos cada vez más descoordinados entre sí». Se pone de relieve además las grandes diferencias económicas entre las distintas CC.AA. en políticas de dotación de recursos, ayudas para adquisición de libros y material escolar o en las ayudas a alumnos y familias al estudio dependiendo de la C.A.

La intromisión política y la manipulación ideológica a través de los libros de texto no es algo nuevo. De hecho, fue a raíz de las manifestaciones de los representantes de Anele en una comparecencia en sede parlamentaria, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, cuando este grupo parlamentario formuló pregunta al antiguo Secretario de Estado de Educación sobre los hechos denunciados. Este se comprometió a encargar un informe a la Alta Inspección sobre la manipulación de los libros de texto.

Tras las constantes solicitudes de este grupo al antiguo ministro de Educación, el Sr. Méndez de Vigo, finalmente lo solicitó y el borrador estuvo en poder del Gobierno del PP durante meses sin que realizase ninguna actuación. La falta de refuerzo de la Alta Inspección y la inacción por parte del gobierno del Partido Popular hizo imposible la elaboración y presentación de una versión definitiva. Correspondía a la señora Celaá decidir qué hacer con los resultados del informe.

A pesar de que el informe, según informaciones publicadas por los diarios, concluía, de manera rotunda, que había claras omisiones en el contenido de los libros de texto catalanes en relación al bloque obligatorio del currículo; que se habían encontrado errores históricos; que se podían apreciar una constante contraposición sesgada entre Cataluña y España y demás evidencias de un adoctrinamiento sistemático, la señora Celaá decidió no formular un requerimiento al Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ni a la inspección de esta Comunidad Autónoma para corregir tal flagrante ilegalidad.

Los sesgos, las intromisiones y las incorrecciones se han encontrado en otros estudios de los libros de texto realizados por sindicatos, asociaciones y partidos en otras comunidades autónomas en las que también los editores denuncian estar siendo presionados. Ante todos los hechos expuestos y teniendo en cuenta que la calidad editorial es un elemento esencial para la buena educación de los niños, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«Por todo ello se insta al Gobierno a:

1. Reforzar, legal y materialmente, la Alta Inspección Educativa para que puedan realizar, de manera eficaz y eficiente, sus funciones de garantía del cumplimiento de la legislación educativa del Estado.
2. Reforzar, legal y materialmente, la Alta Inspección educativa para que pueda verificar que los libros de texto se adecuan a las enseñanzas comunes conforme a la legislación del Estado.
3. Impulsar sistemas de autorregulación para que las editoriales puedan establecer mecanismos de acreditación de la calidad y la legalidad de los contenidos editoriales, así como garantía de independencia política e ideológica, en el marco de libertades de la Constitución.
4. Llevar a cabo las modificaciones legislativas que permitan que los informes de autorregulación puedan ser, en su caso, indicios que sirvan de base para desencadenar el ejercicio por el Estado de sus funciones de Alta Inspección Educativa.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2019.—**Edmundo Bal Francés y Marta Martín Llaguno**, Diputados.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 86

161/000008

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de la renta de las familias con hijos en colegios concertados, para su debate en la Comisión de Educación.

Exposición de motivos

En el curso escolar 2017-2018 hubo 8.158.605 estudiantes de enseñanzas de régimen general no universitarias repartidos en 28.211 centros por todo el país. España es uno de los países de la UE donde tiene mayor peso los colegios concertados, que suman el 28 % de la oferta educativa estatal, tanto en Primaria como en Secundaria, esto es más de 2,2 millones de alumnos.

Ciudadanos lleva reclamando meses la urgente necesidad de convocatoria de la Mesa de la Concertada y la necesidad de revisión de los módulos para equiparar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos públicos de forma que no se tengan que hacer aportaciones privadas por parte de las familias que optan por llevar a sus hijos a colegios concertados.

Actualmente, el coste de un alumno en la escuela concertada cuesta a la Administración la mitad que uno en la escuela pública según datos del Ministerio de Educación. Un cambio en el coste de la educación concertada de la envergadura del planteado por el Gobierno tiene la capacidad de alterar el equilibrio actual del gasto en educación en nuestro país con consecuencias imprevisibles de cara al inicio del curso escolar que viene.

Por desgracia el Gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado lanzar cada día una propuesta para subir un impuesto diferente a las familias: los conductores de diésel a todo aquel que tenga una cuenta en un banco mientras se dedica a decir que estas subidas solo afectan a las rentas altas y más recientemente a todos aquellos padres que tienen hijos estudiando en un colegio concertado.

Según parece la Agencia Tributaria ultima un cambio de interpretación por el cual las cuotas pagadas por los padres con hijos en los colegios concertados no podrían considerarse en ningún caso como donaciones, como sí venía ocurriendo en algunos casos hasta la fecha.

Actualmente el pago de donativos permite una deducción fiscal de hasta el 75 % para los primeros 150 euros abonados y un 30 % para el resto, que es precisamente de lo que hasta ahora se beneficiaban los contribuyentes con hijos en centros concertados. Para un pago de anual de unos 1.000 euros, el aumento a pagar en la declaración del IRPF serían de 367 euros por hijo, a causa de la pérdida de la deducción más las cantidades que Hacienda podría reclamar por los cuatro años no prescritos.

Adicionalmente, si estas cuotas dejan de ser consideradas donaciones, los centros concertados deberán declarar por estos ingresos en el Impuesto de Sociedades. Esto haría aumentar la recaudación fiscal del Estado pero pondría en riesgo las cuentas del colegio que podrían verse obligadas a subir las cuotas a las familias. El cambio de criterio interpretativo por parte de Hacienda introduce una importante incertidumbre sobre sus efectos y consecuencias, ya que su impacto sobre finanzas de las familias y los colegios concertados es potencialmente muy relevante.

El artículo 108 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el punto número 4 que «4. La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados», reconociendo que la enseñanza concertada es una pieza clave para garantizar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza.

Entre las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Ley Educativa (LOMCE) en su artículo 22 bis, punto 3, letra c, recoge expresamente la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada como «instrumento del sistema educativo español para la consecución de sus fines» que debe ser el foro en el que el Gobierno plantea cualquier cambio y mejora de la financiación de la escuela concertada de manera dialogada y evitando la incertidumbre y la inseguridad jurídica.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 87

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Convocar la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada a la mayor brevedad posible para revisar la cuantía de los módulos de concierto para equiparar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos públicos de forma que no se tengan que hacer aportaciones privadas por parte de las familias que optan por llevar a sus hijos a colegios concertados.

2. En tanto en cuanto no se trate esta cuestión en dicha Mesa, garantizar la seguridad jurídica y evitar cambios de criterios interpretativos de la normativa fiscal, en particular en lo relativo a las deducciones por donaciones a colegios concertados, que puedan suponer una subida de impuestos a las familias y un aumento del coste de la educación concertada.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2019.—**Edmundo Bal Francés y Marta Martín Llaguno**, Diputados.

161/000009

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación e impulso de un sistema de formación MIR para el profesorado, para su debate en la Comisión de Educación.

Exposición de motivos

Todo sistema educativo es útil, reconocido y efectivo en la medida en que es capaz de transmitir formación y conocimientos al alumnado. El artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, modificada por LOMCE, establece que los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y en especial, la cualificación y formación del profesorado. Existen otros elementos que también poseen importantes efectos sobre los resultados del sistema educativo, como así se señala en el citado texto: la dotación de recursos educativos suficientes, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura, el uso de las bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.

El Sistema Educativo Español posee claros síntomas que avisan de su disfuncionalidad: España es líder en fracaso escolar en la Unión Europea, encabezando el abandono escolar prematuro en todo el continente con una media del 20 % de los estudiantes según datos publicados por EUROSTAT.

El último estudio elaborado por el Consejo General de los Ilustres Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, titulado «La voz del profesorado», y que tiene como objetivo estudiar las exigencias en materia de selección y formación del profesorado incluso pudiendo incorporar el sistema MIR para estos profesionales, tiene unos resultados claros:

— Cerca del 70 % de los docentes encuestados señalan que es necesaria una reforma del sistema actual de selección para acceder a la profesión docente.

— Casi el 80 % de los docentes encuestados coincide en que el sistema de selección para acceder a la profesión docente debiera tener los mismos criterios para centros públicos que concertados.

— Una amplia mayoría de profesores abogan por aumentar la autonomía de los centros públicos para contratar profesorado.

— Asimismo, los docentes reclaman una reforma urgente del período de inducción profesional que preste atención especial a la adquisición de las competencias didáctico-pedagógicas.

— El modelo de inducción profesional docente que más popularidad alcanza entre los encuestados es el que se refiere al estilo del MIR que se realiza para los médicos.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 88

El Grupo Parlamentario Ciudadanos comparte el sentir de buena parte de estas propuestas docentes: y considera que es preciso una reflexión sobre el modelo. El nuevo sistema de acceso a la profesión docente debe asegurarnos que la formación, selección y promoción del profesorado se basen en la excelencia académica contrastada y en la capacidad pedagógica para transmitir conocimientos, competencias y valores mediante un aumento de las exigencias en los estudios y sistemas de acceso a la profesión docente.

El Sistema Educativo Español tiene pendiente mejorar la selección y formación del profesorado desde hace años. Ninguna de las reformas educativas aprobadas en los últimos años ha sido eficaz ni lo suficientemente participativa, en parte, por obviar esta necesidad. La formación de maestros y profesores en nuestro país mediante escuelas de magisterio o cursos de teoría pedagógica (como el antiguo CAP) han demostrado ser insuficientes a la hora de conseguir la excelencia del profesorado. Es preciso que se evalúe un nuevo sistema que seleccione a los mejores titulados en las diversas materias curriculares de ciencias y humanidades, y los forme como maestros y profesores mediante una auténtica formación práctica dotándole de las herramientas pedagógicas necesarias para afrontar los numerosos retos a los que se enfrentan día a día los docentes.

Con la creación e implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) hace casi diez años, el curso de capacitación para los docentes, el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), sería reemplazado por el Máster Universitario en Formación de Profesorado de un año de duración e imprescindible para impartir clases en cursos de educación obligatoria y bachillerato. Sin embargo, su sustitución no ha supuesto un cambio sustancial en la selección y promoción del profesorado, más bien, se produjo una continuidad de criterios unidos al establecimiento de un coste económico mayor al CAP y desigual según el territorio en el que se desempeña.

En lugar del máster habilitante actual, el Grupo Parlamentario Ciudadanos proponemos implantar un modelo de formación docente similar al sistema MIR de los facultativos. El sistema consistirá en la realización de una prueba de acceso nacional, posterior al grado, tras la que, en función de los resultados académicos, a los que se ofrecerá el ejercicio remunerado de la enseñanza durante un periodo de varios cursos académicos, en centros de enseñanza y bajo la dirección y supervisión de profesores con experiencia y competencia acreditadas. Estas prácticas serán complementadas con la formación pedagógica y teórica adecuada para que se puedan afrontar las diversas problemáticas que pueden surgir en las aulas.

Otros elementos que afectan a la calidad del ejercicio de la profesión docente y que sin duda deberán contemplarse en el marco de la regulación de una futura carrera docente son la formación permanente, reconocimiento de la docencia y la evaluación de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«1. Insta al Gobierno a impulsar y apoyar la creación de una Comisión de estudio integrada por expertos docentes y otros representantes de la sociedad civil que puedan hacer un diagnóstico sobre las carencias y necesidades del docente en relación a la formación inicial (MIR) y el diseño de una carrera docente.

2. En consecuencia con lo anterior, a partir de las conclusiones alcanzadas, insta al Gobierno llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes para implementar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el Consejo Escolar del Estado, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación un sistema de formación y promoción del profesorado similar al sistema MIR de los facultativos, que se base al menos en el desempeño profesional de la enseñanza, de forma remunerada, durante el periodo de un tiempo determinado en centros de enseñanza y bajo la supervisión de un equipo de docentes en activo con competencias acreditadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2019.—**Edmundo Bal Francés y Marta Martín Llaguno**, Diputados.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 89

161/000084

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción y mejora de la formación de la ciudadanía en reanimación cardio-pulmonar (RCP), para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

Cada año cerca de 400.000 ciudadanos europeos son víctimas de una cardiopatía que cursa con paro cardíaco repentino. Estas paradas cardíacas pueden producirse en cualquier momento y cualquier lugar, por lo que las medidas que se han ido instaurando han aumentado. Por ejemplo, a día de hoy podemos comprobar como en multitud de espacios públicos, especialmente si poseen gran afluencia, existen desfibriladores automáticos. Sin embargo, las medidas todavía son insuficientes. Según datos oficiales, menos de uno de cada diez pacientes con una parada cardíaca en la vía pública sobrevive.

La reanimación cardio-pulmonar (RCP) aumenta las posibilidades de supervivencia de dos a tres. El consejo Europeo de Resucitación estima que realizando una correcta reanimación se podrían salvar unas 100.000 vidas al año en Europa.

La tasa de RCP realizada por una persona es muy diferente de una región europea a otra: de 12% en Andalucía (España), 15% en Alemania, al 61% en los Países Bajos y Suecia el 59%. Así, la tasa de supervivencia varía de una región a otra, a sabiendas de que las tasas en algunos países (por lo general en Europa del Este) es solo el 6%, mientras que en otros países como Suecia y Noruega, la tasa de supervivencia es del 40%. Diferentes estudios muestran que la mejora de las tasas de RCP y supervivencia tras estas viene precedidas de un compromiso de las administraciones públicas en la formación de sus ciudadanos. Por ejemplo, se calcula que para lograr un aumento estadísticamente significativo en los resultados de la RCP, se ha estimado que al menos el 15% de la población necesita acudir a cursos especializados en esta materia y que deben ser obligatorios. Esto se da ya en algunos Estados miembros de la Unión, donde las administraciones públicas y algunas empresas privadas ya han instaurado cursos obligatorios para sus empleados.

Pero la formación en los países con mejores tasas de éxito en reanimaciones cardio-pulmonares no queda solo en las personas adultas. Los menores de edad también juegan un papel importante a la hora de actuar en estos casos. De hecho, el Consejo Europeo de Resucitación (European Resuscitation Council, ERC), ha creado, un programa para promover y mejorar el aprendizaje de herramientas de RCP entre los más pequeños. Su programa, «Kids Save lives», lleva a cabo cursos anuales de entrenamiento en maniobras RCP para escolares mayores de doce años. Estos cursos apenas restan tiempo lectivo pues son de dos horas. Este tipo de cursos, según los expertos, tienen un éxito significativo en los más jóvenes, puesto que son muy receptivos a la hora de interiorizar la teoría y ponerla en práctica, y ayuda a desarrollar un sentido de responsabilidad en edades tempranas. También ayuda a relacionar materias que se estudian en la escuela o el instituto (biología, educación física, etc.) con situaciones reales, lo que traslada a los menores la sensación de que el aprendizaje tiene sentido práctico. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), apoya este tipo de programas de educación en los centros escolares e institutos ya que poseen beneficios para el conjunto de la sociedad.

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo cursos formativos de RCP en todas las administraciones dependientes del mismo a fin de promover y mejorar la formación de los empleados que trabajen en estos centros contando con la colaboración de los sindicatos y representantes de los trabajadores a la hora de impartir y diseñar estos cursos.

2. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), al Consejo Escolar del Estado y a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) la necesidad de que este tipo de cursos se realicen, también, tanto en las administraciones dependientes de las mismas como en los centros educativos y universitarios.

3. Trabajar con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEDE) y los sindicatos más representativos para que instauren cursos de formación en materia de RCP en los centros de trabajo.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.—**Marta Martín Llaguno**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000120

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el refuerzo de la Alta Inspección Educativa y la creación e impulso de un sistema de autorregulación para garantizar la calidad de los libros de texto, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

El pasado 5 de septiembre, el diario «El Mundo» publicaba la información con el siguiente titular, los editores: «Cataluña presiona para que no hablemos de los Reyes Católicos en los libros de texto». La noticia daba cuenta de que los editores de libros de textos de primaria y secundaria denunciaban que varias CC.AA. les presionan para incluir y destacar las peculiaridades territoriales y omitir hechos históricos, en particular, los comunes, los que nos une como Nación, por motivos ideológicos.

Los profesionales que trabajan en el ámbito de las editoriales de libros de texto afirman que los Consejeros de educación de algunas CC.AA., entre las que mencionan específicamente Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, «presionan» para modificar los contenidos de los materiales educativos. En los últimos tres años las Comunidades han aprobado 450 normativas diferentes entre leyes, decretos, órdenes y resoluciones en relación con los libros de texto: 1820 normas en los últimos ocho años. Según la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto de España (Anele) la imposición ha llegado hasta tal punto que una Comunidad Autónoma como Cataluña ha apremiado que se debe suprimir la referencia y el estudio de hechos históricos como el reinado de los Reyes Católicos. Es manifiesto el empeño con fines ideológicos y de adoctrinamiento en nuestras escuelas públicas a través del material educativo. Además, este proceder supone un incremento de gastos en la elaboración e impresión, y una dispersión educativa que genera desigualdades entre los alumnos de distintas comunidades autónomas.

El informe «El libro Educativo en España 2019-2020» de la asociación Anele afirma que «nos aproximamos más a tener diecisiete sistemas educativos cada vez más descoordinados entre sí». Se pone de relieve además las grandes diferencias económicas entre las distintas CC.AA. en políticas de dotación de recursos, ayudas para adquisición de libros y material escolar o en las ayudas a alumnos y familias al estudio dependiendo de la C.A.

La intromisión política y la manipulación ideológica a través de los libros de texto no es algo nuevo. De hecho, fue a raíz de las manifestaciones de los representantes de Anele en una comparecencia en sede parlamentaria, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, cuando este grupo parlamentario formuló pregunta al antiguo Secretario de Estado de Educación sobre los hechos denunciados.

Este se comprometió a encargar un informe a la Alta inspección sobre la manipulación de los libros de texto.

Tras las constantes solicitudes de este grupo al antiguo ministro de Educación, el Sr. Méndez de Vigo, finalmente lo solicitó y el borrador estuvo en poder del Gobierno del PP durante meses sin que realizase ninguna actuación. La falta de refuerzo de la Alta Inspección y la inacción por parte del gobierno del Partido Popular hizo imposible la elaboración y presentación de una versión definitiva. Correspondía a la señora Celaá decidir qué hacer con los resultados del informe.

A pesar de que el informe, según informaciones publicadas por los diarios, concluía, de manera rotunda, que había claras omisiones en el contenido de los libros de texto catalanes en relación al bloque obligatorio del currículo; que se habían encontrado errores históricos; que se podían apreciar una

constante contraposición sesgada entre Cataluña y España y demás evidencias de un adoctrinamiento sistemático, la señora Celaá decidió no formular un requerimiento al Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ni a la inspección de esta Comunidad Autónoma para corregir tal flagrante ilegalidad.

Los sesgos, las intromisiones y las incorrecciones se han encontrado en otros estudios de los libros de texto realizados por sindicatos, asociaciones y partidos en otras comunidades autónomas en las que también los editores denuncian estar siendo presionados.

Ante todos los hechos expuestos y teniendo en cuenta que la calidad editorial es un elemento esencial para la buena educación de los niños, este Grupo Parlamentario insta al Gobierno a

Proposición no de Ley

«1. Reforzar, legal y materialmente, la Alta Inspección Educativa para que puedan realizar, de manera eficaz y eficiente, sus funciones de garantía del cumplimiento de la legislación educativa del Estado.

2. Reforzar, legal y materialmente, la Alta Inspección Educativa para que pueda verificar que los libros de texto se adecuan a las enseñanzas comunes conforme a la legislación del Estado.

3. Impulsar sistemas de autorregulación para que las editoriales puedan establecer mecanismos de acreditación de la calidad y la legalidad de los contenidos editoriales, así como garantía de independencia política e ideológica, en el marco de libertades de la Constitución.

4. Llevar a cabo las modificaciones legislativas que permitan que los informes de autorregulación puedan ser, en su caso, indicios que sirvan de base para desencadenar el ejercicio por el Estado de sus funciones de Alta Inspección Educativa.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2020.—**Marta Martín Llaguno**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

161/000109

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso turístico en la provincia de Palencia, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La provincia de Palencia continúa avanzando para convertirse en uno de los destinos turísticos de interior más reconocidos. Para la consecución de este objetivo es necesaria una actuación conjunta de todos los agentes implicados: administraciones, ciudadanos, asociaciones y sector empresarial.

Con este fin, la Diputación de Palencia ha impulsado dos planes que dibujan el presente y el futuro de esta tierra: el Plan Estratégico 2020 y el Plan Estratégico de Turismo 2017-2020. Estos instrumentos encuentran su reflejo en el ámbito autonómico, con el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023.

Una de las fortalezas y seña de identidad de la provincia es que dispone de importantes recursos patrimoniales e históricos que constituyen la base para potenciar el desarrollo económico y social del territorio, sobre los que además se puede proponer un turismo innovador.

El alcance supraprovincial de algunas de las iniciativas planteadas, por la titularidad de los bienes o por la complejidad de los proyectos, hace necesario recabar la colaboración de otras Instituciones. Así, la Institución Provincial ha solicitado en numerosas ocasiones la concurrencia del Gobierno de la Nación para determinados proyectos de primer orden.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 92

Uno de estos proyectos es el Centro de Alto Rendimiento en el Golobar, una infraestructura que trasciende del ámbito provincial al ofrecer un servicio inédito en el tercio noroeste de la Península, que estaría destinado a deportistas profesionales para que mejoren su rendimiento a 1.800 metros de altitud.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar el proyecto para la creación de un Centro de Alto Rendimiento en el Golobar, vinculado a actividades de naturaleza en la montaña palentina, dotando presupuestariamente la iniciativa.
2. Acometer a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado y de la empresa pública Paradores las inversiones necesarias en el Parador de Cervera de Pisuerga para que este establecimiento obtenga la categoría de cuatro estrellas.
3. Dar los pasos necesarios, a través de la empresa pública Paradores, para iniciar la conversión del Castillo de Monzón de Campos en Parador Nacional de Turismo.
4. Instar al Gobierno de España a que extienda a Guardo y otros municipios mineros del norte de la provincia el compromiso de colaboración para la elaboración de un Plan de Dinamización Turística.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.—**Milagros Marcos Ortega**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000152

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de Apoyo al Turismo de Cruceros en Illes Balears, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

Para la economía española en general, y para las Illes Balears en particular, el turismo es un sector económico esencial que actúa como verdadero motor de la economía. En los últimos años, las Illes Balears se han constituido como uno de los principales destinos para el turismo de cruceros en el Mediterráneo y en el mundo.

No se entienden las reiteradas declaraciones de la Presidenta del Gobierno de les Illes Balears sobre su intención de limitar la llegada de cruceros en los puertos de Illes Balears, al mismo tiempo que el Ministerio de Fomento anuncia una inversión superior a los 100 millones de euros para adecuar el puerto de Palma a las características de los cruceros, inversión que se suma a los más de 30 millones de euros invertidos para este mismo fin durante la última legislatura.

Dada la inquietud manifestada por la ciudadanía y por distintos sectores económicos, comerciales y sindicales, especialmente de la ciudad de Palma, en relación al espíritu prohibicionista de la Presidenta Armengol, y que existen estudios científicos de la Universidad de las Illes Balears que desvinculan una mayor contaminación medioambiental con la llegada de los cruceros en el Puerto de Palma, creemos que es necesario combatir —con sólidos argumentos— la criminalización que algunos sectores políticos y sociales hacen del turismo de cruceros.

Como ejemplo, mientras que el resto de puertos de diferentes Comunidades Autónomas han acudido recientemente a la feria especializada de Hamburgo para captar clientes en el sector cruceros, las autoridades de las Illes Balears siguieron con su discurso sobre la limitación de los mismos.

Teniendo en cuenta que la competencia sobre el Puerto de Palma de Mallorca y otros puertos de Illes Balears pertenece a Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados constata los efectos positivos que, de manera objetiva, genera el turismo de cruceros en relación a la generación de riqueza, creación de puestos de trabajo y posicionamiento turístico para las Illes Balears, y resto de destinos españoles.

Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

— Encargar un informe técnico y objetivo, elaborado por un organismo independiente, donde se planteen los efectos positivos y negativos, en caso de haberlos, del turismo de cruceros y se propongan las medidas para gestionar de manera eficaz, rigurosa y eficiente esta actividad turística.

— Seguir adecuando las infraestructuras portuarias para la llegada del turismo de cruceros, como la recién anunciada inversión de más de 100 millones de euros para el puerto de Palma.

— Clarificar públicamente su posicionamiento respecto a la limitación de la llegada de cruceros anunciada por el Gobierno de las Illes Balears, y otros gobiernos autonómicos en caso de producirse y a clarificar si existe un conflicto de competencias sobre esta medida.

— Construir, a través de la entidad Puertos del Estado, las infraestructuras necesarias en todos los puertos españoles receptores de este tipo de turismo, para que durante sus escalas los cruceros y resto de embarcaciones de gran eslora puedan conectarse a la red eléctrica para evitar al máximo las emisiones contaminantes, así como la construcción de las infraestructuras necesarias para recoger las aguas residuales evitando al máximo los vertidos al mar.

— Realizar una estrategia de promoción del turismo de cruceros, abordando la coordinación y la ordenación de los flujos de llegada, la desestacionalización y los beneficios para el sector turístico español.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2020.—**Margarita Prohens Rigo y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputadas.

161/000156

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en apoyo a la competitividad y futuro de los puestos de trabajo en las factorías que la multinacional Alcoa tiene en San Cibrao (Cervo) provincia de Lugo, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

Las factorías con las que la multinacional Alcoa cuenta en la localidad cervense de San Cibrao (para la fabricación de alúmina y aluminio) tienen un carácter estratégico por cuanto constituyen el principal motor económico y laboral de la Mariña Lucense y uno de los más importantes de nuestra provincia, donde representa el 30 % de su producto interior bruto (PIB). Es la principal fuente de empleo directo para las más de 1.100 familias de trabajadores del complejo, a los que hay que añadir los empleos indirectos generados en la costa lucense, tanto en las empresas auxiliares como en sectores como el de servicios y hostelería (en torno a 5.000 puestos de trabajo más).

Uno factor principal para la competitividad y el futuro de esta está determinado por el coste de la energía, ya que para transformar la alúmina en aluminio es preciso un proceso de electrólisis intensivo en el uso de electricidad. Sólo Alcoa San Cibrao tiene un consumo eléctrico equivalente a 30.000 hogares.

La factura eléctrica representa uno de los gastos más importantes de la cuenta de explotación de la factoría y los elevadísimos incrementos del precio que se han producido en los últimos meses ponen en riesgo la viabilidad y el futuro de este complejo industrial, sin que el Gobierno central adopte las medidas

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 94

a las que se comprometió, entre ellas, la aprobación del Real Decreto que incorpora el Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Esta herramienta normativa debe establecer una combinación de medidas, primas, subvenciones y descuentos, que protejan la competitividad de las empresas altamente dependientes de la energía abaratando el coste final del suministro, una variable especialmente necesaria para empresas que compiten en un mercado global.

En este momento el precio de la electricidad en España es un 50 % más elevado que en Alemania o Francia. El borrador de Real Decreto presentado el pasado mes de marzo por el Ministerio Transición Ecológica no fue satisfactorio para nadie, porque recortaba el sistema de apoyo actual, y no incorporaba las demandas del sector. La Xunta de Galicia validó y presentó, con las empresas electrointensivas y el aval del Comité de empresa, un paquete de alegaciones para que el futuro estatuto incluyera las propuestas de Galicia sin que, a día de hoy, se haya obtenido respuesta alguna.

No es la primera vez que en la factoría lucense existen tensiones como consecuencia del precio de la electricidad, pero en esta ocasión la situación es mucho más grave derivada de la inactividad del Gobierno central o de decisiones políticas como las que desde el Ejecutivo estatal cuestionan el futuro de las empresas productoras de energía (térmicas, de carbón, nucleares) sin alternativas viables a precios competitivos. Conviene igualmente recordar que la Ministra de Transición Ecológica había comprometido la aprobación, en el primer Consejo de Ministros tras las elecciones del 10 N, del referido Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Nada de eso se ha cumplido, aprobándose sin embargo un Real Decreto en materia energética relacionado con energías renovables, lo que invalida el argumento manido del gobierno central de no poder aprobar el Estatuto por encontrarse en funciones.

En este capítulo de incumplimientos caben igualmente los referidos al compromiso asumido por el Gobierno socialista en la última precampaña electoral, de recibir a los trabajadores y exponerles al detalle las medidas a aprobar, habiendo transcurrido meses sin hacer efectivo este compromiso, lo que supone un engaño más a la larga lista de incumplimientos por parte de este Gobierno.

La situación actual contrasta con lo ocurrido durante los sucesivos Gobiernos del Partido Popular, que siempre intentaron buscar la mejor solución posible en apoyo de la industria electrointensiva: con negociaciones al más alto nivel entre el presidente Rajoy y el presidente internacional de Alcoa, estableciendo medidas de apoyo como las subastas por interrumpibilidad o la compensación por costes indirectos de CO₂, o la construcción del gasoducto de la Mariña que abarató de manera significativa el coste energético de la factoría.

Además, a día de hoy, la situación se ve agravada teniendo ya que el mantenimiento de los precios actuales no permite la producción de aluminio en condiciones competitivas, lo que le llevó a la empresa a adoptar decisiones drásticas como la venta de las factorías emplazadas en A Coruña y Avilés o la decisión de recortar la producción y cerrar la actividad de 32 cubas en la factoría de San Cibrao.

Es necesario recordar también que el Pleno de la Diputación de Lugo, a propuesta del PP, ya aprobó por unanimidad varios acuerdos, con carácter de declaración institucional, con fechas 31 de mayo de 2016, 30 de octubre de 2018 y 26 de marzo de 2019.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

— Realizar todas las acciones necesarias encaminadas a garantizar los centros productivos y los puestos de trabajo de las factorías de Alcoa en San Cibrao (Cervo).

— Garantizar un marco energético estable y competitivo y aprobar, de manera inmediata, el estatuto de apoyo a las empresas electrointensivas, en el que se incorporen las alegaciones presentadas en conjunto por la Xunta de Galicia y las compañías gallegas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2020.—**Jaime Eduardo de Olano Vela, Joaquín María García Díez y Tristana María Moraleja Gómez**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 95

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/000003

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar el reclutamiento de tripulantes y afrontar el relevo generacional en el sector pesquero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

El sector pesquero, al igual que otros sectores de actividad primaria, se encuentra con un problema de relevo generacional propiciado por varios factores.

En primer lugar, resulta difícil encontrar trabajadores con la titulación necesaria para poder enrolarlos en las embarcaciones. Además, se relegan las prácticas en los barcos pesqueros al final de su formación, los estudios pueden no estar adaptados a las necesidades reales de la flota y ser necesario una mayor carga docente experimental.

A estos factores se une que la sociedad tiene una mala concepción de la pesca, al considerarla un trabajo muy sacrificado, de alta siniestralidad y mal remunerado, porque desconoce su actividad y realidad. Así, muchos de los estudiantes, una vez finalizada su formación, terminan optando por trabajar en tierra, en la marina mercante o en flota de recreo.

Por otra parte, la falta de una estructura de contratación adecuada para el sector también dificulta detectar trabajadores con las titulaciones requeridas, lo que origina una escasez de mano de obra para las embarcaciones.

Esta situación contrasta con la alta demanda de formación en las escuelas náutico-pesqueras, con las ganas de trabajar de muchos titulados, que en algunas ocasiones es vocacional, y con la oferta de prácticas existentes.

Adicionalmente debería homogeneizarse la legislación europea en cuanto al número de tripulantes que debe tener cada barco por cada caladero, así como la formación y requisitos exigidos a la tripulación en los diferentes países, puesto que las diferentes legislaciones impiden el libre tránsito real de trabajadores.

Consecuencias de todo ello son titulados sin experiencia, ofertas que no encuentran candidatos, buques amarrados por falta de tripulación y, en conclusión, falta de relevo generacional.

Es necesario analizar las necesidades que tiene el sector, ajustar la formación a estas demandas, impulsar la formación dual, cambiar la percepción social sobre el sector, homogeneizar los requerimientos laborales a nivel europeo y establecer mecanismos más eficaces para poner en contacto demanda y oferta.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar el relevo generacional de la pesca, promoviendo las medidas que mejoren la seguridad y la imagen del sector, haciéndolo más atractivo económicamente, exponiendo los avances tecnológicos y de seguridad ya implantados.
2. Realizar, con la colaboración del sector, una campaña de mejora de imagen que aglutine los factores anteriores.
3. Incluir en la formación dual, las prácticas a bordo de los barcos, durante todo el ciclo formativo de jóvenes y profesionales.
4. Establecer una bolsa de trabajo marítimo-pesquero, donde quede constancia de las acreditaciones profesionales que cumplan los requisitos específicos del sector.
5. Reducir las dificultades para conseguir las titulaciones y avanzar en su homologación en la UE, permitiendo así la dotación de tripulación en los barcos.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2019.—**Joaquín María García Díez y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 96

161/000004

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para eliminar las incoherencias en la gestión diferenciada de la anchoa en las zonas VIIIc y IXa y la separación de los TAC, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

En los últimos años, la decisión del Consejo Europeo para la anchoa evidenció divergencias sustanciales en la determinación del TAC para las dos zonas en las que se divide su gestión, a saber, VIIIc y IXa.

En el año 2016, se determinó una reedición («roll-over») del TAC para la anchoa en el caso del Cantábrico, mientras que en el área del sur de Fisterra se consideró el aumento del 10 % del nivel existente de capturas.

En 2017, se realizó un nuevo roll-over en el área del Cantábrico para la anchoa, y en el caso del área del sur de Fisterra, el aumento se consideró en el 7 % del nivel de captura existente.

Con respecto al año 2018, se determinó continuar en el TAC de las áreas cantábrica y noroeste para la anchoa.

Para este año, todavía no se ha formulado ninguna propuesta, por lo que habrá que seguir con anterior. En cualquier caso, el informe ICES sobre el TAC de anchoa para la Zona IXa establece que, utilizando el enfoque de precaución, las capturas del componente occidental no deben exceder las 13.308 toneladas y las capturas del componente sur no deben exceder las 3.760 toneladas.

Además, las campañas de prospección en el Golfo de Vizcaya han terminado con datos extremadamente positivos, con un alto reclutamiento y un buen estado de la biomasa, lo que hace prever una recomendación positiva por parte del International Council for the Exploration of the Sea (ICES).

En resumen, desde el Instituto Español de Oceanografía (IEO) reconocen que, en los últimos años, el sur de Galicia y el norte de Portugal albergan su propio stock de anchoa, ya que la especie se aprecia abundante en las aguas de las Rías Baixas, que forman parte de la denominada zona IXa.

Nuevamente, el pasado mes de agosto, la prensa recogió la abundancia de bocarte en aguas gallegas, algo que la flota de cerco ve con buenos ojos para cubrir la falta de sardina y no tener que amarrar.

Sabemos que a esta flota se le aseguró un aumento de la cuota de anchoa si la especie aparecía en abundancia en Galicia, algo que parece haber sucedido, no solo por lo que manifiesta la flota, sino por lo contrastado con los datos científicos del IEO.

Por lo tanto, parece aconsejable establecer una gestión uniforme de dos zonas con una pesquería idéntica (arrastre, cerco y enmalle) dirigida al jurel y al cerco en el caso del anchoa, para que esta disparidad de criterios no afecte la programación de la actividad por parte de la flota.

Teniendo en cuenta los criterios biológicos, no se puede considerar la separación plena de ambos stocks, especialmente en las zonas de confluencia de ambas áreas, por lo que debe entenderse que el 5 % de flexibilidad propuesta en la pesca entre ambas zonas, por ejemplo en el caso del jurel, se debería incrementar sustancialmente, hasta un 25 %-40 %.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adoptar una posible separación del stock sur de la anchoa en la zona IXa.
2. Aplicar una flexibilidad de al menos un 25 % en las zonas de confluencia entre las zonas VIIIc y IXa.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2019.—**Joaquín María García Díez y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 97

161/000005

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la costera del bonito, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

El 27 de agosto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación emitió una resolución decretando el cierre de la pesquería de atún blanco del norte.

Por esta razón, los buques con bandera española ya no podrán capturar esta especie durante el resto del año, solo pudiendo descargar las cantidades capturadas o declaradas antes de esta fecha.

Hondarribia, Getaria, Ondarroa, Bermeo, Santoña, Colindres, Gijón, Avilés y Burela concentran prácticamente las más de 15.000 toneladas de atún blanco-bonito del norte descargadas en la costa del Cantábrico desde que arrancó la costera del bonito el pasado mes de junio.

Ya es el segundo año que se anticipa el cierre de la campaña del bonito, terminando a finales de agosto, cuando generalmente solía terminar a lo largo del mes de septiembre.

Desde el sector pesquero y algunos gobiernos autonómicos se reivindicaba la necesidad de lograr un aumento de la cuota para el bonito, una vez contrastada la buena situación biológica de este recurso, al tiempo que se exigía una mejor distribución de las oportunidades de pesca para que la campaña se extendiera al menos hasta septiembre, como venía siendo habitual.

El Grupo Parlamentario Popular se une a esta demanda, de vital importancia para la flota que pesca esta especie de manera tradicional y respetando la legalidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Utilizar los datos que constatan el buen estado biológico del bonito del norte para reclamar un incremento de las posibilidades de pesca para esta especie.

2. Estudiar una mejor gestión y reparto de cuota que permita alargar la campaña del bonito, al menos, hasta el mes de septiembre».

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2019.—**Joaquín María García Díez y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000086

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reconocer el valor estratégico del sector cinegético e impulsar el marco orientativo y de coordinación para su ordenación a escala nacional, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El estudio sobre la «Evaluación del Impacto Económico y Social de la Caza en España», elaborado por la Fundación Artemisan y la consultora Deloitte, muestra el gran impacto económico de la actividad cinegética en nuestro país.

Entre los datos del estudio destacar el gasto generado, 6.475 millones de euros, un 0,3 % de PIB en el país, y el mantenimiento anual de 186.758 puestos de trabajo, de los cuales 141.261 son empleos directos, indirectos e inducidos. Los retornos fiscales ascienden a 614 millones de euros, entre tasas e impuestos

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 98

abonados directamente por las personas que realizan dicha actividad, por los gestores de los terrenos, así como la recaudación fiscal generada por el resto de actividades y agentes económicos conexos.

Por otra parte, España cuenta con 825.000 licencias de caza, y el número de cazadores federados ronda los 330.000. También contamos con una extensión de 43,8 millones de hectáreas declaradas como terreno cinegético. Sin embargo, pese a su importancia para la ordenación del territorio, apenas se ha tenido en cuenta la actividad cinegética a la hora de tomarla en consideración entre las medidas para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación.

Está plenamente acreditada la importancia de la actividad cinegética sobre la economía, el empleo y la contribución a las arcas públicas; contribuye al desarrollo social y cultural de amplias zonas de la geografía, así como a la sostenibilidad ambiental y la conservación de espacios naturales y de gran parte del patrimonio de nuestro país. Esta actividad ayuda a estructurar el territorio y se ha convertido en herramienta útil para el control de la propagación de epizootias, como la peste porcina africana.

La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, recoge algunos aspectos del mundo de la caza y la pesca que, aun reconociendo la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, requieren cierta armonización y organización a escala nacional, en base a los títulos competenciales del Estado en materia económica.

En concreto, la ley prevé la elaboración y adopción de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética así como el Registro Nacional de Infractores que este sistema debe conllevar para ser efectivo. En febrero de 2018, el Gobierno del Partido Popular presentó la hoja de ruta de los trabajos que se llevarían a cabo, con la colaboración del sector y de las Comunidades Autónomas, para desarrollar la ley y disponer de la citada Estrategia Nacional. Para realizar este trabajo, se aprobó una encomienda de gestión a la empresa de Tecnología y Servicios Agrarios (TRAGSATEC).

Durante los últimos años se ha producido un intenso debate parlamentario en el que destacan las indecisiones del grupo parlamentario socialista y su falta de apoyo manifiesto al sector cinegético. Especialmente desafortunadas fueron las declaraciones de la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a finales del año 2018, manifestando que si de ella dependiera «prohibiría» las corridas de toros y la caza. No menos inquietante es la postura de los actuales socios de gobierno respecto a la actividad cinegética en general.

Sin embargo, en 2019, el Ministro de Agricultura, Luis Planas, en una estrategia para borrar todo rastro de las iniciativas del gobierno del Partido Popular, anunciaba que se continuaba trabajando en la elaboración de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. Han transcurrido más de dos años desde que se iniciaran los trabajos, uno del Gobierno socialista sin programa y otro del Gobierno en funciones, y la Estrategia no está aprobada.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reconocer el valor estratégico del sector cinegético por su importancia económica y su gran impacto en la creación de empleo rural, por su contribución para frenar la despoblación y por su indudable aportación a la conservación de la biodiversidad.
2. Aprobar y publicar la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética como marco orientativo y de coordinación para así hacer posible una adecuada ordenación, a escala nacional, del aprovechamiento cinegético.
3. Incluir, como contenidos básicos de la Estrategia Nacional, medidas en defensa de un modelo de caza sostenible, su integración en los planes y estrategias de lucha contra la despoblación y por el desarrollo rural, actuaciones para una mayor coordinación interadministrativa, acciones para mejorar la imagen social de la caza, la formación y promoción de sus beneficios socioeconómicos y medioambientales, así como el desarrollo de la investigación, el conocimiento y la innovación aplicado a la actividad cinegética.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.—**Carmen Navarro Lacoba**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 99

161/000089

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejora del etiquetado de la miel y de la información que sobre sus productos reciben los consumidores, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Según los datos publicados en mayo de 2019 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el documento «El sector apícola en cifras», España es actualmente uno de los principales productores de miel de la Unión Europea, concretamente el Estado miembro con mayor número de colmenas, que suponen aproximadamente el 16 % de las colmenas que se hallan en suelo comunitario. El nivel de profesionalización de los apicultores españoles es igualmente el más alto, con mucha diferencia, sobre el resto de países de la UE, alcanzando el 80 %, frente a la media europea de solo el 40,47 %. Ello da idea de la enorme importancia que en el sector apícola español tiene el cumplimiento cabal y estricto de unas reglas de mercado justas, así como sobre la información al consumidor, que ha de ser exacta y clara, permitiendo así una correcta competencia.

La actual norma europea que regula el etiquetado y la información que el mismo debe contener en envases a través de los cuales se comercialice la miel es la Directiva 2001/110/CE relativa a la miel, modificada por la Directiva 2014/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que tienen su reflejo en sendos Reales Decretos 1049/2003 y 473/2015. Con esta legislación europea y española, actualmente se da la circunstancia de que la miel producida en España, como en cualquier otro Estado miembro, puede ser mezclada con otras mieles de menor coste de producción, tanto procedente de países de la Unión Europea como terceros, con el evidente riesgo de una reducción de la calidad misma de la miel de origen español, considerada de excelente calidad y con una gran diversidad de variedades.

Las zonas tradicionales de producción de miel en España se centran en Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León, zonas en las que se ha reducido dicha producción desde 2016, fundamentalmente por motivos meteorológicos. Por ello, la importación de mieles de otros países de la UE y de terceros, principalmente China, que en 2018 llegó a ser del 18 % del total de miel importada extracomunitaria, se ha convertido en un recurso para mantener niveles de producción aun a riesgo de reducir significativamente la calidad del producto, dado que la mezcla final de mieles comercializadas ven minorar su calidad cuando la de producción en España se mezcla en gran medida con otras de otro origen, principalmente extracomunitario, donde los controles previos de calidad en origen son menores o, incluso, inexistentes. En 2017 incluso se restringió la entrada de miel china en territorio de la Unión Europea por falta de calidad, aunque parece evidente que siguió llegando al mercado europeo disimulada como procedente de países comunitarios con sistemas de control excesivamente laxos.

La norma europea en vigor, sin embargo, solo obliga a señalar en el etiquetado de los envases en tres categorías: «mezcla de mieles originarias de la UE», «mezcla de mieles no originarias de la UE» y «mezcla de mieles originarias y no originarias de la UE». El problema con esta tercera categoría es que no se obliga a determinar en el etiquetado los países de origen de las mieles mezcladas, ni tampoco su porcentaje en la mezcla. Por ello, y como viene denunciando el sector en España principalmente, es posible etiquetar con esa tercera categoría una miel procedente de la mezcla de un 1 % de miel española (o de un Estado UE) y un 99 % de miel china, por ejemplo. Si la miel española es una miel distinguida precisamente por su calidad, no parece oportuno que el consumidor no pueda tener conocimiento y estar perfectamente informado de la procedencia de la miel que consume cuando la misma es producto de mezcla de mieles de diversos orígenes, más allá de que sea de un país comunitario o no, pero sin identificar ni señalar porcentajes de mezcla, máxime cuando ya se han dado episodios de prohibición de la miel china por la mala calidad en la misma en 2003 y 2004, por presencia de residuos de antibióticos prohibidos en la UE. En este aspecto, una correcta y adecuada información al consumidor es fundamental ante los riesgos que para la salud puede tener una miel adulterada o que no respete los estándares europeos, aun pese a los controles fitosanitarios UE, cuando el consumidor no puede llegar a saber el origen real y en porcentaje cierto de la miel que compra para su consumo.

A finales de 2018, el Gobierno de España inició la modificación de su norma interna para recoger las peticiones del sector y obligar así a que el etiquetado de la miel declarase el origen de la misma y su porcentaje de mezcla en todos los casos. Sin embargo, en el trámite de información previo a la Comisión Europea, esta ha dictaminado negativamente el proyecto del Gobierno español precisamente en su intento de acreditar en el etiquetado de la miel el origen y porcentaje de mezcla, en su caso, cuando ese aspecto era precisamente esencial en el proyecto presentado.

Es evidente que el sector apícola español y europeo en su conjunto deben avanzar en una mayor calidad de los productos de consumo directo por los ciudadanos, a lo que ayuda, precisamente, el correcto y concreto etiquetado del mismo, máxime en un producto como la miel en el que ya se han detectado anteriormente situaciones de fraude o mezclas sospechosas que reducen la calidad del propio producto. La situación medioambiental en muchos países terceros, fuera del control fitosanitario con estándares UE igualmente suponen una implicación de riesgo para la calidad sanitaria misma del producto. Todo ello hace que no ya en España, sino en el seno de la UE se modifique la legislación y criterios aplicables para garantizar la idoneidad y calidad de la miel, así como la seguridad e integridad en la información al consumidor.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a liderar ante las instituciones de la Unión Europea una postura firme en defensa del sector apícola español en concreto y europeo en general, así como a defender el derecho a la información de los consumidores en materia de etiquetado de la miel, con el objetivo de que se promuevan las modificaciones legales oportunas en referencia a la exigencia de hacer constar en dicho etiquetado el país o los países de origen de la miel, así como el porcentaje de mezcla que compongan el producto envasado y etiquetado, fundamentalmente y en todo caso cuando se trate de terceros países ajenos a la Unión Europea.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.—**Marta Martín Llaguno y María Carmen Martínez Granados**, Diputadas.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000110

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la plantación de choperas en la cuenca del río Carrión, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Castilla y León es la región española más relevante en cuanto a la producción de chopo: con 44.259 ha, produce anualmente 532.000 m³ de madera valorados en millones de euros y genera 14.500 empleos directos e indirectos en toda su cadena de valor, de los cuales, 4.500 en el medio rural.

Desde mediados del siglo XX se ha estado cultivando chopo en las riberas de nuestros ríos, cultivo que fue impulsado tradicionalmente por las Confederaciones Hidrográficas y, en especial, por la del Duero.

Esta Confederación ha venido utilizando el criterio de «cauce aparente» para determinar la distancia al cauce que deben respetar las plantaciones de chopo; el «cauce aparente» se define por las condiciones geomorfológicas del terreno y por la primera línea de vegetación de ribera más cercana al cauce.

En 2019, la Confederación Hidrográfica del Duero modificó este criterio, empezando a utilizar el denominado «Dominio Público Hidráulico (DPH) cartográfico probable» para definir los cauces y, por tanto, la distancia a las plantaciones. Este cambio de criterio supone la inclusión en el DPH de muchas parcelas hasta ahora no incluidas, porque no se habían realizado los correspondientes deslindes administrativos para ello.

Dado que en el DPH no se pueden realizar plantaciones de chopo (art. 32.2.a del Plan Hidrológico de la Demarcación del Duero aprobado por R.D. 1/2016), esta medida supone, además de otras

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 101

consecuencias graves sobre los propietarios y las entidades locales afectadas, que se reduzca la superficie de plantación en aproximadamente 5.000 ha en la Cuenca del Duero en Castilla y León.

En el caso de la Subcuenca del río Carrión, en la provincia de Palencia, esta reducción supone no plantar 1.562 has (el 48% del total) y mermar la producción anual en 20.864 m³ de madera, con las consiguientes pérdidas de ingresos y de empleo en el medio rural, tanto de particulares como de Administraciones Públicas. Hay que destacar que estos fondos se destinan al mantenimiento de los servicios públicos prestados a los vecinos de estos municipios: sanidad, educación y servicios sociales, fundamentalmente, y que están cuantificados en más de 5 millones de euros y más de 500 puestos de trabajo directos e indirectos, además de las negativas repercusiones sobre el futuro de la importante industria transformadora regional y, por ende, en el ya difícil reto de mantener la población en estos pequeños municipios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dar las oportunas instrucciones a la Confederación Hidrográfica del Duero para que suspenda de inmediato la aplicación del criterio de “Dominio Público Hidráulico cartográfico probable” y continúe aplicando el criterio de “cauce aparente” aprobado por la propia Confederación Hidrográfica del Duero en el año 2010, de forma que se autoricen las plantaciones de chopo en las parcelas que se venían utilizando para este cultivo.

2. Iniciar las actuaciones para que en el próximo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero quede clara la posibilidad de plantación de chopas en esta Cuenca, dando así estabilidad a este sistema productivo y garantías a los municipios y vecinos afectados.

3. Instar a la Confederación Hidrográfica del Duero a que no quede duda alguna de que, entre tanto se elabora el nuevo Plan Hidrológico, la interpretación que haga dicha Confederación permita seguir plantando chopos considerando el criterio de “cauce aparente” para determinar la distancia al cauce que deben respetar las plantaciones.

4. Coordinar las actuaciones entre ministerios competentes en materia hidrológica y agroforestal y adoptar las medidas precisas para evitar el impacto negativo que producirá sobre el desarrollo rural la decisión de la Confederación Hidrográfica respecto al cambio de criterio antes mencionado.

5. En caso de persistir esta decisión, habilitar las medidas necesarias para que estos ingresos anuales sigan llegando a las personas que en la actualidad están viviendo de estas producciones.

6. Impulsar las medidas necesarias para continuar defendiendo el patrimonio de las entidades locales afectadas por la decisión de la Confederación Hidrográfica del Duero, así como los ingresos y el empleo asociados al mismo.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.—**Milagros Marcos Ortega**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000112

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar, dentro de sus competencias y responsabilidades, las medidas necesarias para poner solución a los problemas que provoca la actual crisis estructural del sector hortofrutícola almeriense, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

El sector hortofrutícola almeriense es el principal activo socioeconómico de la provincia por la potente actividad económica que genera y por ser una gran fuente de generación de empleo.

Las organizaciones agrarias y comercializadoras almerienses llevan algún tiempo poniendo de manifiesto la difícil situación por la que atraviesan, situación provocada por la crisis estructural que sufre el sector hortofrutícola almeriense y originada por la falta de rentabilidad de muchas explotaciones agrarias de tamaño pequeño y mediano, lo que pone en riesgo inminente la desaparición de cultivos importantes para Almería.

Las causas y factores que han originado esta situación son diversas. Entre ellas, el que se compite en el mercado europeo en condiciones de desigualdad, con costes fiscales, ambientales, sociales y salariales mucho más elevados que los productores de terceros países o el desequilibrio en la cadena de valor que es evidente y nos vuelve vulnerables ante las imposiciones de las grandes cadenas de distribución.

El Partido Popular quiere apoyar explícitamente las reivindicaciones y objetivos planteados por el sector. Entre los que cabe destacar:

- Acabar con la competencia desleal de terceros países.
- Reforzar e incrementar los controles en los Puntos de inspección Fronteriza de los puertos españoles.
- Establecer un control efectivo del etiquetado de producto de origen extracomunitario.
- Plantear en Europa la revisión de los Acuerdos con Terceros Países y la actualización de los contingentes.
- Impulsar medidas encaminadas a la reducción de costes de producción.
- Asegurar la disponibilidad de agua de calidad y a un precio razonable.
- Poner en marcha actuaciones para paliar problemas como la limpieza del campo y los asentamientos ilegales.
- Crear un fondo paralelo y específico para la gestión de la crisis en el sector hortofrutícola.
- Evitar las imposiciones de las cadenas de distribución europeas a los productores.
- Poner en marcha medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
- Reforzar la Interprofesional de Frutas y Hortalizas (Hortiespaña).
- Disminuir las cargas sociales, a través de la creación de un régimen especial agrario para trabajadores de cooperativas o alhóndigas.
- Crear una mesa de Frutas y Hortalizas.
- Explorar dentro de la OCM nuevos mecanismos de retirada de gestión del mercado.
- Analizar las posibilidades de recuperar el mercado ruso, levantando el veto comercial existente.

La carencia de estas medidas lastran el llamado modelo Almería, que genera más del 40 % de la riqueza de la provincia, un modelo basado mayoritariamente en explotaciones familiares en invernaderos solares que no demandan energías fósiles y que además generan importantes efectos positivos relacionados con la sostenibilidad medioambiental.

Esto hace que, a pesar de todas estas circunstancias, la agricultura almeriense siga teniendo grandes fortalezas y oportunidades y esté readaptándose para mantenerse en la cúspide de la producción de hortalizas mundial; para ello está tratando de realizar cambios y mejorar su posición en el mercado europeo, comenzado por los sistemas de calidad de producción.

Pero además de todo este esfuerzo por parte del sector, se hace imprescindible que todas las administraciones e instituciones respondan ante esta situación que afecta al sector hortofrutícola almeriense, adoptando las medidas necesarias, dentro del ámbito de sus competencias y responsabilidades, permitiendo atajar los problemas que provocan la crisis actual y evitando dejar caer el principal pilar de la economía almeriense.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, dentro de sus competencias y responsabilidades, las medidas necesarias para poner solución a los problemas que provoca la actual crisis estructural del sector hortofrutícola almeriense.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.—**Juan José Matari Sáez y Miguel Ángel Castellón Rubio**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 103

161/000114

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa del sector agroalimentario andaluz y, en particular, almeriense frente a los incidentes en La Junquera, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La renta agraria en Andalucía representa un tercio de la renta agraria nacional y, dentro de ella, Almería es la provincia que realiza una mayor aportación (24,3 %), seguida de Jaén (17,8 %) y Sevilla (14,4 %).

En Almería buena parte de esa producción agraria se destina al mercado exterior, tal y como ponen de relieve los datos de exportaciones del ICEX de los 8 primeros meses del año 2019:

- El 74 % de las exportaciones almerienses son productos agroalimentarios,
- con un valor de 2.095 M€, un 10.15 % más que el mismo período del año anterior,
- con destino principalmente a la Unión Europea, 2.019 M€,
- y que permite situar a seis empresas almerienses del sector agroalimentario entre las treinta mayores exportadoras de Andalucía.

El dinamismo exportador de las empresas almerienses en el resto de sectores también es notable: 3.520 empresas exportan por valor de 732 M€, un 16 % más que en el mismo período del año 2018.

Almería contribuye así, de forma decisiva, a dinamizar el sector exterior en Andalucía; especialmente en el sector agroalimentario, en el que la región andaluza representa casi una cuarta parte de las exportaciones agroalimentarias españolas.

Estas cifras muestran la importancia del sector exterior almeriense y andaluz, y nos permiten entender su especial vulnerabilidad ante los graves incidentes provocados durante el mes de noviembre pasado por los grupos radicales independentistas catalanes que cortaron la frontera de La Junquera y bloquearon el paso de cientos de camiones, ocasionando, y no por primera vez, graves perjuicios económicos y sociales a todo el sector agroalimentario, base de la economía almeriense y de buena parte de la región.

Además de las penurias soportadas por los transportistas durante los días de bloqueo, los agricultores, las comercializadoras, las empresas de la industria auxiliar y las empresas de transporte sufrieron las graves consecuencias de estos actos vandálicos.

Las pérdidas causadas en esos incidentes se calculan en 10 millones de euros para Andalucía, afectando al conjunto del sector agroalimentario, a la producción, al envasado y al transporte.

En el caso de los productos hortícolas de Almería, desde el propio sector se estima que el valor global de la mercancía estancada en los camiones almerienses alcanzó los 27 millones de euros y se apuntan pérdidas que superarían los 4,5 millones de euros, al retenerse en la carretera más de 5.000 toneladas de productos cuyo precio se vería reducido.

En definitiva, lo sucedido tiene repercusión sobre la competitividad y rentabilidad del sector agrario al incidir negativamente en la calidad de los productos que exportamos a mercados extranjeros, provocando un impacto directo sobre la economía y el empleo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Garantizar la libre circulación de personas y mercancías a través de las carreteras en la frontera con Francia.
2. Asumir su responsabilidad ante los perjuicios económicos que están sufriendo los agricultores y transportistas andaluces en general, y almerienses en particular, por el bloqueo del paso fronterizo de La Junquera que realizan los grupos radicales independentistas catalanes, procediendo a indemnizar y compensar económicamente las pérdidas sufridas durante los días de bloqueo.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2019.—**Juan José Matarí Sáez, Miguel Ángel Castellón Rubio y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 104

161/000123

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el estado de tramitación de las ayudas dispuestas en el Real Decreto Ley 11/2019, por los daños ocasionados por la DANA en septiembre del pasado año, para su debate en la Comisión de Agricultura.

Exposición de motivos

El pasado mes de septiembre, entre los días 12 a 16, alcanzaba la península ibérica desde el Mediterráneo una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), de efectos devastadores sobre bienes y personas, con el resultado de seis personas muertas en las provincias de Alicante (dos), Granada (una), Almería (una) y Albacete (dos), y numerosísimos daños materiales en bienes así como pérdidas económicas de elevada cuantía en todos los sectores afectados. Se dictaba así, con fecha 20 de septiembre 2019, el Real Decreto Ley 11/2019, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, referidos a los ocasionados por diferentes episodios desde el 1 de abril.

El Gobierno de España, en la comparecencia de su Portavoz Isabel Celaá, valoró el total de medidas previstas en 774 millones de euros, tras declararse «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» las provincias de Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma de Illes Balears y la Comunidad de Madrid, por los graves sucesos ya referidos del mes de septiembre del año 2019.

Los daños han sido especialmente graves en el sector de la agricultura y la ganadería en las provincias del sureste español. Actualmente, pese a la «urgencia» declarada de las ayudas previstas, las mismas no se han hecho efectivas a sus posibles perceptores, como han denunciado públicamente asociaciones agrarias.

Desde Ciudadanos se puso inmediatamente de manifiesto, tras la publicación del RDL de referencia, la insuficiencia de las medidas, así como lo escaso de su cobertura. De hecho, en el caso de las ayudas a producciones agrícolas, la exigencia de que los perjudicados acreditaran tener en vigor póliza de seguro agrario ha venido a dejar fuera de cualquier tipo de ayuda, por ejemplo, a más del 90 % de los productores de hortalizas afectados, cuando la gravedad y lo extraordinario de lo sucedido debiera hacer ampliar y extender la cobertura de la atención del Gobierno de España a quienes por causa fundamentalmente de su alto coste hubieron de prescindir de pólizas de seguro agrario sobre sus producciones.

En este sentido, entidades como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASADA), entre otras, han reclamado una ampliación de las ayudas a productores del sector agrícola y ganadero no cubiertos con póliza de seguro, o en cuanto a daños inicialmente no indemnizables por los seguros de que se dispusiese.

Igualmente, y en general, se denunció por Ciudadanos la falta de ayudas en forma de exenciones o bonificaciones de tributos locales como el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), cuando muchos afectados, precisamente sufrieron daños en inmuebles y vehículos, debiendo actualmente bien abonar a los ayuntamientos el preceptivo impuesto para proceder a reparaciones y reformas de los primeros, o igualmente abonar el impuesto de los segundos a pesar de quedar inutilizados totalmente por las inundaciones. Diversas iniciativas a nivel local en municipios de la comarca alicantina de la Vega Baja, mediante mociones aprobadas por los respectivos Plenos, incidían precisamente en esas fechas en reclamar una ampliación de las ayudas inicialmente previstas en tales supuestos.

Por todo lo anterior, puede concluirse que la sensación entre los afectados, y así se ha puesto de manifiesto en las últimas semanas, es que las ayudas, pese a ser «urgentes», son escasas y, lo que es más grave, siguen sin llegarles.

Por parte de la Diputación Provincial de Alicante incluso se previó la disposición de fondos para completar las ayudas estatales, sometiéndose esta al plan del Estado a presentar por el Gobierno, a fin de agilizar su tramitación. Sin embargo, la falta de desarrollo del procedimiento por parte del Gobierno

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 105

central para la percepción de las ayudas ha ocasionado un bloqueo *de facto* de los fondos previstos por la propia Diputación Provincial de Alicante.

Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Agilizar urgentemente los trámites de concesión de ayudas previsto en el RDL 11/2019, a fin de garantizar su pronta recepción por los afectados.

2. Ampliar el catálogo de ayudas previsto inicialmente en el RDL 11/2019 para los afectados, y en concreto, al menos, para la cobertura de los daños sufridos por productores del sector agrícola y ganadero aun sin seguro agrario, o a afectados en general mediante exención y/o bonificación de otros tributos locales más allá de los originalmente previstos, tales como el ICIO o el IVTM.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2020.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000137

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los daños ocasionados por la borrasca «Gloria», para su debate en la Comisión de Agricultura.

Exposición de motivos

El paso de la borrasca «Gloria» que ha azotado durante la última semana el este de la Península Ibérica, con especial incidencia en las costas del litoral mediterráneo, ha dejado tras de sí un balance devastador, con más de la mitad de los municipios catalanes afectados y más de 200 municipios en la Comunidad Valenciana, entre otros muchos afectados también en Aragón, Murcia y Andalucía.

Con este temporal se han llegado a acumular hasta 800 l/m², vientos con rachas de hasta 180 km/h, nieve que ha llegado a alcanzar los 90 centímetros de espesor, granizadas y olas que han superado los 10 metros de altura.

Doce personas han perdido la vida y cuatro están desaparecidas tras el paso de la tormenta Gloria por el este de España entre el domingo y el jueves de la semana pasada. Las pérdidas alcanzan cifras millonarias en sectores estratégicos como el de la agricultura y el turismo de nuestras zonas costeras. El temporal marítimo ha sido de tal intensidad que ha dañado gravemente numerosas construcciones y edificaciones en todo el litoral, ha hecho desaparecer playas y paseos marítimos de nuestras costas y ha afectado a innumerables infraestructuras que se han visto seriamente dañadas.

Nuestros principales destinos turísticos de playa se han visto afectados sufriendo gravísimos daños de incalculables consecuencias económicas. Las pérdidas a consecuencia del temporal «Gloria» se acumulan a escasos dos meses de la Semana Santa, fecha que marcará el inicio de la actividad turística de 2020. Por este motivo, resulta necesario y urgente una respuesta inmediata y coordinada desde todas las administraciones públicas para restaurar los daños producidos en nuestras costas.

De igual forma, los daños en el campo han sido generalizados debido al viento y al granizo, afectando a los cultivos y a las infraestructuras agrarias con distinta intensidad, pero causando también pérdidas millonarias en todo el este peninsular. El cultivo de cítricos, en su segunda parte de la campaña, es el más afectado. La misma suerte han sufrido los cultivos de hortalizas de invierno acabadas de plantar. Las principales pérdidas en las infraestructuras agrarias se localizan en invernaderos, caminos, sistemas de riego, rotura de naves, granjas, márgenes o mataderos.

En resumen, numerosos incidentes de cuantía incalculable que han provocado la alteración de la actividad cotidiana de los vecinos de las zonas afectadas con la supresión de la actividad escolar, rescates, desalojos, cortes de carreteras, interrupción del servicio ferroviario, el desbordamiento de ramblas, arroyos

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 106

y ríos que han anegado calles y tierras de cultivo, o el fuerte oleaje que obligó al cierre de los puertos comerciales.

Lamentablemente, el temporal «Gloria» no ha sido el único que ha azotado nuestro país en los últimos meses. Es el cambio climático, según los expertos, el responsable de que se originen estos temporales que devastan todo a su paso: el Temporal Dana (septiembre 2019), el Temporal Elsa (diciembre 2019) y Temporal Gloria (enero 2020).

Desde Ciudadanos creemos que, aunque estos fenómenos son naturales y por ello poco predecibles y controlables, las diferentes administraciones e instituciones de nuestro país deben implantar medidas preventivas de mantenimiento dirigidas a que tanto las ciudades como las zonas rurales estén preparadas para la llegada de estos temporales.

Todas las medidas de prevención que se implanten, no solo harán que no sean tan graves sus efectos, sino que influirán en la creación de empleo directo en zonas rurales, ayudando a reducir las tasas de paro, y ayudará a la fijación del territorio en zonas donde existan problemas de despoblación.

Entre estas medidas, que dependen de diferentes administraciones, creemos que son muy importantes, y las mínimas imprescindibles:

1. La limpieza y adecuación de los cauces fluviales que evite desbordamientos futuros como los que suceden cada año. Con actuaciones constantes en épocas de tranquilidad climática. Son las Confederaciones Hidrológicas, dependientes del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), las que tienen la obligación de realizar estas labores de mantenimiento.

2. Protección de entornos urbanos afectados por su proximidad a los cauces para evitar que riadas o desbordes afecten a los hogares y los destruyan, así como mantenimiento preventivo del alcantarillado de las localidades cercanas por parte de sus ayuntamientos.

La falta de limpieza y adecuación de los cauces fluviales y de las infraestructuras relacionadas provocan numerosos desbordamientos de los cauces de los ríos de las zonas afectadas, que a su vez provocan inundaciones de tierras y pérdida de cosechas y graves daños a infraestructuras y otros bienes, a causa de roturas de muros de contención dispuestos, precisamente, para evitar esos desbordamientos.

Son muchas las cuencas que necesitan obras de infraestructura para evitar o paliar daños en caso de crecida de los ríos, mediante las soluciones técnicas que deban analizarse y abordarse y que resulten las más eficientes, bien mediante el dragado y/o ampliación de dichos cauces, bien mediante el desvío del propio cauce en determinados puntos de su recorrido.

Las asociaciones agrarias españolas han reclamado en numerosas ocasiones a los ministerios correspondientes que las Confederaciones Hidrográficas que cumplan con sus obligaciones de mantenimiento de los cauces y de las infraestructuras hidráulicas, pero como hemos comprobado una y otra vez en los últimos años con los distintos temporales que ha sufrido España, las actuaciones son muy deficientes y, en muchos lugares, inexistentes.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Determinar y cuantificar, a la mayor brevedad posible, el alcance real de los daños causados por las lluvias, nevadas, granizo, vientos, tormentas, temporal marítimo e inundaciones sucedidas en todas las zonas afectadas por el temporal «Gloria».

2. Declarar las áreas afectadas como Zona Gravemente Afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

3. Conforme al artículo 24 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, adoptar todas las medidas necesarias para la compensación de daños a las personas y propiedades en las zonas decretadas como afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil.

4. Elaborar y ejecutar de forma inmediata un plan de recuperación urgente de playas, así como de infraestructuras accesorias, para que se encuentren en pleno rendimiento en la próxima campaña turística de Semana Santa 2020.

5. Habilitar todos los recursos necesarios para la reparación de las infraestructuras viarias (carreteras, puentes, ...) y ferroviarias afectadas.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 107

6. Facilitar a los ayuntamientos y vecinos afectados el apoyo necesario e imprescindible para la tramitación de ayudas, partes de daños y seguros con el fin de recibirlos con la mayor rapidez.

7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una Comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

8. Realizar la evaluación correspondiente de la habitabilidad de los edificios de las zonas afectadas, proporcionando igualmente recursos necesarios para ofrecer temporalmente alternativas habitacionales a las familias que hayan perdido su vivienda.

9. Realizar una labor de coordinación con el resto de Administraciones implicadas para cooperar tanto en la prevención de futuros daños como la mitigación de los efectos de los temporales que está afectando a determinadas zonas de nuestro país.

10. Adoptar y cumplir medidas concretas para asegurar un debido mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas vinculadas a los cauces de los ríos españoles en momentos de tranquilidad climática a fin de evitar o paliar lo máximo posible los daños producidos tras los temporales.

11. Ejecutar las obras de infraestructura hidráulicas necesarias en las diferentes zonas fluviales de nuestro país, a fin de evitar o paliar lo máximo posible los daños producidos tras los temporales.

12. Elaborar planes formativos para las FCSE y las Policías Locales para lograr establecer operativos rápidos y efectivos en el tratamiento y actuaciones en estas catástrofes y lograr así una efectiva coordinación a través de un Plan Integral que incluya a la Unidad Militar de Emergencias, indicativos de Protección Civil, bomberos y servicios sanitarios.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2020.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000165

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Dña Macarena Olona Choclán y don Alberto Asarta Cuevas, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas a adoptar en relación con el control de la plaga *Delottococcus Aberiae*, para su discusión en Comisión.

Exposición de motivos

En los primeros meses de 2009, se detectó en algunas parcelas de cítricos de la localidad de Benifaió de les Valls (Valencia) un insecto pseudocócido muy semejante al cotonet, que causa intensas alteraciones en la forma de los frutos. La observación detallada bajo microscopio de sus caracteres morfológicos, y la consulta con expertos de otros países ha permitido identificarlo como *Delottococcus aberiae* (De Lotto), pseudocócido originario del África Subsahariana cuya presencia era hasta ahora desconocida en Europa.

Un estudio realizado en 2015 por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia/Instituto Agroforestal del Mediterráneo y la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica), analizó el ADN del insecto *Delottococcus aberiae* detectado en Valencia en 2009, y confirmó que coincidía con el de la zona de Limpopo (Sudáfrica), por lo que la causa más probable de la infección es la comercialización en España de cítricos sudafricanos, así como un fallo en las obligadas y necesarias inspecciones en los puntos de control de fronteras.

El *Delottococcus aberiae* es la peor plaga a la que se han enfrentado los citricultores españoles: se propaga con rapidez —gran parte de la provincia de Castellón y la de Valencia ya están infectadas—, causa la reducción en el tamaño del fruto y le produce graves malformaciones, de modo que no es comercializable, y resulta muy difícil de combatir.

Según el Instituto Agroforestal del Mediterráneo, en declaraciones publicadas en la revista «Phytoma» de 4 de septiembre de 2019, «el *Delottococcus aberiae* ya se ha extendido a toda la zona citrícola, desde el norte de Vinaroz hasta el sur de Orihuela. Las seiscientas trampas cebadas han

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 108

permitido detectar *Delottococcus aberiae* en todas las áreas de producción citrícola de la Comunidad Valenciana, con capturas especialmente altas entre Castellón de la Plana y Puzol, la zona entre Tabernes de la Valldigna y Gandía y en la zona citrícola de Ondara-Pego».

Por todo lo expuesto, dado que (i) se trata de una plaga de enorme gravedad para nuestra citricultura, (ii) que existe una responsabilidad clara de la Administración en la propagación de la misma a los campos valencianos a través de partidas de cítricos procedentes de Sudáfrica, (iii) que tanto la lucha biológica como las investigaciones sobre feromonas quedan lejos de ser una realidad para esta campaña y campañas posteriores y (iv) que los únicos preparados químicos eficaces para el control de la plaga (clorpirifos y metil-clorpirifos) terminan su autorización como sustancias activas de uso el 31 de enero de 2020, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, dentro de sus competencias, lleve a cabo e impulse todas las actuaciones necesarias para que se ejecuten las siguientes medidas:

1. Calificar de Utilidad Pública la lucha contra la plaga de *Delottococcus Aberiae*, adoptando las medidas que se justifiquen técnica o científicamente como necesarias en el control de la misma.
2. Aprobar un Programa Nacional de Erradicación o Control de la plaga.
3. En coordinación con las Comunidades Autónomas, adoptar medidas urgentes tendentes a impedir de manera eficaz su transmisión o propagación al resto del territorio nacional.
4. Impulsar, promover y agilizar el uso de medios biológicos en la lucha contra la plaga de *Delottococcus Aberiae*.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2020.—**Alberto Asarta Cuevas**, Diputado.—**Macarena Olona Choclán**, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/000081

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para rectificar el acuerdo suscrito entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El pasado 30 de diciembre de 2019 se hizo público el acuerdo suscrito entre el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el Presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortúzar, por el cual los nacionalistas vascos se comprometían a votar favorablemente la investidura del señor Sánchez.

En ese acuerdo el entonces candidato a Presidente del Gobierno se comprometió, entre otras cosas, «a proceder en seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su día a la Comunidad Autónoma Vasca». Asimismo, acuerdan que «el proceso de determinación de los objetivos de déficit correspondientes a la CAV y a la Comunidad Foral de Navarra, así como el de los criterios de reinversión del superávit de las entidades locales, diputaciones forales y gobiernos en sus respectivos territorios se realizará con la participación y en el marco de las Comisiones Mixtas de Concierto y Convenio».

Ambos acuerdos no son cuestiones menores para Navarra, pero aunque lo fueran, resulta sorprendente, por no decir indignante, que un Presidente del Gobierno de España en funciones y un presidente de un partido político que dirige otra Comunidad autónoma española distinta a la navarra, actúen con absoluto desprecio hacia la Comunidad Foral, acordando asuntos que corresponden en exclusiva a las instituciones de Navarra. Esa intolerable injerencia debe ser rechazada en todos sus

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 109

términos, no solo por el contenido de la misma, sino también por la forma ofensiva, invasiva y de total intromisión en los asuntos de la Comunidad Foral de Navarra, al margen de los navarros y de las instituciones que les representan.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no tomar en consideración los acuerdos suscritos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español en todo lo que se refiera a la Comunidad Foral de Navarra.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.—**Ana María Beltrán Villalba**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000140

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para declarar profesión de riesgo a los policías locales y su inclusión en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.

Exposición de motivos

Las distintas leyes de coordinación que regulan a las Policías Locales de España definen sus funciones, en sus respectivos ámbitos de actuación, y son:

- a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales y vigilar y custodiar los edificios, instalaciones y dependencias de dichas Corporaciones.
- b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el núcleo urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.
- c) Instruir atestados por accidentes de circulación acaecidos dentro del núcleo urbano, en cuyo caso comunicarán las actuaciones realizadas a las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad competentes.
- d) Ejercer como Policía administrativa, a fin de asegurar el cumplimiento de Reglamentos, Ordenanzas, Bandos, Resoluciones y demás disposiciones y actos municipales, de acuerdo con la normativa vigente.
- e) Ejercer como Policía judicial, de acuerdo con el artículo 12 y la normativa vigente.
- f) Realizar diligencias de prevención y actuaciones dirigidas a evitar la comisión de actos delictivos, en cuyo caso, comunicarán las actuaciones realizadas a las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad competentes.
- g) Colaborar con las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía autonómica en la protección de las manifestaciones y en el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridas para ello.
- h) Cooperar en la resolución de los conflictos privados, cuando sean requeridas para ello.
- i) Vigilar los espacios públicos.
- j) Prestar auxilio en accidentes, catástrofes y calamidades públicas, participando, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil.
- k) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente y de protección del entorno.
- l) Realizar actuaciones dirigidas a garantizar la seguridad vial en el Municipio.
- m) Cualquier otra función de Policía y de seguridad que, de acuerdo con la legislación vigente, les sea encomendada.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 110

El Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local, ha supuesto un paso adelante en el reconocimiento y equiparación de los policías locales con otros colectivos integrados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como muestran los indicativos por las funciones que realizan y las situaciones a las que diariamente se enfrentan.

Pese a que este paso es importante, consideramos que no solo les corresponde la aplicación de unos coeficientes reductores para adelantar la edad de su jubilación, sino que debemos considerar a este colectivo como ejerciente de una profesión de riesgo, por lo que creemos que es de justicia eliminar esta discriminación e incluir al colectivo con el resto de policías del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas, e incluirles en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.

El servicio que presta el cuerpo de policía local, como el resto de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es fundamental en nuestra democracia para garantizar la convivencia en libertad, debiendo enfrentarse en numerosas ocasiones a situaciones que entrañan el mismo grado de peligrosidad y penosidad que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Igualmente, hay que tener en cuenta la degradación en las condiciones de calidad de vida y trabajo que sufren como consecuencia del envejecimiento de las plantillas, lo que conlleva el paulatino deterioro del operativo en los Cuerpos de Policía Local, y, por ende, de la eficacia de los servicios públicos de seguridad que se les tiene encomendados.

Esa peligrosidad y penosidad en el desarrollo de la labor de los policías son dos factores determinantes en el importante incremento del número de accidentes laborales que sufren, que derivan en muchos casos en incapacidades totales que impiden el desarrollo de la labor policial y que suponen el reconocimiento de una pensión solo del 55 %, lo que aboca al policía local que sufre este tipo de situación a un evidente desamparo económico.

Los diferentes colectivos y representantes de los sindicatos policiales han dirigido esta justa reivindicación a las distintas Administraciones, tanto regionales y locales (como en Andalucía, La Rioja o Valencia), como al Gobierno de la Nación, encontrando en general en todas ellas apoyo y solidaridad, si bien, es necesario el impulso decisivo que permita una solución efectiva y rápida.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar profesión de riesgo a la Policía Local y su inclusión en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.—**María Soledad Cruz-Guzmán García**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Cultura y Deporte

161/000006

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo del Gobierno de España a la creación del Consorcio Monumental casco antiguo de Badajoz, para su debate en la Comisión de Cultura.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 111

Exposición de motivos

Los consorcios, según se definen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.

En el caso de los consorcios monumentales tienen por objeto la cooperación económica, técnica y administrativa entre las entidades que lo integran para la gestión, organización e intensificación de las actuaciones relativas a la conservación, restauración, acrecentamiento y revalorización de la riqueza arqueológica y monumental en las zonas históricas o monumentales.

En la región de Extremadura solo hay dos ciudades que cuenten con este tipo de entidades: el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida y el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.

El Consorcio Ciudad Monumental, Histórico-Artístico y Arqueológico de Mérida se constituye como una entidad de derecho público, integrada por la Junta de Extremadura, el Ministerio de Cultura, la Diputación Provincial de Badajoz y el Ayuntamiento de Mérida. Dotado de medios y presupuesto, que en 2019 han sido 6,2 millones de euros, es responsable directo de la gestión del yacimiento arqueológico de Mérida, incluyendo su investigación, conservación y restauración. Por otro lado, el Consorcio «Cáceres, Ciudad Histórica» solo implica a la Junta, la Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres, teniendo por finalidad la coordinación de las actuaciones en materia de conservación, rehabilitación y mantenimiento del patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de la ciudad; en el ámbito de promoción, dinamización y fomento del turismo y en los usos residenciales, comerciales, turísticos, culturales y de ocio en la Ciudad Monumental y su zona de influencia.

Badajoz, la ciudad más grande de Extremadura, con un 10 % de la población de la región, alberga un Casco Antiguo que conserva multitud de edificios declarados Bien de Interés Cultural. Entre los monumentos destacar la Alcazaba, la Catedral de San Juan Bautista, las murallas, torres, puertas, puentes o diversas fortificaciones de su recinto abaluartado, así como numerosos palacios, iglesias y conventos.

Además, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz tiene un importante patrimonio documental. Palacios o edificios históricos albergan instituciones culturales o museos, como el Museo de Bellas Artes de Badajoz.

En Badajoz existe la intención crear un consorcio que dirija la revitalización de todo el Casco Antiguo, al menos, en las mismas condiciones que Mérida y Cáceres, siendo necesario el apoyo decidido de Junta y Diputación, así como del Gobierno de España, para que la parte histórica de Badajoz se recupere.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar la creación y constituirse como parte integrante del Consorcio Monumental del casco antiguo de Badajoz.
2. Participar activamente, con presupuesto económico comprometido, en las actuaciones de conservación, restauración y revitalización del casco antiguo de Badajoz.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2019.—**Víctor Valentín Píriz Maya y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000178

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instada del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la Proposición no de Ley, sobre la ampliación de un IVA reducido para los espectáculos culturales pirotécnicos, para su debate en el Comisión de Cultura y Deporte.

Exposición de motivos

La pirotecnia es sin ningún tipo de dudas uno de los elementos más preciados del rico patrimonio cultural valenciano. Su uso, permanentemente vinculado a un inmenso listado de manifestaciones de la más diversa cultura festiva valenciana, se remonta siglos atrás de nuestra historia y, entre otras consideraciones, constituye uno de los elementos reconocidos en el expediente que el pasado 30 de noviembre de 2016 posibilitó la inclusión de la fiesta de las Fallas como Patrimonio inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

En paralelo al desarrollado y arraigo histórico del arte pirotécnico y de sus manifestaciones rituales, al sí de la sociedad valenciana, se ha consolidado igualmente la creación de una importante industria pirotécnica valenciana, en muchas ocasiones vinculada a empresas de tradición familiar, que para su creatividad e importancia han adquirido en muchos casos un amplio reconocimiento no solo en el ámbito valenciano y estatal, sino también a nivel internacional. Este reconocimiento generalizado ha favorecido que muchas empresas autóctonas puedan participar con su arte en muchas manifestaciones festivas y culturales, así como en eventos sociales de gran importancia en todo el mundo.

Con todo, los efectos de la reciente crisis económica y las derivadas propias de las normativas de contratación y de seguridad han tenido como consecuencia la agravación de unos tiempos que ya de por sí son complicados para el sector desde el punto de vista económico a pesar de que, como podemos comprobar habitualmente en las citas del calendario festivo, su capacidad tiene un gran impacto positivo en la economía por su considerable retorno en determinados sectores de la hostelería y el turismo.

A estas problemáticas cabe sumarle el abusivo aumento del IVA cultural que perpetró el expresidente Mariano Rajoy en el año 2012, pasando del 8 % al 21 %, y que acaparó igualmente la industria pirotécnica valenciana. En los últimos años, este IVA se ha rebajado al 10 % en algunos sectores culturales del cine, la música, la danza o el teatro. No obstante, una de las industrias valencianas más auténticas y populares, como es la pirotecnia, continúa padeciendo esta excesiva carga.

Por todo lo anteriormente expuesto, presento la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso insta al Gobierno a:

1. Impulsar a todos los efectos posibles el reconocimiento artístico a los espectáculos pirotécnicos por su innegable valor cultural y la creatividad que cada uno de los profesionales de la pirotecnia utiliza para su diseño y ejecución.
2. Iniciar los trabajos y estudios necesarios para aplicar un tipo de IVA reducido, equivalente al denominado como IVA cultural, para la contratación de espectáculos pirotécnicos por su innegable carácter cultural.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.—**Joan Baldoví Roda**, Diputado.—**Laura Borràs Castanyer**, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/000030

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la creación de un portal web de empleo público universitario, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

La oferta de empleo público universitario en España se encuentra atomizada y adolece de una grave falta de transparencia. Cada universidad suele publicar en sus portales de empleo las correspondientes convocatorias, al tiempo que las plazas correspondientes a personal docente e investigador laborales se

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 113

recogen en los boletines oficiales de la correspondiente Comunidad Autónoma (salvo las universidades de ámbito estatal), mientras que las de profesores funcionarios sí que son publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». Más complejo aún es el conocimiento de las distintas bolsas de empleo o los puestos como profesores sustitutos interinos u otros contratos especiales para investigadores o docentes en cada una de las universidades públicas españolas.

En un contexto en el que se acusa severamente la endogamia de nuestras universidades, esta situación dificulta notablemente la movilidad interuniversitaria. No cabe duda de que son muchas y más graves las causas generadoras de esta realidad, desde la falta de un mercado de trabajo auténticamente competitivo y de un modelo de contratación que no promueve la movilidad del profesorado y la formación de excelencia, hasta corruptelas locales que premian fidelidades personales. Pero a ellas también cabe sumar, como se ha señalado, el difícil acceso a la información sobre posibles convocatorias con ofertas de empleo público universitario.

Así las cosas, y sin perjuicio de que se reconozca la necesidad de acometer una profunda reforma de nuestro sistema universitario, puede compartirse la utilidad de que se reúna en un portal web toda la información referida a ofertas de empleo público universitario para personal docente e investigador, en cualquiera de sus categorías profesionales o contractuales. De esta manera, cualquier universitario en busca de nuevas posibilidades de empleo tendría una herramienta eficaz y sencilla, que además prevendría de abusos proteccionistas en los que en ocasiones caen las universidades al publicar de forma oscura y urgente ciertas plazas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que desarrolle un portal web de empleo público universitario que recoja información actualizada de todas las ofertas de trabajo para personal docente e investigador (PDI) que se convoquen en las universidades públicas españolas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000031

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

El interés estratégico de las relaciones científicas y tecnológicas con ciertos países es hoy, más que nunca, fundamental. Los asuntos científicos y tecnológicos están en la frontera de los nuevos escenarios asociados a la innovación y a las inversiones en general (económicas, comerciales, empresariales, etcétera).

El apoyo a la internacionalización de la ciencia y tecnología españolas es una necesidad de primer orden, ya que constituye un elemento básico a nivel científico y académico que, además, tiene una repercusión evidente en la internacionalización de las empresas españolas. El objetivo de la llamada «diplomacia científica» es el de facilitar el intercambio mutuo de información entre instituciones científicas de los distintos países, a la vez que se promueve la participación conjunta en proyectos de investigación y de movilidad, la generación de sinergias y el fomento de la cooperación en ciencia y tecnología.

El apoyo a la internacionalización de la ciencia y tecnología españolas es una necesidad de primer orden, ya que constituye un elemento básico a nivel científico y académico que, además, tiene una repercusión evidente en la internacionalización de las empresas españolas. El objetivo de la llamada «diplomacia científica» es el de facilitar el intercambio mutuo de información entre instituciones científicas

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 114

de los distintos países, a la vez que se promueve la participación conjunta en proyectos de investigación y de movilidad, la generación de sinergias y el fomento de la cooperación en ciencia y tecnología.

Sin embargo, en la mayoría de embajadas de nuestro país no se atienden los temas científicos ni tecnológicos de un modo integral. Si bien es cierto que algunas embajadas disponen de oficinas que se ocupan de temas científicos, como sucede, por ejemplo, con la «Office for Cultural and Scientific Affairs» de la embajada española en Reino Unido, no se trata de una práctica extendida y mucho menos mayoritaria.

Para solventar esta situación, se propone la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, tal y como existe en países de nuestro entorno como Italia o Francia. La labor del agregado científico y tecnológico abarcaría, aunque no exclusivamente, la organización de actividades y eventos que refuercen la excelencia científica y tecnológica, así como el apoyo a proyectos desarrollados por universidades y empresas, participando activamente en colaboración con el Instituto Cervantes o las oficinas comerciales españolas. También incluiría el apoyo y el desarrollo de la cooperación bilateral, la negociación y la aplicación de acuerdos específicos, la promoción de la ciencia y la tecnología españolas, la provisión de información acerca del sistema y las políticas científicas aplicadas por los distintos países y la promoción y la gestión de contactos entre investigadores españoles residentes en el extranjero e investigadores extranjeros.

Por otra parte, esta figura se encargaría de realizar las tareas de asesoramiento al embajador sobre cuestiones científicas y técnicas, informando sobre desarrollos científicos en el exterior, a la vez que actuaría como un portavoz en asuntos científicos en el extranjero, asistiendo con este a eventos relacionados con la ciencia y la tecnología en colaboración con las academias de ciencia y tecnología, la industria y las autoridades gubernamentales de su país de residencia.

Además, el apoyo decidido de las embajadas a la ciencia y la tecnología abriría las puertas a poder participar en proyectos de dimensión internacional, proyectos que suponen una fuente potencial de ingresos, prestigio y capacidad de influencia en los mercados internacionales.

Con el fin de poner en valor y capitalizar los sectores de excelencia en la investigación científica y tecnológica y apoyar el avance de las empresas españolas que operan en sectores de tecnología avanzada, se hace necesario contar con una figura como la del agregado científico y tecnológico. La administración cuenta con un amplio sector del personal ya formado en este contexto que procede de los distintos centros y organismos de investigación y las universidades.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear e impulsar la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, con el objetivo de llevar a cabo tareas de asesoramiento y promoción de la ciencia y la tecnología españolas, así como fortalecer y profundizar en las relaciones de cooperación científica y tecnológica internacionales, apoyando la internacionalización de nuestros investigadores y empresas y la participación de estos en proyectos de dimensión internacional.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000021

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la Protección de los Cooperantes en el Exterior, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 115

Exposición de motivos

El V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 se aprobó con la oposición de los profesionales del sector y con las críticas de la mayoría de grupos parlamentarios en las Cortes Generales. Pese a ello, una vez que está en vigor es necesario cumplirlo, puesto que es el principal instrumento para regir nuestra cooperación al desarrollo. En este Plan Director se detallan los principales retos a tratar por la cooperación española y los objetivos que esta debe tener, así como los instrumentos de los que se hará uso para llevar a cabo este cometido.

Así pues, el Plan Director recoge como reto para la cooperación española, que «ha de trabajarse en justicia, paz y seguridad, prevenir la violencia, combatir la delincuencia y el terrorismo, conseguir un acceso universal a la Justicia y una institucionalidad democrática sólida. A la promoción del Estado de Derecho debe incorporarse en particular la prevención de la radicalización dando especial énfasis a la agenda de [Mujer, Paz y Seguridad] MPS, con la nueva arquitectura de paz y seguridad impulsada por [Naciones Unidas] NNUU como marco de referencia». Asimismo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N.º 16, «Paz, Justicia e Instituciones Sólidas», establece metas concretas para todos los países, como la reducción significativa de todas las formas de violencia.

En definitiva, la protección de la paz y la garantía de seguridad son tanto un reto para la cooperación española como uno de los objetivos de la misma, en tanto que forma parte de la Agenda 2030. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 1,6 millones de personas en todo el mundo debido a la violencia, siendo esta una de las principales causas de muerte para las personas de entre 15 y 44 años y suponiendo el 14 % de las muertes masculinas y el 7 % de las muertes femeninas. Además, según el Banco Mundial, los conflictos provocan el 80 % de todas las necesidades humanitarias, mientras que además reducen el crecimiento del PIB en torno a un 2 % de media. Según también el Banco Mundial, hasta 2.000 millones de personas viven en países en los que el desarrollo se ve afectado por la fragilidad, el conflicto y la violencia.

Además, esto no solo afecta a la población civil en los países destino de la cooperación para el desarrollo, sino que también se cierne como una amenaza sobre los profesionales de la cooperación. Según datos de Naciones Unidas, desde agosto de 2003 más de 4.500 cooperantes han sido asesinados, heridos, detenidos, atacados o secuestrados mientras ejercían labores humanitarias. Según los datos proporcionados por Humanitarian Outcomes en su informe de 2019, el año pasado hubo 226 ataques contra 405 profesionales de la cooperación al desarrollo, haciendo de este el segundo peor año desde que se tienen cifras, solo por detrás de 2013.

Como consecuencia, 131 profesionales fueron asesinados, 144 resultaron heridos y 130 de ellos fueron secuestrados. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, estos ataques afectan principalmente a la población más pobre y más necesitada de ayuda internacional. Un informe de Aid Worker Security demostró que los grupos armados principalmente atacan a profesionales de la cooperación porque consideran que son espías o porque tratan de imponer valores culturales sobre la población local. Sin embargo, también se obtuvo una razón más escalofriante: algunos grupos sugerían que asesinar profesionales de la cooperación era un divertimento para los luchadores jóvenes que apenas reciben compensación económica por su reclutamiento.

En torno a 2.621 personas llevan a cabo las labores de cooperación internacional para el desarrollo y de ayuda humanitaria para la cooperación española. Estos profesionales se encargan de tareas tan diversas que abarcan desde el desarrollo económico inclusivo y la gobernabilidad democrática hasta los servicios básicos como la salud, educación y acceso al agua y el saneamiento, o la labor en sectores como el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático o el apoyo al sector cultural desde un enfoque de desarrollo.

Según un estudio elaborado con la colaboración de las Embajadas de España y las Unidades de la Cooperación Española en el exterior, el 56 % de los cooperantes españoles son mujeres, que también se enfrentan a determinados riesgos específicos por este hecho. Es más, según los datos de Aid Worker Security, las mujeres cooperantes son el objetivo principal de abusos y violencia sexual, así como de otros tipos de asaltos a su integridad física.

En cuanto a regiones geográficas, la mayoría de las personas que trabajan como cooperantes españoles, un 43 %, se encuentra en el África Subsahariana y un 15 % en América Central, dos de las regiones más inseguras y peligrosas del mundo. Según Humanitarian Outcomes, en 2018 Sudán del Sur fue el país con mayor riesgo, con 55 y 111 víctimas, mientras que la República Democrática del Congo

experimentó el mayor incremento en la violencia, incluso haciendo objetivo a trabajadores que ayudan a combatir la epidemia de ébola.

Por tanto, la gran mayoría de los cooperantes españoles se encuentran en una situación de significativa inseguridad y se enfrentan a numerosos riesgos no solo para su labor profesional, sino también para su propia integridad física. Además, un 41 % de los profesionales que se dedican a la cooperación española son personal religioso, lo que también les expone a unos riesgos específicos por parte de grupos extremistas.

En definitiva, la seguridad debe formar parte fundamental de la cooperación española, tanto en su vertiente de protección a la población civil que recibe la ayuda internacional como en la de protección a los profesionales que la llevan a cabo. Con motivo del Día del Cooperante, que se celebra cada 8 de septiembre desde el año 2000, es necesario dar un paso adelante en el refuerzo de la protección y la seguridad de nuestros profesionales de la cooperación española.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo insta al Gobierno a:

1. Reforzar el componente de seguridad en la cooperación española, en línea con el V Plan Director de la Cooperación Española y el Consenso Europeo de Desarrollo, mediante una colaboración más estrecha entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y los ministerios de Defensa e Interior.

2. Fomentar la cooperación entre los cooperantes españoles y el personal civil y militar en el exterior, fortaleciendo así el componente de paz y seguridad en las labores de ayuda humanitaria, especialmente en lo que respecta a la consecución de la agenda global y europea de mujeres, paz y seguridad.

3. Favorecer la presencia de personal civil y militar femenino en las operaciones de construcción y mantenimiento de paz, especialmente en áreas y situaciones en las que la presencia y el diálogo con mujeres sea más favorable para entablar relaciones amistosas con la población local y para proteger la integridad de las mujeres y niñas en los países de destino.

4. Estrechar la cooperación en materia de seguridad, tanto de forma bilateral como en el seno de la Unión Europea, con los países prioritarios para la cooperación española y con aquellos en los que haya más presencia de cooperantes españoles con el fin de reforzar su protección a la hora de llevar a cabo labores humanitarias y de cooperación.

5. Poner a disposición de los profesionales de la cooperación los medios que fueran necesarios para garantizar su protección y seguridad a la hora de realizar su trabajo como cooperantes por todo el mundo.

6. Proporcionar asistencia a las organizaciones encargadas de llevar a cabo labores de cooperación a la hora de integrar consideraciones de protección de sus empleados entre sus departamentos de recursos humanos y de seguridad, así como a la hora de establecer mecanismos rápidos de denuncia de posibles riesgos y amenazas.

7. Establecer un punto de contacto específico en Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) y Centros de Formación (CF) de la AECID para coordinar la protección de los cooperantes y dar respuesta a posibles necesidades en materia de seguridad de los mismos, así como para llevar a cabo actividades de formación continua para hacer frente a posibles riesgos a su integridad.

8. Integrar de forma más efectiva la cultura de defensa y seguridad en los cooperantes, en línea con el V Plan Director de la Cooperación Española y el Consenso Europeo de Desarrollo, para garantizar una colaboración más estrecha entre los profesionales de la cooperación española y el personal civil y militar a cargo de la seguridad de la población local y de los propios cooperantes.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 117

161/000022

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la integración de la Agenda 2030 en los programas de reformas del Gobierno de España, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este plan de acción plantea 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Los ODS son, así, más ambiciosos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Por ejemplo, el objetivo último de aquellos es la erradicación de la pobreza, mientras que la de estos era la mitigación de la misma. También los ODS gozan de mayor legitimidad, pues son el resultado de un proceso participativo que las Naciones Unidas pusieron en marcha para que los ciudadanos expresaran sus prioridades a través de la encuesta global Mi Mundo. Finalmente, los ODS tienen un carácter más universal, buscando un cambio de paradigma sobre el crecimiento que afecta a todos los Estados. En palabras del Asesor Especial de las Naciones Unidas para la Agenda 2030, David Nabarro, de cara a la Agenda 2030 «todos los países son países en desarrollo».

La nueva estrategia, por tanto, debe regir los diferentes programas nacionales de crecimiento sostenible para los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación. Además, la Agenda 2030 obliga a repensar la manera tradicional de hacer política de manera sectorial y a organizarse de forma transversal, garantizando la coherencia entre diferentes políticas y la maximización de los escasos recursos públicos. Así pues, es necesario encontrar un equilibrio entre intereses contradictorios y consensuar una visión a largo plazo del modelo de desarrollo que se quiere alcanzar, con unos objetivos a corto y medio plazo que cimienten el camino hacia ese objetivo último. Esta debe ser una labor en la que todos los Ministerios, Consejerías autonómicas y Concejalías locales se impliquen por igual y que debe impregnar todas las iniciativas legislativas puestas en marcha por los diferentes niveles de la Administración.

Cada año, en el mes de abril, todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas y sus Programas de Estabilidad con el objetivo es coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión Europea en su conjunto. En estos Programas también se detalla cómo las reformas a implementar en el año en cuestión contribuirán a la consecución de los objetivos de la agenda Europa 2020. Sin embargo, y pese a que la Agenda 2030 ha sido adoptada tanto por los Estados miembros como por la Comisión Europea, estos Programas no hacen mención a cómo las reformas a implementar ayudarán a la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Por otro lado, se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. El objeto de esta norma, que deroga el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo y la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto normativo, es regular las previsiones contenidas en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en lo que se refiere a ese documento que debe acompañar a los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias.

El texto nace de la necesidad de adaptar la materia regulada a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Mediante el mismo se regula la estructura y contenido de la Memoria, los supuestos en que procede una Memoria Abreviada (cuando se estime que de la propuesta normativa de que se trate no se derivan impactos apreciables en ninguno de los ámbitos señalados en el reglamento o estos no son significativos, siendo también preceptiva en los supuestos de la tramitación de proyectos de reales decretos leyes), la previsión de una adaptación de la Guía Metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo (a realizar en 6 meses),

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 118

y la indicación de que las previsiones del Real decreto relativas al informe sobre el impacto por razón de género serán también aplicables a los proyectos de planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística sometidos a la aprobación del Consejo de Ministros y a las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público.

Sin embargo, este Real Decreto 931/2017 tampoco incluye en su articulado ningún tipo de requisito respecto a la adecuación de los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias a los compromisos adquiridos por nuestro país en la Agenda 2030. Dado que esta Agenda está dirigida a todos los países, España también tiene responsabilidad a la hora de cumplir con ella. Para impulsar esto, Naciones Unidas definió un sistema de informes voluntarios de los países, a ser presentados en el Foro Político de Alto Nivel del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Algunos países han presentado ya más de un informe de seguimiento. De acuerdo con lo aprobado por el Gobierno anterior, España presentará su informe, junto con otros 46 países, en este año de 2018, en la reunión prevista para el Foro Político de Alto Nivel de julio. Sin embargo, parece que España se presentará a ese examen sin haber hecho todo lo posible por aprobarlo.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aunar, en el marco de la redacción de los futuros Programas Nacionales de Reformas y Programas de Estabilidad que realice el Gobierno de España, las iniciativas a llevar a cabo durante el periodo al que hacen referencia y la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el objetivo de entrelazar las reformas estructurales a realizar por España y el desarrollo sostenible.

2. Encomendar al Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 el seguimiento y evaluación de cómo las reformas que se llevan a cabo dentro de los futuros Programas Nacionales de Reformas y Programas de Estabilidad contribuyen a la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

3. Impulsar, en el marco del Real Decreto 931/2017, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la realización de un control *ex ante* de las medidas aprobadas por el Gobierno para asegurar que se tiene en cuenta el impacto sobre la Agenda 2030 de las iniciativas a poner en marcha, maximizando así la eficiencia de las políticas públicas y evitando tomar medidas que entren en conflicto o directamente perjudiquen la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

4. Respetar, a la hora de planificar y redactar los Programas Nacionales de Reformas y Programas de Estabilidad que realice el Gobierno de España, el compromiso adquirido por la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Congreso de los Diputados de dedicar al menos un 0,4 % del PIB a cooperación para el desarrollo.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000087

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el impacto ambiental y social de la explotación minera en la cuenca del río Orinoco, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

La cuenca del río Orinoco, que abarca la mayor parte de Venezuela y la zona este de Colombia, es la tercera en importancia de Sudamérica y, sin ser uno de los ríos con mayor longitud del planeta, tiene el tercer mayor caudal de los ríos del mundo.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 119

La caída de la producción petrolera y la crisis económica que sufre Venezuela desde hace años han impulsado la explotación de otros recursos naturales, como metales preciosos o minerales estratégicos. Así, el 24 de febrero de 2016, el Gobierno venezolano decretaba la creación de Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, dando forma al anuncio que había realizado años atrás el presidente Hugo Chávez.

El Arco Minero del Orinoco ocupa un área de 111.846,86 km² al sureste del río Orinoco. Las estimaciones oficiales calculan la existencia de 700 toneladas de oro, cobre, diamante, hierro, bauxita y coltán, mineral codiciado por la industria de la electrónica. Además, se cuenta con la presencia de depósitos de materiales de alto valor, como el torio y el uranio.

Desde su puesta en funcionamiento ha tenido la oposición de sectores de la sociedad venezolana, pero la voracidad, el descontrol de la explotación minera y la inacción del Estado están originando estragos ambientales y sociales.

Las explotaciones mineras han originado la deforestación de una zona de selva tropical, con una destrucción de suelo, lo que dificultará la recuperación. Es presumible el impacto sobre los hábitats de especies vulnerables y la pérdida de biodiversidad. La actividad extractiva no respeta estándares ambientales y la acumulación del mercurio, que se utiliza para separar los metales y contamina las aguas y los peces, se ha detectado en los análisis de las comunidades indígenas de la zona. El gran volumen de sedimentos que genera la explotación minera, al utilizar agua a presión, están enturbiando los caudales y depositándose en el lecho de los afluentes del Orinoco y en el embalse del Guri, la fuente de energía eléctrica más importante de Venezuela.

Es importante resaltar que el Arco Minero abarca el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La región, programada para el desarrollo minero, también incluye a la Reserva Forestal Imataca, las reservas de La Paragua y El Caura, el Monumento Natural Cerro Guanay y la cuenca del río Caroní.

Por otra parte, es difícil de evaluar las implicaciones a nivel regional y el impacto sobre el propio río, el delta Orinoco, el océano Atlántico, golfo de Páris y mar Caribe. Según el último informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), se ha acelerado el proceso de daños como consecuencia de la minería a una velocidad que nunca habíamos tenido antes.

Los problemas sociales quedan reflejados en el último Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La población indígena se ve sometida a un estado de violencia, con asesinatos y desapariciones de personas dedicadas a la minería, así como a las violaciones de diversos derechos, o el riesgo de mujeres y niñas indígenas de ser objeto de trata. Otro impacto social es el aumento de los problemas de salud a causa de enfermedades como el paludismo o la malaria, que prolifera por las aguas estancadas.

La ilegalidad o el control por parte de organizaciones de grupos armados bajo el amparo del Estado, tal y como queda reflejado en el Informe sobre la situación del Arco Minero y la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, desarrollado por el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, dificultan una intervención sobre el territorio y facilitan el contrabando. Es preocupante que la minería ilegal se esté trasladando fuera del territorio del Arco Minero.

El Gobierno venezolano tiene la intención de seguir desarrollando la actividad minera con su Plan Sectorial Minero 2019-2025 y anunció en octubre su intención de entregar a cada uno de los 23 Estados del país la gestión de una mina de oro para impulsar el desarrollo local.

Cada vez son más las organizaciones que alzan su voz para proteger una de las reservas naturales y fluviales más grandes del mundo, pero la situación social, política y económica actual de Venezuela es poco alentadora.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Secundar aquellas iniciativas de conservación y protección del medio en el entorno del río Orinoco de los impactos de la minería ilegal y descontrolada, para detener la pérdida de biodiversidad y restaurar los ecosistemas.
2. Apoyar todas aquellas acciones internacionales de control del comercio de metales y minerales procedentes de la minería ilegal con origen en Venezuela.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 120

3. Trasladar al Consejo de la Unión Europea la crisis ambiental y social consecuencia de la minería ilegal y descontrolada en Venezuela, a la hora de prorrogar las sanciones aplicadas por la Unión Europea ante la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela.

4. Solicitar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un mayor control de los impactos en las poblaciones indígenas afectadas en las zonas mineras y garantizar sus derechos fundamentales.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.—**María Valentina Martínez Ferro**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Igualdad

161/000020

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la defensa de los derechos de las personas LGTBI y la promoción de la persecución de aquellos que vulneren derechos fundamentales de este colectivo ante la Corte Penal Internacional, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos somos plenamente conscientes de que la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia continúan siendo formas de discriminación presentes en el día a día de nuestras sociedades, y de la existencia de miles de personas que, todavía hoy, continúan siendo perseguidos, encarcelados y condenados a trabajos forzados, castigos físicos e incluso a la pena de muerte en razón de su mera orientación sexual e identidad de género en terceros países.

Recordando el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia (International Day Against Homophobia and Transphobia, IDAHOT), que desde fechas recientes se viene celebrando cada 17 de mayo, coincidiendo con la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17 de mayo de 1990.

Teniendo también en cuenta que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y la Constitución española proclama los derechos fundamentales de toda persona, entre ellos el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y su dignidad inherente, así como los Principios de Yogyakarta ratificados por la Comisión Internacional de Juristas para la aplicación de los instrumentos internacionales en relación a la orientación sexual y la identidad de género.

Recordando que conforme al artículo 7.1.h) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional «se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil [...] h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte» y que conforme al artículo 7.2.g) del mismo texto por «persecución» se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad», siendo la persecución penal de un colectivo la persecución «generalizada o sistemática» por excelencia.

Recordando, del mismo modo, que conforme al artículo 7.2.a) de tal Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por «ataque contra una población civil» se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de

conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política», y que el artículo 7.1.a) penaliza los asesinatos y ejecuciones de miembros del grupo perseguido, y el artículo 7.1.e) la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos estamos decididos a no guardar silencio ante ninguna de estas situaciones, así como a contribuir desde el Congreso a la defensa de los Derechos Humanos de todas esas personas, cruelmente perseguidas, encarceladas, sometidas a trabajos forzados y castigos físicos, e incluso condenadas a muerte por su orientación sexual o identidad de género, y por ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

«1. El Congreso de los Diputados expresa su solidaridad con los miles de personas en el mundo que, en pleno siglo XXI, continúan siendo cruelmente perseguidas, encarceladas, sometidas a trabajos forzados, castigos físicos e, incluso, en los casos más atroces, condenadas a muerte, o asesinadas, en razón de su mera orientación sexual o identidad de género, y reconoce tales conductas como formas de crímenes contra la humanidad.

2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, urgentemente:

a) Promueva, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, haciendo uso efectivo de las facultades que le confiere el artículo 14 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, una investigación oficial e independiente de la persecución que vienen sufriendo miles de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales en distintos lugares del mundo, en tanto que crimen de lesa humanidad del artículo 7.1.h) del Estatuto de Roma en relación a sus artículos 7.1.a) y e) y 7.2.g).

b) Inste, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2018-2020, una resolución que promueva el cese de la inhumana persecución penal de todas estas personas en razón de su mera orientación sexual o identidad de género, así como para promover su completa protección ante otros actos de persecución igualmente inhumanos por parte de actores no estatales.

3. El Congreso de los Diputados manifiesta su pleno compromiso de seguir trabajando en la eliminación de todas las barreras y formas de discriminación que, todavía hoy, siguen afectando a homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales en el día a día, así como a seguir trabajando en la construcción de una sociedad más comprometida y respetuosa con los Derechos Humanos.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000027

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) en materia de lucha contra la discriminación racial y étnica, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación, citando como motivos especialmente rechazables el nacimiento, la raza, el sexo, la religión u opinión, y prohibiendo la discriminación por cualquier otra circunstancia personal o social. Además, el apartado segundo del artículo 9 establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva. Así, la no discriminación se constituye como un complemento del derecho a la igualdad y como garantía del disfrute de todos los derechos fundamentales y libertades públicas. Su vinculación inmediata

con la dignidad de la persona, uno de los fundamentos, según el artículo 10 de la Constitución, del orden político y de la paz social, expresa además el carácter necesario de la igualdad como elemento esencial para la construcción de una sociedad cada día más justa.

El último Informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) sobre España publicado el 27 de febrero de 2018, entre otras medidas, establece en la Recomendación núm. 22 que las autoridades españolas adopten a la mayor brevedad una legislación general contra la discriminación que esté en consonancia con las normas establecidas en los párrafos 4 a 17 de su Recomendación núm. 7 de política general.

Igualmente, en la Recomendación núm. 27 la ECRI recomienda, una vez más, que las autoridades adopten medidas con carácter urgente para crear un organismo de tutela y promoción de la igualdad o para asegurar que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica sea totalmente independiente y tenga las competencias y facultades indicadas en sus Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas para España por el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) en su último informe, en particular, las siguientes:

a) La aprobación de un Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que establezca las condiciones para la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, consagrado en el artículo 14 de la Constitución española para todos los ciudadanos en todo el territorio nacional, que esté en consonancia con las normas establecidas en los párrafos 4 a 17 de su Recomendación núm. 7 de política general.

b) El establecimiento de un organismo independiente para la tutela del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación y de promoción de la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, que tenga las competencias y facultades indicadas en sus Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000028

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la incorporación de medidas de fomento de la igualdad para la mujer en el nuevo Proyecto de Ley de Deporte, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Allá por julio de 2018, el por entonces Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, señaló en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno tenía previsto llevar a cabo una revisión y actualización de la Ley del Deporte. Esta norma, que data de 1990, necesita importantes actualizaciones y mejoras que adapten el deporte a sus retos y necesidades actuales, entre ellas, medidas que fomenten la igualdad en uno de los ámbitos donde las mujeres sufren mayor discriminación con respecto a los hombres.

El deporte es una herramienta efectiva para la transmisión de valores tales como la solidaridad, el trabajo en equipo y la cultura del esfuerzo. Además de ello, en los últimos tiempos también ha quedado patente que el deporte también transmite valores que trascienden a los intrínsecamente relacionados con la actividad física y la interacción entre compañeros. En muchísimas ocasiones, el deporte también se ha

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 123

convertido en un elemento reivindicativo en favor de diferentes movimientos sociales. En numerosos casos de actualidad, también para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres.

En este sentido, el Consejo Superior de Deportes (CSD) se ha posicionado a favor de la lucha por la igualdad en el deporte, tanto es así, que ha redactado el Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer en el Deporte, en el que reconoce que «el deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un motor de cambio social y contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y hombres».

Además, ha suscrito la Declaración de Brighton, la hoja de ruta referente a nivel internacional en materia de mujer y deporte redactada por la International Working Group and Women and Sport, cuyos principales objetivos son:

- a) Asegurar a todas las mujeres la oportunidad de participar en el deporte en un ambiente seguro, que les apoye, y que conserve los derechos, la dignidad y el respeto del individuo.
- b) Incrementar la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas las funciones y roles.
- c) Garantizar que los conocimientos, las experiencias y los valores de las mujeres contribuyen al desarrollo del deporte.
- d) Fomentar el reconocimiento de la participación femenina en el deporte como contribución a la vida de todos, al desarrollo de la comunidad, y a la construcción de naciones sanas.
- e) Animar a las mujeres a reconocer el valor intrínseco del deporte y su contribución al desarrollo personal y a una vida sana.

Pese a ello, a día de hoy, existen numerosos indicadores y controversias que indican que la igualdad en este ámbito está, claramente, lejos de conseguirse: cláusulas antiembarazo en contratos de deportistas profesionales, diferencias en las cuantías de las becas y premios para las mismas categorías en función del sexo de los competidores, diferencia abismal en el número de licencias deportivas según sexos por falta de fomento del deporte femenino, escasa visibilización y creación de referentes, etc.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a aprobar un Proyecto de Ley que actualice la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, incluyendo en esta actualización toda una serie de medidas encaminadas a promover la igualdad de la mujer en el ámbito deportivo, incluyendo, al menos, las siguientes:

- a) Un apartado específico sobre la existencia de planes de igualdad en todas las federaciones deportivas, con mecanismos de registro y evaluación efectivos que permitan conocer la implementación y desarrollo de los mismos.
- b) La obligatoriedad para todas las federaciones y clubes deportivos de la existencia de protocolos contra el acoso y el abuso sexual, solicitando antecedentes penales de personas que vayan a trabajar en ámbitos deportivos en el que exista una relación con menores de edad y mujeres.
- c) La eliminación de toda cláusula contractual discriminatoria para las mujeres deportistas, incluidas expresamente las “cláusulas antiembarazo” que prevén la penalización o rescisión del contrato de las deportistas embarazadas.
- d) La inclusión de mecanismos para que los periodos sin actividad por causa de embarazos y maternidad no penalicen a las mujeres deportistas a la hora de mantener su consideración de deportistas profesionales, participar en competiciones deportivas u optar a la concesión de becas o ayudas deportivas.
- e) El fomento de la incorporación de deportistas en puestos de trabajo técnicos de las federaciones en casos en los que la maternidad o lesiones impidan que puedan seguir compitiendo, contando para ello con una protección social adecuada.
- f) La obligatoriedad de que los premios de campeonatos y competiciones que se financien total o parcialmente con cargo a fondos públicos establezcan las mismas cuantías tanto para la categoría femenina como para la masculina.
- g) La obligatoriedad de que las primas que las federaciones otorgan a sus equipos por victorias y campeonatos sean iguales para deportistas hombres y mujeres, en proporción a sus respectivas retribuciones.

h) La promoción de la igualdad en el deporte mediante campañas informativas en diferentes medios de comunicación, así como la cobertura informativa adecuada de las categorías femeninas, eventos y competiciones deportivas, especialmente en aquellos medios de comunicación de titularidad pública.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Sara Giménez Giménez, Guillermo Díaz Gómez y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000035

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la mejora de la respuesta institucional contra la trata de personas, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La trata de personas es una lacra que supone un gravísimo atentado a la dignidad de miles de personas que son captadas en sus lugares de origen con fines de explotación sexual. Entre las más de 600.000 personas que, se calcula, cruzan las fronteras internacionales víctimas de la trata, aproximadamente el 80 % son mujeres y la mitad son menores.

Por desgracia, España es uno de los principales destinos de esas personas víctimas de explotación sexual. La mayoría son mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años que provienen de Nigeria, Rumania, China, Brasil y Bolivia. Aunque no hay datos exactos, la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado identificó a 386 mujeres víctimas de trata en 2016 (33 menores de edad): 365 captadas para fines de explotación sexual, 15 para explotación laboral, tres para matrimonios forzados, dos para mendicidad y una relacionada con actividades delictivas. La trata de personas, como cada una de las formas de violencia machista, ha de ser objeto de un tratamiento integral que dé respuesta adaptada a las características especiales de esta criminalidad en lo relativo al ámbito penal, así como apoyo especializado a las víctimas. Se trata, por tanto, de un problema que requiere de medidas urgentes y eficaces: no podemos esperar más.

Siendo consciente de esta realidad, el Grupo Parlamentario Ciudadanos impulsó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que fue aprobado en octubre de 2017, que, entre otras medidas, manifestaba la necesidad de contar con una legislación específica que diese una respuesta integral a esta lacra, a la vez que recogía una serie de disposiciones lamentando «[...] el auge de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la esclavitud de nuestro tiempo y una realidad en Europa y en nuestro país. La misma supone una profunda violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona, y constituye una forma de delincuencia grave, que en la mayoría de las ocasiones implica a organizaciones delictivas a las que proporciona importantes beneficios, basados en la utilización de las personas con distintos fines de explotación.»

Asimismo, en dicho Pacto se afirmaba que «la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual ha pasado a ser prioritaria en el marco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por ser un crimen que no es neutral en términos de género» y quedó evidenciado a lo largo de las comparecencias de la Subcomisión la necesidad de avanzar en una respuesta integral y transnacional, con compromisos de cooperación con los países de origen que ya quedan recogidos en el presente Pacto. Concretamente, se incluyeron las siguientes medidas:

31. Promover que en el marco de la cooperación internacional se destinen recursos para medidas específicas contra la violencia machista dentro de los protocolos de actuación en campos de refugiados y refugiadas (trata, agresiones sexuales...).

96. Realizar un estudio sobre las nuevas realidades de la Trata y las respuestas operativas que deben implementarse para que las actuaciones policiales tengan mayor facilidad a la hora de intervenir en espacios de alto nivel de control por parte de los proxenetas, incluidas las viviendas.

194. Reforzar la persecución de oficio del delito de trata, y poner en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido explotadas.

195. Evaluar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, para que se protejan los derechos humanos básicos de las víctimas de trata a pesar de la estancia irregular.

196. Realizar un estudio sobre las nuevas realidades de la Trata y las respuestas operativas que deben implementarse para que las actuaciones policiales tengan mayor facilidad a la hora de intervenir en espacios de alto nivel de control por parte de los proxenetas, incluidas las viviendas.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Dar cumplimiento, en el plazo de seis meses, a los acuerdos recogidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género relativos a la lucha contra la trata de personas, involucrando al conjunto de las Administraciones Públicas y entidades sociales y, en particular, a presentar un Proyecto de Ley contra la Trata de Personas que dé una respuesta integral a esta lacra social.

2. Dotar de los medios necesarios a las Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicadas a la lucha contra la trata de personas, para que puedan seguir realizando con eficacia su labor en la erradicación de esta práctica criminal.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000036

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para el reconocimiento y la visibilización de los logros obtenidos por las deportistas españolas, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

El deporte femenino en nuestro país está cobrando cada vez mayor relevancia en la esfera pública. Cada vez son más los equipos deportivos, ligas y disciplinas que se organizan para que las mujeres compitan en deportes que, hasta hace pocos años, eran practicados, fundamentalmente, por hombres.

El deporte femenino español, especialmente el profesional, cuenta con un alto nivel que tiene su mejor expresión en la cantidad de triunfos olímpicos e internacionales en diferentes materias: baloncesto, bádminton, halterofilia, rugby, piragua, kayak, waterpolo, natación, atletismo, taekwondo, gimnasia rítmica, etc.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos siempre hemos defendido un mayor apoyo y visibilidad del deporte femenino, siendo claramente conscientes del impacto que la visibilidad de sus éxitos puede tener en el conjunto de la sociedad. En nuestra actividad parlamentaria ordinaria hemos presentado ya diversas iniciativas sobre aspectos y problemáticas concretas que afectan a este ámbito: falta de patrocinios, inequidad en la cuantía de los premios en relación con los homólogos masculinos o la existencia de cláusulas contractuales discriminatorias que permiten despedir a deportistas profesionales si se quedan embarazadas.

También hemos exigido que exista mayor apoyo e inversión pública en el deporte profesional femenino, la existencia de los mismos cauces para reclamar el cumplimiento de sus derechos que para los deportistas masculinos y el fomento del papel de la mujer en el deporte profesional y no profesional, aplicando medidas que garanticen la inclusión de mujeres en puestos de gestión, organización, responsabilidad deportiva y en el liderazgo de proyectos. Así mismo, hemos instado a que se desarrollen los mecanismos que sean necesarios para que los medios de comunicación públicos comiencen a realizar

una retransmisión más equitativa del deporte femenino y masculino, así como un mayor apoyo de la Corporación de Radio Televisión Española al deporte femenino. Pese a todas estas barreras que continúan existiendo a día de hoy, numerosas deportistas han alcanzado remarcables éxitos deportivos en diferentes disciplinas sin que, muchas veces, los poderes públicos reconociesen el mérito y el valor de estos logros deportivos.

En el último año hemos sido testigos de no pocos éxitos de nuestras deportistas. Por ejemplo, y aun no pudiendo nombrar a todas y cada una de ellas, encontramos a:

- Ona Carbonell, con 23 medallas, es la mujer más galardonada en los Mundiales de Natación.
- Blanca Fernández Ochoa, pionera del deporte femenino español, fue la primera española en ganar una medalla olímpica hace 27 años.
- Joana Pastrana, campeona de Europa de boxeo cuyo título ha revalidado en el año 2017.
- Carolina Marín, campeona de Europa de bádminton en 2018, revalidado por cuarta vez.
- Mireia Belmonte, medalla de plata en 400 metros estilos y 1.500 metros libres y una medalla de oro en 200 metros mariposa en el último Campeonato Mundial celebrado en Budapest.
- Garbiñe Muguruza, tenista que ha alcanzado el número 1 en el «ranking» WTA en 2017 y ganadora del torneo de Wimbledon en 2017.
- Lydia Valentín, campeona del mundo de halterofilia en 2017 y campeona de Europa en 2018, por cuarta vez.
- Sandra Sánchez, campeona de Europa de karate y tres años consecutivos número 1 del «ranking» mundial de esta disciplina.
- Maialen Chourraut, subcampeona de Europa en 2017 por equipos en K1 en aguas bravas.
- Teresa Perales, con dos medallas de plata en el Campeonato Mundial de Natación Paralímpica de 2017.
- La selección de baloncesto femenina, campeona de Europa el año pasado.
- La selección de rugby femenina, campeona de Europa en 2018, siendo el sexto de su historia.
- La selección de hockey sobre patines, campeona del mundo en 2017.
- Las nadadoras paralímpicas Sarai Gascón y Nuria Marqués, con varias medallas en los mundiales del 2017.

Y tantas otras.

Todos estos son solo algunos de los ejemplos que podemos mencionar sobre los logros deportivos que nuestras deportistas han conseguido recientemente. Un palmarés que es envidiable para cualquier país y que, en el nuestro, consideramos que no se les ha dado la relevancia que les corresponde.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos esencial que desde los poderes públicos se reconozcan y visibilicen los logros de nuestras deportistas a fin de que sus categorías tomen mayor relevancia y sean mejor conocidos por el conjunto de la ciudadanía, reconociendo también su esfuerzo y el sacrificio que les ha hecho obtener estos magníficos resultados y, por todo ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados manifiesta su reconocimiento a todas las deportistas españolas que son o fueron claro ejemplo de disciplina, perseverancia y esfuerzo, consiguiendo excelentes resultados en sus categorías, y muestra su voluntad de acoger actos de reconocimiento de sus triunfos a fin de que la sociedad española sea consciente de las grandes deportistas con las que contamos.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 127

161/000037

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para el estudio y seguimiento estadístico de la violencia sexual, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

De unos años a esta parte y, especialmente, desde 2018, la sociedad española ha vivido un nuevo despertar en lo que a la violencia que sufren las mujeres se refiere. Han sido numerosas las ocasiones en las que las mujeres —y también los hombres— han expresado su preocupación con la situación actual: se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer. El número de mujeres que sufren maltrato, las mujeres que son asesinadas a manos de sus parejas o exparejas o la trata con fines de explotación sexual, sin olvidarnos de la violencia sexual, son algunos de los motivos que más preocupan a la sociedad española.

Fruto de este contexto social, todas las fuerzas con representación parlamentaria, salvo el por aquel entonces constituido Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, firmaron en septiembre de 2017 un Pacto de Estado contra la Violencia Machista con 214 medidas; medidas que suponían un paso adelante en la lucha contra esta violencia, actualizaban el concepto de violencia sobre las mujeres al recogido en el Convenio de Estambul, y nos situaba a la cabeza de países en la lucha por su erradicación.

Sin embargo, el Pacto será papel mojado si desde las instituciones no se implementan con decisión y urgencia las medidas allí contenidas. Y entre las medidas que recoge, resultan fundamentales las relativas al seguimiento estadístico de todas las formas de violencia contra las mujeres (medidas 167 a 175), especialmente las referidas a la violencia sexual. Este tipo de violencia, que por desgracia han sufrido y sufren miles de mujeres en España, ha sido, hasta la fecha, prácticamente olvidada a la hora de elaborar estadísticas e informes oficiales.

Entre las escasas fuentes oficiales disponibles encontramos la Macroencuesta de 2015, elaborada por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género que incluyó, por primera vez, preguntas sobre violencia sexual. Y el resultado arrojó datos muy preocupantes, como que el 7,2 % de la población femenina —1,7 millones de mujeres residentes en España— ha sufrido una agresión sexual alguna vez en su vida, que el 15,2 % de las mujeres de origen extranjero en España han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, o que el 94 % de las mujeres que han sufrido agresiones sexuales por su pareja las sufrieron más de una vez.

Sin embargo, existe una ausencia total de datos oficiales en lo que a agresiones sexuales múltiples se refiere. Por ello, el Pacto establece, en su punto 167, «[...] la obligación legal de obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuenciados [...] sobre todas las formas de violencia incluidas en este Pacto [...] para su difusión, realización de estudios, impulso de investigaciones y elaboración de encuestas, con el fin de estudiar sus causas y efectos, evaluar su incidencia y su percepción social y conocer las medidas para su erradicación, así como la eficacia de las mismas». Asimismo, el punto 172 establece la obligación de «realizar estudios, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, sobre el alcance y tipología de la violencia sexual», y el 180, «acordar con la Comisión Nacional de Estadística Judicial la modificación de los boletines estadísticos judiciales sobre violencia de género (con el fin de ampliar indicadores de seguimiento de la respuesta judicial a todas las formas de violencia sobre las mujeres)», además de los puntos 182 a 188, dirigidos específicamente a la lucha contra la violencia sexual.

No puede ser que las características propias de la violencia sexual continúen siendo, en gran medida, desconocidas por las instituciones que tienen encomendada, precisamente, la adopción de medidas para su eliminación. No es aceptable que, mientras conocemos con alarma la perpetración de violaciones múltiples, sigamos sin tener datos oficiales sobre cuántas de estas agresiones se producen, cómo son los integrantes de estos grupos o su «modus operandi». Según el último Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España (2017, Ministerio del Interior), estos delitos se producen cada vez en mayor número, y del total de hechos conocidos, el 75 % resultan de la suma de los abusos sexuales y las agresiones sexuales. Pese a ello, no existe un desglose por número de autores.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 128

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a dar cumplimiento urgente, en el plazo máximo de tres meses, a las medidas relativas al tratamiento estadístico y la elaboración de informes sobre violencia sexual en España previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista elaborado y acordado por esta Cámara y, concretamente, aquellos referidos a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España, incluyendo un apartado específico relativo a las violaciones múltiples.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000038

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la mejora de la lucha contra la violencia sexual, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La violencia sexual contra las mujeres es un elemento que en numerosas ocasiones ha quedado relegada a un segundo plano por otro tipo de violencia que padecen estas. Sin embargo, los datos oficiales que existen sobre incidencia y prevalencia de este tipo de violencia sobre las mujeres en España son preocupantes.

De hecho, la falta de regulación sobre este tipo de violencia, especialmente en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ha provocado que, en este ámbito, existan graves carencias de formación, recursos y prevención por parte de las administraciones públicas.

En el año 2015, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publicó la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015. Según los datos que arroja la macroencuesta, el 13,7 % de las mujeres residentes en España de dieciséis o más años ha sufrido, a lo largo de la vida, violencia sexual por parte de parejas, exparejas o terceros. Entre las tipologías de violencia sexual más recurrentes que denuncian las encuestadas, se recoge que la agresión sexual que más han sufrido las mujeres residentes en España de dieciséis y más años ha sido la de tocamientos de tipo sexual u otro comportamiento sexual no deseado por las mujeres, con un 4,5 % sobre el total, seguido de la obligación para mantener relaciones sexuales que al final no se consumaron, con un 2,5 %, aunque para un 1,4 % de las mujeres sí que se llegó a producirse una violación. Un 2,5 % de las encuestadas contestó que intentaron obligarle a realizar cualquier tipo de acto sexual que no quería realizar.

La violencia sexual sobre las mujeres también se da dentro de relaciones sentimentales afianzadas. De las mujeres encuestadas, un 6,6 % de las mujeres que han tenido pareja manifiestan que al menos alguna de sus parejas, a lo largo de su vida, la ha obligado a mantener relaciones sexuales cuando ella no quería. Un porcentaje apenas inferior (6,3 %) se obtiene para las mujeres que han mantenido relaciones sexuales sin desearlo, por miedo a lo que su pareja les podía hacer si se negaban.

Por otra parte, también existen terceras personas afectadas por este tipo de violencia: los menores. Según la Macroencuesta, en los casos de mujeres que habían padecido violencia sexual y que tenían hijos en ese momento, el porcentaje que señala que la agresión fue presenciada o escuchada por los menores asciende al 70,3 %.

Tras este preocupante panorama, la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género que se creó en el Congreso, tuvo la oportunidad de integrar la lucha contra la violencia sexual en el pacto general contra la violencia de género. De hecho, numerosos ponentes que acudieron a la multitud de comparecencias que se celebraron señalaron deficiencias y propuestas concretas para luchar contra la violencia sexual. Entre las medidas aportadas cabe destacar la necesidad de aumentar los recursos

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 129

específicos de atención a víctimas de violencia sexual, denunciando que solo nueve de las 17 Comunidades Autónomas disponen de centros específicos. De hecho, su cantidad es altamente inferior a lo necesario, pues, por ejemplo, en Madrid, cuenta con un solo centro de crisis para víctimas de violencia sexual cuando, de acuerdo con los criterios del Consejo de Europa, debería existir uno por cada 400.000 habitantes.

Un elemento importante, que también concurre con la violencia de género, es la falta de denuncias. Apenas un 10 % de las mujeres que padecen violencia sexual lo denuncian. Otro elemento es la dificultad de constitución de prueba.

Otros de los ponentes señalaron la necesidad de que deberían revisarse las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para incluir entre sus competencias el juicio de delitos relativos a violencia y acoso sexual.

La denuncia sobre la falta de protocolos específicos para la atención a víctimas de agresiones sexuales en Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como en centros sanitarios, fue generalizada. También se señaló la falta de interés de las administraciones en la sensibilización y concienciación ante este problema, ya que ni desde la Administración General del Estado o desde las consejerías autonómicas no se han promovido campañas de sensibilización, especialmente hacia los jóvenes, donde se dan casos de violencia mediante nuevas tecnologías («sextorsión» o «porno venganzas»).

Finalmente, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en el Congreso de los Diputados contiene puntos específicos sobre la violencia sexual que consideramos positivos, aunque insuficientes si queremos abarcar de forma seria la prevención y lucha contra este tipo de violencia contra las mujeres, así como garantizar una mejor atención a las víctimas y poder perseguir a los responsables de estas agresiones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Elaborar y aprobar un Proyecto de Ley contra la Violencia Sexual, de acuerdo a las obligaciones contraídas con el Convenio de Estambul y las recomendaciones emanadas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a fin de regular e introducir medidas para combatir y erradicar la violencia sexual en todos los ámbitos.

2. Revisar las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y estudiar la posibilidad de que los delitos de violencia sexual y acoso sexual sean también enjuiciados por estos, a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. Desarrollar, junto al personal profesional sanitario, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el Consejo General del Poder Judicial y organizaciones especializadas en la atención a víctimas de violencia sexual, un Protocolo de atención integral a la víctima de la violencia sexual en todos los ámbitos, teniendo en cuenta la situación específica de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables.

4. Formar sobre violencia y acoso sexual a todos los agentes que atienden a las víctimas de violencia y acoso sexual, ya sean profesionales sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los/las Abogados/as de Oficio, agentes sociales, que quieran acceder al Turno especializado de Violencia de Género, miembros del Poder Judicial y personal de la administración que intervenga en los protocolos de actuación contra el acoso sexual.

5. Realizar una nueva Macroencuesta de violencia contra la mujer en la que se introduzcan nuevos baremos e indicadores que mejoren nuestro conocimiento sobre el alcance y la tipología de la violencia sexual, incluyendo el acoso laboral, callejero y el ciber-acoso a través de nuevas tecnologías, así como el desglose de los datos por sexo, edad, nacionalidad, diversidad funcional y relación entre la víctima y el autor.

6. Crear una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia y acoso Sexual, en la que se incluyan todos los agentes implicados, administraciones y asociaciones especializadas.

7. Llevar a cabo campañas de sensibilización contra la violencia sexual, incidiendo en las tipologías más comunes, animando y apoyando a las víctimas a trasladar estas agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En estas campañas, se deberán tener en cuenta las diferentes realidades, condiciones y características de las mujeres que se encuentran más expuestas a sufrir potencialmente este tipo de violencia a fin de adaptar los contenidos a sus necesidades.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 130

8. Llevar esas campañas de sensibilización/información a los centros escolares y universidades, a través de formación a personal docente y de charlas informativas impartidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o resto de profesionales especializados en la atención a víctimas de violencia sexual.

9. Trasladar a las administraciones autonómicas la necesidad de mejorar los recursos de atención a las mujeres que padecen violencia y acoso sexual siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa.

10. Crear Centros de crisis para víctimas de violencia sexual en todas las Comunidades Autónomas.

11. Establecer una red de puntos violetas de asesoramiento y apoyo para la prevención de la violencia y el acoso sexual en los centros educativos y universidades.

12. Inversión en nuevos dispositivos de alarma camuflados en la ropa o complementos, que envíen localización de la víctima y permitan la grabación con el objeto de constituir el elemento probatorio.

13. Activar los protocolos de actuación y prevención del acoso sexual en el ámbito laboral implantando la figura profesional y especializada de la Asesoría confidencial.

14. Informar de la obligación de denunciar de quienes por sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, como lo son los distintos delitos de violencia contra la mujer.

15. Dar cumplimiento a las medidas relativas al tratamiento estadístico y la elaboración de informes sobre violencia sexual en España previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista elaborado y acordado por esta Cámara y, concretamente, aquellos referidos a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España, incluyendo un apartado específico relativo a las violaciones múltiples.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000092

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la prohibición de los métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento de la orientación sexual o de la identidad o expresión de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Cada 26 de diciembre se conmemora en España el Día de la Despenalización de la Homosexualidad. Esta efeméride coincide con la aprobación el mismo día en 1978 de una reforma de la Ley de Peligrosidad del franquismo, entonces aún en vigor, por la que se declaró el fin de la persecución legal de la homosexualidad en nuestro país.

Dicha ley, aprobada en 1970, establecía en su artículo segundo que «serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, quienes resulten probadamente incluidos en alguno de los supuestos de este artículo y se aprecie en ellos una peligrosidad social», supuestos entre los que se incluía, junto a los «vagos habituales» a los que «realicen actos de homosexualidad». La sanción para los declarados en estado peligroso, como los homosexuales o transexuales, incluía el «internamiento en un establecimiento de reeducación» y la «prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos».

A pesar de esta despenalización, el reconocimiento de la persecución de las personas LGTBI y las medidas para su reparación todavía tardaron décadas en llegar. Así, en 2005 se aprobó la reforma del Código Civil por la que se incluía el matrimonio igualitario, en 2007 la ley por la que se reconocía la represión padecida por las personas LGTBI durante la dictadura y, desde entonces, diferentes leyes autonómicas que reconocían la discriminación específica sufrida por las personas LGTBI y articulaban medidas para su igualdad social, a la espera de que se produzca la aprobación de una ley nacional sobre esta materia.

Sin embargo, estos avances innegables en la lucha por la igualdad y contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género contrastan con la contradicción que supone que en nuestra sociedad se sigan realizando métodos, programas o terapias de aversión, conversión o

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 131

contracondicionamiento, muchas de ellas incluso forzadas o bajo presión del entorno familiar, para que las personas LGTBI modifiquen su identidad o su orientación sexual, todavía considerada una «enfermedad» o «desviación». Si bien es cierto que varias Comunidades Autónomas disponen de leyes que prohíben expresamente estos métodos, con sanciones en caso de incumplimiento —la Comunidad de Madrid fue pionera en imponer una sanción de este tipo este mismo año—, la carencia de una legislación nacional impide actuar con la eficacia debida ante este tipo de situaciones.

España no es el único país en el que se realizan estas terapias, de ahí que otros países también hayan aprobado leyes para su prohibición, siendo el más reciente de ellos Alemania, que este mismo mes acaba de aprobar un proyecto de ley en este sentido.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar las modificaciones normativas necesarias para prohibir en todo el territorio nacional la realización de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento de la orientación sexual o de la identidad o expresión de género, con sanciones en caso de incumplimiento.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2020.—**Sara Giménez Giménez**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000146

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la igualdad social de las personas mayores, LGTBI y sobre la normalización de la diversidad en centros residenciales de personas mayores para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

En abril de 2019, la asociación Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España y la Fundación 26 de diciembre: Mayores LGTBI, organizaron un encuentro sobre diversidad, denominado: «¡Mayores y diversas!», en la ciudad de Madrid. En este encuentro, se generó un espacio de debate con personas mayores representantes de la diversidad sexual y afectiva, para visibilizar y normalizar la diversidad dentro del colectivo de mayores y de la sociedad.

Una de las conclusiones del debate fue que, actualmente, en los centros residenciales existe un rechazo a las personas mayores LGTBI por parte del resto de mayores, con quien se comparte espacio en estos centros. Esta situación provoca un sentimiento de incompreensión, soledad, discriminación y marginación para muchas personas mayores LGTBI.

A pesar de los muchos avances que se han producido para la igualdad social de las personas LGTBI, las personas mayores pertenecientes a dicho colectivo aún tienen que enfrentarse en su día a día a una discriminación múltiple, ya que a la invisibilización de su sexualidad y afectividad, que sufren por razón de su edad como el resto de personas mayores, se suma la que sufren por su condición sexual, especialmente por personas de su misma generación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, en coordinación con las Comunidades Autónomas, impulsen las siguientes medidas:

1. Establezcan unas directrices básicas y comunes para la elaboración de protocolos de actuación para el colectivo de personas mayores LGTBI en centros de día y centros residenciales de titularidad pública y privada, con la finalidad de evitar situaciones de discriminación y exclusión y de garantizar que

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 132

estos mayores tengan una confianza plena en la dirección y en el personal de los centros para hacer frente a este tipo de situaciones que atengan contra su dignidad y derechos fundamentales.

2. Promuevan la formación de los profesionales que trabajan en estos centros en materia de igualdad y no discriminación del colectivo LGTBI, con la finalidad de garantizar una atención adecuada para las personas mayores LGTBI que residan en los mismos.

3. Fomenten el desarrollo de campañas de sensibilización y de talleres dirigidos tanto al personal como a las personas mayores que sean usuarias de estos centros de día y residenciales sobre la realidad social del colectivo LGTBI, en particular de las personas mayores pertenecientes al mismo, y sobre su derecho a la igualdad y la inclusión social.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2020.—**Sara Giménez Giménez**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000171

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la erradicación de la mutilación genital femenina, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Desde el año 2012, cada 6 de febrero se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, una práctica que se suele ejecutar en niñas en algún momento de sus vidas entre la infancia y la adolescencia en determinados países. En 2020, la campaña de este Día Internacional se centrará en desatar el poder de los jóvenes para la eliminación de estas prácticas, con el siguiente lema: «Poder juvenil desatado: una década de acciones aceleradas para cero genitales femeninos».

Dentro de la mutilación genital femenina se incluyen todos los procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas, sino por razones religiosas o culturales machistas. Se trata de una práctica aberrante que constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas en toda regla, en particular, de su derecho a la salud, la seguridad y la integridad física, a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte.

Los datos son muy preocupantes. Cada año se mutilan los genitales a tres millones de niñas. Se calcula que en todo el mundo hay al menos 200 millones de niñas y mujeres mutiladas y que 44 millones de niñas menores de 14 años han sufrido la ablación, principalmente en Gambia (56 %), Mauritania (54 %) e Indonesia, donde casi la mitad de niñas menores de once años han sufrido esta práctica. Y 44 millones de niñas menores de 14 años han sufrido la ablación, principalmente en Gambia (un 56 %), Mauritania (54 %) e Indonesia, donde alrededor de la mitad de las niñas de once años han padecido esta práctica.

Aunque la mutilación genital femenina es una práctica milenaria en algunas culturas, las Naciones Unidas pretenden acabar con ella en una generación, razón por la que han incluido su erradicación para el año 2030 entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En tal sentido, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han liderado conjuntamente el mayor programa a escala internacional para acelerar la eliminación de la mutilación genital femenina.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados muestra su total compromiso con las acciones lideradas por las Naciones Unidas, en particular a través de UNFPA y UNICEF, para acelerar la eliminación de la mutilación genital femenina en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), e insta al Gobierno de España a trabajar de manera coordinada en la esfera internacional con la finalidad de

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 133

contribuir a la consecución de la completa erradicación de esta práctica en todo el mundo para el año 2030.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2020.—**Sara Giménez Giménez**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

161/000066

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a promover el currículum vitae anónimo o ciego en los procesos de selección, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Cuando se forma parte de un proceso de selección para acceder a un empleo es habitual preparar un currículum vitae en el que generalmente, además de nuestros valores y experiencia profesional, incluimos datos personales y fotografía.

Esta tradicional forma de elaborar el currículum puede resultar, en ocasiones, discriminatoria. La edad, el sexo, la raza, el estado civil o incluso el aspecto físico pueden ser un factor determinante para que el empleador, influenciado por las características y circunstancias personales del candidato, contrate a uno u otro aspirante.

Para evitar este tipo de discriminaciones en los procesos de selección para el acceso a un empleo se puede optar porque, en la primera fase del proceso, los candidatos presenten un currículum anónimo o ciego. Un currículum sin referencias personales, sin nombre ni apellidos, sin especificar la edad, la raza, ni el estado civil, un currículum sin fotografía y con la única referencia de contacto de una dirección de correo electrónico objetivo y neutro, sin referencias personales. Un currículum en el que realmente se ponga en valor y resalte lo que realmente importa y debe valorarse para ejercer un trabajo, formación, experiencia y competencias para el desempeño de la labor ofertada.

Esta idea no es nueva, en 2006 en Francia se instauró como requisito obligatorio el currículum anónimo. En esta misma línea, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno del Partido Popular impulsó un proyecto de currículum vitae anónimo para la selección de personal al que se podían adherir las empresas. Empresas tan importantes como Banco Santander, Gamesa, Endesa o Ikea —entre otras— se adhirieron al proyecto.

El currículum vitae ciego ayuda a eliminar prejuicios en el acceso al empleo, resulta más justo para los trabajadores, y beneficioso para las empresas que seleccionarán a los aspirantes más cualificados, ya que muchas veces, incluso de manera inconsciente, se dejan llevar por las circunstancias personales de los candidatos por encima de su valía y aptitudes profesionales.

Este tipo de currículum no supone eliminar la entrevista personal para valorar al candidato o candidata al puesto de trabajo, sino que únicamente servirá para la primera fase del proceso de selección. La primera criba curricular se realizará atendiendo únicamente a la valía y aptitudes de los aspirantes, dejando al margen sus circunstancias personales.

Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos fundamental y prioritario continuar trabajando por un acceso al empleo inclusivo, en igualdad de posibilidades y más justo para todos. Debemos promover entre las empresas la importancia y los beneficios de seleccionar a los candidatos y candidatas en función de sus competencias y de su talento en un contexto en el que su valía y aptitudes estén por encima de cualquier otra condición.

En definitiva, debemos promover el currículum vitae ciego o anónimo a fin de favorecer la implantación de procesos de selección despersonalizados con el objetivo de garantizar un acceso al empleo más justo

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 134

para los aspirantes a un puesto de trabajo a la vez que beneficiar a las empresas con la contratación de los trabajadores más cualificados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover entre las empresas los procesos de selección de personal en los que, en su primera fase, se valore el currículum vitae anónimo o ciego de los aspirantes a un puesto de trabajo, a fin de evitar posibles discriminaciones y garantizar un acceso al empleo inclusivo, en igualdad de posibilidades y más justo para todos, a la vez que beneficiar a las empresas con la contratación de los trabajadores más cualificados.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020.—**José Ignacio Echániz Salgado**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000067

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a instaurar ficheros positivos de solvencia para el colectivo de los trabajadores autónomos, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

En el Partido Popular sabemos que el presente y el futuro de España pasa por apoyar a los emprendedores y, de manera particular, a los autónomos. Apoyar a los autónomos es apoyar la creación de empleo, ya que son responsables de uno de cada cuatro trabajadores que hay en nuestro país. Han recuperado dos de cada tres empleos que se destruyeron durante la crisis, y además lo han hecho de una manera inclusiva, haciendo que la recuperación llegue a todos, especialmente a los colectivos que más se han visto afectados por la crisis económica: las mujeres y los jóvenes.

Los últimos datos de afiliación publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social —correspondientes al mes de noviembre de 2019— son desoladores y reflejan una vez más la desaceleración en el crecimiento del colectivo de los trabajadores autónomos. Es muy grave que el último año el nuevo emprendimiento haya crecido a un ritmo tres veces menor al del año anterior, contamos con 14.955 nuevos autónomos (interanual) frente a los 43.258 que iniciaron su actividad en 2018. Desde que el PSOE llegó al Gobierno en junio de 2018 hasta la actualidad (datos de noviembre 2019), el número de autónomos se ha reducido en 4.500 trabajadores. Durante el mes de julio de 2019 se perdieron 800 autónomos al día y el mes de agosto más de 550 autónomos cada día.

A pesar de la desidia del actual Gobierno, que está afectando intensamente y de manera muy negativa al mercado laboral, España sigue siendo un país de emprendedores, y es nuestra responsabilidad favorecer e incentivar a este colectivo, apoyarles no solo en el momento del inicio de la actividad sino también adoptando medidas para la consolidación de sus negocios; eliminando trabas, administrativas y fiscales, y disminuyendo riesgos en la medida de lo posible para que cada vez haya más y mejores autónomos.

Nuestro compromiso es seguir trabajando para que el número de autónomos crezca, para que no se tenga miedo a emprender, para que la opción del autoempleo sea una opción atractiva y gratificante, reduciendo riesgos y adoptando medidas que faciliten su camino.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los trabajadores autónomos radica en conseguir financiación bancaria, ya que no tienen una nómina, ni cuentan con ingresos fijos sino que dependen del devenir diario de su negocio. Una medida que podría facilitar el acceso a crédito de este colectivo sería la instauración de ficheros positivos de solvencia.

Los ficheros de morosos permiten a las entidades bancarias, con cierta facilidad, conocer la solvencia o la existencia de deudas impagadas y alertan de los deudores que pueden suponer un riesgo. Parece lógico defender que circule con la misma facilidad la información positiva, la que informa sobre el buen comportamiento de pago de una persona y avala su reputación financiera.

Según un informe realizado por la consultora AFI (Analista Financieros Internacionales), la puesta en marcha en nuestro país de ficheros de solvencia positiva aumentaría en 30.000 millones de euros — un 20 %— el flujo de crédito anual hacia autónomos y pequeños negocios. Ambas partes resultarían beneficiadas, la banca tendría acceso a una información financiera que le serviría para identificar a un buen pagador y los autónomos cumplidores, que son la gran mayoría, tendrían más facilidades para obtener financiación.

Es cierto que se trata de una información extremadamente sensible, por lo que es imprescindible que exista total transparencia en todo momento. Es fundamental tanto la autorización del interesado como que éste sea perfectamente consciente de la información a la que está dando acceso y su alcance.

En definitiva, desde el grupo Parlamentario Popular continuamos defendiendo la puesta en marcha de un listado de solvencia positiva como medida para facilitar la financiación a los trabajadores autónomos y conseguir una mejor oferta de crédito.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

— Adoptar las medidas pertinentes para instaurar ficheros de solvencia positiva para el colectivo de trabajadores autónomos con el objetivo de facilitar la financiación a este colectivo y que puedan acceder a una mejor oferta de crédito.

— Garantizar la protección del colectivo en todo momento así como garantizar la transparencia en todo el proceso.

— Limitar el acceso a dicha información que no será libre y requerirá la autorización expresa del autónomo para que la entidad o ente pertinente pueda acceder a su informe de solvencia que en ningún momento podrá ser visto si el interesado no lo autoriza.

— Informar debidamente al trabajador autónomo del alcance de su autorización. Deberá prestarse especial atención a que el autónomo conozca de manera cierta la autorización que está otorgando y los efectos que esta tiene.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020.—**José Ignacio Echániz Salgado**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000068

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a promover la implantación de medidas que mejoren la satisfacción de los trabajadores en las empresas, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

La imparable evolución de nuestro mercado laboral está derivando en que cada vez más empresas sientan la necesidad de adaptarse a los cambios que reclama el mercado y de implementar una mayor flexibilidad laboral.

Adoptar una verdadera flexibilidad laboral supone un cambio de mentalidad para las empresas. Es cierto que las empresas van evolucionando paulatinamente, pero no podemos olvidar que tradicionalmente las empresas en nuestro país han sido empresas muy jerarquizadas, valorando por encima de otras cosas la presencia y el control del empleado. La transformación implica, entre otros factores, reordenar principios

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 136

empresariales, potenciar las ventajas de las nuevas tecnologías, proporcionar una mayor libertad al trabajador, que el trabajo presencial deje de ser una prioridad y que el objetivo del trabajo sea una mayor productividad.

Implementar estrategias que mejoren la calidad de vida de los empleados motiva al trabajador y es clave para cultivar el talento humano de la compañía. Está comprobado que la productividad de una empresa va unida al nivel de satisfacción de sus empleados; el rendimiento y la productividad aumenta cuando las personas están satisfechas con su trabajo. Además, implementar medidas que mejoran la calidad de vida genera sentido de pertenencia a la empresa y orgullo por el lugar donde se trabaja.

Recientemente, la consultoría de Recursos Humanos Adecco ha publicado los resultados de la «VIII Encuesta Adecco sobre felicidad en el trabajo», en la que han participado más de 3.500 trabajadores españoles a fin de conocer qué importancia dan a su felicidad laboral y cuáles son los factores que la impulsan. Por primera vez en las ocho ediciones de la encuesta, los españoles valoran como lo más importante para ser feliz en su trabajo disfrutar de un horario que permita conciliar vida personal y profesional, con 8.22 puntos sobre 10.

Las políticas de flexibilidad laboral aportan beneficios tanto para la empresa como para el trabajador. La empresa aumenta su productividad, ve reducido el absentismo, mejora el clima laboral, reduce costes, recibe mayor compromiso y lealtad del trabajador y facilita la retención del talento. El trabajador gana en calidad de vida, favorece la conciliación, reduce el estrés, encuentra mejor ambiente laboral, mayor motivación y aumenta su sentimiento de orgullo de pertenencia a la empresa.

Es probable que exista un reducido porcentaje de empresas que no estén capacitadas para ofrecer políticas de flexibilidad laboral, porque dependan de elementos externos o por ser inviable a causa de la propia naturaleza del negocio, pero la gran mayoría de las empresas sí cuentan con esta posibilidad. Cada empresa deberá valorar qué tipo de medidas es conveniente implantar: bolsa de horas para asuntos propios, opción al teletrabajo, opción de jornada comprimida, reducción de jornada, horarios flexibles, etc.

Una de las tendencias que se está imponiendo en cuanto a flexibilidad laboral es la movilidad geográfica. Las empresas cada vez cuentan con mayores herramientas tecnológicas a través de las cuales logran conectar clientes, proveedores y empleados. La distancia ha dejado de ser un problema para trabajar, ya que a través de la red, las partes interesadas se pueden conectar estén donde estén.

En definitiva, la flexibilidad laboral en el trabajo constituye la evolución natural hacia la que se dirige el futuro laboral. Está comprobado que el incremento de productividad empresarial va unido al nivel de satisfacción del trabajador. Es por ello, que desde el Grupo Parlamentario Popular queremos apoyar y promover la implementación de políticas de flexibilidad laboral en las empresas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la implantación de medidas que mejoren la satisfacción de los trabajadores en las empresas tales como:

- Instauración de una bolsa de horas para asuntos propios.
- Opción al teletrabajo.
- Opción de jornada comprimida.
- Reducción de jornada.
- Horarios de entrada y salida flexibles, etc.

Todo ello con el fin de potenciar la conciliación, mejorar la calidad de vida del trabajador a la vez que incrementar la productividad de la empresa.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020.—**José Ignacio Echániz Salgado**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 137

161/000069

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a retomar la creación de un grupo de trabajo para la elaboración del Libro Blanco sobre el Futuro del Trabajo, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Desde el Grupo Parlamentario Popular trabajamos por un crecimiento económico que sea intensivo en creación de empleo, incluso para que no deje a nadie atrás, que apueste por el talento como el principal activo estratégico para competir de nuestro país, y que nos permita seguir avanzando en el corazón de nuestro modelo del bienestar, que es reforzar nuestro sistema de pensiones.

Para lograr cumplir nuestros compromisos debemos seguir mejorando la competitividad de nuestro país. España es una economía cada vez más abierta al mundo, integrada en el ámbito europeo y mundial, y nuestro crecimiento no solo está asociado al de nuestros socios europeos sino también, y de manera creciente, al de los países emergentes. Nuestras políticas son también elementos fundamentales para ganar competitividad en la calidad, en la tecnología, en la innovación, en el talento, en la capacidad de adaptarse a una realidad cambiante. Dichas políticas deben, además, ayudar a fortalecer un escenario de estabilidad macroeconómica, capaz de ofrecer a los ciudadanos confianza, oportunidades y tranquilidad.

Gracias a las políticas del Gobierno del Partido Popular y al esfuerzo de todos, España consiguió salir de la recesión creando casi tres millones de puestos de trabajo desde el peor momento de la crisis y colocándose entre los países líderes en crecimiento económico.

La evolución del mundo laboral en los últimos años ha sido vertiginosa, impulsada por la crisis económica global y la evolución tecnológica y aún hoy continúa evolucionando a un ritmo frenético. Debemos continuar trabajando y adaptarnos a esos cambios constantes.

Uno de los retos fundamentales ante los que nos encontramos es potenciar el talento y adecuarlo a lo que el mundo laboral y empresarial requiere. Tenemos que continuar reciclándonos para evitar el alejamiento entre el sistema educativo y el trabajo, que provoca que haya muchas titulaciones con poca proyección laboral y muchos puestos de trabajo sin oferta formativa específica; y que cada vez haya más personas inempleables, algunos por falta de formación y motivación, y otros por tener experiencia o estudios en materias en vías de extinción.

El mundo laboral está cambiando, vemos como desaparecen profesiones y surgen otras nuevas, cómo está cambiando la búsqueda de empleo a través de las redes sociales, la forma de trabajar, etc. Por eso resulta imprescindible estudiar e identificar los riesgos y oportunidades de esta nueva perspectiva del mercado laboral que se nos plantea.

No podemos negar, por ejemplo, que la imparable evolución tecnológica ha afectado a nuestro mercado laboral. En la actualidad, uno de los sectores de mayor proyección es el sector de la tecnología y el mercado laboral español sufre un déficit de trabajadores con alta formación científico-tecnológica. Es decir, hay plazas vacantes que ningún español es capaz de cubrir por falta de formación específica.

Esto es una realidad que nuestro país no se puede permitir, no podemos dejar puestos vacantes porque no tenemos personal cualificado. Debemos invertir en formación y talento como nuestra principal arma de competencia. Es nuestra obligación continuar avanzando, adaptarnos a esta nueva revolución que se está dando en el mercado laboral. Debemos continuar trabajando y adaptarnos a esos cambios constantes. Una de las mayores fortalezas de nuestro país es el capital humano. Es nuestra responsabilidad consolidar y potenciar los conocimientos, destrezas, competencias y cualificaciones de los individuos.

Tenemos el desafío de lograr una formación de calidad que sea capaz de dar respuesta simultánea: (i) a lo que los estudiantes demandan, (ii) a lo que los trabajadores necesitan y (iii) al perfil que las empresas requieren para cubrir sus vacantes.

Es necesario estudiar y analizar el impacto de las distintas tendencias que inciden en el mercado de trabajo y la economía para valorar el efecto real sobre su futuro y señalar los principales ámbitos de acción

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 138

para asegurar a los trabajadores una transición inclusiva hacia un empleo de calidad que fortalezca sus capacidades y garantice la protección social.

Para ello, el Grupo Parlamentario Popular presentó una Proposición no de Ley que fue debatida y aprobada en la Comisión de Empleo y Seguridad Social el pasado 2 de abril de 2018 por la que instábamos al Gobierno para que en el ámbito de sus competencias y en colaboración con los interlocutores sociales, impulsara la creación de un grupo de trabajo compuesto de expertos de reconocido prestigio para la elaboración del Libro Blanco sobre el Futuro del Trabajo, a fin de contribuir a la definición de una política socio laboral que afronte los nuevos retos del mercado de trabajo.

Las circunstancias políticas que ha venido padeciendo nuestro país en los últimos tiempos ha supuesto que un proyecto que estaba en marcha haya quedado paralizado. Entendemos fundamental y prioritario que el Gobierno retome la creación de dicho grupo de trabajo para que elabore con la mayor celeridad posible el Libro Blanco sobre el Futuro del Trabajo que sirva de aportación a los debates que tendrán lugar en el marco del G-20 y de la Organización internacional del Trabajo y que contribuyan a la definición de la política socio laboral para afrontar estos nuevos retos del mercado de trabajo.

Es responsabilidad de todos proyectar un mundo de trabajo bien estructurado que alcance su máximo potencial de crecimiento económico y de empleo a fin de construir esa España abierta, moderna, plural, próspera, inclusiva, y de talento a la que aspiramos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con los interlocutores sociales, retome la creación de un grupo de trabajo compuesto de expertos de reconocido prestigio, para la elaboración del Libro Blanco sobre el Futuro del Trabajo, a fin de contribuir a la definición de una política socio laboral que afronte los nuevos retos del mercado de trabajo.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020.—**José Ignacio Echániz Salgado**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000070

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a aprobar un Plan de Apoyo al Empleo y al Emprendimiento en territorios de escasa población y zonas rurales, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

La despoblación es un fenómeno demográfico y territorial que consiste en la disminución del número de habitantes de un territorio. Generalmente se debe, bien a que las defunciones superan a los nacimientos, o bien a que la emigración supera a la inmigración, aunque también se pueden dar ambas causas simultáneamente.

La despoblación es un fenómeno que no solo afecta a nuestro país sino que lo hace igualmente a nivel europeo e incluso mundial. Los procesos de despoblación se desencadenan fundamentalmente como consecuencia de altas tasas migratorias desde las zonas rurales a los núcleos urbanos en expansión. Los motivos que llevan a tantas personas a emigrar a las ciudades radican en las mayores oportunidades laborales que existen en la ciudad, mayores salarios, mejores equipamientos o servicios, en definitiva, los emigrantes buscan mayor nivel de bienestar material.

Para la gran mayoría de los territorios de origen de estos emigrantes, la despoblación está suponiendo un grave problema hasta el punto de que hay pueblos destinados a desaparecer. El perfil de las personas que emigran a la ciudad suelen ser jóvenes y adultos activos, en edad de trabajar y de emprender, lo que

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 139

conlleva a un envejecimiento rotundo de la zona y a una gran pérdida a nivel económico. Además, ello deriva en un descenso de la natalidad ya que disminuye la población en edad reproductiva. En definitiva, el declive demográfico y el declive económico suelen ir de la mano.

Existen datos relevantes que ratifican que la despoblación es una realidad: (i) dos terceras partes de la población vivimos en una tercera parte del territorio, (ii) en 14 de las 52 provincias y ciudades autónomas de nuestro país, más del 80 % de los municipios no superan los 1.000 habitantes, (iii) muchos municipios tienen un censo en torno a los 100 empadronados, (iv) muchos municipios tienen una población altamente envejecida.

El Gobierno del Partido Popular, consciente de la problemática existente y de la importancia de apoyar a los pequeños núcleos poblacionales y zonas rurales aprobó diversas medidas como (i) el Plan 300x100, dotado con 525 millones de euros para el periodo 2018-2021, consistente en llevar fibra óptica al 100 % de los núcleos de población de España, y que contribuirá a cerrar la brecha digital y, (II) el Plan estatal de vivienda que ofrece ayudas para la rehabilitación y adquisición de viviendas en el medio rural o en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Las medidas aprobadas por el anterior Gobierno son, sin duda, muy eficaces y óptimas para la evolución y mejora de zonas rurales y de baja población, sin embargo, aún nos queda mucho trabajo por hacer. Debemos de estudiar el modo de ofrecer más facilidades, más incentivos, más atención y más ayudas a estos territorios.

Desde del Grupo Parlamentario Popular entendemos prioritario luchar contra la despoblación. Luchar contra la despoblación es trabajar por la igualdad y la libertad de los españoles que tienen que tener libertad para vivir donde quieran en igualdad de derechos y oportunidades. Debemos trabajar para reforzar los servicios y fomentar el empleo en las zonas rurales y de escasa población con la finalidad de atraer nueva población a los territorios afectados a la vez que retener la población existente. Para ello, resulta necesario impulsar la puesta en marcha de un Plan de Apoyo al Empleo y al Emprendimiento en las zonas de escasa población y rurales, a fin de facilitar la inserción laboral de los colectivos más vulnerables como los jóvenes, los parados de larga duración y los mayores de 45 años, entre otros.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Plan de Apoyo al Empleo y al Emprendimiento en territorios de escasa población y zonas rurales a fin de facilitar la inserción laboral de los más vulnerables: jóvenes, parados de larga duración y mayores de 45 años, entre otros.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020.—**José Ignacio Echániz Salgado**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000077

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que los autónomos que tengan deudas con la Seguridad Social, puedan cobrar el 50 % de la pensión y el restante 50 % se derive a amortizar la deuda, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El Partido Popular siempre ha mostrado una especial sensibilidad hacia el colectivo de los trabajadores autónomos y pymes, consciente de que solo si facilita la actividad emprendedora y empresarial se puede crear empleo. Durante las X y XI Legislaturas se aprobaron más leyes en apoyo de autónomos y emprendedores que en cualquier otro Gobierno del periodo democrático.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 140

Las medidas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular han dado sus frutos y el colectivo de trabajadores autónomos se ha visto notablemente incrementado y mejorado en los últimos años. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer.

El artículo 47 de la Ley General de la Seguridad Social establece la obligación de estar al corriente de pago de las cotizaciones para acceder a cualquier prestación. Esto significa que un trabajador autónomo que lleve toda la vida cotizando, pero que por cualquier circunstancia no ha podido hacer frente a alguna cuota de la Seguridad Social, llegado el momento de jubilarse no puede cobrar una pensión a pesar de tener los años de cotización requeridos para el cobro de la misma.

Esta situación crea una enorme indefensión al trabajador autónomo afectado que, a pesar de haber estado trabajando y cotizando, no recibe su pensión, y por lo tanto, aunque tenga voluntad de cumplir, no tiene ingresos para afrontar el pago de las cuotas debidas. Pero también supone un perjuicio para la Seguridad Social que deja de percibir el importe adeudado.

La rigidez de la legislación está suponiendo la ruina de muchos trabajadores autónomos. Se trata de un requisito injusto. Debemos valorar el enorme esfuerzo que supone el emprendimiento y reconocer e impulsar el papel clave que los trabajadores autónomos tienen en nuestra economía y en nuestro mercado laboral eliminando trabas y cargas.

Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que es fundamental flexibilizar las condiciones para que trabajadores autónomos con deudas a la Seguridad Social que tengan derecho a una pensión puedan cobrarla. No debemos estigmatizar a un autónomo porque haya tenido una mala época o un mal mes, es nuestra responsabilidad ofrecer soluciones para que puedan hacer frente a los momentos adversos. Eso es política social. Si el trabajador cobra su pensión, y tiene voluntad, podrá hacer frente a la deuda aunque sea a plazos.

En definitiva, se deben de adoptar las medidas pertinentes para que los trabajadores autónomos con derecho a pensión que tengan deudas con la Seguridad Social, puedan cobrar el 50 % de la pensión que les corresponde y el restante 50 % se derive a amortizar la deuda. Una vez liquidada la deuda con la Seguridad Social, el beneficiario cobrará íntegramente la pensión que le corresponda.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

— Adoptar las medidas pertinentes para que los autónomos con derecho a pensión que tengan deudas con la Seguridad Social puedan cobrar el 50 % de la pensión que les corresponde y el restante 50 % se destine a la amortización de su deuda.

— Una vez liquidada la deuda con la Seguridad Social el beneficiario cobrará íntegramente la pensión que le corresponda.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020.—**Carolina España Reina**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000091

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de la plena compatibilidad de la pensión de jubilación contributiva con la realización de trabajos por cuenta propia o ajena, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El aumento sostenido de la esperanza de vida que nuestro país viene experimentando durante las últimas décadas está obligando a repensar el significado que nuestra sociedad asigna a conceptos como el envejecimiento o la jubilación. Uno de los resultados de este replanteamiento es el denominado

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 141

«envejecimiento activo», que rompe el nexo que tradicionalmente se establecía entre jubilación e inactividad. De este modo, superar una determinada edad no tiene por qué conllevar necesariamente abandonar todo tipo de actividad laboral, sea por cuenta propia o ajena; al contrario, la jubilación pasa a entenderse como una situación en la que la persona beneficiaria pasa de ser, a efectos de la Seguridad Social, de contribuyente neto a beneficiario neto, sin que eso impida que pueda seguir desarrollando una actividad profesional, percibiendo nuevos ingresos por ello e incluso contribuyendo, si bien con otros parámetros, al propio sistema de la Seguridad Social.

Nuestro ordenamiento reconoce esta compatibilidad de la pensión de jubilación con la realización de trabajos por cuenta propia o ajena, que se encuentra actualmente regulada en el artículo 214 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Sin embargo, las restricciones planteadas por su redacción vigente hacen que esta compatibilidad diste de poder ejercerse en su plenitud. Así, por ejemplo, se establece que la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo «será equivalente al 50 por ciento de/importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista». De este modo, cualquier beneficiario de una pensión de jubilación que se plantease continuar en su puesto de trabajo o acceder a un nuevo empleo sabe que sufrirá una minoración drástica en la cuantía de su pensión, frente a la alternativa de demorar su percepción con los beneficios que ello conlleva, lo que acaba por desincentivar el recurso a este régimen de compatibilidad.

Solamente en el caso de los trabajadores por cuenta propia, desde la entrada en vigor de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, promovida por Ciudadanos en la XII Legislatura, se contempla la posibilidad de que el autónomo perciba el 100 por ciento de su pensión de su jubilación, eso sí, siempre que el beneficiario acredite tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, restricción que aún conlleva la exclusión de muchos casos que podrían beneficiarse de esta compatibilidad.

En todo caso, las limitaciones para el acceso a la compatibilidad no solo se remiten al importe de la cuantía. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, por ejemplo, esta compatibilidad solo se permitirá cuando la empresa no hubiese adoptado decisiones extintivas en los seis meses anteriores, con algunas excepciones, requisito que, al exigir una serie de condicionantes en la empresa donde presta sus servicios, convierte esta compatibilidad no en un derecho subjetivo del trabajador que cumpla unas determinadas condiciones, sino en una suerte de incentivo a un empleo bonificado, nada más alejado del objetivo que, entendemos, debería perseguir este régimen de compatibilidad.

Por otra parte, la aprobación del Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, supuso un reconocimiento expreso de la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación con la realización de actividades de creación artística por la que los beneficiarios perciban ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, con independencia de que por la misma actividad perciban otras remuneraciones conexas, supuso un reconocimiento expreso de la plenitud de esta compatibilidad, si bien restringida a un ámbito de aplicación muy concreto.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos estamos convencidos en la necesidad de favorecer un envejecimiento activo como expresión de una sociedad donde la edad deje de ser un condicionante ineludible de actividad y por tanto de participación e inclusión social, pasando a un enfoque donde las circunstancias personales y la voluntad de la persona interesada sean los factores determinantes, y, por ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar las modificaciones legislativas que procedan para asegurar la plena compatibilidad de la pensión de jubilación con la realización de trabajos por cuenta propia o ajena, sin que se produzca minoración alguna en la cuantía de la pensión del beneficiario que opte por esta compatibilidad y sin que resulte exigible la concurrencia de requisitos adicionales a los relacionados con el acceso a la pensión contributiva del propio trabajador, inclusive, en

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 142

el caso de los trabajadores por cuenta propia, el tener o no contratado a algún trabajador por cuenta ajena.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2020.—**Sara Giménez Giménez**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000100

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a establecer un coeficiente reductor de jubilación para el colectivo de vigilancia física de la instalación nuclear de El Cabril, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El Cabril (Córdoba) es a día de hoy el único almacén de residuos nucleares que tiene España. Las instalaciones están concebidas exclusivamente para almacenar residuos de media, baja o muy baja actividad radiactiva. La mayor parte de los residuos radiactivos generados en España son residuos de este tipo que se generan en hospitales, centros de investigación, industrias y centrales nucleares.

Según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se denominan residuos radiactivos de baja y media actividad a aquellos cuyos principales radionucleidos tienen un periodo de semidesintegración inferior o igual a treinta años (vida corta o media), aunque su radiactividad no decae hasta dentro de algunos cientos de años, pudiendo solo entonces ser comparable a los niveles de la radiactividad natural existente en la superficie de la tierra.

En el Centro de Almacenamiento de El Cabril hay treinta y dos trabajadores que, por sus labores, están expuestos a radiaciones ionizantes. Previamente a ejercer su trabajo reciben cursos de formación específica en protección radiológica, y periódicamente se les realizan los preceptivos reconocimientos médicos de acuerdo con lo establecido oficialmente al respecto.

Entre las funciones que tienen estos trabajadores se encuentran:

- (i) la conducción en solitario por pistas forestales en las que transitan animales, a cualquier hora del día o de madrugada, con el peligro de atropellos o salidas de vía por inclemencias meteorológicas dentro de la extensa Área Bajo Control del Explotador;
- (ii) ser integrantes de la Brigada Contra Incendios de primera intervención en el CCTT El Cabril;
- (iii) estar sometido a unas condiciones laborales de peligrosidad como portadores de armas, con la exigencia de pruebas de aptitud descalificatorias y
- (iv) desarrollar la actividad en un centro recogido dentro de la categoría de Infraestructuras Críticas Nucleares, entre otras. El desarrollo de su actividad laboral implica la superación de reconocimientos médicos anuales específicos en radiaciones ionizantes, siendo estos descalificantes y que se dificultan con la edad por razones biológicas.

El Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, regula el régimen jurídico y el procedimiento general que debe seguirse para establecer coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación o para la anticipación de la edad de acceso a la pensión de jubilación en aquellos grupos o actividades profesionales en las escalas, categorías o especialidades, cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. El citado Real Decreto establece una serie de criterios para reconocer si un trabajo se puede considerar peligroso (riesgo de accidentes), tóxico (riesgo por inhalación o contacto con contaminantes químicos) o penoso (exposición a ruidos, vibraciones, calor, frío, etc.) y abre la posibilidad de modificar los coeficientes reductores, o la edad mínima de jubilación, de otros colectivos no incluidos en el Real Decreto.

Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que, en virtud de las funciones que tienen encomendadas, y los trabajos que realizan en el desarrollo de las mismas, es de justicia el establecimiento

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 143

del coeficiente reductor/anticipación de edad de jubilación para el personal que presta el servicio de vigilancia y protección física en la instalación nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un coeficiente reductor de edad de jubilación por peligrosidad, toxicidad o penosidad para el personal que presta el servicio de vigilancia y protección física en la instalación nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.—**Carolina España Reina**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

161/000101

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a dispensar una protección especial a los afectados de linfedema, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El cáncer es reconocido como la epidemia silenciosa del siglo XXI, su cura es una de las búsquedas más importantes de la medicina de este siglo. Es cierto que los tratamientos son cada vez más efectivos, sin embargo, todavía no se ha encontrado una cura absoluta.

Los estudios indican que la supervivencia de los pacientes con cáncer ha aumentado de forma continua en los últimos años en todos los países europeos, también en España. Esto se debe fundamentalmente a las actividades preventivas, las campañas de diagnóstico precoz —la detección temprana sigue siendo el mejor diagnóstico— y a los avances terapéuticos.

El avance experimentado en oncología es esperanzador. Cada vez más personas superan la enfermedad y esto es una gran noticia. Si bien, muchas de estas personas que afortunadamente han sobrevivido al cáncer padecen, una vez finalizado el tratamiento, importantes secuelas crónicas.

El linfedema es una de las consecuencias crónicas derivadas del tratamiento contra el cáncer, radica en un aumento de volumen causado por la acumulación anormal del líquido en el tejido blando debido a una obstrucción en el sistema linfático. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y ningún paciente intervenido de cáncer con linfadenectomía y radioterapia está libre de peligro. Los más conocidos son los linfedemas en brazo, tórax o mama después del tratamiento del cáncer de mama; o los linfedemas en las piernas después de haber extirpado o irradiado los ganglios de la ingle o del abdomen por causas como el cáncer colorrectal, el de próstata o el de útero. Tendríamos que destacar también los linfedemas menos visibilizados o conocidos: los relacionados con la esfera otorrinolaringológica. Estos se dan en la cara y el cuello como consecuencia de tratamientos en esas zonas (faringe, garganta, lengua...).

El linfedema es una secuela que disminuye la calidad de vida de los pacientes y les afecta a nivel emocional, psicológico, físico, económico y social, por lo que debería ser tenida en cuenta a todos los niveles. Se trata de una secuela crónica, una patología evolutiva e invalidante que necesita un tratamiento específico, muchas veces no cubierto por la Seguridad Social, y unos cuidados de por vida.

En muchas ocasiones, las personas que padecen linfedema se ven impedidas para realizar las actividades de la vida diaria, no pueden coger peso, realizar movimientos repetitivos, mantenerse en la misma postura durante demasiado tiempo o realizar determinados esfuerzos físicos.

Es cierto que los Equipos de Valoración de Incapacidades, con encuadramiento orgánico y funcional en cada Dirección Provincial del INSS, son órganos especializados en la valoración de la situación de incapacidad del trabajador y sus dictámenes-propuesta suelen ser objetivos, suficientemente fundamentados y clínicamente fiables. Si bien, en el asunto que nos ocupa, y dado que a día de la fecha

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 144

el linfedema es un gran desconocido, en la gran mayoría de ocasiones a los pacientes que han superado el cáncer se les da de alta sin valorar un posible linfedema o, en su caso, se les concede una incapacidad temporal. Esto conlleva a que el trabajador tenga que volver a su puesto de trabajo, lo que agrava las secuelas de su enfermedad, teniendo que volver a recurrir a la baja laboral y haciendo esta situación insostenible tanto a nivel físico como psicológico.

Muchos de los pacientes afectados tienen que recurrir a los tribunales para que estos les concedan la incapacidad permanente total o absoluta como consecuencia del linfedema que les impide realizar su trabajo habitual. Es por ello, que desde el Grupo Popular entendemos fundamental y prioritario prestar especial atención a los enfermos que padecen linfedema como secuela crónica del cáncer, concediendo una protección especial a estas personas tanto en el ámbito emocional, psicológico, físico, económico como social.

La Seguridad Social es el principal sistema de protección social del Estado. Tiene por objetivo garantizar unas prestaciones sociales concretas e individualizadas para hacer frente a determinadas contingencias que puedan situar a una persona, y a quienes dependan de ella, en situación de necesidad y especial vulnerabilidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar todas las medidas pertinentes para que a los enfermos de cáncer que padecen como secuela de la enfermedad un linfedema:

— Se les dispense una protección especial en el ámbito emocional, psicológico, físico, económico y social.

— Que los Equipos de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social valoren con especial sensibilidad a estos pacientes para que, en el supuesto de considerarlo oportuno, se les conceda una situación de incapacidad acorde con su grado de afectación funcional.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.—**Carolina España Reina**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

161/000127

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a modificar la Ley General de la Seguridad Social para garantizar el reconocimiento del tiempo de prestación del Servicio Social de las mujeres, a efectos de cotización a la Seguridad Social, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El Servicio Social de la mujer se aprobó en virtud del Decreto número 378, de 7 de octubre de 1937, y fue posteriormente reglamentado por Decreto número 418, de 28 de noviembre del mismo año. Se configuró como un deber nacional de las mujeres españolas de entre 17 y 35 años a quienes se les exigía desempeñar ciertos servicios a la comunidad como requisito obligatorio para poder acceder a un trabajo, a un título universitario o ejercer cualquier cargo de función pública o responsabilidad política.

La duración mínima de la Prestación Social se fijó entre los tres y seis meses de cumplimiento, dependiendo de la época, y estuvo vigente desde 1937 hasta 1978 cuando fue suprimida por el Real Decreto 1914, de 19 de mayo.

El Decreto 418/1937 antes citado, que aprueba el Reglamento para la aplicación del Servicio Social de la mujer española, establece en su artículo primero que: «el Servicio Social representa la participación que la mujer española asume en la tarea de reconstruir España». Asimismo, el artículo segundo dispone que: «Las mujeres en cumplimiento activo del Servicio Social se considerarán empleadas en el servicio inmediato de España». En la misma línea, continúa el artículo 4 del Decreto donde se afirma que: «En

este sentido, las mujeres cumplidoras de algún servicio público que deseen incorporarse al Servicio Social tendrán situación idéntica a la de los varones llamados al servicio de las armas». En definitiva, la normativa establece desde 1937 que el régimen jurídico del Servicio Social es equiparable al de los varones al servicio de las armas.

En la actualidad, conforme con lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social (arts. 207, 208 y 215), el tiempo dedicado al servicio militar obligatorio o a la prestación social sustitutoria, computa a efectos de cotización a la Seguridad Social en determinados supuestos: jubilación anticipada voluntaria e involuntaria y jubilación parcial. Cabe precisar, por tanto, que no está considerado con carácter general un periodo asimilado a cotizado sino a los exclusivos efectos de alcanzar el periodo de cotización requerido para poder acceder a la jubilación anticipada o jubilación parcial, con el límite máximo de un año. Sin embargo, el tiempo que las mujeres invirtieron en el Servicio Social queda fuera de toda cotización, circunstancia que vulnera el artículo 14 de la Constitución Española de no discriminación por razón de sexo.

En este sentido se ha manifestado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en sentencia n° 1950/2016, de 11 de octubre, que ratifica lo establecido en la sentencia n° 338/2014 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ambas sentencias, entre otras, equiparan el servicio militar y la prestación social sustitutoria que cumplían los varones con el Servicio Social obligatorio de la mujer, y dictan que el tiempo dedicado al Servicio Social debe computar a efectos de jubilación en los mismos términos que el servicio militar y la prestación social sustitutoria ya que de lo contrario se estaría vulnerando el artículo 14 de nuestra Constitución.

Recientemente (diciembre de 2019) el Defensor del Pueblo se ha manifestado en estos mismos términos y ha solicitado se modifique la Ley General de la Seguridad Social para que el Servicio Social femenino compute a efectos de cotización en los mismos términos que el servicio militar masculino.

Luchar por la igualdad ha sido y es una prioridad del Grupo Popular y en materia de pensiones han existido discriminaciones históricas que hay que zanjar. Trabajamos para eliminar o disminuir la brecha de género también en las pensiones, prueba de ello es el complemento a las pensiones de las mujeres con hijos aprobado por el Gobierno del Partido Popular en la X Legislatura, que reconoce un incremento de la cuantía de la pensión del 5 %, 10 % o 15 % a las mujeres trabajadoras que han compatibilizado su carrera laboral con la maternidad.

Es de justicia equiparar, a efectos de cotización a la Seguridad Social, el servicio militar y la prestación social sustitutoria que realizaban los hombres al Servicio Social desarrollado por las mujeres, y que el tiempo dedicado por las mujeres al Servicio Social coticen también a la Seguridad Social para la pensión de jubilación, en los mismos términos. Lo contrario supone una evidente discriminación que contradice lo establecido por nuestra Constitución (art. 14 CE); además, el reconocimiento de estos meses de trabajo supondría un paso más para prevenir la brecha de género en materia de pensiones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Ley General de la Seguridad Social a fin de garantizar el reconocimiento del tiempo de prestación del Servicio Social de las mujeres, a efectos de cotización a la Seguridad Social, en los mismos supuestos y con los mismos requisitos que contempla el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social para el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2020.—**José Ignacio Echániz Salgado**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000135

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la protección

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 146

por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos al objeto de avanzar hacia su equiparación efectiva con la acción protectora por desempleo de los trabajadores por cuenta ajena, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

En España, las prestaciones sociales a favor de los trabajadores autónomos o por cuenta propia tardan en aparecer hasta la segunda mitad del siglo XX por medio del concepto novedoso de Seguridad Social, cuyo ámbito subjetivo se extiende a todos los ciudadanos, de forma que la Ley de Bases de Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963 y el Texto Articulado de la Ley de Seguridad Social de 1966 establecen, por medio de un régimen específico y especial, el reconocimiento legal al trabajador autónomo o por cuenta propia de dicha protección social. En el contexto del marco jurídico vigente el Estatuto del Trabajo Autónomo, aprobado por la Ley 20/2007, de 11 de julio, se erige en la norma básica que regula la protección social del trabajador autónomo o por cuenta propia que, hasta su promulgación, venía contenida de forma parcial en la Ley General de Seguridad Social de 1994 y de forma expresa en el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Sin embargo, el encuadramiento de los trabajadores por cuenta propia o autónomos en el ámbito de la acción protectora de la Seguridad Social no supuso que esta cobertura se extendiese a todas y cada una de las contingencias previstas para los trabajadores por cuenta ajena, ni que lo hiciese en sus mismos términos. El caso más paradigmático es el de la acción protectora por desempleo, una de las más antiguas reconocidas a los trabajadores asalariados que se ven abocados a una situación de desempleo involuntario por causa de despido u otras análogas, y que, sin embargo, no encontraba equivalencia para los trabajadores autónomos.

Ante esta situación, se encomendó un informe a un grupo de expertos para el desarrollo de un sistema de protección específica para los trabajadores autónomos ante situaciones de cese de actividad no voluntario, forzado por causas ajenas al trabajador, cuyas conclusiones se publicaron en 2008. A partir de estas conclusiones, se aprobó la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre. El contenido de dicha Ley posteriormente se integraría junto con la restante normativa reguladora de la acción protectora de la Seguridad Social reconocida a los trabajadores por cuenta propia o autónomos en el vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

De este modo, la protección por cese de actividad se configura como un sistema cuya finalidad es cubrir las situaciones de finalización de la actividad de las personas trabajadoras autónomas provocadas por una situación en todo caso involuntaria, a los efectos de asegurar una compensación adecuada a la pérdida de rentas derivadas de dicha situación durante un tiempo razonable durante el que puedan darse las circunstancias que permitan reanudar la actividad profesional o, en su defecto, iniciar una nueva actividad o acceder a un empleo por cuenta ajena. El reconocimiento de dicha situación, que debe ser debidamente justificada, lleva aparejada la percepción de una prestación económica de naturaleza contributiva, cuya duración y cuantía se determinan en función del período de cotización y la base reguladora en los meses que anteceden a la concurrencia de dicha situación de cese de actividad.

Aunque la voluntad declarada del legislador con la regulación de este sistema de protección por cese de actividad era equiparar la protección dispensada a los trabajadores autónomos con la de los trabajadores por cuenta ajena en situaciones de desempleo, lo cierto es que las características que definen cada acción protectora, más allá de las diferencias que son consustanciales entre las actividades por cuenta propia y ajena, son más que notables y difícilmente permiten hablar de una verdadera equiparación, aunque sea pretendida. Como prueba, ya solo en términos de reconocimiento del derecho a este tipo de protección son claramente dispares respecto a los trabajadores por cuenta ajena: así, de las 3.647 solicitudes por cese de actividad presentadas en 2018, tan solo se reconocieron 1.857, esto es, un 50,9 %.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que impulse las modificaciones normativas que procedan sobre el sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores por

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 147

cuenta propia o autónomos al objeto de avanzar hacia su equiparación efectiva con la acción protectora por desempleo de los trabajadores por cuenta ajena.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.—**Sara Giménez Giménez**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000147

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de un estudio que determine el impacto sobre el empleo y la competitividad de la economía española provocado por las últimas subidas del Salario Mínimo Interprofesional, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El Gobierno ha anunciado que recientemente ha llegado a un acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicatos para aumentar la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 950 euros mensuales, lo que supone un incremento del 5,5 % respecto al año anterior. Se trata de un incremento notable, aunque lejos del experimentado en 2019, cuando el SMI se incrementó un 22,3 % hasta alcanzar en 900 euros mensuales. Con esta última subida, en tan solo cuatro años el SMI habría subido un 44,5 %.

Esta subida del SMI, si bien es cierto que no afecta a las retribuciones de todos los trabajadores ocupados, supone en todo caso un notable incremento de los costes laborales de los trabajadores que cobran el salario mínimo, que suelen ser, precisamente, además, aquellos pertenecientes a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, como personas desempleadas de larga duración, mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas con discapacidad o personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Por otra parte, estos grupos de población vulnerables presentan elevados índices de desempleo, que en algunos casos adquiere naturaleza estructural, por lo que subidas del SMI como las que se vienen planteando no comportan ningún efecto en el bienestar de estas personas, mientras que en otros casos sí que puede generar una barrera para su acceso al empleo.

Además de lo anterior, se da la circunstancia de que la subida acordada se ha producido sin tan siquiera considerar el posible impacto negativo en el empleo que hubiera podido producirse por el incremento del SMI del año anterior, el mayor hasta la fecha. Un asunto no menor, teniendo en cuenta que, según las estimaciones que BBVA Research presenta en su Informe España relativo al primer semestre del presente año, la subida del SMI habría ocasionado la pérdida de 45.000 empleos. Unas cifras que se acercan a las señaladas en advertencias que en su día lanzaron tanto desde el Banco de España como desde la AIReF, y que coinciden en las valoraciones que hace no tanto hizo el ex Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, quien aseguró que desde el Gobierno se había detectado un impacto de la subida en colectivos vulnerables como las empleadas del hogar.

Los estudios anteriores también señalaban que cabría esperar que un eventual impacto perjudicial de la subida del SMI tuviese una mayor incidencia en sectores y en Comunidades Autónomas con niveles salariales más reducidos. Un extremo que ahora parece confirmarse por los últimos datos publicados por la Encuesta de Población Activa (EPA) del IV Trimestre de 2019 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tanto es así que incluso el Presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aun siendo del mismo partido que el que sustenta ahora el Gobierno de España, ha llegado a solicitar una reunión con la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para pedir explicaciones sobre los malos datos de empleo de la comunidad extremeña y sobre el papel que, en su caso, pueden haber desempeñado las últimas subidas del SMI sobre el empleo en su sector agrario.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 148

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a promover un estudio que analice el impacto que puedan haber tenido las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los últimos años sobre el empleo y la competitividad de la economía española, con referencia expresa al impacto diferenciado por sectores de actividad y por Comunidades Autónomas, así como al impacto que dichas subidas hubieran podido tener en particular sobre los grupos de población con especiales dificultades de acceso al empleo.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2020.—**Sara Giménez Giménez**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000157

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar medidas urgentes ante el incremento de inmigrantes irregulares que están llegando a las Islas Canarias, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

La Comunidad Autónoma de Canarias, siempre ha sido un territorio intercultural, acogedor, abierto y solidario y es esto precisamente lo que hace que esta extraordinaria región tenga una cultura excepcional rica y diversa.

El archipiélago canario, por su ubicación geográfica —frente a la costa noroeste de África— es frontera sur de Europa, lo que significa que tradicionalmente ha sido tierra receptora constante de migrantes. En los últimos tiempos, al haberse incrementado los controles en el Estrecho y en el Mar de Alborán, las mafias que mueven a los inmigrantes se han visto en la necesidad de desviarse hacia la ruta del Atlántico que se dirige a Canarias. Esta nueva ruta de acceso a las islas es especialmente peligrosa por la cantidad de kilómetros, y las corrientes, que deben atravesar.

Según datos publicados por el Ministerio de Interior, en 2019 llegaron a Canarias 2.698 personas en 133 cayucos y pateras, es decir, el doble que el año 2018 cuando se rescataron 1.307 personas en 69 embarcaciones. El repunte de inmigración irregular en el archipiélago es realmente grave, ya que las islas han sufrido tal saturación que carecen de medios para poder atender dignamente a los rescatados. Las ONG que acogen a los migrantes cuando desembarcan están desbordadas y los dos centros de internamiento abiertos —Hoya Fría en Tenerife y Barranco Seco en Gran Canaria— se han quedado pequeños ante el flujo de migrantes que no cesa.

La ruta atlántica supone un gran incremento del riesgo para los que se embarcan en dirección a Canarias desde Marruecos y Mauritania, pero mucho más para los procedentes de Gambia y Senegal. Las muertes se han disparado un 300 % con más de 170 fallecidos a cierre de 2019.

La política migratoria corresponde al Gobierno, según el artículo 149.1.2 de la Constitución Española. Asimismo, le corresponde a este su definición, planificación, regulación y desarrollo, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las comunidades autónomas y por las entidades locales. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado una tremenda falta de sensibilidad con un asunto tan delicado y tan dramático para quien lo sufre. Mientras desde las islas se le reclama información, medios y acción, la respuesta del Gobierno ha sido el silencio y la despreocupación.

En la actualidad y tras numerosas demandas durante meses —por parte de los diversos grupos políticos del Parlamento de Canarias— para que se celebre una cumbre de Estado para mejorar la coordinación institucional en la respuesta a la llegada de inmigrantes irregulares, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció el 23 de enero que «previsiblemente» el 31 de enero se celebraría

en las islas la cumbre de Estado que llevan meses solicitando. Pero ni siquiera pudo anunciar con certeza este compromiso del Gobierno central.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, entendemos fundamental y prioritario que se pongan en marcha medidas urgentes ante el incremento de inmigrantes irregulares que están llegando a las Islas Canarias.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

— Activar los mecanismos necesarios para poder atender de manera digna a los numerosos inmigrantes que están llegando a las costas Canarias, y colaborar de manera activa con el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos.

— Dotar al archipiélago canario de los recursos e infraestructuras necesarias para poder prestar a los migrantes tanto adultos como menores una atención adecuada conforme a la ley.

— Priorizar la lucha contra las mafias de inmigración ilegal así como el fomento del despliegue de FRONTEX para el control de las fronteras y el funcionamiento eficaz del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en toda Canarias, tanto para luchar contra las mafias como para salvar vidas.

— Reforzar los acuerdos con los países de origen, la cooperación directa con África, buscando —junto a los países empobrecidos— soluciones en origen y un desarrollo socioeconómico de la población que no les obligue a abandonar sus hogares y poner en riesgo su vida.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2020.—**Guillermo Mariscal Anaya y María Auxiliadora Pérez Díaz**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

161/000163

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de mejora de los permisos por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, para su debate en la Comisión Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Exposición de motivos

El Estado del Bienestar, a través de la Seguridad Social, debe proteger y protege a aquellos padres que tengan que cuidar de un hijo menor de edad afectado por cáncer u otra enfermedad grave cuando estos trabajen. Así, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, contempla en el artículo 37, apartado 6, párrafo tercero, lo siguiente:

«El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años. Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.»

En este sentido, para el caso de que los trabajadores que se acojan a esta reducción, tendrán derecho a una prestación de la Seguridad Social (Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 150

aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave), que compense la pérdida de salario motivada por la reducción de jornada dada la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente a los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.

En cambio, cuando ambos progenitores, adoptantes o acogedores tuvieran derecho a dicha prestación, solo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos, con independencia de poder alternarse entre ellos. En el caso de separación, nulidad o divorcio, y ante una falta de acuerdo, el derecho a la prestación se concede a quien tenga otorgada la custodia del menor y, si esta fuese compartida, al que lo solicite en primer lugar.

La cuantía de la prestación será del 100 % sobre la base reguladora establecida para la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo. Cuando el trabajador no tenga cubierta la incapacidad temporal en el régimen que deba reconocer la prestación, la base reguladora estará constituida por la base de cotización de contingencias comunes.

La finalidad de la norma y de la prestación es doble: por una parte, defender la indemnidad del menor, su integridad física, y, por otra parte, hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral de los progenitores.

Desde Ciudadanos creemos que todos los padres deben disponer de los medios necesarios para garantizar una atención y cuidado adecuados a sus hijos, especialmente cuando estos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, como sucede en el supuesto causante del permiso antes mencionado, así como estos cuidados puedan prestarse de forma corresponsable y compatible con el desarrollo de una actividad laboral.

A estos efectos, creemos necesario ampliar los permisos para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave actualmente reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, así como las prestaciones económicas reconocidas al efecto en la Ley General de la Seguridad Social y, con tal motivo, se presenta la siguiente.

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la protección social de los menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, mediante el acuerdo de las modificaciones legislativas y la adopción de las medidas que resulten precisas para:

1. Establecer que la reducción de la jornada de trabajo para cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave prevista en el artículo 37.6 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, así como el derecho a la prestación regulado a tal efecto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

a) Se pueda ejercer no solo cuando exista un ingreso hospitalario de larga duración, sino también cuando esta hospitalización no tenga margen temporal y su objeto sea el diagnóstico de la enfermedad, así como para la situación que requiera el cuidado del menor o la continuación del tratamiento médico en el domicilio.

b) Se pueda ejercer aunque el menor afectado supere la edad de dieciocho años, siempre que se viniera ejerciendo de forma ininterrumpida de manera inmediatamente anterior al cumplimiento de dicha edad por mantenerse las circunstancias que motivaron su reconocimiento original.

c) Se pueda ejercer por ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores, de forma sucesiva o simultánea, cuando el menor afectado tenga menos de doce años, permitiendo que la reducción de la jornada sea inferior al 50 % de su duración original, así como que ambos tengan derecho a la prestación correspondiente, inclusive en los casos de separación, nulidad o divorcio.

2. Regular nuevos derechos laborales en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, en términos análogos a la reducción de jornada anterior,

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 151

que puedan ejercer ambos, de forma alterna o simultánea, así como el derecho a una prestación que compense la pérdida de retribución que se produzca como consecuencia, en particular:

a) Un nuevo supuesto de suspensión del contrato de trabajo, en caso de que el menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave tenga menos de tres años, por el tiempo que se mantenga el ingreso hospitalario o el reposo domiciliario por prescripción médica y, en todo caso, en tanto el menor no supere dicha edad.

b) Un nuevo supuesto de excedencia con derecho a reserva del puesto de trabajo, en caso de que el menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave tenga menos de seis años, que pueda mantenerse en tanto el menor no supere dicha edad.

3. Habilitar todas las modificaciones legales necesarias para permitir que los trabajadores por cuenta propia o autónomos puedan acceder a la prestación de la Seguridad Social para el cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave, en igualdad de condiciones que los trabajadores por cuenta ajena, quedando, además, exentos del pago de las cuotas a la Seguridad Social mientras dure la percepción de la mencionada prestación económica, siempre y cuando durante dicha situación contraten a una persona desempleada que los sustituya en su actividad.

4. Disponer el acceso al convenio especial de la Seguridad Social a los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores para el cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave que se encuentren en situación de excedencia, distinta de la planteada en el apartado 2, o de desempleo sin derecho a prestación de naturaleza contributiva, en términos análogos a los cuidadores no profesionales o del entorno familiar de personas que tengan reconocida situación de dependencia, incluida la bonificación del importe de las cuotas sociales.

5. Coordinar con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en sus respectivos ámbitos de competencias, la puesta a disposición de los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de menores afectados por cáncer o enfermedad grave, de los servicios y medios de apoyo, atención integral y asistencia social y psicológica que precisen por razón de la enfermedad de los menores a su cargo.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2020.—**María Muñoz Vidal, Pablo Cambroner Piqueras y Marta Martín Llaguno**, Diputados.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000166

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Nestor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer la compatibilidad entre la actividad de creación artística con la inclusión en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, la percepción de pensiones no contributivas o el cobro de pensiones por incapacidad absoluta permanente, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía da cobertura legal a aquellas personas que siendo beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación de la Seguridad social desarrollen una actividad de creación artística por la que perciban ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual.

Esta nueva regulación comprendería aquellos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, pus las cantidades inferiores ya eran compatibles según la regulación establecida en el artículo 213.4 del Texto Refundido de la ley General de la Seguridad Social.

Sin embargo el citado Real Decreto, excluye de forma expresa, a los beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social que, además de desarrollar la actividad a la que nos referimos, realice cualquier otro trabajo por cuenta ajena o propia que dé lugar a su inclusión en cualquier régimen de la Seguridad Social.

Pero además de esta exclusión por expresa imposición legal, el Real Decreto deja fuera, por omisión legal, a otros colectivos que quedan fuera del amparo de su regulación y que están sufriendo las consecuencias al no poder ampararse en la compatibilidad. Así, no pueden solicitar la compatibilidad:

- Las personas incluidas en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.
- Las personas perceptoras de pensiones de la Seguridad Social no contributivas.
- Los titulares de una pensión por incapacidad absoluta permanente.

Además, en la redacción del texto no queda claro, si la compatibilidad prevista incluye tanto a los jubilados que creen y cedan sus derechos a terceros como a los que no lo hagan.

El grado de compatibilidad que establece el Real Decreto es total, así, cualquier persona que cobre una pensión de jubilación y empiece a realizar una actividad de creación artística deberá presentar un impreso de alta en la Seguridad Social en un régimen especial y, junto al mismo, aportar uno de los anexos recogidos en el Real Decreto 302/2019. Asimismo, la disposición final segunda autoriza al Titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este Real Decreto. Con todo, a día de hoy, en las Tesorerías de la Seguridad Social aún no se dispone de formularios de alta para este régimen especial.

Por último, el Real Decreto establece la obligación de permanecer dado de alta durante el tiempo que dure la actividad de creación artística, pero una vez que termine la actividad se puede dar de baja en la Seguridad Social, pues se permiten tres altas y bajas anuales. Esto puede dar lugar a problemas, pues la actividad de creación puede dar lugar a posteriores ingresos en períodos en los que no se esté dado de alta, pero por los que ya se ha cotizado, pues durante el período de creación estaba de alta. A estos efectos, podría ser interesante crear algún sistema de registro del trabajo realizado para poder demostrar que los posteriores ingresos se generaron durante un período por el cual se cotizó. Entendemos que debe interpretarse que esos ingresos posteriores no deben estar sujetos a cotizaciones en la Seguridad Social, puesto que ya se cotizó durante el momento en que se crearon.

Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reformar las normas necesarias para establecer, de forma clara y expresa, la compatibilidad entre la actividad de creación artística y las siguientes situaciones:

- a) Inclusión en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.
- b) Percepción de pensiones de la Seguridad Social no contributivas.
- c) Percepción de una pensión por incapacidad absoluta permanente.

2. Modificar la redacción del Real Decreto 302/2019 para dejar claramente establecida la compatibilidad entre jubilación y creación, tanto con cesión a terceros como sin ella.

3. Poner a disposición de las y los usuarios, en las Oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social los formularios necesarios para realizar los trámites de esta alta de forma ágil y fácil.

4. Crear algún sistema de registro que permita demostrar de forma sencilla si los ingresos generados proceden o no de períodos cotizados, y por lo tanto amparados en la compatibilidad.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2020.—**Néstor Rego Candamil**, Diputado.—**Laura Borràs Castanyer**, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 153

161/000168

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la garantía del mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social, para su debate en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones.

Exposición de motivos

El artículo 41 de la Constitución española mandata a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.

En desarrollo de este precepto, el Sistema de la Seguridad Social creado por la Ley de Bases de 1963 evolucionó con la creación de una serie de organismos que se mantienen hasta el día de hoy, entre ellos el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), encargado del reconocimiento y gestión de prestaciones económicas de naturaleza contributiva; el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), encargado de la gestión de prestaciones no contributivas, o la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), definida como «caja única del sistema de la Seguridad Social», encargada de la gestión liquidatoria y recaudatoria de todos los recursos de esta, así como de los conceptos de recaudación conjunta (formación, FOGASA, etc.) con las cuotas de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del Estado.

El funcionamiento de la Seguridad Social de acuerdo con el principio de «caja única» ha garantizado hasta nuestros días una gestión coherente e integrada del Sistema, que se ha consolidado progresivamente como una de los pilares fundamentales de nuestro Estado del Bienestar como proveedor de una garantía compensatoria de ingresos en situaciones de especial vulnerabilidad, como la jubilación, la incapacidad para el trabajo o el desempleo, a todos los españoles con independencia de su lugar de residencia.

Pese a ello, tanto el PSOE como Unidas Podemos, actuales partidos en el Gobierno de coalición, se han mostrado en diferentes ocasiones abiertos a la fragmentación de la caja única de la Seguridad Social, reclamada, entre otros, por las formaciones nacionalistas del País Vasco. De hecho, el reciente acuerdo adquirido entre el PSOE y el PNV recoge expresamente, entre otros compromisos, «proceder al traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca de las competencias estatutarias pendientes», que incluirían, como siempre ha reconocido el PNV, y como recientemente ha confirmado Idoia Mendía, actual líder los socialistas vascos del PSE-EE, socios en el gobierno de dicha comunidad, las relativas a la «gestión económica de la Seguridad Social», lo que supondría, en la práctica, la ruptura del principio de funcionamiento de caja única mantenido hasta ahora.

También Josu Erkoreka, portavoz del actual Gobierno vasco, ha afirmado recientemente que en próxima reunión de la Comisión de Transferencias prevista para este mes de febrero el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social «estará sobre la mesa seguro», reafirmando así las palabras del líder de PNV, Iñaki Ortuzar, de que dicha transferencia debería culminar antes de que acabe el presente año.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España garantizar la integridad de la caja única del Sistema de la Seguridad Social, evitando cualquier actuación tendente a su fragmentación formal o efectiva, con el objetivo de garantizar la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles en todo el territorio nacional.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2020.—**Sara Giménez Giménez**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 154

161/000180

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la publicación de un informe periódico sobre el Estado del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, para su debate en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.

Exposición de motivos

El Estado Español cuenta en la actualidad con siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), uno de ellos se encuentra en la calle Zapadores de València, por el que ya han pasado más de mil personas internas. Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y sus modificaciones posteriores, los CIE son establecimientos públicos de «carácter no penitenciario; el ingreso y estancia en los mismos tendrá únicamente finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidas en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas en su libertad ambulatoria». Los derechos de los extranjeros internados se encuentran específicamente detallados en el artículo 62 bis de dicha ley.

Desde sus inicios, la existencia de los llamados CIE ha provocado rechazo entre la ciudadanía y cada vez son más las voces que piden cerrarlos como respuesta a las denuncias reiteradas que han hecho diferentes organizaciones en defensa de los derechos humanos a raíz de los vejaciones, la opacidad y las agresiones en las medidas de custodia sobre personas que no han cometido ningún delito. Por citar dos casos recientes, en 2019 tuvimos que lamentar la muerte en julio del joven Marouane Abouobaida, en circunstancias todavía por esclarecer. Además, en diciembre de ese mismo año, gracias a las imágenes grabas con su móvil por parte de un internado en el CIE de Zapadores y que hizo públicas, pudimos corroborar las condiciones inhumanas en las que se encuentra dicho centro.

Recogiendo el clamor de la sociedad valenciana organizada por el cierre de los CIE, el pleno de las Cortes Valencianas ya aprobó en su sesión del 15 de octubre de 2015 en su resolución 35/IX a propuesta de Compromís y sin la oposición de ningún otro Grupo Parlamentario, que declaraba el territorio valenciano zona libre de centros de internamiento de extranjeros y que instaba al Gobierno central a iniciar el proceso de cierre de los centros de internamientos de extranjeros.

Por todo esto presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso insta al Gobierno a cerrar de manera inmediata los Centros de Internamiento de Extranjeros. Mientras se produce el cierre definitivo, el Gobierno:

a) Elaborará y hará público, a través del ministerio del Interior, un Informe de periodicidad anual sobre el estado de sus instalaciones y los servicios a los internos. El informe deberá contener, al menos las siguientes informaciones:

- Número de personas internas desglosado por país de origen y género;
- Motivo del internamiento;
- Días de estancia de cada persona interna;
- Número de agentes policiales que trabajan cada centro;
- Descripción y dotaciones personales y materiales del servicio de asistencia médica y sanitaria así como de los servicios de asistencia social con que cuenta el centro;
- Relación de los servicios de abogacía e interpretación realizados durante el año;
- Descripción de los protocolos específicos;
- Número de acompañamientos hechos por organizaciones no gubernamentales; así como la implementación del resto de medidas que se hayan llevado a cabo para salvaguardar los derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento jurídico a las personas extranjeras internadas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.—**Joan Baldoví Roda**, Diputado.—**Laura Borràs Castanyer**, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

Comisión de Sanidad y Consumo

161/000034

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

El documento «Aceleración mundial de las medidas para promover la salud de los adolescentes (Guía AA-HA!)», publicado en 2017 por la OMS y por la Organización Panamericana de la Salud en 2018, establece que durante años, los problemas de salud que conciernen especialmente a la adolescencia se han comprendido mal y, en algunos casos, se han pasado por alto, aunque subraya que la situación ha cambiado. En concreto, dicho documento enfatiza que invertir en la salud de los adolescentes promueve un triple dividendo de beneficios: para los adolescentes ahora, para su vida adulta en el futuro y para la generación venidera. De acuerdo con la OMS, cada adolescente tiene derecho a crecer en las mejores condiciones posibles para llegar a ser un adulto sano y responsable, contribuir a la sociedad y llevar una vida feliz y plena.

La adolescencia es un periodo especialmente vulnerable para desarrollar problemas de salud mental ya que el 50 % de los problemas mentales aparecen antes de los catorce años, tal y como recoge la OMS.

Un reciente meta-análisis sugiere una tasa de prevalencia del 9.1 % de jóvenes con problemas emocionales: 6,5 % para trastornos de ansiedad y un 2,6 % para trastornos del estado del ánimo. Estos datos epidemiológicos apuntan a que 110 millones de jóvenes sufren problemas emocionales (ansiedad y depresión) en todo el mundo. Solo en España se estima que casi medio millón de adolescentes sufren problemas emocionales, lo que representa casi el 50 % de todos los trastornos mentales.

En consecuencia, los problemas emocionales, tales como la depresión y la ansiedad, constituyen los trastornos de salud mental más comunes en niños y adolescentes (WHO, 2016) y suponen una preocupación y un reto para familias, educadores y profesionales de la salud, ocupando un lugar destacado en las investigaciones sobre trastornos psicopatológicos en niños. Actualmente la depresión es una de las enfermedades mentales que más preocupa a las autoridades sanitarias. La depresión tiene consecuencias muy negativas en todas las áreas de vida de las personas (familia, amigos, trabajo...), y es un importante problema de salud pública, que además implica un alto gasto sanitario. Además, la depresión es el mayor contribuidor al suicidio (APA, 2014), un problema que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes (informe Juventud en España, 2016). En nuestro país, diez personas mueren al día como consecuencia del suicidio.

En términos de costes, como la Guía AA-HA! recoge, los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos aparecen dentro de las cinco primeras causas de pérdida de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en los adolescentes. Los trastornos emocionales en la infancia pueden influir de forma importante en el desarrollo integral de los niños, ya que estos trastornos afectan a todas las áreas del funcionamiento humano (cognitivo, emocional, somático y comportamental).

Además, cuando ocurren en la infancia/adolescencia suelen ir asociados a consecuencias negativas (bajo rendimiento académico, problemas de relaciones familiares y sociales, problemas de salud, tentativas de suicidio, suicidio consumado...). Pese a todo ello, los problemas emocionales son los más infradetectados e infratratados. En concreto, datos de «University of Rochester Medical Center» (2018) revelan que los trastornos del estado del ánimo son los problemas de salud mental menos identificados en jóvenes. Sin detección no hay posibilidad de que los adolescentes puedan acceder a intervenciones basadas en la evidencia. Ello sitúa a los jóvenes en una situación de riesgo para el inicio de otros problemas.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 156

Como se señala en el documento elaborado por la Red para la Promoción de la Salud y Bienestar Emocional en los Jóvenes (Red PROEM), «no hay futuro sin adolescentes emocionalmente sanos» y, por ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir la promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes como una línea estratégica dentro del Plan Estatal de Investigación (reto de Salud, cambio Demográfico y Bienestar) y a desarrollar y potenciar la atención a menores de edad en la nueva Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2019.—**Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000041

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora y a la armonización de las retribuciones de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Son diversos los estudios elaborados y publicados en los últimos años en España por colegios profesionales, sociedades científicas, consultoras [...] que han puesto y ponen de manifiesto las diferencias retributivas que existen entre profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud en función de la Comunidad Autónoma en la que ejerzan su labor.

Un ejemplo reciente y representativo en este sentido es el análisis relativo a los profesionales de atención primaria elaborado por la Organización Médica Colegial que trascendió públicamente el pasado 4 de febrero.

Dicho trabajo pone de manifiesto diferencias salariales superiores a los 1.800 euros mensuales, cifra que cuantifica las inequidades que desde entidades como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería SATSE llevan tiempo planteando.

Aunque con el último Gobierno de España liderado por el Partido Popular se impulsaron medidas con las que mejorar la situación retributiva de los empleados públicos, incluidos los del Sistema Nacional de Salud —caso del acuerdo suscrito por el Ministerio de Hacienda con la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en marzo de 2018 para hacer realidad una subida salarial comprendida entre el 6,1 por ciento y el 8,8 por ciento durante el trienio 2018-2020—, las diferencias salariales existentes han provocado que los citados CESM y SATSE hayan solicitado al actual Ejecutivo que impulse medidas para que el denominado «factor territorial» no determine el salario de cada profesional.

En el mismo sentido, el pleno del Senado celebrado el 9 de mayo de 2018 dio luz verde a una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular con la que se instó al Gobierno a «promover en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un acuerdo que impulse la creación de un grupo de trabajo que estudie y analice, contando con la participación de las Comunidades Autónomas, las bases para homogeneizar las retribuciones de los profesionales de los centros dependientes del Sistema Nacional de Salud».

No obstante, desde el cambio de Ejecutivo acontecido en junio de 2018, las medidas efectivas y realistas puestas sobre la mesa por parte del Gobierno de España para hacer posible que la situación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud mejore, especialmente desde el punto de vista retributivo, han brillado por su ausencia.

Más allá de condenar al ostracismo iniciativas impulsadas entre enero de 2012 y mayo 2018 como las trece medidas acordadas en el seno del Consejo Interterritorial con las Comunidades Autónomas para

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 157

paliar el déficit de especialistas, las conclusiones alcanzadas en las conferencias médica y enfermera, o el acuerdo suscrito con los citados sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF para incrementar la estabilidad laboral de los profesionales —con la convocatoria de más de 120.000 plazas, la fijación de una tasa de reposición del cien por cien y el compromiso de reducir la temporalidad al 8 por ciento—, los responsables del Ministerio de Sanidad desde junio de 2018 se han limitado a realizar anuncios y plantear buenas intenciones que se contraponen con las negativas emitidas desde el propio Gobierno para, por ejemplo, actualizar el modelo de financiación del Sistema Nacional de Salud, algo que permitiría impulsar mejoras cuantitativas y cualitativas en las retribuciones de los profesionales sanitarios de todo el territorio, así como prosperar en términos de calidad, cohesión, equidad, seguridad y sostenibilidad.

Por todo ello, y sin perder de vista que los profesionales son el principal valor del Sistema Nacional de Salud, un activo cardinal de nuestro modelo asistencial y de la «Marca España», esencial para que los españoles seamos los que mayor esperanza de vida tenemos al nacer de Europa y para que nuestro modelo sanitario sea un referente internacional en la optimización de los recursos existentes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar en total coordinación con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial, con los colegios profesionales y con los sindicatos, para consensuar y desarrollar medidas con las que mejorar y armonizar las retribuciones de los profesionales sanitarios en todo el Sistema Nacional de Salud.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**José Ignacio Echániz Salgado y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000042

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de la seguridad del paciente en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La seguridad es, junto con la calidad, la cohesión y la equidad en la asistencia, una de las características que más se atribuyen al Sistema Nacional de Salud; una de las principales razones, junto con las referidas y otras como la optimización de los recursos disponibles, por las que el propio Sistema Nacional de Salud es considerado como un referente y un modelo a seguir en todo el mundo.

Si se profundiza en el concepto y se orienta hacia los pacientes —que son la verdadera razón de ser del sistema sanitario—, la seguridad es una «dimensión esencial de la calidad asistencial» e «implica desarrollar estrategias para reducir el daño innecesario al paciente asociado a la asistencia sanitaria». Así se contempla en la «Estrategia de Seguridad del Paciente en el Sistema Nacional de Salud 2015-2020», que tomó el testigo de la estrategia homónima iniciada en 2005 y que fue aprobada en el pleno del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el 29 de julio de 2015 con la voluntad de ser «un elemento de referencia para la mejora de la seguridad del paciente, teniendo en cuenta las evidencias disponibles de las recomendaciones efectuadas, la factibilidad de su implementación, la equidad y la sostenibilidad del sistema».

La Estrategia de Seguridad del Paciente 2015-2020 tiene la misión de «establecer objetivos y recomendaciones orientados a minimizar los riesgos asistenciales y reducir el daño de la asistencia sanitaria» y el propósito general de «mejorar la seguridad del paciente en todos los niveles y ámbitos asistenciales», contemplando para ello como líneas estratégicas el impulso de una cultura de seguridad ligada a factores humanos y organizativos, la implementación de prácticas clínicas seguras, la mejora en la gestión del riesgo y el desarrollo de sistemas de notificación y aprendizaje de los incidentes, el aumento

de la participación de los pacientes y los ciudadanos en el mantenimiento de su propia seguridad, la apuesta por la investigación en la seguridad del paciente y la participación en iniciativas internacionales.

Iniciativas de reciente aprobación, plenamente alineadas y complementarias a la Estrategia de Seguridad del Paciente 2015-2020, son el «Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes» —suscrito en 2017, contempla la colaboración para hacer efectiva la implicación de «los pacientes en la seguridad del paciente como parte esencial en la gestión de riesgos asociados a la asistencia sanitaria»—, el «Plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de la resistencia a los antibióticos» —que fue aprobado por el mencionado Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la conferencia sectorial del Ministerio de Agricultura en junio y julio de 2014, respectivamente—, el Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España —impulsado por el Ministerio de Sanidad con las sociedades científicas en 2013 para disminuir la utilización de intervenciones sanitarias innecesarias, entendiendo por innecesarias aquellas que no han demostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa, no son coste-efectivas o no son prioritarias— o la creación de la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía y de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud —creadas ambas también por el Ministerio de Sanidad en 2012 desde la total colaboración con las Comunidades Autónomas—.

No obstante, contando con que el «riesgo cero» no existe y teniendo en cuenta que no ha trascendido públicamente avance alguno en la implementación de la Estrategia de Seguridad del Paciente 2015-2020 desde el cambio en el Gobierno de España acontecido en junio de 2018, instituciones del ámbito sanitario como la Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la Sociedad Española de Calidad Asistencial y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), entre otras, manifiestan la necesidad de intensificar los trabajos y de continuar procurando avances que reduzcan los daños que puedan derivarse del diagnóstico, de la prevención, del tratamiento y del alivio de la enfermedad en la práctica asistencial hasta los índices más reducidos que resulte posible.

En el caso concreto de la OMC y de SESPAS —que cuantifican en un 9,3% los pacientes que sufren algún tipo de efecto adverso relacionado con intervenciones quirúrgicas, infecciones nosocomiales o consumo de medicamentos—, pidieron en enero de este mismo año al Gobierno, junto con Sennes, nuevas medidas para paliar el impacto de la iatrogenia y los efectos de la denominada medicina defensiva, destacando además la relevancia de que el Ejecutivo apruebe cuanto antes el baremo de daños derivados de la asistencia sanitaria para incrementar la seguridad jurídica y reducir la variabilidad en la fijación de las indemnizaciones.

Por todo ello, desde las buenas prácticas y las experiencias de éxito existentes tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y en el contexto del Día Internacional de la Seguridad del Paciente que se conmemora cada 17 de septiembre.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar nuevas medidas, en el marco de la “Estrategia de Seguridad del Paciente en el Sistema Nacional de Salud 2015-2020” y en total coordinación con las Comunidades Autónomas, las asociaciones de pacientes, los colegios profesionales y las sociedades científicas, para desarrollar la seguridad del paciente y mejorar la prevención y la reducción de los daños derivados de la asistencia sanitaria.

Junto con el aumento de los recursos destinados actualmente a la promoción de la seguridad de los pacientes, las medidas que desarrolle el Gobierno deberán incrementar el protagonismo de la propia seguridad en todas las políticas de salud; fortalecer los sistemas de investigación, información y notificación de incidentes y efectos adversos, y favorecer las evaluaciones periódicas de las iniciativas preventivas y de control, garantizando la transparencia y la publicación de los resultados que se obtengan.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**José Ignacio Echániz Salgado y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 159

161/000043

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ordenación, la gestión y la planificación de las plantillas de médicos en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Los profesionales sanitarios son el principal valor del Sistema Nacional de Salud; un activo cardinal de nuestro modelo asistencial que se encuentra entre las profesiones mejor valoradas en nuestro país según el Centro de Investigaciones Sociológicas y que obtiene calificaciones muy positivas año tras año en el «Barómetro Sanitario» que elabora el Ministerio de Sanidad.

La formación y la capacitación de nuestros profesionales sanitarios son reconocidas en todo el mundo y suponen un valor esencial no solo de nuestro sistema sanitario, sino también de la «Marca España». Es más, si nuestro modelo sanitario es destacado y tomado como un referente en el ámbito internacional es, en gran medida, por el buen hacer diario y el «expertise» de nuestros profesionales, tanto en el ámbito asistencial (especialmente relevante en zonas rurales) como desde el punto de vista de la docencia, la investigación, el desarrollo y la innovación.

Ante esta realidad, los Gobiernos del Partido Popular han dado prioridad a lo largo de los años al desarrollo de leyes y de iniciativas con las que se ha mejorado tanto la situación formativa y laboral de nuestros profesionales como la gestión y la planificación de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.

En el ámbito legislativo, destacan normas vertebradoras como la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que reguló los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a su ejercicio, así como la estructura general de su formación, su desarrollo profesional y su participación en la planificación y en la ordenación de las profesiones sanitarias, y la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, de Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud, que estableció las bases reguladoras de la relación funcional especial del personal estatutario de los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud.

Por otra parte, en lo que respecta a las iniciativas, procede hacer mención especial al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, que fue creado en 2012 y regulado por el Real Decreto 640/2014 y por la Orden SSI/1890/2017 para facilitar la planificación de las necesidades de profesionales sanitarios del Estado, coordinar las políticas de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud y mejorar la seguridad del paciente.

Además, en 2013 se suscribieron acuerdos marco con los consejos de colegios y los sindicatos de médicos, enfermeros y farmacéuticos para avanzar en ámbitos tan relevantes como el desarrollo profesional (formación, competencias...), se encargaron análisis de situación como el «Libro Blanco de los Recursos Humanos» (que el Consejo Asesor de Sanidad elaboró en 2013 en coordinación con los Consejos de Colegios Profesionales), en 2015 se puso en marcha el «Foro Profesional», y en 2017 y 2018 se lideraron y alcanzaron acuerdos con Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, tanto para reducir la temporalidad de los contratos y estabilizar el empleo, como para mejorar las retribuciones de los profesionales de forma progresiva hasta el año 2020.

Lejos de ser una actividad aislada, este trabajo fue totalmente convergente y complementario con el liderazgo ejercido en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud en materia de planificación y adecuación de plantillas, especialmente en ámbito de la profesión médica y concretamente con iniciativas como el grupo de trabajo creado y puesto en marcha a iniciativa del Ministerio de Sanidad en la sesión plenaria del Consejo Interterritorial celebrada el 8 de noviembre de 2017.

Este grupo de trabajo, que fue abalado por todas las Comunidades Autónomas con independencia del signo político de sus gobiernos, se reunió en cinco ocasiones hasta que en febrero de este año se consensuaron una serie de recomendaciones que fueron validadas por unanimidad en un nuevo pleno del Consejo Interterritorial, concretamente el celebrado el 24 de abril de 2018.

No obstante, desde junio de 2018, una vez que prosperó la moción de censura al último Gobierno de España liderado por el Partido Popular, poco ha trascendido a la opinión pública en general, y al sector sanitario en particular, acerca de las citadas recomendaciones, así como de la labor desarrollada por el Gobierno en materia de ordenación profesional y de gestión y planificación de las plantillas de médicos en el Sistema Nacional de Salud.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a avanzar en el desarrollo de las medidas consensuadas con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud comprendidas en el “Documento de síntesis del grupo de trabajo de necesidades para paliar déficits de especialistas médicos” con el objetivo de:

— Identificar las plazas y las especialidades deficitarias, así como los puestos que más cuesta cubrir en cada Comunidad Autónoma.

— Incentivar a los especialistas que trabajen en plazas de difícil cobertura, especialmente en zonas rurales, o en especialidades deficitarias para estabilizar esos puestos de trabajo.

— Motivar la mejora de la información que las Comunidades Autónomas hacen llegar al Ministerio sobre el número de contratos y plazas que realizan en cada especialidad.

— Facilitar la realización en los centros asistenciales de las Comunidades Autónomas de las prácticas necesarias para que los títulos de especialistas extracomunitarios puedan terminar el proceso de reconocimiento de la obtención de la homologación.

— Actualizar los datos de todas las Comunidades Autónomas para desarrollar la oferta pública de empleo extraordinaria de estabilización.

— Coordinar las diferentes categorías de profesionales para mejorar la coordinación de la citada oferta pública extraordinaria de empleo.

— Realizar un nuevo estudio de necesidades de especialistas que actualice los datos contemplados en el más reciente, realizado en 2012.

— Motivar la flexibilización y la agilización de la acreditación de unidades docentes para la formación sanitaria especializada.

— Valorar la situación de las incompatibilidades del personal médico en el Sistema Nacional de Salud.

— Estudiar la flexibilización de la vinculación del profesional a su centro, para que puedan atender necesidades de diversos dispositivos.

— Restablecer el modelo de formación sanitaria especializada troncal.

— Valorar una ampliación moderada de la oferta anual de formación sanitaria especializada.

— Activar la revisión de los Planes de ordenación de Recursos Humanos de las Comunidades Autónomas en lo relativo a la permanencia en el servicio activo del personal médico.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**José Ignacio Echániz Salgado y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000044

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al nuevo reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para su debate para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) es el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud (entre ellos y con la

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 161

Administración del Estado) que tiene como finalidad promover la cohesión del propio SNS mediante la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio estatal.

Creado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y constituido el 7 de abril de 1987, el Consejo Interterritorial cuenta con un reglamento interno de organización y funcionamiento regulado mediante el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS.

El reglamento vigente fue aprobado en la sesión plenaria del Consejo Interterritorial celebrada el 23 de julio de 2003. Dicho reglamento sustituyó al validado el 20 de diciembre de 1993 (incluidas las modificaciones realizadas el 15 de julio de 1996) y está conformado por 17 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final en los que se concretan cuestiones como el régimen jurídico del Consejo, su composición, sus miembros, sus funciones, su sede, la periodicidad de las convocatorias, el alcance de los acuerdos que se promuevan, la elaboración de actas y memorias sobre su actividad y, entre otras cuestiones, su funcionamiento en pleno, en comisiones y en grupos de trabajo.

Teniendo presente que en lo no previsto en el reglamento vigente, el Consejo Interterritorial se rige por lo dispuesto en materia de órganos colegiados por el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la que le otorga al propio Consejo la naturaleza de conferencia sectorial (y así se contempla en el listado de conferencias sectoriales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública actualizado en abril de 2019).

La propia Ley 40/2015 precisa en el punto uno de su artículo 147 que una conferencia sectorial es aquella que, como órgano de cooperación, «tiene una composición multilateral y un ámbito sectorial determinado», y «que reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la materia», así como «a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla».

Además, la Ley 40/2015 establece en sus artículos 148, 149, 150 y 151 las funciones, las convocatorias de reuniones, la estructura y labores de la secretaría, y las clases de decisiones que pueden adoptarse en las conferencias sectoriales, lo que supone una evolución con respecto a lo contemplado en el reglamento vigente del Consejo Interterritorial.

Sobre esta realidad, por seguridad jurídica y teniendo en cuenta el artículo 147.3 de la Ley 40/2015, según el cual «cada conferencia sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros», el reglamento del Consejo Interterritorial ha de ser renovado para adaptarse, por ejemplo, y entre otras cuestiones, a los cambios formalizados en la adopción de acuerdos (antes de la Ley 40/2015 se sustentaba en el consenso pero ahora pueden prosperar con el voto en contra de parte de las Comunidades Autónomas).

En consecuencia, el Ministerio de Sanidad inició en el seno del propio Consejo Interterritorial los trabajos para elaborar y consensuar con las Comunidades Autónomas el nuevo reglamento. Esta labor se realizó, en esencia, durante el año 2017, tanto en las sesiones plenarias del Consejo acontecidas el 21 de junio y el 8 de noviembre, como en diversas comisiones delegadas, incluida una monográfica, la celebrada el 6 de julio.

El trabajo en cuestión se prorrogó al comienzo del año 2018, cuanto menos hasta el mes de junio, cuando la moción de censura al último Gobierno del Partido Popular prosperó y se produjo el cambio en el Ejecutivo.

No obstante, desde entonces, poco ha trascendido a las Comunidades Autónomas, al sector sanitario y a la opinión pública en general sobre la voluntad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social por avanzar en la consecución del nuevo reglamento más allá de declaraciones como las realizadas a comienzos de septiembre de 2018 por la exministra Carmen Montón, según la cual «cambiar el reglamento es una magnífica oportunidad para cambiar no solo el fondo, sino también las formas».

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, desde el respeto al reparto competencial vigente y en coordinación con las Comunidades Autónomas, un nuevo reglamento interno de organización y funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que posibilite su adaptación a

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 162

la regulación sobre las conferencias sectoriales que establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**José Ignacio Echániz Salgado y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000045

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la gestión y la planificación de profesionales sanitarios en el ámbito rural, para su debate para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El contexto demográfico y epidemiológico actual de España se caracteriza por factores como el envejecimiento progresivo de la población, la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas, la pluripatología, la polimedicación, la fragilidad, la dependencia [...] Son fenómenos sociales que incrementan de forma exponencial la complejidad de la asistencia sanitaria y la consecución del principal objetivo pretendido por las administraciones sanitarias, es decir, incrementar la longevidad de las personas, así como los años vividos con salud, libres de enfermedad y con buena calidad de vida.

Esta realidad se complica en mayor medida si el foco se orienta hacia las zonas rurales y hacia los núcleos poblacionales afectados, además, por otras variables como la despoblación o la dispersión, tanto de habitantes como de profesionales sanitarios. En el segundo caso, el relativo a los profesionales, la situación suele agravarse por hechos como las carencias existentes en atención primaria, las jubilaciones o la marcha de jóvenes a otros países para hacer efectivo el ejercicio de la profesión.

Son problemas planteados por las sociedades científicas y los consejos de colegios profesionales, que plantean la necesidad de que las mencionadas administraciones sanitarias, cada cual en el ejercicio de las competencias que les atribuye la normativa vigente, implementen medidas con las que mejorar la gestión y la planificación de las plantillas en el corto, el medio y el largo plazo, así como las condiciones laborales y retributivas de los profesionales que trabajan en las citadas zonas rurales y en proceso de despoblación.

Con el ánimo de procurar avances en este sentido, el último Gobierno de España liderado por el Partido Popular impulsó medidas de distinto calado, aplicación y recorrido entre 2012 y 2018. Algunos ejemplos representativos de ello son el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (creado en 2012 y regulado por el Real Decreto 640/2014 y por la Orden SSI/89012017); los Convenios marco suscritos en 2013 con los consejos de colegios y los sindicatos de médicos, enfermeros y farmacéuticos para avanzar en ámbitos tan relevantes como el desarrollo profesional; los acuerdos alcanzados en 2017 y 2018 con Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios tanto para reducir la temporalidad de los contratos y estabilizar el empleo, como para mejorar las retribuciones de los profesionales de forma progresiva hasta el año 2020, o la inclusión del futuro de la atención primaria como uno de los cinco puntos principales del orden del día de la «Conferencia Médica» celebrada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en abril de 2018.

Estas iniciativas, sumadas a otras como la elaboración del «Libro Blanco de los Recursos Humanos» en 2013 o la creación y puesta en marcha del «Foro Profesional» en 2015, fueron complementadas desde la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Fue así en términos generales y especialmente en el ámbito de la profesión médica, donde, a instancias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se creó un grupo de trabajo en la sesión plenaria del Consejo Interterritorial celebrada el 8 de noviembre de 2017.

Este grupo de trabajo fue avalado por la totalidad de las Comunidades Autónomas y se reunió en cinco ocasiones para dar lugar en febrero de este año a una serie de recomendaciones validadas de nuevo por unanimidad en el pleno del Consejo Interterritorial del 24 de abril de 2018. Entre las indicaciones

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 163

contempladas en el «Documento de síntesis del grupo de trabajo de necesidades para paliar el déficit de especialistas médicos» se incluyeron algunas de aplicación especialmente útil en el ámbito rural y en zonas en proceso de despoblación.

En consecuencia, y con el ánimo de que el actual Gobierno lleve a la práctica estas medidas, tanto para la profesión médica como para el resto de profesiones sanitarias reconocidas como tal en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en las que su aplicación sea posible.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas y los colegios profesionales para resolver las necesidades de profesionales sanitarios en zonas rurales y afectadas por la despoblación, impulsando medidas con las que incentivar que los profesionales soliciten el desempeño de sus funciones en dichas zonas, así como para hacer posible una mejor planificación en el medio y el largo plazo.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**José Ignacio Echániz Salgado y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000046

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un plan con el que renovar el equipamiento tecnológico en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Características sociales, demográficas y epidemiológicas propias de la sociedad española actual como el envejecimiento progresivo de la población, la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas, la pluripatología, la polimedicación, la fragilidad, la dependencia[...], provocan que las necesidades asistenciales de los ciudadanos, de los pacientes, sean cada vez mayores y más complejas.

En este contexto, la contribución de las nuevas tecnologías en la consolidación y en el desarrollo de la cohesión, de la calidad, de la equidad y de la seguridad en la prestación de la asistencia sanitaria, así como de la viabilidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, es irrefutable y más representativa cada día.

A pesar de ello, y de conformidad con los datos contemplados en el estudio «Perfil tecnológico hospitalario y propuestas para la renovación de tecnologías sanitarias», que fue elaborado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (con datos de 2017) y publicado en junio de 2018, el parque tecnológico existente y activo actualmente en las Comunidades Autónomas (en equipos de alta tecnología como la tomografía axial computerizada, la resonancia magnética, los aceleradores lineales de partículas, las salas de hemodinámica, los ecógrafos, o, entre otros muchos ejemplos, las angiografías vasculares intervencionistas) es el que mayor grado de obsolescencia presenta de las últimas décadas.

Con el ánimo de dar una solución satisfactoria a esta situación, y desde una consciencia plena sobre el elevado coste que supone la renovación periódica y la actualización permanente del equipamiento tecnológico que requiere una mayoría representativa de los centros asistenciales de todo el Sistema Nacional de Salud, el último Gobierno de España liderado por el Partido Popular trabajó en el desarrollo de un plan para hacer efectiva la renovación del referido equipamiento tecnológico desde el pleno entendimiento con las Comunidades Autónomas, desde la coordinación con la industria y desde las

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 164

ventajas que ofrece la compra centralizada (aplicada con resultados satisfactorios desde 2012 en la adquisición de vacunas, de medicamentos y de productos sanitarios).

El desarrollo del plan fue entendido entonces como un avance hacia un punto de inflexión en la actualización tecnológica de nuestro sistema sanitario; como un antes y un después para agilizar en el presente y en los años venideros la incorporación de avances tecnológicos con los que hacer posible la consecución de progresos determinantes y sostenibles en la prevención, en el diagnóstico temprano y en el tratamiento de las enfermedades, al mismo tiempo que serviría para dinamizar la economía, para dar certidumbre a las empresas tecnológicas orientadas al sector sanitario y para crear (o cuanto menos consolidar) puestos de trabajo.

No obstante, desde el cambio de Gobierno acontecido en junio de 2018, y del mismo modo que sucede con otras cuestiones como el nuevo modelo de financiación del sistema sanitario o la aplicación de iniciativas con las que mejorar la ordenación profesional, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social no ha mostrado voluntad ni ha realizado anuncio alguno de poner en marcha medidas con las que favorecer la mencionada actualización del equipamiento tecnológico.

Por todo ello, desde lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y teniendo presente la incidencia que la referida obsolescencia tecnológica en el Sistema Nacional de Salud puede tener en la cohesión, en la calidad, en la equidad y en la seguridad de la asistencia, así como en el quehacer diario de los profesionales sanitarios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en total coordinación con las Comunidades Autónomas y en cooperación con los profesionales y con la industria, un plan de renovación del equipamiento tecnológico en el Sistema Nacional de Salud que, desde la compra centralizada, permita actualizar los equipos activos y existentes actualmente, así como establecer criterios de valor y de eficiencia sobre los que planificar las renovaciones, las adquisiciones y los mantenimientos que resulte necesario acometer en el futuro.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**José Ignacio Echániz Salgado y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000047

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de una estrategia nacional en humanización del Sistema Nacional de Salud, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Los ciudadanos son la principal razón de ser del Sistema Nacional de Salud, su piedra angular. De hecho, la preservación, la mejora y la promoción de su bienestar y de su salud, así como la prevención de las enfermedades y el impulso de avances en su tratamiento y rehabilitación, son la principal justificación de la existencia del sistema sanitario.

A pesar de dificultades afrontadas en los últimos años como las derivadas de la crisis presupuestaria existente en 2011 (deuda de 16.000 millones de euros con los proveedores, limitación de recursos...) o las propias de la realidad social, demográfica y epidemiológica de la sociedad española actual (caracterizada por factores como el envejecimiento progresivo de la población, la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas, la pluripatología, la polimedicación, la fragilidad o la dependencia), variables

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 165

como la esperanza de vida al nacer (que ha aumentado de los 82,4 años en 2001 hasta los 83,4 en 2017, convirtiéndonos a los españoles en los ciudadanos más longevos de Europa y en los segundo del mundo) o la satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del modelo asistencial (6,68 sobre 10 en el «Barómetro Sanitario» del Ministerio de Sanidad en 2017, es decir, la calificación más elevada de la última década), indican que la evolución experimentada por el propio sistema sanitario en los últimos años ha sido positiva.

Así, el Sistema Nacional de Salud se ha convertido en un referente internacional, en un activo cardinal de la «Marca España» y en un modelo a seguir para muchos países de todo el mundo tanto por su calidad asistencial, como por la optimización de los recursos disponibles que posibilita. Medidas impulsadas por el último Gobierno del Partido Popular como, por ejemplo, la compra centralizada de medicamentos, vacunas y productos sanitarios (que hicieron posible la consecución de ahorros superiores a los 200 millones de euros entre 2012 y 2017), el impulso de estrategias nacionales (como las relativas a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el abordaje de la cronicidad), la puesta en marcha de la integración sociosanitaria en Ceuta y Melilla (mediante la coordinación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y el Instituto Nacional de Mayores y Servicios Sociales) o el proyecto de medicina personalizada y de precisión iniciado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en total consonancia con el Instituto de Salud Carlos III (para determinar la susceptibilidad de cada persona a determinadas enfermedades, precisar estrategias de prevención y prescribir los tratamientos más apropiados a las necesidades particulares de cada cual) han favorecido esta tendencia positiva.

No obstante, las necesidades en salud de los ciudadanos evolucionan de forma constante y son cada vez mayores y más complejas, por lo que la adaptación del modelo asistencial ha de ser permanente para hacer posible que los propios ciudadanos accedan a la asistencia más adecuada a sus necesidades dónde y cuándo la precisen y que puedan hacerlo, además, de forma humanizada.

Esta dinamización ha de procurarse, de acuerdo con la definición que la Real Academia Española de la Lengua hace de «humanizar», desde una atención cada vez más humana, familiar y afable, que se ajuste en mayor medida a la realidad social del paciente y su familia, y que procure compensar la fragilidad y la vulnerabilidad propias de los procesos de enfermedad desde el refuerzo de la dignidad del enfermo.

En el pleno ejercicio de sus competencias, y con antecedentes como el «Plan de Humanización de la Asistencia Hospitalaria» elaborado por el Instituto Nacional de la Salud (el extinto Insalud) en 1984, las Comunidades Autónomas han impulsado medidas en los últimos años para desarrollar avances en el ámbito de la humanización, siendo ejemplos representativos de ello Castilla-La Mancha, Aragón, la Región de Murcia o la Comunidad de Madrid, que en 2016 impulsó un plan de humanización con el que progresar en cuestiones como la empatía o la comunicación asertiva.

En una línea de trabajo similar, y procurando en todo momento la consecución de mejoras en el ámbito de la proactividad, la coparticipación y la corresponsabilidad del ciudadano en la gestión de su salud y de sus enfermedades, el último Gobierno de España desarrolló medidas como la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía en 2012, la página web de estilos de vida saludables (<http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/>) en 2015 o el acuerdo marco de colaboración con la Plataforma de Organizaciones de Pacientes suscrito en octubre de 2017.

No obstante, y con el objetivo tanto de impulsar las medidas citadas en el párrafo anterior, como de armonizar las diseñadas e implementadas por las Comunidades Autónomas y de hacer posible un Sistema Nacional de Salud plenamente focalizado, pensado y concebido desde todos los puntos de vista (profesionales, nuevas tecnologías, incorporación de innovaciones terapéuticas, organización, estructuras...) para las personas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, los colegios profesionales, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes, una estrategia de humanización del Sistema Nacional de Salud que, desde el respeto a la autonomía del paciente, posibilite una atención integral y personalizada que tenga en cuenta las necesidades clínicas, biológicas, sociales, emocionales y psicológicas de cada persona, y que se caracterice por el acceso a

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 166

una información accesible, comprensible y adaptada a cada ciudadano sobre su estado de salud; un trato amable, respetuoso y empático, y un entorno asistencial armonioso y agradable.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**José Ignacio Echániz Salgado y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000048

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la financiación del Sistema Nacional de Salud, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La reforma del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas ha sido y es una cuestión prioritaria para al Grupo Parlamentario Popular. Es así por varias premisas. La primera consiste en que el modelo aprobado por el Gobierno socialista en el año 2009 no contó con el consenso necesario. La segunda se sustenta en el riesgo de quiebra en varias Comunidades Autónomas y en el crítico desequilibrio fiscal existente en 2011, que impidió que entonces pudiera acometerse la reforma del modelo. Y la tercera se basa en que en 2017, una vez que saneó las cuentas, el Gobierno del Partido Popular convocó la Conferencia de Presidentes Autonómicos, constituyó la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica, remitió el informe elaborado por las Comunidades Autónomas y conformó el Comité Técnico Permanente de Evaluación con el objetivo de proponer las modificaciones sobre el modelo que se considerasen pertinentes.

Fruto de esta iniciativa, debatida durante la sesión plenaria celebrada el 11 de septiembre de 2018, el Congreso de los Diputados acordó instar al Gobierno a presentar, coincidiendo con el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, una revisión del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Haciendas Locales que se basase en el informe de los expertos mencionados y garantizase la igualdad de los ciudadanos en el acceso efectivo a los servicios públicos esenciales, la equidad en el reparto de recursos entre las Comunidades Autónomas, la transparencia en el mecanismo de distribución y la corresponsabilidad fiscal para delimitar los servicios comunes garantizados por la financiación del sistema de otros servicios adicionales que deban ser financiados por las Comunidades Autónomas.

Sobre este acuerdo, y el consecuente nivel de cumplimiento que supone para el Gobierno, cabe plantear la necesidad y la relevancia de que el propio Ejecutivo preste especial atención y concrete los pormenores de ese nuevo modelo de financiación para los pilares que conforman el Estado del Bienestar, especialmente de uno de sus elementos vertebradores: la Sanidad.

Partiendo de que, al amparo de las previsiones constitucionales y de los respectivos Estatutos de Autonomía, todas las Comunidades Autónomas son titulares de las competencias en materia de sanidad (proceso completado mediante la Ley 21/2001, de 27 de diciembre), cabe destacar que, de acuerdo con los datos del «Informe Anual del Sistema Nacional de Salud» que elabora el Ministerio de Sanidad, las propias Comunidades Autónomas invierten cada año una media superior al 45 por ciento de sus presupuestos a consolidar y desarrollar sus servicios de salud.

Dada esta elevada proporción, elementos sociales, demográficos y epidemiológicos como el progresivo envejecimiento de la población, la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas, la pluripatología, la polimedicación o la incorporación de los avances tecnológicos y las innovaciones terapéuticas con los que mejorar la prevención y el tratamiento de las patologías, entre otros fenómenos, hacen necesaria una actualización de los recursos asignados a las Comunidades Autónomas para que cuenten con un presupuesto adecuado con el que garantizar la prestación de una asistencia sanitaria segura y de calidad capaz de responder a las necesidades reales de los ciudadanos.

Precisamente con el objetivo de incrementar los fondos disponibles para los gobiernos autonómicos, el último Gobierno del Partido Popular incrementó con 5.300 millones de euros adicionales la financiación de las Comunidades Autónomas en los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, hizo lo propio

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 167

con más de 4.200 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, ahora prorrogados, e impulsó, además, diversas medidas con las que favorecer la optimización de los recursos existentes, caso, por ejemplo, de la compra centralizada de medicamentos, de productos sanitarios y de vacunas, que hicieron posible la consecución de ahorros por valor de 200 millones de euros en los últimos años.

A pesar de ello, las Comunidades Autónomas reiteran desde hace años la necesidad de actualizar el modelo de financiación, esgrimiendo como uno de los argumentos principales el gasto en sanidad (un ejemplo destacado de ello fue la «Declaración Institucional conjunta de los Gobiernos de Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y de los fondos de la Política de Cohesión Europea» del 10 de septiembre de 2018).

En respuesta a esta solicitud, el último Gobierno del Partido Popular se comprometió a convocar un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud monográfico sobre la cuestión. Este compromiso fue adquirido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la sesión plenaria del propio Consejo Interterritorial celebrada el 24 de abril de 2018. No obstante, una vez que prosperó la moción de censura en mayo, el citado pleno no llegó a celebrarse y desde entonces el Gobierno de España no ha retomado la convocatoria ni ha precisado cómo tiene previsto mejorar la financiación del Sistema Nacional de Salud.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar de forma monográfica en el Consejo Interterritorial las necesidades de financiación del Sistema Nacional de Salud.

Como resultado de dicho Pleno, y de los trabajos que se decidan emprender de forma consensuada y en total coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas, el Gobierno elaborará un documento que precise las necesidades existentes.

Posteriormente elevará dicho informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y tomará las medidas oportunas para que el modelo de financiación autonómica contemple una dotación económica adecuada para atender las necesidades reales del sistema sanitario dentro del marco presupuestario vigente.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**José Ignacio Echániz Salgado y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000065

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Convenio marco con las organizaciones de pacientes, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Los pacientes son la verdadera razón de ser del Sistema Nacional de Salud (SNS). Si bien los profesionales son el principal activo del modelo asistencial y la industria —tanto farmacéutica como tecnológica— un aliado estratégico, son las personas —la consolidación y el desarrollo de su salud, de su longevidad y de su bienestar— las que realmente dan sentido al sistema sanitario.

El posicionamiento habitual de los ciudadanos ante la preservación de su salud y la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de sus enfermedades ha sido tradicionalmente reactiva, es decir, ligada a prescripciones e indicaciones realizadas por las administraciones, las instituciones y los profesionales sanitarios.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 168

No obstante, la evolución social, demográfica y epidemiológica experimentada en España en los últimos años requiere cambios en el papel desempeñado por las personas en el cuidado de su propia salud.

Si bien nuestro país es un referente internacional por motivos como ser los líderes en términos de esperanza de vida al nacer en la Unión Europea —y segundos del mundo solo por detrás de Japón con más de 83 años, aunque les superaremos en 2040, según la Universidad de Washington, con 85,6 años—, fenómenos como el envejecimiento progresivo de la población, la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas, la incidencia ascendente de la pluripatología, de la polimedicación, de la fragilidad, de la dependencia..., hacen necesario un cambio de actitud hacia la proactividad, la coparticipación y la corresponsabilidad de cada cual en la promoción de su calidad de vida.

Con el objetivo de procurar avances en este sentido, el último Gobierno de España liderado por el Partido Popular suscribió en octubre de 2017 un convenio marco de colaboración con la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.

El objetivo principal del convenio era mejorar la participación de los ciudadanos en ámbitos estratégicos para mejorar la calidad asistencial, la equidad y cohesión del sistema, así como el empoderamiento de los propios ciudadanos y sus cuidadores en el mejor manejo y control de sus enfermedades y en el uso responsable de los recursos sanitarios.

El convenio marco, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del 27 de diciembre de 2017 y sustentado en el artículo 43 de la Constitución y en distintas normas vertebradoras del SNS como la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se estructuró en tres ejes.

El primero de los ejes se centró en promocionar los derechos de participación, información y consulta en el SNS de los pacientes, sus familiares y cuidadores en la gestión de la enfermedad, la promoción de la salud y la prevención de patologías. Definidas de la «a» a la «p», fueron áreas destacadas de este primer eje: facilitar la información y la formación, participar en el comité consultivo del Consejo Interterritorial, formular propuestas de carácter orientador al Ministerio, estimular la participación del paciente en las políticas sanitarias, colaborar con las agencias evaluadoras de tecnología, implicar al paciente en su seguridad, impulsar la coordinación sociosanitaria[...] entre otras.

El segundo eje priorizó la consecución del Pacto de Estado por la Sanidad y estableció la relevancia de favorecer el diálogo para llegar a un gran acuerdo en el que se puedan definir y concretar mejoras del SNS con las aportaciones de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.

El tercer y último eje se focalizó en las medidas de colaboración, es decir, en el desarrollo de acciones con las que abordar las líneas de actuación del convenio marco, contemplando la posibilidad de constituir grupos de trabajo específicos para hacerlo posible.

El acuerdo, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, desarrolló la línea de los acuerdos marco rubricados en 2013 con los médicos, los enfermeros y los farmacéuticos, así como en 2015, 2016 y 2017 con la industria farmacéutica innovadora. Tenía una duración temporal de un año desde su firma y disponía de una comisión de seguimiento presidida de forma aleatoria por el Ministerio y la Plataforma con turnos rotatorios de seis meses.

No obstante, la moción de censura presentada en mayo de 2018 provocó un cambio en el Gobierno de España cuyos efectos en el cumplimiento y la aplicación práctica del convenio marco difícilmente pudieron ser más negativos.

Tal y como expuso el Ejecutivo en diciembre de 2018 mediante una respuesta a una pregunta escrita planteada desde el Congreso de los Diputados, el Convenio «expiró por la carencia de prórroga expresa». Posteriormente, también en la referida respuesta, el Gobierno expuso literalmente: «Cabe valorar de manera positiva la posibilidad de firma de un Convenio nuevo en el que se incluyan a todas las organizaciones de pacientes».

Ante la falta de avances tangibles en la consecución del acuerdo desde el Gobierno, o por lo menos la ausencia de información pública sobre esos posibles avances.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un Convenio marco de colaboración con las principales organizaciones de pacientes que desarrolle la proactividad, la coparticipación y la

corresponsabilidad de los propios pacientes en el cuidado de su salud; que impulse su formación y capacitación en la preservación de su bienestar y su calidad de vida, y que desarrolle su participación en el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020.—**José Ignacio Echániz Salgado**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000072

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, hace referencia en su disposición adicional tercera al baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria.

La mencionada disposición adicional establece literalmente que «el sistema de valoración regulado en esta Ley servirá como referencia para una futura regulación del baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria».

En consecuencia, el último Gobierno de España liderado por el Partido Popular impulsó distintas líneas de trabajo para hacer realidad el referido baremo. La más destacada fue, seguramente, la creación y puesta en funcionamiento del comité de expertos para elaborar un borrador de texto normativo y del baremo en cuestión.

Conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el comité fue creado a modo de grupo de trabajo (con tres ámbitos: jurídico, pericial y actuarial/asegurador) mediante Orden por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 11 de enero de 2018.

Liderado desde la Dirección General de Ordenación Profesional adscrita a la Secretaría General de Sanidad y Consumo del citado Ministerio de Sanidad, el comité fue conformado por dieciséis expertos en materia de derecho sanitario, responsabilidad y aseguramiento, valoración del daño corporal, cálculo actuarial y mercado asegurador, y resolución judicial y extrajudicial de conflictos. A finales de abril de 2018, desde la confidencialidad y la declaración de conflictos de intereses, el comité se había reunido en ocho ocasiones.

Partiendo del trabajo elaborado, la previsión barajada entonces era contar con el baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria en el corto plazo. No obstante, desde junio de 2018, una vez que prosperó la moción de censura propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, los plazos se vieron trastocados.

Poca información trascendió sobre el baremo a partir del cambio de Gobierno y hubo que esperar hasta noviembre del pasado año para que trascendiese públicamente información al respecto, concretamente cuando el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social informó al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre el trabajo desarrollado por el comité de expertos y solicitó paralelamente la participación de las Comunidades Autónomas en la elaboración del propio baremo.

Transcurridos los meses, poco o nada se ha conocido sobre la evolución experimentada por el trabajo desempeñado por el comité y las aportaciones realizadas por las Comunidades Autónomas para la culminación del mencionado baremo.

Por ello, y desde la necesidad de contar con el baremo por su relevancia para impulsar la calidad, la cohesión, la equidad y la seguridad, planteada tanto desde el sector sanitario como desde el ámbito jurídico.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 170

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a concluir la elaboración del baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria, con la finalidad de contribuir a una mayor seguridad jurídica en el Sistema Nacional de Salud, así como para impulsar la transparencia, la reducción de la litigiosidad y la agilidad en la asignación de las indemnizaciones.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020.—**José Ignacio Echániz Salgado**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000073

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la contratación centralizada de servicios en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La estimulación de la contratación centralizada fue una de las medidas impulsadas por el último Gobierno del Partido Popular en favor de la generación de ahorros, así como de la racionalización de los recursos existentes. Esta iniciativa, dirigida al conjunto de las Administraciones Públicas, pero también disponible para la empresa privada (especialmente para las pequeñas y medianas empresas), procuró avances en la reducción de los precios, en la transparencia de las contrataciones, en la limitación de los plazos de tramitación de las licitaciones y en la minoración de los costes administrativos.

Esta práctica fue coordinada por el Ministerio de Hacienda y estaba abierta a todos los sectores, siendo el de la Sanidad un ejemplo representativo de su aplicación por la actividad desarrollada a partir del año 2012.

La compra centralizada de medicamentos, de vacunas y de productos sanitarios fue una de las principales iniciativas que el Ejecutivo del Partido Popular puso en práctica desde el inicio de la X Legislatura para promover la optimización de los recursos disponibles en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Como resultado de esta medida, y junto con otros avances generados en materia de calidad y de equidad, así como de estabilidad para el mercado y de planificación y garantía de suministros para el sistema, la eficiencia y el ahorro generados en el SNS entre 2012 y 2018 superó los 200 millones de euros, de los que más de 130 millones de euros corresponden al ámbito de las vacunas (acuerdos marco tutelados por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación) y más de 70 millones de euros al espacio de los medicamentos y los productos sanitarios (acuerdos marco controlados desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que en el año 2016 creó y puso en marcha el Portal de contratación centralizada con miras al SNS).

En el mismo sentido, a partir de los buenos resultados cosechados en los últimos años, así como de una enmienda registrada por el Grupo Parlamentario Popular durante la tramitación parlamentaria, se decidió avanzar dando un paso más mediante la inclusión en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de una disposición adicional, concretamente la vigésima séptima, por la que la adquisición centralizada se amplía a la contratación de servicios.

En su literalidad, el punto uno de la mencionada disposición adicional establece que «mediante Orden del Ministerio de Sanidad (entonces de Servicios Sociales e Igualdad), previo informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda (y,

en ese momento, de Función Pública), se podrá declarar de adquisición centralizada los suministros de medicamentos y productos sanitarios, así como los servicios sanitarios, que se contraten en el ámbito estatal por los diferentes órganos y organismos».

Esta contratación «deberá efectuarse a través del Ministerio de Sanidad», que, de acuerdo con el punto tres de la mencionada disposición adicional, podrá «encomendar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada, con miras al Sistema Nacional de Salud, para todos o algunos de los medicamentos, productos y servicios sanitarios».

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar en coordinación con las Comunidades Autónomas la contratación centralizada de servicios en el Sistema Nacional de Salud con el objetivo de continuar desarrollando la optimización de recursos alcanzada mediante la adquisición centralizada de medicamentos, de vacunas y de productos sanitarios.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020.—**José Ignacio Echániz Salgado**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000074

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la sustitución de las líneas telefónicas 901 y 902 por líneas gratuitas en el suministro de información sobre servicios públicos, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La protección de los consumidores y los usuarios se convirtió en un principio básico real en España con la Constitución de 1978, cuyo artículo 51 establece que el Estado ha de asegurar a los ciudadanos sus derechos y libertades, precisamente, como consumidores.

El mencionado artículo de la Carta Magna insta a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y los usuarios, a proteger su seguridad, su salud y sus intereses económicos, a promover la información y la educación, y a fomentar las asociaciones así como a escucharlas en las cuestiones que puedan afectarles.

El citado artículo 51 está desarrollado actualmente mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, así como por las normas de protección promulgadas por las Comunidades Autónomas en función de sus respectivas competencias, y por otras normativas de calado sectorial que hacen referencia a productos o servicios concretos.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 contiene un capítulo orientado hacia la «protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios» en el que se establece que «el régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de renuncia o devolución que se establezca en los contratos, deberá permitir que el consumidor y usuario se asegure de la naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad del bien o servicio; pueda reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro; pueda hacer efectivas las garantías de calidad o nivel de prestación ofrecidos, y obtener la devolución equitativa del precio de mercado del bien o servicio, total o parcialmente, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso».

Dicho planteamiento está contenido en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, en el que también se plantea que «las oficinas y los servicios de información y atención al cliente serán diseñados utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal y, en su caso, medios alternativos para garantizar el acceso a los mismos a personas con discapacidad o personas de edad

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 172

avanzada», precisando de igual modo que «en el caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica, sin perjuicio del derecho de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de cobrar por este tipo de llamadas.

A tal efecto, se entiende por tarifa básica el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario. Sobre este artículo, sumado a otras referencias normativas como la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (cuyo artículo 47.2 dispone que «los operadores deberán disponer de un servicio de atención al cliente, gratuito para los usuarios, que tenga por objeto facilitar información y atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes» y que «los servicios de atención al cliente mediante el canal telefónico deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance para mejorar dicha atención. Los operadores pondrán a disposición de sus clientes métodos para la acreditación documental de las gestiones o reclamaciones realizadas, como el otorgamiento de un número de referencia o la posibilidad de enviar al cliente un documento en soporte duradero»), el 13 de diciembre de 2018 se debatió en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre la eliminación de los prefijos telefónicos con sobrecoste en compañías de servicios para la atención a los usuarios.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad una vez que el grupo parlamentario proponente, el socialista, y el Grupo Parlamentario Popular consensuaron una enmienda transaccional por la que se instó al Gobierno a «hacer efectivas en el plazo máximo de seis meses las modificaciones oportunas en la normativa relativa a los servicios de atención al cliente en vigor para que las empresas que pongan a disposición de los usuarios de los servicios de atención telefónica para atender y resolver quejas y reclamaciones en relación con el contrato celebrado, dicha línea telefónica corresponda un número de teléfono geográfico», concretando también que «en los servicios de carácter continuado o servicios básicos de interés general, las empresas prestadoras de los mismos deberán disponer de un teléfono de atención al consumidor gratuito, con atención personalizada sin reenvíos a otros sistemas de atención al consumidor y con un tiempo de espera no superior a un minuto, así como medios alternativos para garantizar el acceso a los mismos a personas con discapacidad o personas de edad avanzada».

No obstante, la enmienda presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Popular incluía un apartado con el que se instaba al Gobierno a la supresión «de las líneas telefónicas de información y atención al ciudadano que comiencen por 901 y 902, sustituyéndolas por números y servicios gratuitos cuando se trate de suministrar información sobre servicios públicos» que el Grupo Parlamentario Socialista no consideró oportuno incluir en la enmienda transaccional. La inclusión de esta propuesta en la enmienda se sustenta en valoraciones como las realizadas por la «Asociación de Internautas» en 2006 (se dirigió a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para llamar la atención sobre el abuso de los prefijos 902 por los operadores de telefonía para la resolución de conflictos y reclamaciones), por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2015 (recomendó equiparar los prefijos 902 y 901 a los números geográficos e incluirlos en las tarifas planas) y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2017 (que en sentencia de 2 de marzo declaró ilegales los números de teléfono con tarifas especiales para su uso en servicios postventa, solicitando además una turificación a precio de llamada normal sin recargos).

Si bien es cierto que estas apreciaciones están especialmente orientadas al ámbito de la empresa privada, el hecho de que en la Administración se continúen ofreciendo líneas telefónicas de este tipo (caso de la «Agencia Tributaria», del «Servicio Público de Empleo Estatal» o, por ejemplo, de «Correos»), con el consecuente gasto que supone para todos los ciudadanos, invita a considerar oportuno que el actual Ejecutivo realice los cambios necesarios para sustituir los teléfonos de atención que comienzan por 901 y 902, por números gratuitos en las situaciones en las que se trate de suministrar información sobre servicios públicos.

En consecuencia, partiendo de la citada proposición no de ley aprobada en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en diciembre de 2018, y teniendo en cuenta que entidades públicas como Renfe ya han realizado el cambio pretendido (en verano de 2017, para la comunicación de «incidencias y reclamaciones» y la «venta de billetes para personas con discapacidad visual», entre otros servicios).

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 173

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a sustituir sus líneas telefónicas de información y atención al ciudadano que comiencen por los prefijos 901 y 902 por números y servicios gratuitos cuando se trate de líneas orientadas al suministro de información sobre servicios públicos.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020.—**José Ignacio Echániz Salgado**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000085

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción y mejora de la formación de la ciudadanía en reanimación cardiopulmonar (RCP), para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

Cada año cerca de 400.000 ciudadanos europeos son víctimas de una cardiopatía que cursa con paro cardíaco repentino. Estas paradas cardíacas pueden producirse en cualquier momento y cualquier lugar, por lo que las medidas que se han ido instaurando han aumentado. Por ejemplo, a día de hoy podemos comprobar como en multitud de espacios públicos, especialmente si poseen gran afluencia, existen desfibriladores automáticos. Sin embargo, las medidas todavía son insuficientes. Según datos oficiales, menos de uno de cada diez pacientes con una parada cardíaca en la vía pública sobrevive.

La reanimación cardiopulmonar (RCP) aumenta las posibilidades de supervivencia de dos a tres. El consejo Europeo de Resucitación estima que realizando una correcta reanimación se podrían salvar unas 100.000 vidas al año en Europa.

La tasa de RCP realizada por una persona es muy diferente de una región europea a otra: de 12 % en Andalucía (España), 15 % en Alemania, al 61 % en los Países Bajos y Suecia el 59 %. Así, la tasa de supervivencia varía de una región a otra, a sabiendas de que las tasas en algunos países (por lo general en Europa del Este) es solo el 6 %, mientras que en otros países como Suecia y Noruega, la tasa de supervivencia es del 40 %. Diferentes estudios muestran que la mejora de las tasas de RCP y supervivencia tras estas viene precedidas de un compromiso de las administraciones públicas en la formación de sus ciudadanos. Por ejemplo, se calcula que para lograr un aumento estadísticamente significativo en los resultados de la RCP, se ha estimado que al menos el 15 % de la población necesita acudir a cursos especializados en esta materia y que deben ser obligatorios. Esto se da ya en algunos Estados miembros de la Unión, donde las administraciones públicas y algunas empresas privadas ya han instaurado cursos obligatorios para sus empleados.

Pero la formación en los países con mejores tasas de éxito en reanimaciones cardiopulmonares no queda solo en las personas adultas. Los menores de edad también juegan un papel importante a la hora de actuar en estos casos. De hecho, el Consejo Europeo de Resucitación (European Resuscitation Council, ERC), ha creado, un programa para promover y mejorar el aprendizaje de herramientas de RCP entre los más pequeños. Su programa, «Kids Save lives», lleva a cabo cursos anuales de entrenamiento en maniobras RCP para escolares mayores de doce años. Estos cursos apenas restan tiempo lectivo pues son de dos horas. Este tipo de cursos, según los expertos, tienen un éxito significativo en los más jóvenes, puesto que son muy receptivos a la hora de interiorizar la teoría y ponerla en práctica, y ayuda a desarrollar un sentido de responsabilidad en edades tempranas. También ayuda a relacionar materias que se estudian en la escuela o el instituto (biología, educación física, etc.) con situaciones reales, lo que traslada a los menores la sensación de que el aprendizaje tiene sentido práctico. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), apoya este tipo de programas de educación en los centros escolares e institutos ya que poseen beneficios para el conjunto de la sociedad.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 174

Por todo ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo cursos formativos de RCP en todas las administraciones dependientes del mismo a fin de promover y mejorar la formación de los empleados que trabajen en estos centros contando con la colaboración de los sindicatos y representantes de los trabajadores a la hora de impartir y diseñar estos cursos.
2. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), al Consejo Escolar del Estado y a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) la necesidad de que este tipo de cursos se realicen, también, tanto en las administraciones dependientes de las mismas como en los centros educativos y universitarios.
3. Trabajar con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los sindicatos más representativos para que instauren cursos de formación en materia de RCP en los centros de trabajo.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.—**Marta Martín Llaguno**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000088

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el cumplimiento de la normativa publicitaria sobre medicamentos en los contenidos de redes sociales y plataformas digitales, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

En los últimos tiempos, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCF) ha constatado incrementados en la demanda de determinados medicamentos que tendrían su origen en recomendaciones concretas realizadas por personas creadoras de contenidos en redes sociales y plataformas digitales, popularmente conocidas como «influencers». Estas personas, la mayoría de las cuales realiza vídeos cuyos contenidos versan sobre moda, estética o nutrición, al recomendar productos de marcas concretas, estarían llevando a cabo emplazamientos publicitarios encubiertos o incluso completamente involuntarios, como prueba el efecto que sus recomendaciones tienen sobre la demanda de tales productos.

El problema radica en que muchos de estos productos que recomiendan estas «influencers» son medicamentos que requieren prescripción médica, cuya publicidad en cualquier medio está expresamente prohibida por el Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de medicamentos de uso humano. Estas restricciones obedecen a razones objetivas de salud pública, siendo el facultativo que prescribe la receta el único responsable de la selección del medicamento más adecuado para cada paciente en particular.

Dado el crecimiento exponencial durante los últimos años del volumen de contenidos que se visualizan y se comparten en redes sociales y plataformas digitales —solo Youtube tiene hoy 1.900 millones de usuarios—, los eventuales riesgos para la salud que entraña este tipo de publicidad se multiplican, especialmente cuando se trata medicamentos con prescripción.

Teniendo esto presente, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos necesario reforzar los controles por parte de las autoridades sanitarias, así como la coordinación en materia de vigilancia con los responsables de estas redes sociales y plataformas digitales con la finalidad de potenciar los mecanismos de autocontrol y, en su caso, de detección y retirada de contenidos que pudieran ser contrarios a la normativa vigente en materia de salud pública.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 175

Por todo ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a trabajar con los responsables de redes sociales y plataformas digitales que operan en nuestro país con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de publicidad sanitaria, reforzando a tales efectos las labores de vigilancia, detección y, en su caso, retirada de contenidos que vulneren dicha normativa, en particular aquellos que realicen publicidad de cualquier índole sobre medicamentos con prescripción médica, con la finalidad de proteger adecuadamente la salud pública de toda la población, en especial la de los menores de edad, que acceden o están expuestos a estos contenidos digitales.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2020.—**Marta Martín Llaguno**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000090

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejora del etiquetado de la miel y de la información que sobre sus productos reciben los consumidores, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

Según los datos publicados en mayo de 2019 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el documento «El sector apícola en cifras», España es actualmente uno de los principales productores de miel de la Unión Europea, concretamente el Estado miembro con mayor número de colmenas, que suponen aproximadamente el 16 % de las colmenas que se hallan en suelo comunitario. El nivel de profesionalización de los apicultores españoles es igualmente el más alto, con mucha diferencia, sobre el resto de países de la UE, alcanzando el 80 %, frente a la media europea de solo el 40,47 %. Ello da idea de la enorme importancia que en el sector apícola español tiene el cumplimiento cabal y estricto de unas reglas de mercado justas, así como sobre la información al consumidor, que ha de ser exacta y clara, permitiendo así una correcta competencia.

La actual norma europea que regula el etiquetado y la información que el mismo debe contener en envases a través de los cuales se comercialice la miel es la Directiva 2001/110/CE relativa a la miel, modificada por la Directiva 2014/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que tienen su reflejo en sendos Reales Decretos 1049/2003 y 473/2015. Con esta legislación europea y española, actualmente se da la circunstancia de que la miel producida en España, como en cualquier otro Estado miembro, puede ser mezclada con otras mieles de menor coste de producción, tanto procedente de países de la Unión Europea como terceros, con el evidente riesgo de una reducción de la calidad misma de la miel de origen español, considerada de excelente calidad y con una gran diversidad de variedades.

Las zonas tradicionales de producción de miel en España se centran en Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León, zonas en las que se ha reducido dicha producción desde 2016, fundamentalmente por motivos meteorológicos. Por ello, la importación de mieles de otros países de la UE y de terceros, principalmente China, que en 2018 llegó a ser del 18 % del total de miel importada extracomunitaria, se ha convertido en un recurso para mantener niveles de producción aun a riesgo de reducir significativamente la calidad del producto, dado que la mezcla final de mieles comercializadas ven minorar su calidad cuando la de producción en España se mezcla en gran medida con otras de otro origen, principalmente extracomunitario, donde los controles previos de calidad en origen son menores o, incluso, inexistentes. En 2017 incluso se restringió la entrada de miel china en territorio de la Unión Europea por falta de calidad, aunque parece evidente que siguió llegando al mercado europeo disimulada como procedente de países comunitarios con sistemas de control excesivamente laxos.

La norma europea en vigor, sin embargo, solo obliga a señalar en el etiquetado de los envases en tres categorías: «mezcla de mieles originarias de la UE», «mezcla de mieles no originarias de la UE» y «mezcla

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 176

de mieles originarias y no originarias de la UE». El problema con esta tercera categoría es que no se obliga a determinar en el etiquetado los países de origen de las mieles mezcladas, ni tampoco su porcentaje en la mezcla. Por ello, y como viene denunciando el sector en España principalmente, es posible etiquetar con esa tercera categoría una miel procedente de la mezcla de un 1 % de miel española (o de un Estado UE) y un 99 % de miel china, por ejemplo. Si la miel española es una miel distinguida precisamente por su calidad, no parece oportuno que el consumidor no pueda tener conocimiento y estar perfectamente informado de la procedencia de la miel que consume cuando la misma es producto de mezcla de mieles de diversos orígenes, más allá de que sea de un país comunitario o no, pero sin identificar ni señalar porcentajes de mezcla, máxime cuando ya se han dado episodios de prohibición de la miel china por la mala calidad en la misma en 2003 y 2004, por presencia de residuos de antibióticos prohibidos en la UE. En este aspecto, una correcta y adecuada información al consumidor es fundamental ante los riesgos que para la salud puede tener una miel adulterada o que no respete los estándares europeos, aun pese a los controles fitosanitarios UE, cuando el consumidor no puede llegar a saber el origen real y en porcentaje cierto de la miel que compra para su consumo.

A finales de 2018, el Gobierno de España inició la modificación de su norma interna para recoger las peticiones del sector y obligar así a que el etiquetado de la miel declarase el origen de la misma y su porcentaje de mezcla en todos los casos. Sin embargo, en el trámite de información previo a la Comisión Europea, esta ha dictaminado negativamente el proyecto del Gobierno español precisamente en su intento de acreditar en el etiquetado de la miel el origen y porcentaje de mezcla, en su caso, cuando ese aspecto era precisamente esencial en el proyecto presentado.

Es evidente que el sector apícola español y europeo en su conjunto deben avanzar en una mayor calidad de los productos de consumo directo por los ciudadanos, a lo que ayuda, precisamente, el correcto y concreto etiquetado del mismo, máxime en un producto como la miel en el que ya se han detectado anteriormente situaciones de fraude o mezclas sospechosas que reducen la calidad del propio producto. La situación medioambiental en muchos países terceros, fuera del control fitosanitario con estándares UE igualmente suponen una implicación de riesgo para la calidad sanitaria misma del producto. Todo ello hace que no ya en España, sino en el seno de la UE se modifique la legislación y criterios aplicables para garantizar la idoneidad y calidad de la miel, así como la seguridad e integridad en la información al consumidor.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a liderar ante las instituciones de la Unión Europea una postura firme en defensa del sector apícola español en concreto y europeo en general, así como a defender el derecho a la información de los consumidores en materia de etiquetado de la miel, con el objetivo de que se promuevan las modificaciones legales oportunas en referencia a la exigencia de hacer constar en dicho etiquetado el país o los países de origen de la miel, así como el porcentaje de mezcla que compongan el producto envasado y etiquetado, fundamentalmente y en todo caso cuando se trate de terceros países ajenos a la Unión Europea.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2020.—**Marta Martín Llaguno y María Carmen Martínez Granados**, Diputadas.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000095

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ampliación de la cobertura pública de los tratamientos contra el tabaquismo en el marco del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

El 23,3 % de la población española es fumadora, con una media de consumo de 10,7 cigarrillos diarios. El tabaquismo supone un problema sanitario de primer nivel, que cada año causa más de 58.000 fallecimientos en España, el 29 % de naturaleza cardiovascular.

Para hacer frente a esta adicción, una de las más extendidas en España, se aprobó la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, posteriormente modificada por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre.

Además de estas iniciativas en el ámbito legislativo, desde el Gobierno de España se han impulsado numerosas campañas y programas para prestar información, asesoramiento y apoyo a las personas que tuviesen intención de dejar de fumar. La más reciente fue anunciada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social nada más iniciarse 2020, cuando confirmó que comenzaría a financiar un segundo fármaco para ayudar a dejar de fumar, el bupropion, que se suma así a la vareniclina, que ya recibía financiación pública.

Estos medicamentos podrán ser recetados por los médicos de familia de la Atención Primaria en el marco de un tratamiento que se prolonga durante doce semanas y sus beneficiarios tendrán que cumplir una serie de requisitos, entre los que se incluyen participar en sesiones de terapia contra el tabaquismo, tener motivación expresa de dejar de fumar constatable con al menos un intento en el último año, fumar diez o más cigarrillos al día y tener un alto nivel de dependencia del tabaco.

Aunque el desarrollo de estas medidas para ayudar a dejar de fumar, incluida la financiación de un segundo fármaco, contribuyen a mejorar los instrumentos en la lucha contra el tabaquismo —la evidencia indica que la eficacia del tratamiento se eleva desde el 5-10 % hasta el 30-40 % cuando va acompañada de estos medicamentos—, numerosos médicos de familia y expertos en adicciones han alertado sobre las limitaciones de diseño y de puesta en práctica de las medidas que han sido adoptadas concretamente por el Gobierno.

Para empezar, como está demostrando el arranque de esta medida, desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ni se ha previsto ni se ha coordinado con las Comunidades Autónomas una agenda específica para las intervenciones relacionadas con estos tratamientos. En ese sentido, los facultativos sanitarios consideran el consumo de este tipo de medicamentos debe ir integrado dentro de un programa de intervención que incluya una entrevista inicial y visitas sucesivas con tiempo suficiente para poder hacer un seguimiento del tratamiento, de su efectividad y de los efectos secundarios.

Además, el Gobierno también ha impuesto que estos tratamientos solo puedan ser recetados una vez al año, una limitación que no solo carece de todo sentido terapéutico, sino que además estigmatiza al fumador que recae tras el tratamiento, lo cual contradice los principios básicos de intervención en casos de adicción como lo es el tabaquismo.

Por otro lado, como se viene señalando desde la a Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET), resulta incomprensible que el Gobierno anunciase la financiación de la vareniclina y ahora del bupropion y, sin embargo, deje fuera de la cobertura pública la tercera alternativa terapéutica, los tratamientos sustitutivos de nicotina, en particular a través de parches, chicles o comprimidos, que constituye por otra parte la primera opción por la que suelen decantarse muchas de las personas que deciden dejar de fumar. Los especialistas señalan la conveniencia de incluir estos tratamientos dentro de la cobertura pública, pues cada uno tiene sus efectos y contraindicaciones propios y por tanto cada uno puede resultar más indicado para diferentes perfiles de paciente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Flexibilizar la prescripción de los fármacos contra el tabaquismo que cuentan con cobertura pública (en estos momentos, vareniclina y bupropion), eliminando la limitación de que puedan ser recetados más de una vez al año por paciente, quedando, en consecuencia, bajo el criterio del facultativo médico que supervise el tratamiento, con el fin de garantizar una adecuada adherencia terapéutica que contribuya a su efectividad.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 178

2. Promueva, en el seno del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una agenda específica para las intervenciones de los profesionales sanitarios relacionadas con estos tratamientos contra el tabaquismo, que tenga por objeto asegurar que los facultativos médicos dispongan del tiempo y los medios necesarios para asegurar el desarrollo de un programa de intervención personalizada con cada paciente que incluya una entrevista inicial y visitas sucesivas con tiempo suficiente para poder hacer un seguimiento del tratamiento, de su efectividad y de los efectos secundarios.

3. Estudie la ampliación de la cobertura pública de medicamentos contra el tabaquismo, siguiendo la evidencia científica disponible, en a los efectos de valorar la inclusión de los tratamientos sustitutivos con nicotina, como parches, chicles o comprimidos, en las mismas condiciones que los dispensados actualmente a la vareniclina y bupropion, de modo que el facultativo médico que supervise el tratamiento pueda optar por la alternativa terapéutica que resulte más indicada para cada paciente.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.—**Marta Martín Llaguno**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000096

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la inclusión del cribado neonatal para la detección de inmunodeficiencias severas en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

En la actualidad, la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) incluye la detección de diferentes enfermedades congénitas mediante la denominada «prueba del talón». Este diagnóstico temprano resulta altamente eficaz, pues evita el deterioro precoz y permite adelantar el tratamiento de los niños que padecen estas enfermedades.

Sin embargo, actualmente no está incluida en esta Cartera de Servicios Comunes la detección de las inmunodeficiencias combinadas graves mediante esta prueba. Estas enfermedades cursan con infecciones severas en el curso de los primeros meses de vida (entre los dos y seis meses de vida) y presentan un riesgo de mortalidad del 100 % a edades muy tempranas, siempre antes del primer o segundo año de vida, si no se aplica un tratamiento curativo existente, como un trasplante de médula ósea o, en casos concretos, terapia génica.

Esta detección precoz mediante el cribado permite tomar decisiones terapéuticas tempranas y evitar el deterioro de los niños evitando el diagnóstico tardío que suele acontecer por la presencia de complicaciones graves, ya sea por infecciones o por aparición de fenómenos autoinmunes. El coste de este diagnóstico es inferior a los 7 euros por cada prueba y mantiene una buena relación coste beneficio, a pesar de la baja incidencia del síndrome, al reducir la mortalidad en estos pequeños pasando de un 60 % a un 5 %, si el tratamiento antes descrito se aplica antes de los tres meses y medio de vida.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias, dando traslado de las mismas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para la inclusión en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud del cribado neonatal para la detección precoz de las inmunodeficiencias combinadas graves, mediante la ampliación de la denominada “prueba de talón” a neonatos a este supuesto.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.—**Marta Martín Llaguno**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 179

161/000097

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la instalación completa de todas las máquinas de diagnóstico y tratamiento oncológico donadas por la Fundación Amando Ortega y su puesta en funcionamiento al servicio de todos los usuarios de la Sanidad pública en toda España, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

La donación de 310 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega a la sanidad pública española ha supuesto de momento que los equipos de radioterapia avanzada para el tratamiento del cáncer se hayan multiplicado por tres en los hospitales públicos españoles.

Los especialistas estiman que unas 100.000 personas en nuestro país se pueden beneficiar ya de estos nuevos equipos. En concreto, antes de la aportación del empresario gallego, poco más de 20 hospitales públicos en España contaban con la tecnología más avanzada en este campo, la radioterapia estereotáctica de cuerpo, mientras que ahora, dos años después del anuncio de Ortega, más de 70 hospitales disponen de este sistema.

Este sistema de radioterapia avanzada reduce el tratamiento de los pacientes con cáncer de 35 a cinco días, o lo que es lo mismo, siete veces menos, según los aportados por la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, que representa a los médicos que más en contacto están con estos equipos en el día a día.

Sin embargo, pese a los beneficios indudables que estos equipos de radioterapia avanzada donados por la Fundación Amando Ortega tendrían para todos los pacientes que utilizan la Sanidad pública, los servicios públicos de salud de algunas Comunidades Autónomas, entre ellas Cataluña, después de tres años todavía no los han puesto en funcionamiento, sin que se haya dado ninguna explicación al respecto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar todas las medidas que procedan, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en su caso, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para garantizar que en el transcurso del mínimo tiempo posible se lleve a cabo la instalación completa de todas las máquinas de diagnóstico y tratamiento oncológico donadas por la Fundación Amando Ortega y su puesta en funcionamiento al servicio de todos los usuarios de la Sanidad pública en toda España.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.—**Marta Martín Llaguno**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000115

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Olona Choclán y doña María Teresa López Álvarez, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al Calendario de Vacunación Infantil en la Ciudad de Ceuta, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Ceuta ha registrado dos fallecimientos de niños por meningitis B en apenas un mes, un bebé de 2 meses y un niño de 3 años. Según la Asociación Española de Pediatría, se estima que en España dos de cada tres familias están adquiriendo la vacuna del meningococo B para sus hijos desde los primeros

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 180

meses de edad, y la Asociación Española de Pediatría defiende que cualquier lactante tenga acceso a esta vacuna en España, independientemente de la renta familiar. Las Consejerías de Salud de Castilla y León y Canarias, tras analizar la evidencia disponible, han anunciado que comenzarán la vacunación frente a meningococo B con Bexsero en todos los lactantes en próximos meses, y Andalucía ha adelantado que valorará esta opción para 2020. Ceuta y Melilla no tienen las competencias transferidas en materia de Sanidad, lo que deja fuera del calendario de vacunación a menores cuyos padres, por distintas causas, no pueden adquirir la vacuna del meningococo B. En Ceuta y Melilla, además, por sus especiales características de ser frontera con Marruecos, a través de la que pasan treinta mil personas al día con su consiguiente riesgo epidemiológico, los saltos de inmigrantes ilegales sin control sanitario que se quedan en el CETI y deambulan por la ciudad, los Menores Extranjeros no Acompañados que también circulan por la ciudad, y los niños marroquíes escolarizados en nuestros colegios y de los que desconocemos todo tipo de información sobre sus vacunaciones, puesto que la cartilla de vacunación no se les exige para ser matriculados, se hace imprescindible que se incluyan las vacunas del meningococo B en los calendarios oficiales, cerrando así el círculo de prevención frente a las meningitis en la infancia. El Gobierno no puede permitir que los niños se vean obligados a renunciar a los avances que nos ofrece la investigación biomédica en la prevención de una enfermedad tan grave como las infecciones meningocócicas, ni ser discriminados con respecto a los niños de otras Comunidades Autónomas. Nuestros recién nacidos deben recibir esa protección frente a una infección bacteriana que puede dejar graves secuelas e incluso la muerte, tal y como ha sucedido en la Ciudad de Ceuta en dos ocasiones en tan sólo un mes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

Promover la inclusión en el calendario de vacunación infantil de la inmunización frente a la meningitis B, tal y como aconseja la Asociación Española de Pediatría para 2020.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2020.—**María Teresa López Álvarez**, Diputada.—**Macarena Olona Choclán**, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

161/000116

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consolidación y el desarrollo del modelo de formación sanitaria especializada en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Más allá de prácticas aisladas y de lo establecido en normas pretéritas, como la Ley de 25 de noviembre de 1944, sobre la Escuela Nacional de Sanidad (base tercera); la Ley de 20 de julio de 1955 sobre «Enseñanza, título y ejercicio de las Especialidades Médicas», y la Ley 37/1962, de 21 de julio, sobre los hospitales como centros de formación y especialización (párrafo segundo del artículo primero), la formación sanitaria especializada dio sus primeros pasos en firme en nuestro país a mediados de la década de 1960.

Fue entonces cuando, a partir del modelo formativo sustentado en la filosofía de «aprender trabajando» aplicada en la sanidad estadounidense desde finales del siglo XIX, comenzó a implementarse la formación especializada en centros asistenciales como el extinto Hospital General de Asturias y la —entonces— Clínica Puerta de Hierro de Madrid.

La expansión del sistema al conjunto del país se produjo en la década de los años 70 (con normas como el Real Decreto 2015/1978, de 15 de julio, por el que se regula la obtención de títulos en especialidades médicas, y el Real Decreto 3303/1978, de 29 de diciembre, de regulación de la medicina de familia y comunitaria como especialidad de la profesión médica) y terminó de consolidarse como única

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 181

vía legal de especialización en los años 80 (esencialmente con el Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula la formación médica especializada y la obtención del título de médico especialista).

En los años 90 fueron impulsados distintos avances en la formación especializada mediante iniciativas como la Orden de 22 de junio de 1995 por la que se regulan las Comisiones de Docencia y 105 sistemas de evaluación de la formación de Médicos y de Farmacéuticos Especialistas, aunque el avance realmente decisivo para actualizar el modelo tuvo lugar en los 2000, concretamente con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

La referida Ley 44/2003 aborda la formación especializada en Ciencias de la Salud en su capítulo tercero (artículos 15 a 32), definiéndola como «una formación reglada y de carácter oficial» que «tiene como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma».

El Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud; el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, y el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista, desarrollaron la citada Ley 44/2003 y formalizaron las transformaciones y las actualizaciones más recientes de la formación sanitaria especializada en el Sistema Nacional de Salud, consolidándola como uno de los principales argumentos —si no el mayor— para certificar que los profesionales sanitarios son el principal activo de nuestro modelo asistencial.

Los elevados niveles de calidad en la capacitación y el desempeño que los profesionales sanitarios ofrecen a partir de la formación especializada —tanto si atendemos a la labor clínica, como si nos fijamos en el trabajo que desarrollan en el ámbito docente y en el investigador—, son las principales razones por las que el sistema sanitario español es considerado como un referente internacional.

Referirse a la trayectoria descrita por el modelo de formación sanitaria especializada en nuestro país en las últimas décadas es aludir a una historia de éxito, con cierto margen de mejora en ámbitos como el desarrollo de ciertas especialidades y los sistemas de evaluación, pero un modelo que muchos países han intentado reproducir a nuestra imagen y semejanza, cuya integridad parece estar actualmente en serio peligro ante la posibilidad de que el Gobierno de España pudiese transferir sus competencias exclusivas en la materia a la Comunidad Autónoma de Cataluña.

A pesar de que el artículo 149.1.30.^a de la Constitución de 1978 dispone de forma literal que compete únicamente al Estado la «regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia», el documento «Coalición Progresista. Un nuevo acuerdo para España» suscrito por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos para hacer viable la formación del actual Ejecutivo, plantea en su epígrafe 9.4 que el Ejecutivo traspasará «a la Generalitat aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el “Estatut” de Cataluña en materias como [...] la formación sanitaria especializada [...]».

Esta propuesta —ya planteada en la «Declaración de Barcelona» redactada por el propio PSOE en 2017— ha generado un rechazo frontal por parte de colectivos profesionales como, por ejemplo, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), incluido el Sindicato Médico Catalán.

Desde CESM plantean, entre otras críticas tajantes al compromiso adquirido por el PSOE con Unidos Podemos, que «todo lo que suponga una limitación a la libre circulación de profesionales, merma de opciones y pérdida del carácter global de dicho sistema [de formación sanitaria especializada] es un ataque directo a lo mejor que éste posee: igualdad de oportunidades, posibilidad de formación en cualquier hospital de España y coordinación entre las diferentes autonomías». Al parecer de CESM, la transferencia de la competencia comprometida por PSOE y Podemos «introduce discriminación y abre la puerta a arbitrariedades».

Por todo lo anterior, y con el objetivo de evitar cualquier tipo de amenaza y agresión a la estructura y al buen funcionamiento del modelo de formación sanitaria especializada en todos sus programas —Biología, Enfermería, Farmacia, Física, Medicina, Psicología y Química—, que puede redundar en una merma de

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 182

la calidad en la formación de los profesionales y, en consecuencia, en la reducción de la calidad y la seguridad asistenciales en el Sistema Nacional de Salud.

El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar, desde el respeto y el cumplimiento de lo establecido en el artículo 149.1.30.^a de la Constitución y su desarrollo normativo, para consolidar y desarrollar el modelo de formación sanitaria especializada, manteniendo el reparto competencial entre administraciones vigente e impulsando iniciativas en total coordinación con los colegios profesionales y las sociedades científicas, así como en cooperación con las Comunidades Autónomas, con el objetivo de continuar garantizando una capacitación de la más alta calidad para los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2020.—**José Ignacio Echániz Salgado**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000118

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el mantenimiento por parte del Estado de las competencias sobre la formación sanitaria especializada, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

El Acuerdo para un Gobierno de Coalición suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos establece, en su apartado 9.4, que ambas partes se comprometen desde el Gobierno a traspasar a la Generalitat «aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Catalunya en materias como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional».

La formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud (que incluye los sistemas MIR, EIR, FIR, PIR, etc.) en nuestro país tiene actualmente lugar por medio del sistema de residencia, previa participación en una prueba selectiva de convocatoria anual de carácter nacional para el acceso a una plaza en un centro o unidad docente acreditada, a efectos de la obtención del título de especialista, y por cuyos servicios como trabajadores percibirán las retribuciones legalmente establecidas. Este sistema se regula de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, y conforme a lo establecido en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. Son las competencias sobre la gestión de este sistema de formación sanitaria especializada las que los partidos firmantes del acuerdo se comprometen ahora a traspasar a la Generalitat de Catalunya como contraprestación al acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya para su abstención en la investidura.

El Estatuto de Autonomía de Catalunya declara, en su artículo 162.3.d), que corresponde a la Generalitat la competencia compartida en el ámbito de «la formación sanitaria especializada, que incluye la acreditación y la evaluación de centros; la planificación de la oferta de plazas; la participación en la elaboración de las convocatorias y la gestión de los programas de formación de las especialidades y las áreas de capacitación específica y la expedición de diplomas de áreas de capacitación específica». Sin embargo, como ha afirmado el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la Sentencia del Estatut (Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010), las competencias autonómicas deben ser interpretadas en coherencia con la distribución constitucional que, lógicamente, tiene un rango normativo superior.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 183

La Constitución española atribuye, con carácter exclusivo, al Estado, en el artículo 149.1.16.^a, las competencias relativas a la sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos y, en el artículo 149.1.30.^a, las relativas a la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Ambas competencias, tanto sanitarias como de homologación de títulos académicos, son, precisamente, las que configuran el desarrollo de la formación sanitaria especializada exclusivamente por parte del Estado.

De consumarse la transferencia de estas competencias sobre la formación sanitaria especializada, la Generalitat de Cataluña pasaría a ser la encargada de decidir, entre otras cuestiones, el número de plazas en las distintas modalidades del sistema de formación especializada en Ciencias de la Salud (MIR, EIR, FIR, PIR, etc.) que se ofertan cada año, cuántas por especialidad, cuál será el número de unidades docentes, cuál debe ser el temario, la estructura del examen, las preguntas, en qué fecha se celebra o qué número de residentes absorbe cada centro hospitalario.

Unas decisiones cuyos resultados pueden plantear notables diferencias con los del sistema de formación aplicado con carácter general en las restantes Comunidades Autónomas. Sobre todo cuando, atendiendo a la trayectoria demostrada por la Generalitat en manos de los sucesivos gobiernos catalanes liderados por partidos nacionalistas y separatistas en todos los ámbitos y especialmente en el de la educación, cabe esperar que pretendan utilizar estas competencias para establecer requisitos lingüísticos de conocimiento del catalán, sea en las pruebas selectivas o en el contenido de la programación formativa, cuya finalidad sea en el fondo la de excluir en la práctica a todos los aspirantes castellanohablantes, contribuyendo así a levantar nuevas barreras para el acceso en condiciones de igualdad al empleo público y, con ello, a acrecentar más aún la desigualdad entre españoles en función de territorios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a garantizar el mantenimiento por parte del Estado de las competencias relativas a la formación sanitaria especializada (MIR, EIR, FIR, PIR, etc.), como garantía para preservar los estándares de excelencia de la formación especializada en el ámbito de las Ciencias de la Salud y su acceso en igualdad de condiciones en toda España, rechazando cualquier pretensión de transferencia de estas competencias por intereses políticos hacia las Comunidades Autónomas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2020.—**Marta Martín Llaguno**, Diputada.—**José María Espejo-Saavedra Conesa**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000158

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prevención de riesgos laborales del personal sanitario relacionados con la manipulación de fármacos peligrosos, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

El artículo 40.2 de la Constitución española contiene un mandato dirigido a los poderes públicos para desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados del trabajo.

En aplicación de este mandato, se promulgó la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada, entre otros, por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, y el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, en el

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Por su parte, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, contempla en sus artículos 32 al 34 los distintos aspectos que integran la actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral, indicando que tiene por objeto conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en relación con las características y riesgos derivados del lugar de trabajo, el ambiente laboral y la influencia de este en su entorno, promoviendo aspectos preventivos, de diagnóstico, de tratamiento, de adaptación y rehabilitación de la patología producida o relacionada con el trabajo. A su vez, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, recoge como prestación de salud pública la promoción y protección de la salud laboral, mientras que la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, considera un derecho recibir una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En el desarrollo de la prevención de riesgos laborales toma importancia el manejo de los medicamentos peligrosos. El grupo más relevante de los medicamentos peligrosos lo constituyen los medicamentos antineoplásicos, pero actualmente se han incorporado otros medicamentos de amplia utilización en el ámbito sanitario, que deben ser objeto de una mayor protección de la salud y seguridad del trabajador en todo momento. Estos riesgos afectan especialmente a colectivos como el personal de enfermería, que son quienes están expuestos a una mayor manipulación de fármacos potencialmente peligrosos.

Entre estos medicamentos peligrosos destacan los antineoplásicos, así como otros medicamentos no antineoplásicos, pero que presenten riesgos de carcinogenicidad, teratogenicidad u otra toxicidad para el desarrollo, toxicidad reproductiva, toxicidad en órganos a bajas dosis, genotoxicidad o nuevos medicamentos con perfiles de estructura y toxicidad similar a medicamentos existentes que se determinaron como peligrosos según los criterios anteriores. También se incluyen en esta categoría aquellos medicamentos que presentan riesgo para el proceso reproductivo y que pueden afectar a hombres y mujeres que están intentando concebir de forma activa, y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, pero que no comportan riesgo para el resto del personal.

A pesar de las reiteradas reclamaciones por parte de los sindicatos y organizaciones profesionales del personal médico y de enfermería, y aunque es cierto que se han dado algunos pasos de ámbito autonómico, en la actualidad sigue sin haberse aprobado por el Gobierno una normativa de ámbito nacional que trate específicamente sobre prevención de riesgos laborales relacionada con el manejo de medicamentos peligrosos por el personal sanitario, razón por la cual el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a promover una normativa específica de ámbito nacional sobre la prevención de riesgos laborales relacionados con la manipulación de medicamentos peligrosos y citotóxicos por parte del personal sanitario, con referencia especial al personal de enfermería dada su elevada exposición, así como a promover, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con los servicios públicos de salud de las Comunidades Autónomas y en colaboración con el Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo (INSST), la adopción de unos protocolos comunes y la impartición de cursos de formación específicos en esta materia.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2020.—**Marta Martín Llaguno**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000164

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de mejora de los permisos por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 185

Exposición de motivos

El Estado del Bienestar, a través de la Seguridad Social, debe proteger y protege a aquellos padres que tengan que cuidar de un hijo menor de edad afectado por cáncer u otra enfermedad grave cuando estos trabajen. Así, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, contempla en el artículo 37, apartado 6, párrafo tercero, lo siguiente:

«El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años. Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.»

En este sentido, para el caso de los trabajadores que se acojan a esta reducción, tendrán derecho a una prestación de la Seguridad Social (Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave), que compense la pérdida de salario motivada por la reducción de jornada dada la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente a los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.

En cambio, cuando ambos progenitores, adoptantes o acogedores tuvieran derecho a dicha prestación, solo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos, con independencia de poder alternarse entre ellos. En el caso de separación, nulidad o divorcio, y ante una falta de acuerdo, el derecho a la prestación se concede a quien tenga otorgada la custodia del menor y, si esta fuese compartida, al que lo solicite en primer lugar.

La cuantía de la prestación será del 100 % sobre la base reguladora establecida para la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo. Cuando el trabajador no tenga cubierta la incapacidad temporal en el régimen que deba reconocer la prestación, la base reguladora estará constituida por la base de cotización de contingencias comunes.

La finalidad de la norma y de la prestación es doble: por una parte, defender la indemnidad del menor, su integridad física, y, por otra parte, hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral de los progenitores.

Desde Ciudadanos creemos que todos los padres deben disponer de los medios necesarios para garantizar una atención y cuidado adecuados a sus hijos, especialmente cuando estos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, como sucede en el supuesto causante del permiso antes mencionado, así como que estos cuidados puedan prestarse de forma responsable y compatible con el desarrollo de una actividad laboral.

A estos efectos, creemos necesario ampliar los permisos para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave actualmente reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, así como las prestaciones económicas reconocidas al efecto en la Ley General de la Seguridad Social y, con tal motivo, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la protección social de los menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, mediante el acuerdo de las modificaciones legislativas y la adopción de las medidas que resulten precisas para:

1. Establecer que la reducción de la jornada de trabajo para cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave prevista en el artículo 37.6 del texto refundido del Estatuto de los

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 186

Trabajadores, así como el derecho a la prestación regulado a tal efecto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

a) Se pueda ejercer no sólo cuando exista un ingreso hospitalario de larga duración, sino también cuando esta hospitalización no tenga margen temporal y su objeto sea el diagnóstico de la enfermedad, así como para la situación que requiera el cuidado del menor o la continuación del tratamiento médico en el domicilio.

b) Se pueda ejercer aunque el menor afectado supere la edad de 18 años, siempre que se viniera ejerciendo de forma ininterrumpida de manera inmediatamente anterior al cumplimiento de dicha edad por mantenerse las circunstancias que motivaron su reconocimiento original.

c) Se pueda ejercer por ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores, de forma sucesiva o simultánea, cuando el menor afectado tenga menos de 12 años, permitiendo que la reducción de la jornada sea inferior al 50 % de su duración original, así como que ambos tengan derecho a la prestación correspondiente, inclusive en los casos de separación, nulidad o divorcio.

2. Regular nuevos derechos laborales en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, en términos análogos a la reducción de jornada anterior, que puedan ejercer ambos, de forma alterna o simultánea, así como el derecho a una prestación que compense la pérdida de retribución que se produzca como consecuencia, en particular:

a) Un nuevo supuesto de suspensión del contrato de trabajo, en caso de que el menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave tenga menos de 3 años, por el tiempo que se mantenga el ingreso hospitalario o el reposo domiciliario por prescripción médica y, en todo caso, en tanto el menor no supere dicha edad.

b) Un nuevo supuesto de excedencia con derecho a reserva del puesto de trabajo, en caso de que el menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave tenga menos de 6 años, que pueda mantenerse en tanto el menor no supere dicha edad.

3. Habilitar todas las modificaciones legales necesarias para permitir que los trabajadores por cuenta propia o autónomos puedan acceder a la prestación de la Seguridad Social para el cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave, en igualdad de condiciones que los trabajadores por cuenta ajena, quedando, además, exentos del pago de las cuotas a la Seguridad Social mientras dure la percepción de la mencionada prestación económica, siempre y cuando durante dicha situación contraten a una persona desempleada que los sustituya en su actividad.

4. Disponer el acceso al convenio especial de la Seguridad Social a los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores para el cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave que se encuentren en situación de excedencia, distinta de la planteada en el apartado 2, o de desempleo sin derecho a prestación de naturaleza contributiva, en términos análogos a los cuidadores no profesionales o del entorno familiar de personas que tengan reconocida situación de dependencia, incluida la bonificación del importe de las cuotas sociales.

5. Coordinar con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en sus respectivos ámbitos de competencias, la puesta a disposición de los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de menores afectados por cáncer o enfermedad grave, de los servicios y medios de apoyo, atención integral y asistencia social y psicológica que precisen por razón de la enfermedad de los menores a su cargo.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2020.—**María Muñoz Vidal, Pablo Cambronero Piqueras y Marta Martín Llaguno**, Diputados.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

161/000013

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan de renovación de las industrias de cogeneración y energía eólica, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

La cogeneración es el proceso basado esencialmente en el aprovechamiento del calor útil y la producción eléctrica en el ámbito de la producción industrial. Debido a estas particularidades técnicas, la cogeneración se caracteriza por su alta eficiencia energética, por ende su contribución al ahorro de energía primaria, la sostenibilidad medioambiental a través de la reducción de emisiones de Gases de efecto invernadero y al ahorro y la seguridad de suministro energético en tanto se constituye como elemento de generación distribuida.

Actualmente, la cogeneración juega un papel esencial tanto en el ámbito del sistema eléctrico como del sector industrial de nuestro país. A 31 de diciembre de 2017, aporta algo menos de 6.500 megavatios instalados en el conjunto del sistema eléctrico (con una reducción del 1 % con respecto a 2016), lo que supone el 6,4 % de la capacidad instalada.

Sin embargo, el papel más significativo en el ámbito del sector eléctrico es su capacidad de producción, cubriendo hasta el 11 % de la demanda peninsular el último año, lo que supone en torno a 25.000 megavatios por hora y más de 3.500 horas de funcionamiento.

Estas cifras de cobertura y funcionamiento no son baladíes, ya que, además de la contribución que suponen por sí mismas, proporcionan un funcionamiento firme para la red, además de mitigar las pérdidas en las zonas cercanas a su producción.

Es igualmente destacado, en relación a esta circunstancia, que la actividad aporta más ingresos que los costes que genera al conjunto del sistema eléctrico, lo que se revela como un elemento positivo en la senda de mantenimiento del superávit eléctrico y de cara a reducir la deuda existente.

Además de ello, la mayoría de cogeneraciones se apoyan en el gas natural como principal combustible, lo que mitiga las emisiones que podrían generarse con la quema de otros combustibles fósiles más contaminantes en el ámbito de la generación eléctrica.

Asimismo, es evidente que las industrias con capacidad de generación influyen en el conjunto del sector industrial y este sector es el que más contribuye al empleo indefinido (con tasas de contratación indefinida cercanas al 90 %) y al signo positivo de la balanza comercial (al ser el principal sector exportador de bienes).

Por su parte, las directrices comunitarias que próximamente entrarán en vigor contemplan un papel esencial y central para el ahorro energético en el cual toma parte la cogeneración industrial. En concreto, la Directiva de Eficiencia Energética del denominado «Paquete de Invierno», refuerza los objetivos de ahorro energético elevando la meta de mejora de eficiencia hasta el 30 %.

Además, el Informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética, constituido como antesala para la redacción de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España, también se detiene sobre el papel que la cogeneración jugará en el marco de ese proceso de transición.

En concreto, el informe de los expertos plantea una serie de escenarios en donde la cogeneración se eleva a unos 8.500 megavatios de potencia instalada para el año 2030. El informe detalla: «Ante el vencimiento de la vida útil regulatoria de grupos de cogeneración y renovables térmicas, es previsible su renovación incorporando las tecnologías más eficientes disponibles. Dichas instalaciones deberían poder participar y ser retribuidas por los servicios que presten al sector eléctrico, en pie de igualdad con otras alternativas».

Siguiendo el marco planteado por los expertos, las acciones a tomar implican, no sólo elevar la capacidad de la cogeneración en su conjunto en 2.000 megavatios, sino además mantener aquellas instalaciones que hoy están en cuestión a causa de la incertidumbre regulatoria y la inacción del ejecutivo.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 188

En efecto, a día de hoy existe la previsión de que en los sucesivos años hasta 2020 dejen de funcionar unos 2.000 megavatios de cogeneración industrial a causa del término de su vida útil regulatoria y la necesidad de acometer renovaciones en las instalaciones con el objeto de hacerlas más eficientes medioambiental y económicamente.

Sin embargo, la incertidumbre regulatoria confirmada mediante la inacción del Gobierno de España da lugar a la paralización de inversiones, así como a nuevos proyectos, sirva de ejemplo el caso del proyecto de construcción de una instalación de estas características en la ciudad de Mérida (Extremadura).

Por otro lado, existe una situación parecida en el sector eólico, donde varios aerogeneradores instalados hace dos décadas, se encuentran cercanos al término de su vida útil regulatoria.

Se estima que la oportunidad de acometer un plan de renovación de estas infraestructuras podría maximizar su potencial productivo de manera considerable; en concreto se manejan incrementos de producción de entre el 60 y el 100 % sobre los valores de producción actuales en dichas plantas.

Sólo en algo más de un lustro habrá ya más de 8.000 megavatios que tendrán más de 20 años y 1.500 megavatios con más de 25 años.

Resulta casi innecesario resaltar el papel que jugarán las energías renovables en la transición energética, baste decir que todos los objetivos planteados a nivel comunitario plantean un aumento de la cuota de participación de estas energías en el consumo de energía final; tarea para la cual no es sólo necesario incrementar la cantidad de instalaciones, sino también maximizar el potencial de las existentes a través de su modernización.

De cara a avanzar en la consecución de los objetivos de descarbonización de la energía en España a 2030 y el cumplimiento del Acuerdo de París sobre cambio climático, reducir la dependencia energética de nuestro país y maximizar la aportación de los sectores industriales a nuestra economía, es conveniente fomentar la posibilidad de repotenciar los parques eólicos existentes más antiguos, con el objetivo de incrementar la producción de energía limpia en los emplazamientos ya utilizados, que en gran medida tienen un mayor recurso eólico, mediante la incorporación de aerogeneradores más eficientes y de mayor tamaño.

Además, con la repotenciación de parques eólicos se impulsa la actividad industrial del sector manufacturero y de todo el sector de servicios asociados, a través de la demanda de componentes y aerogeneradores, lo que va a dar continuidad a la carga de trabajo y debe permitir consolidar la capacidad tecnológica y de producción para competir en los mercados internacionales.

La repotenciación de las instalaciones existentes debe en cualquier caso ser una libre elección empresarial, ligada a la viabilidad económica de la misma para los propietarios de las instalaciones. En este sentido, hay que recordar que la base fundamental para movilizar las inversiones necesarias para cumplir los objetivos anteriormente mencionados en un marco regulatorio estable que fortalezca la confianza de los inversores y las entidades financiadoras, y de esta forma se puedan abaratar los costes de capital para los propietarios de instalaciones a repotenciar. Algo que en última instancia redundaría en un beneficio para todos los ciudadanos, allanando la transición energética a un modelo renovable.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Encontrar una solución a la situación de las cogeneraciones existentes que, siguiendo las recomendaciones del informe de expertos para la transición energética, establezca un Plan ordenado para la renovación e instalación de nuevas cogeneraciones que cuente con los agentes implicados y prime criterios medioambientales, económicos y de seguridad de suministro.
2. Impulsar la renovación de las infraestructuras eólicas de mayor antigüedad a través de un plan que potencie la industria española en renovables atendiendo a las necesidades específicas del sector del modo más eficiente y competitivo.
3. Establecer un marco retributivo razonable y predecible para las energías renovables que habilite la financiación de los proyectos a realizar y repotenciar con el fin de abaratar los costes de capital del mercado.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**María Muñoz Vidal y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000014

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de reforma del Consejo de Seguridad Nuclear, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

De acuerdo con su propia ley de creación, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es el único organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Es un ente de Derecho Público, independiente de la Administración General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rige por su Estatuto y rinde cuentas al Congreso de los Diputados y al Senado.

Su misión es proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura, y estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen.

Es evidente que el papel de este organismo es de vital importancia para el correcto funcionamiento y seguridad de las instalaciones nucleares, así como una institución clave para la sostenibilidad energética y medioambiental.

Este papel se torna aún más decisivo en el contexto de una transición energética que debe clarificar el papel de la energía nuclear en nuestro país, tanto si se opta por una ampliación de las autorizaciones de explotación de las instalaciones nucleares como si se decide su desmantelamiento. Así como también a todas aquellas decisiones que afecten a la gestión de residuos radiactivos.

En todo caso, el papel del regulador nuclear es esencial para dotar de seguridad, credibilidad y confianza al proceso que se decida desde las instancias políticas. Un Consejo de Seguridad Nuclear creíble y transparente contribuye a desterrar los temores que se puedan suscitar en la población en relación a este sector y fomenta la confianza en las instituciones públicas.

Sin embargo y a pesar de la expresión de independencia que se le concede tanto en su ley de creación como en el estatuto que lo regula, los mecanismos de transparencia del organismo han quedado obsoletos con el devenir de los años; tanto es así que, a pesar de ser un organismo que presume de su transparencia en los distintos documentos legales, no contempla la publicación de diarios de sesiones de las reuniones del Pleno del Consejo que lo dirige (como sí sucede en otros organismos de referencia, como la NRC estadounidense).

Asimismo, tampoco se recogen mecanismos de autoevaluación como la existencia de buzones de quejas y sugerencias o la obligatoriedad de publicar un informe de actividad al término del mandato de la Presidencia.

Finalmente, pero no por ello menos importante, la elección de los miembros del Pleno del Consejo debe garantizar la calidad e independencia de los candidatos, una circunstancia que a día de hoy queda en entredicho como se ha advertido reiteradamente desde varias instancias.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar el artículo 35 del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear para que se incluya la publicación de los diarios de sesiones de las reuniones del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear.

2. Realizar los cambios legales oportunos tanto en el Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, como sobre la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, para establecer la obligatoriedad de que la Presidencia emita un informe de actividad al término de su mandato.

3. Realizar los cambios legales oportunos en el Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, para incluir mecanismos de autoevaluación en la institución como buzones de incidencias, sugerencias o quejas.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 190

4. Realizar los cambios legales oportunos tanto en el Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, como sobre la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, para establecer un nuevo modelo de elección de los miembros del Pleno del Consejo.

Este modelo se basará en la propuesta de candidatos por parte del Gobierno que, posteriormente, serán examinados en base a su capacitación, idoneidad, independencia e imparcialidad por una Comisión Técnica que emitirá un informe.

A continuación, los candidatos propuestos comparecerán ante la Comisión de Transición Ecológica, cuyos miembros ratificarán su designación por votación de la mayoría de sus miembros.

En caso de que el informe previo de la Comisión Técnica fuese favorable, la mayoría requerida será simple; en caso opuesto, se requerirá mayoría absoluta para su aprobación.

Si el candidato no fuese ratificado, el Gobierno deberá reiniciar el procedimiento proponiendo una nueva candidatura.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**María Muñoz Vidal y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000032

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación de la Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA) para la mejora del reciclado de envases y vidrio, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

Canarias lleva años pidiendo un mayor control y registro del volumen y tipo de envases que se introducen en Canarias, para poder gestionar mejor los residuos de envases y embalajes que entran en el sistema integrado de gestión de residuos establecido en las islas, como por ejemplo Ecoembes o Ecovidrio.

Hay que tener en cuenta la cantidad de productos envasados que introducen en Canarias, no solo van a satisfacer la demanda local, sino que atienden a la demanda de los 16 millones de turistas que recibe esta Comunidad Autónoma.

A la hora de analizar los resultados de la recogida selectiva es imprescindible tener el dato correcto de lo puesto en el mercado, por lo que debemos tener en cuenta no solo los envases puestos en el mercado por los envasadores canarios, sino también el volumen de envases que son importados e introducidos en Canarias. Pero también es clave asegurar que todos los envases que entran en el mercado han contribuido adecuadamente a sufragar los gastos de gestión que supone la recogida selectiva.

Para conocer el volumen y tipo de envases que entran en el mercado canario se dispone de una vía que garantiza que todos los operadores que importan o introducen productos en Canarias tengan que aportar dicha información, y es el DUA. En el DUA los operadores económicos deben aportar diversa información relativa al importador y a la mercancía importada e introducida en el mercado canario, por lo que es viable la modificación del DUA para añadir información respecto a los envases y tipología de las mercancías importadas. El objetivo sería que la información que hoy se aporta en el DUA se ampliara para asegurarnos de que todos los envases puestos en el mercado nacional han contribuido financieramente al sostenimiento del sistema abonando el pago correspondiente del punto verde.

Una modificación del Documento de Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA de Importación) permitiría controlar el fraude de todo aquel que está importando productos de consumo y que no está declarando el llamado «punto verde», así como evitar la competencia desleal que se produce al ahorrarse un coste y, al mismo tiempo, aportaría una información muy valiosa para que, en Canarias, se disponga del dato sobre el flujo de envases que se importan y que entran en el sistema, por tipo de material, para poder plantear un incremento de las inversiones en las infraestructuras de los complejos

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 191

ambientales, en el despliegue y mejoras de contenedores, y para que los posibles inversores puedan tener información para analizar la viabilidad de crear nuevas industrias de reciclaje.

España necesita impulsar decididamente una transición hacia una economía circular. Esto es especialmente acuciante en una economía insular como la de Canarias que, además, recibe ocho veces su población en turismo.

La situación actual dista mucho de lo deseable. El gobierno autonómico lleva casi veinte años sin aprobar un Plan de Gestión y del Programa de Prevención de Residuos de Canarias (PIRCAN), desde 2001. En el municipio de Arico se entierra el 80 % de la basura que genera la Isla de Tenerife, según su propio consistorio, y la Comisión Europea ha amenazado con multar a España al incumplir la obligación de tener planes de gestión de residuos en todo su territorio y revisarlos cada seis años. En la actualidad, Aragón, Madrid, Baleares y Canarias carecen de estos planes.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incluir en el Documento de Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA de Importación), al igual que se declaran productos, valor, IGIC, AIEM, entre otros, información sobre el SIG al que está adherido el producto importado.

En las casillas a incorporar se tendrá que indicar:

— SIG en el que se ha declarado la mercancía importada/introducida (Ecoembes, Ecovidrio o el que proceda).

— Número de identificación del contrato suscrito con el SIG (para poder confirmar si contribuye al punto verde).

— Tipo de producto que importa/introduce (el que se indica en la declaración de envases).

— Tipo de envase (papel, cartón, brick, lata, pet, etc.).

— Material.

— Peso envases gr.

— Número de unidades de envases.

2. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la elaboración de planes de gestión de residuos y el tratamiento del 100 % de los residuos generados y la reducción al mínimo de los residuos llevados a vertederos.

3. Garantizar la suficiencia económica de Canarias para su transición a una economía circular.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2019.—**María Muñoz Vidal y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000064

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Convenio de Obras Hidráulicas con Canarias, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018, elaborados por el Gobierno del Partido Popular, incluían 50 millones de euros para obras hidráulicas en Canarias distribuidos en dos partidas presupuestarias, una de 10 millones destinada a pequeñas obras que se materializarían por islas, y otra de 40 millones para obras de mayor envergadura que requería la firma de un nuevo Convenio en el que se materializarían de forma plurianual unos 900 millones de euros.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 192

Pese a ser una urgencia y una absoluta prioridad para Canarias, el Plan DSEAR del Gobierno califica esta región como de las más necesitadas en obra hidráulica, el Gobierno socialista ha mostrado una total falta de compromiso con las Islas Canarias.

Es cierto que el profundo clamor social en relación a los vertidos de aguas residuales en las Islas ha sido un revulsivo para que cada Administración ponga sobre la mesa sus competencias y obligaciones con respecto al vertido y depuración de aguas residuales, incrementando la financiación de éstas para corregir las deficiencias existentes en infraestructuras de saneamiento urbano que son necesarias y obligatorias para el correcto funcionamiento de acuerdo a la legislación en vigor.

Pero la gran asignatura pendiente es el marco jurídico y financiero para la inversión estatal que recoge la obra de mayor envergadura y la contenida en el plan CRECE, con obras que, por su inejecución, han provocado sanciones de la Unión Europea.

Entendemos que, desde 2018, ha habido tiempo más que suficiente para que el Gobierno del Partido Socialista clarifique las condiciones del nuevo Convenio y detalle la hoja de ruta respecto a las obras hidráulicas que hay que acometer en Canarias. La firma del documento de «Protocolo» con el Gobierno de Canarias sólo refleja voluntades de las partes firmantes, pero no recoge absolutamente ningún compromiso presupuestario ni temporal, que es lo que realmente se precisa para comenzar a ejecutar las obras que las islas necesitan.

El referido «protocolo», más que una hoja de ruta, es un acto propagandístico sin vinculación alguna, donde lo único definido son los organismos integrantes de las Comisiones Mixtas de seguimiento. El resto del documento no es más que una mera declaración de intenciones, similar a lo que el propio ejecutivo socialista hizo en octubre de 2018 con el «Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del agua» que tampoco aporta compromiso alguno a pesar de que el deterioro de la «Red de Suministro y Depuración» y las sanciones de la UE hacen imprescindibles inversiones concretas y específicas en el sistema.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Transfiera de manera inmediata los 40 millones de euros reflejados en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 destinados a financiar obras hidráulicas en la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. Firme el Convenio de Obras Hidráulicas con Canarias, para que exista un marco jurídico y presupuestario estable que dé continuidad a la inversión estatal en las Islas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2020.—**Ana María Zurita Expósito**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000106

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma de la fiscalidad en la factura de la luz, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

En los últimos años, especialmente desde el pasado año 2018, el precio del mercado de generación eléctrica ha registrado continuas subidas alcanzando niveles récord.

Todo ello se ha producido independientemente de la evolución de las reservas hidrológicas de nuestro país, sirva de ejemplo el importante crecimiento registrado en 2018 y que catapultó el índice de agua embalsada elevándolo y manteniéndolo un 15 % superior con respecto a 2017; regresando a los niveles medios registrados en la última década.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 193

La explicación de estos hechos recalca en la fuerte subida del precio de derecho de emisión del CO₂ en el mercado de derechos europeo (ETS), cuyo incremento en los últimos dos años ha llegado a ser de hasta 20€ por tonelada de CO₂, cinco veces el precio de enero de 2017.

Los datos evidencian el mantenimiento de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, el escaso desfase entre crecimiento económico y emisiones contaminantes que se ha podido consolidar esta década y, en relación a todo ello, la escasa producción renovable (en relación a las posibilidades que nuestro país ofrece) con la que cuenta nuestro sistema eléctrico en los meses de verano.

Las características del mercado marginalista, donde la tecnología más cara en cada hora marca la retribución que recibirán el resto de las tecnologías, unidas a la coyuntura internacional descrita, motivan buena parte de este ascenso en el precio de la luz; pero precisamente por ello es importante destacar la importancia de contar con tecnologías no emisoras de CO₂ en dicho mercado con el fin de contener los precios máximos marcados por los combustibles fósiles. Además hay que tener presente que la reforma del sistema marginalista sólo puede venir de la mano de una reforma comunitaria y no de modo unilateral por un Estado miembro.

Esta subida se produce en un contexto en el que España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea, lo que supone una importante carga para los bolsillos de nuestros ciudadanos y erosiona la competitividad de nuestras empresas.

Además, la pasada crisis económica y el enquistamiento del paro de larga duración han provocado un alarmante problema para los consumidores más vulnerables, lo que se ha llegado a conocer como «pobreza energética». Según datos del año 2016, 4,5 millones de españoles eran pobres desde el punto de vista energético, lo que implica que uno de cada diez hogares no tenía el dinero suficiente para mantener su casa en invierno por encima de los 18 grados centígrados.

Sin embargo, el Gobierno de España no puede ni debe quedarse de brazos cruzados. Si bien es cierto que los principales motivos de esta subida se deben a las circunstancias de mercado descritas, la mayor parte de la factura de la luz no se destina a sufragar estas cuestiones.

A los costes fijos del sistema, fruto de una mala política energética, hay que añadir una fuerte imposición fiscal que avala la factura como una herramienta recaudatoria en perjuicio de la ciudadanía.

Por estas razones hay que recalcar que sí es posible actuar sobre el enorme papel de los costes fijos, y en concreto, los costes de origen político no relacionados directamente con el suministro eléctrico, que constituyen el 70 % de la factura; lo que es una rémora para todos los hogares y empresas, así como una mala señal para la eficiencia energética de los consumidores (dado que se distorsionan las señales de precio que deberían concentrarse en el término de consumo y resulta indiferente consumir más o menos energía).

Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no relacionados directamente con el suministro:

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de una cuantía del 21 % para los consumidores peninsulares.
- Impuesto sobre la Electricidad: Una imposición creada con el objeto de evitar que los PGE asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que, como ya denunció Ciudadanos, actualmente se usa para la financiación autonómica.
- Tasa Municipal del 1,5 %.
- Impuesto a la generación eléctrica: Todos los generadores sin discriminación pagan un 7 % de sus ingresos para el sostenimiento de los costes del sistema.
- Tasa hidroeléctrica: 25,5 %, similar al anterior que sólo aplica a las centrales hidroeléctricas, que pagan esta cantidad además del 7 % anterior.
- Tasas nucleares: Incluyen impuesto por combustible nuclear gastado (2.190 €/kg) y por generación de residuos (6.000 €/m³ para los de media y baja actividad y 1.000 €/m³ para los de muy baja actividad) a sumar al 7 % de generación eléctrica.
- Tasa ENRESA: Tasa que pagan los propietarios de las centrales nucleares para financiar ENRESA, responsable de la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las mismas.
- Costes extrapeninsulares: El recargo que pagan los consumidores para poder ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional (tanto península como islas y ciudades autónomas). Este coste se imputa en los peajes en una mitad de su cuantía total y en los PGE la mitad restante, suponiendo un total de 1.000 millones de euros anuales.

— Fomento de las energías renovables: La financiación de las energías renovables introducidas durante las dos últimas décadas y que en muchos países se asume desde los PGE. Este coste se imputa en los peajes de la factura y actualmente supone un gasto corriente de unos 7.000 millones de euros anuales.

En relación a esta cuestión y sin menoscabo de la propuesta principal de esta iniciativa, es importante resaltar que, en virtud de la regulación del Impuesto sobre la Electricidad introducida por el Artículo 92 de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, se entiende por suministro de energía eléctrica tanto la prestación del servicio de peajes de acceso a la red eléctrica como la entrega de electricidad.

Como algunos expertos juristas han señalado, esta normativa da pie a que los costes no relacionados directamente con la definición de dicho artículo no formen parte de la base imponible del IVA y el Impuesto sobre la Electricidad, excluyéndose así otros costes presentes en la factura que ya se han señalado.

Desde Ciudadanos apostamos por una transición inteligente que apueste por las energías renovables, así como por una auditoría de costes del sistema y de la factura de la luz con el fin de garantizar que los consumidores paguen sólo los costes directamente relacionados con el suministro.

Es hipócrita que desde la administración se trabaje en un bono social eléctrico para paliar las dificultades de las personas más vulnerables por el alto coste de la luz, cuando la mayor parte del recibo son impuestos y costes políticos. Sería mucho más eficiente trabajar por una factura que refleje los costes reales de producción y que no sea una herramienta de recaudación del Estado.

Además, en el marco de la transición energética, es fundamental contar con una factura bien ordenada, que no contenga costes fijos en la parte variable y no genere problemas de distorsión entre consumidores a la hora de optar por la generación distribuida. Asimismo, esta factura debe ser competitiva en virtud tanto de las necesidades de familias y empresas como también para favorecer la movilidad eléctrica en detrimento de los combustibles fósiles.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, una reforma de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué conceptos determinan el volumen actual de la factura de la luz y qué costes deben ser asumidos por los consumidores en virtud de las necesidades expuestas.

2. Impulsar una reforma normativa que modifique la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto eléctrico con el fin de que aquella se componga únicamente por el precio pagado por la electricidad y el coste asociado a las redes de transporte y distribución, excluyéndose el resto de costes del sistema eléctrico añadidos, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.—**María Muñoz Vidal**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000128

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las infraestructuras hidráulicas del río Segura, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

Con ocasión de las inundaciones por fuertes temporales de lluvia por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que alcanzaba el sureste español los pasados días 12 a 16 de septiembre de 2019, se puso de manifiesto la falta de infraestructuras hidráulicas suficientes que evitaran o paliaran los daños causados

por avenidas de agua de gran caudal, bien del río Segura, bien de ramblas o cauces irregulares existentes en el territorio de la comarca alicantina de la Vega Baja. Dichos sucesos catastróficos han ocasionado no solo la pérdida en concreto de vidas humanas, sino igualmente numerosos y cuantiosos daños en bienes muebles e inmuebles tanto privados como públicos y en infraestructuras, con especial incidencia en el sector agrícola y ganadero.

En la zona del término municipal de Orihuela, pero igualmente en otras de dicho territorio, como Almoradí, Dolores, Daya Nueva, Daya Vieja, Benejúzar, Rojales, etc., se produjeron numerosos desbordamientos del cauce del Segura con inundaciones de tierras y pérdida de cosechas y graves daños a infraestructuras y otros bienes, todo ello en puntos determinados del cauce de dicho río a causa de roturas de muros de contención y motas dispuestas, precisamente, para evitar esos desbordamientos, fundamentalmente por la falta de un adecuado mantenimiento de dichas infraestructuras. Igualmente se produjeron en numerosos puntos del recorrido del cauce fluvial del Segura, taponamientos por arrastre de cañas, vegetación, así como residuos sólidos, por falta de la debida y necesaria limpieza y retirada de estos elementos del propio cauce. De la obligación de observar las debidas condiciones de mantenimiento y limpieza del cauce del río Segura, así como de la estabilidad de las infraestructuras hidráulicas de su cuenca, es responsable la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO).

En cualquier caso, el río Segura, en su curso bajo, ha demostrado necesitar de obras de infraestructura para evitar o paliar daños en caso de crecida del mismo, mediante las soluciones técnicas que deban analizarse y abordarse y que resulten las más eficientes, bien mediante el dragado y/o ampliación de dicho cauce, bien mediante el desvío del propio cauce en determinados puntos de su recorrido para evitar, por ejemplo zonas urbanas.

En el caso de la localidad de Orihuela, además, las inundaciones se produjeron también en gran medida por la gran avenida de agua procedente de la conocida como Rambla de Abanilla, cuya gestión corresponde igualmente a la CHS, y que está pendiente de ser debidamente encauzada mediante la necesaria obra de infraestructura hidráulica prevista y no realizada desde hace años, para la conducción ordenada de la crecida de las aguas en episodios de intensas lluvias en esta zona.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar una investigación en profundidad de la actuación de la Confederación Hidrográfica del Segura durante los graves sucesos de los días 12 a 16 de septiembre de 2019 en la zona de la comarca de la Vega Baja y en relación con los daños ocasionados o agravados por posibles deficiencias en el mantenimiento de infraestructuras hidráulicas de su responsabilidad.
2. Adoptar medidas concretas para asegurar un debido mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas vinculadas al cauce del río Segura en su Vega Baja a fin de evitar situaciones como las acaecidas en septiembre de 2019.
3. Ejecutar las obras de infraestructura para el debido encauzamiento de la conocida como Rambla de Abanilla en la zona de Orihuela, Alicante, a fin de evitar avenidas de agua como las ocurridas en el mes de septiembre de 2019.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2020.—**María Carmen Martínez Granados y Marta Martín Llaguno**, Diputadas.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000136

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los daños ocasionados por la borrasca «Gloria», para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

El paso de la borrasca «Gloria» que ha azotado durante la última semana el este de la Península Ibérica, con especial incidencia en las costas del litoral mediterráneo, ha dejado tras de sí un balance devastador, con más de la mitad de los municipios catalanes afectados y más de 200 municipios en la Comunidad Valenciana, entre otros muchos afectados también en Aragón, Murcia y Andalucía.

Con este temporal se han llegado a acumular hasta 800 l/m², vientos con rachas de hasta 180 km/h, nieve que ha llegado a alcanzar los 90 centímetros de espesor, granizadas y olas que han superado los 10 metros de altura.

Doce personas han perdido la vida y cuatro están desaparecidas tras el paso de la tormenta Gloria por el este de España entre el domingo y el jueves de la semana pasada. Las pérdidas alcanzan cifras millonarias en sectores estratégicos como el de la agricultura y el turismo de nuestras zonas costeras. El temporal marítimo ha sido de tal intensidad que ha dañado gravemente numerosas construcciones y edificaciones en todo el litoral, ha hecho desaparecer playas y paseos marítimos de nuestras costas y ha afectado a innumerables infraestructuras que se han visto seriamente dañadas.

Nuestros principales destinos turísticos de playa se han visto afectados sufriendo gravísimos daños de incalculables consecuencias económicas. Las pérdidas a consecuencia del temporal «Gloria» se acumulan a escasos dos meses de la Semana Santa, fecha que marcará el inicio de la actividad turística de 2020. Por este motivo, resulta necesario y urgente una respuesta inmediata y coordinada desde todas las administraciones públicas para restaurar los daños producidos en nuestras costas.

De igual forma, los daños en el campo han sido generalizados debido al viento y al granizo, afectando a los cultivos y a las infraestructuras agrarias con distinta intensidad, pero causando también pérdidas millonarias en todo el este peninsular. El cultivo de cítricos, en su segunda parte de la campaña, es el más afectado. La misma suerte han sufrido los cultivos de hortalizas de invierno acabadas de plantar. Las principales pérdidas en las infraestructuras agrarias se localizan en invernaderos, caminos, sistemas de riego, rotura de naves, granjas, márgenes o mataderos.

En resumen, numerosos incidentes de cuantía incalculable que han provocado la alteración de la actividad cotidiana de los vecinos de las zonas afectadas con la supresión de la actividad escolar, rescates, desalojos, cortes de carreteras, interrupción del servicio ferroviario, el desbordamiento de ramblas, arroyos y ríos que han anegado calles y tierras de cultivo, o el fuerte oleaje que obligó al cierre de los puertos comerciales.

Lamentablemente, el temporal «Gloria» no ha sido el único que ha azotado nuestro país en los últimos meses. Es el cambio climático, según los expertos, el responsable de que se originen estos temporales que devastan todo a su paso: El Temporal Dana (SEPTIEMBRE 2019), el Temporal Elsa (DICIEMBRE 2019) y Temporal Gloria (ENERO 2020).

Desde Ciudadanos creemos que, aunque estos fenómenos son naturales y por ello poco predecibles y controlables, las diferentes administraciones e instituciones de nuestro país deben implantar medidas preventivas de mantenimiento dirigidas a que tanto las ciudades como las zonas rurales estén preparadas para la llegada de estos temporales.

Todas las medidas de prevención que se implanten, no solo harán que no sean tan graves sus efectos, sino que influirán en la creación de empleo directo en zonas rurales, ayudando a reducir las tasas de paro, y ayudará a la fijación del territorio en zonas donde existan problemas de despoblación.

Entre estas medidas, que dependen de diferentes administraciones, creemos que son muy importantes, y las mínimas imprescindibles:

1. La limpieza y adecuación de los cauces fluviales que evite desbordamientos futuros como los que suceden cada año. Con actuaciones constantes en épocas de tranquilidad climática. Son las Confederaciones Hidrológicas, dependientes del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), las que tienen la obligación de realizar estas labores de mantenimiento.

2. Protección de entornos urbanos afectados por su proximidad a los cauces para evitar que riadas o desbordes afecten a los hogares y los destruyan, así como mantenimiento preventivo del alcantarillado de las localidades cercanas por parte de sus ayuntamientos.

La falta de limpieza y adecuación de los cauces fluviales y de las infraestructuras relacionadas provocan numerosos desbordamientos de los cauces de los ríos de las zonas afectadas, que a su vez

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 197

provocan inundaciones de tierras y pérdida de cosechas y graves daños a infraestructuras y otros bienes, a causa de roturas de muros de contención dispuestos, precisamente, para evitar esos desbordamientos.

Son muchas las cuencas que necesitan obras de infraestructura para evitar o paliar daños en caso de crecida de los ríos, mediante las soluciones técnicas que deban analizarse y abordarse y que resulten las más eficientes, bien mediante el dragado y/o ampliación de dichos cauces, bien mediante el desvío del propio cauce en determinados puntos de su recorrido.

Las asociaciones agrarias españolas han reclamado en numerosas ocasiones a los ministerios correspondientes que las Confederaciones Hidrográficas que cumplan con sus obligaciones de mantenimiento de los cauces y de las infraestructuras hidráulicas, pero como hemos comprobado una y otra vez en los últimos años con los distintos temporales que ha sufrido España, las actuaciones son muy deficientes y, en muchos lugares, inexistentes.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Determinar y cuantificar, a la mayor brevedad posible, el alcance real de los daños causados por las lluvias, nevadas, granizo, vientos, tormentas, temporal marítimo e inundaciones sucedidas en todas las zonas afectadas por el temporal "Gloria".

2. Declarar las áreas afectadas como Zona Gravemente Afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

3. Conforme al artículo 24 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, adoptar todas las medidas necesarias para la compensación de daños a las personas y propiedades en las zonas decretadas como afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil.

4. Elaborar y ejecutar de forma inmediata un plan de recuperación urgente de playas, así como de infraestructuras accesorias, para que se encuentren en pleno rendimiento en la próxima campaña turística de Semana Santa 2020.

5. Habilitar todos los recursos necesarios para la reparación de las infraestructuras viarias (carreteras, puentes...) y ferroviarias afectadas.

6. Facilitar a los ayuntamientos y vecinos afectados el apoyo necesario e imprescindible para la tramitación de ayudas, partes de daños y seguros con el fin de recibirlos con la mayor rapidez.

7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una Comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

8. Realizar la evaluación correspondiente de la habitabilidad de los edificios de las zonas afectadas, proporcionando igualmente recursos necesarios para ofrecer temporalmente alternativas habitacionales a las familias que hayan perdido su vivienda.

9. Realizar una labor de coordinación con el resto de Administraciones implicadas para cooperar tanto en la prevención de futuros daños como la mitigación de los efectos de los temporales que está afectando a determinadas zonas de nuestro país.

10. Adoptar y cumplir medidas concretas para asegurar un debido mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas vinculadas a los cauces de los ríos españoles en momentos de tranquilidad climática a fin de evitar o paliar lo máximo posible los daños producidos tras los temporales.

11. Ejecutar las obras de infraestructura hidráulicas necesarias en las diferentes zonas fluviales de nuestro país, a fin de evitar o paliar lo máximo posible los daños producidos tras los temporales.

12. Elaborar planes formativos para las FCSE y las Policías Locales para lograr establecer operativos rápidos y efectivos en el tratamiento y actuaciones en estas catástrofes y lograr así una efectiva coordinación a través de un Plan Integral que incluya a la Unidad Militar de Emergencias, indicativos de Protección Civil, bomberos y servicios sanitarios.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2020.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000150

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la limpieza y mantenimiento de cauces y márgenes de ríos, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Exposición de motivos

El entorno de los ríos y arroyos de toda España y sus propios cauces presentan acumulación de maleza, arbustos, sedimentos... que requieren unas acciones de acondicionamiento y conservación de sus riberas, márgenes y del propio cauce con la finalidad principal de facilitar la circulación de las aguas superficiales y con ello evitar los problemas por inundaciones en las crecidas ordinarias de nuestros ríos e impedir los problemas sanitarios motivados por la presencia de insectos o roedores. En el caso de las inundaciones que se producen ante episodios de alta intensidad de lluvia, se ha constatado que en algunos casos aguas arriba de la zona inundada los materiales acumulados actúan como presa que se viene abajo aumentando el caudal del río de forma puntual hasta provocar riadas aguas abajo.

Estos trabajos de limpieza y mantenimiento corresponden, cuando así es la competencia territorial por el ámbito intercomunitario de la cuenca, a las Confederaciones Hidrográficas dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, según se define en el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y con las excepciones del punto cuarto de dicho artículo. Todo ello sin perjuicio de la competencia de los Organismos de cuenca para autorizar cualquier actuación que se realice en cauce público.

Por ello se considera necesario dotar presupuestariamente de las partidas que incluyan la limpieza de la vegetación acumulada en riberas, márgenes y cauces que discurren libremente y en el caso de ríos y arroyos encauzados en el cauce. Así mismo se debe prever la limpieza puntual de acumulación de sedimento o lodo en algún cauce si fuera necesaria medioambientalmente. Es decir, las principales actuaciones se pueden definir:

- Acondicionamiento de márgenes y riberas mediante la limpieza de arbustos, maleza, hierbas...
- Eliminación, retirada y transporte a vertedero de vegetación muerta.
- Poda selectiva, aclareo y entresaca de vegetación viva.
- Retirada y transporte a vertedero autorizado de residuos urbanos.
- Recuperación de zonas húmedas inundables.
- Reparaciones puntuales de actuaciones anteriores afectadas por riadas o acumulación de sedimentos o lodos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Establecer planes plurianuales de actuaciones, conservación y mantenimiento de los cauces de los ríos, que incluya actuaciones de limpieza.
2. Coordinar las actuaciones con las entidades locales con competencia en limpiezas de cauces.
3. Agilizar los trámites de las preceptivas autorizaciones administrativas para actuaciones de persona física, jurídica o administración pública para realizar obras de limpieza y/o acondicionamiento en un cauce público, ejerciendo el control de las mismas desde la Administración.
4. Dotar presupuestariamente anualmente las partidas necesarias para el correcto mantenimiento de cauces y márgenes de los ríos y arroyos de las cuencas intercomunitarias.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2020.—**Paloma Gázquez Collado**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 199

161/000153

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre una actuación urgente, sostenible, estructural y definitiva para la protección del litoral de Balerna y Guardias Viejas en el municipio de El Ejido, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Las localidades de Balerna y Guardias Viejas, en las crónicas históricas, constituyeron un puerto natural abrigado, con gran actividad comercial, pesquera, con salinas o fábricas de cerámica. Estamos hablando, junto con Adra, de los asentamientos probablemente más antiguos del poniente almeriense.

Estas localidades, cuya población es superior a los 6.000 habitantes forman parte del pujante municipio de El Ejido.

El paso de los años y las obras en el litoral mediterráneo más cercano, han afectado gravísimamente a las playas de Balerna y Guardias Viejas, tanto es así que ambas localidades han perdido ya más de 200 metros de playa y Balerna, además las 2 calles de viviendas más cercanas al mar en los últimos 50 años.

El invierno pasado, en los meses de enero y febrero debido a los fuertes temporales, la playa de Balerna sufrió un importante retroceso e importantes daños en el paseo marítimo.

El servicio provincial de costas ha realizado recientemente una aportación puntual de arena que no es ni mucho menos la solución para el grave problema existente, porque la dinámica litoral y los temporales se están volviendo más agresivos como consecuencia del cambio climático y de la influencia de otras obras en municipios cercanos. Por eso no basta con reparar el paseo y la playa, sino que hay que realizar todas las actuaciones necesarias para lograr la definitiva protección integral del litoral de Balerna y Guardias Viejas tal y como han solicitado el Presidente de la Junta Local de Balerna, el alcalde de El Ejido, la Plataforma vecinal de Balerna, y todos y cada uno de los vecinos de Balerna y Guardias Viejas.

Entre las medidas que se solicitan figura una mayor aportación de arena, la colocación de espigones geotextiles que retengan la arena y una solución estructural definitiva acometiendo el proyecto y la obra por vía de urgencia, porque sin medidas estructurales no se puede garantizar la estabilidad de la playa, que desaparece cada vez que ocurre un temporal, ni la seguridad de las fincas agrícolas en Las Cuevecillas, que se encuentran a merced de las inclemencias meteorológicas y del problema de desgaste que padece la costa.

Con el objetivo de evitar más daños a la economía y turismo de la zona, y para garantizar la seguridad de personas y construcciones, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que efectúe la declaración de emergencia para la restauración y demás obras que aseguren la integridad y adecuada conservación, recuperación y regeneración de las playas de Balerna y Guardias Viejas, así como a que agilice la tramitación de la Estrategia para la Protección del litoral almeriense incluyendo como prioritaria la solución integral para estas playas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2020.—**Juan José Matari Sáez y Miguel Ángel Castellón Rubio**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000154

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las instalaciones de desalación en la provincia de Castellón, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 200

Exposición de motivos

La Legislación Estatal sobre aguas, cuyo pilar actual es el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, señala que el objeto de esa Ley, según reza su primer artículo, es el siguiente:

«Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. Es objeto de esta Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución.

2. Es también objeto de esta ley el establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio de su calificación jurídica y de la legislación específica que les sea de aplicación.

3. Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico.

4. Corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en esta Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico.

5. Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2.»

El artículo 2 e) de la norma ya prevé, desde la promulgación de la Ley, en 1999 y en el Texto Refundido de 2001, que «Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar» formen parte del dominio público hidráulico del Estado.

El tratamiento de los recursos hidráulicos que posibilitan la desalación de agua de mar de forma diferenciada al resto de los existentes, excluyéndolos en la práctica de la concepción real de dominio público que preside la normativa hidráulica vigente ha generado desequilibrios o desigualdades que deben ser corregidos. Durante las dos últimas décadas se han ido construyendo instalaciones de desalación a lo largo de todo el litoral español, especialmente en las cuencas del Mediterráneo, que no se acogen en ninguna manera a ese sentido de dominio público y legislación estatal que sí impregna el resto de recursos hidráulicos y que protege la Ley de Aguas.

Así, la mayor parte de esas infraestructuras hídricas se han construido con una finalidad territorial exacta y, en todos los casos, inferior a las prestaciones que podrían desarrollar, bajo la intención de que fueran financiadas en su integridad y usadas de forma exclusiva por los municipios o colectivos que las sufraguen, excluyéndose de su uso al resto de ciudadanos, lo cual parece entrar en contradicción con el artículo 1 de la propia Ley.

La aplicación de la Ley así interpretada ha generado un trato diferencial de las infraestructuras de desalación respecto del resto de instalaciones hídricas que claramente, visto con la perspectiva de los años transcurridos, hace que la desalación no sea una realidad eficiente ni sostenible en la actualidad. O, dicho más claramente, que no funciona. Las infraestructuras hídricas de desalación o bien están escandalosamente infrautilizadas o bien, directamente, no pueden ponerse en marcha.

En concreto y a modo de ejemplo, en los años 2006 y 2007 se firmaron por la empresa estatal «Aguas de las Cuencas mediterráneas S.A.» —ACUAMED— y distintos Ayuntamientos de la provincia de Castellón, lo que se identificaron como Convenios reguladores para la financiación y explotación de dos desaladoras en esa provincia. Los convenios fueron firmados dentro de hipotéticas previsiones de desarrollo y crecimiento urbanístico futuro que nunca llegaron a materializarse y su suscripción era puesta como condición indispensable de la aprobación de todas las programaciones urbanísticas de crecimiento que proponían los municipios afectados. Así, los municipios con mayor margen de crecimiento urbanístico se veían sometidos a la necesidad de suscribir esos convenios so pena de no ver informada positivamente su suficiencia hídrica por la administración de aguas.

Esos Convenios, cuyas previsiones temporales ya han llegado, obligan a los Ayuntamientos que los suscribieron al pago de cantidades altísimas derivadas de la amortización de las instalaciones claramente sobredimensionadas. Ello deriva en una situación extremadamente urgente y grave si se tiene en cuenta que en la totalidad de los casos las necesidades reales de abastecimiento son nulas o ínfimas en relación a la capacidad de la instalación.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 201

Los Ayuntamientos afectados se encuentran pues en la actualidad en una posición desequilibrada en los Convenios y, si bien en algunos casos (no en todos) se han producido acuerdos transitorios de mejor asunción por los Ayuntamientos, son transitorios, por lo que se requiere una solución definitiva, no una prolongación en el tiempo del problema.

En definitiva, la idea de dominio público hidráulico debe ser también entendida como la posibilidad de que los usuarios, independientemente de su adscripción municipal, puedan ser abastecidos de instalaciones de desalación en idénticas condiciones. Para ello es preciso llevar a cabo las actuaciones necesarias encaminadas a garantizar que las infraestructuras desalación deben ser estatales y accesibles en iguales condiciones a todos los usuarios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Iniciar los trámites oportunos para que las infraestructuras hídricas de desalación, sus instalaciones y puesta en marcha sean sufragadas en su integridad por el Estado de forma que ninguna Administración Local deba sufragar los costes derivados de su construcción.

2. En consecuencia a lo anterior, el Estado modificará en el mismo sentido todos los convenios suscritos con Ayuntamientos que conlleven la asunción del coste de la amortización de las infraestructuras por las entidades municipales, que deberá ser asumido en su integridad por el Estado.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2020.—**Óscar Clavell López**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación del tómbolo sobre el que se asienta el castillo y la ciudad de Peñíscola y la adopción de medidas para garantizar la estabilidad y seguridad del acantilado y del conjunto histórico-artístico de Peñíscola, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Exposición de motivos

El fuerte temporal marítimo que azotó la costa la primera semana del mes de diciembre pasado causó, en la madrugada del jueves al viernes 6 de diciembre, el desprendimiento de dos grandes bloques de piedra del tómbolo sobre el que se asienta el Castillo Fortaleza del Papa Luna y la ciudadela de Peñíscola. La zona afectada está situada en las proximidades de las denominadas «Escaleras del Papa Luna», detrás del Castillo, donde rocas de grandes dimensiones se desprendieron del acantilado que cimenta la muralla exterior de la fortificación y se precipitaron al mar.

En un primer análisis técnico, desde la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, manifestó como causa del desprendimiento el proceso natural de descalcificación de la roca, apuntando que, en su opinión, no se aprecia peligro para la seguridad del conjunto Histórico-Artístico que constituye el Castillo y la Ciudadela de Peñíscola. Las singulares características geológicas y geográficas del Casco Histórico de Peñíscola, que se asienta sobre un tómbolo de roca caliza, la hacen especialmente vulnerable a la acción erosiva de las olas y las corrientes. En este sentido, si bien el nivel de deterioro ambiental en los elementos naturales del tómbolo en general no era apreciables hasta ahora, ya en el verano de 2018 aficionados locales a la fotografía y a los deportes náuticos alertaron del estado del acantilado en la parte posterior del Castillo, detectándose un cambio evidente en la estabilidad del tómbolo en dicha zona, donde se observaron desprendimientos e inestabilidad en las grandes losas que forman parte del conocido como «Pas de la Girafa», situado justo debajo de las escalinatas de acceso al castillo desde el mar y que forman parte de acantilado que sobre la que se apoya la muralla exterior del castillo y gran parte de Casco Antiguo de Peñíscola.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 202

Hay que señalar que las Murallas y el Castillo son patrimonio del Estado, y que el hecho que tanto las Murallas, como el Castillo, el Faro y todo el núcleo que conforma el Casco Antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, queden fuera del dominio público marítimo-terrestre no justifica en ningún caso que el Gobierno de España se desentienda de la peligrosidad que la situación comporta, no sólo respecto a la afección sobre un Bien declarado de Interés Cultural desde el punto de vista patrimonial, sino respecto a la seguridad de todos los ciudadanos, vecinos y residentes en el Casco Antiguo y/o también visitantes ocasionales del referido Conjunto Histórico-Artístico.

La ciudad de Peñíscola tiene unas condiciones históricas, arquitectónicas y paisajísticas excepcionales, que motivaron su declaración de Conjunto Histórico-Artístico en 1972, por tanto es necesario salvaguardar todo este legado patrimonial, que la hace irrepetible, para que las generaciones futuras puedan conocerlo y disfrutarlo. Los valores a conservar son de doble naturaleza, por un lado el carácter histórico de la ciudad y su conjunto a través de lo material que constituyen el patrimonio arquitectónico, urbano, arqueológico, paisajístico y medioambiental y, por otro, los valores simbólicos y espirituales que constituyen el patrimonio social y etnológico.

A la vista de los desprendimientos producidos, por la alarma que ello ha significado y la peligrosidad que puede entrañar para el Conjunto Histórico-Artístico de Peñíscola, tanto desde el punto de vista patrimonial como para la seguridad de sus habitantes, se considera urgente que por parte del Gobierno de España se adopten cuantas medidas resulten necesarias en garantía de la estabilidad y la seguridad del acantilado y del Conjunto Histórico-Artístico.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Solicitar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Transición Ecológica, con carácter urgente, la realización de un estudio geológico pormenorizado sobre la situación y estabilidad del tómbolo sobre el que se asienta el Castillo Fortaleza del Papa Luna y la ciudadela de Peñíscola y, en especial, respecto al estado (peligro de desprendimientos, estabilidad y seguridad) de la zona de los acantilados del tómbolo.

2. Solicitar la adopción de cuantas medidas resulten necesarias para la reparación del daño y deterioro producidos en el acantilado de la zona este del tómbolo, en garantía de la estabilidad y seguridad del acantilado y, por ende, de la salvaguarda del conjunto histórico-artístico de Peñíscola.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2020.—**Óscar Clavell López**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000174

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

El Gobierno del Estado, en su Consejo de Ministros de 21 de enero de 2020, viene de aprobar la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental, con el compromiso de adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco en los primeros cien días de gobierno. Entre ellas, figura la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por el momento en fase de anteproyecto, que en su redacción actual, en su Disposición Final Cuarta, establece la modificación de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, en los siguientes términos:

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 203

Uno. Se añaden dos nuevos apartados 12 y 13 en el artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con la siguiente redacción:

«12. Los titulares de instalaciones de producción cuya fuente de energía primaria sea fósil o termonuclear y que, como resultado de un proceso de transición justa hacia una nueva economía descarbonizada, substituyan esa tecnología por otras a partir de fuentes de energía primaria renovables, mantendrán su capacidad de acceso equivalente siempre que, en el plazo de tres años o bien en el plazo y condiciones complementarias que se establezcan en el desarrollo reglamentario mencionado en el presente artículo, se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la nueva instalación respete los criterios técnicos de acceso y conexión contemplados en la normativa correspondiente en vigor y, en particular, no suponga un aumento de la capacidad de acceso equivalente máxima de evacuación.

b) Que se suscriba entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el titular de la instalación un convenio de transición justa para todas las instalaciones de su propiedad, o pertenecientes a su mismo grupo societario, cuya fuente de energía primaria sea fósil o termonuclear.

c) Que por Orden de la Ministra para la Transición Ecológica se declarase que la central es prioritaria para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización de la economía y de integración de energías renovables. En esta orden se establecerán los hitos administrativos que deberán cumplirse para mantener los permisos de acceso y conexión y la cuantía de las garantías adicionales que deberán presentarse.

d) Que la transformación de la central se lleve a cabo en el plazo previsto en la Orden indicada en el párrafo anterior.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la solicitud de la actualización, en su caso, de las condiciones de acceso y conexión.

Con el objeto de que el potencial mantenimiento de la capacidad de acceso establecido en el presente artículo se realice preservando la seguridad del sistema, en el plazo de tres años, o bien en el plazo y condiciones complementarias que se establezcan en el desarrollo reglamentario mencionado en el párrafo anterior, el operador del sistema y en su caso los gestores de las redes de distribución, no podrán otorgar acceso a las redes a otras instalaciones que puedan resultar incompatibles con el mantenimiento de la capacidad de las instalaciones objeto del presente artículo.

13. Los titulares de las instalaciones de producción cuya fuente de energía primaria sea renovable que hibriden esas instalaciones con otras de producción de energía eléctrica que utilicen fuentes de energía primaria renovable podrán evacuar energía eléctrica utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso equivalente ya concedida, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la nueva instalación respete los criterios técnicos de acceso y conexión contemplados en la normativa correspondiente en vigor y, en particular, no suponga un aumento de la capacidad de acceso equivalente máxima de evacuación.

b) Que la nueva instalación cumpla con los requisitos técnicos que le sean de aplicación en el momento de incorporar la nueva generación de origen renovable.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la solicitud y tramitación de las condiciones de acceso y conexión para la hibridación de instalaciones de producción, y para la actualización, en su caso de los permisos ya otorgados. En este reglamento se establecerán, en su caso, los requisitos necesarios para discriminar la energía generada que pudiese ser perceptora del régimen retributivo específico.»

Dos. Se modifica el primer párrafo de la Disposición Transitoria octava de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con la siguiente redacción:

«Los derechos de acceso y conexión a un punto de la red determinado ya concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, y los otorgados conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria séptima, caducarán si concurre alguna de las siguientes circunstancias.»

Además el citado texto, en su artículo 23.3.e), al referirse a los llamados Convenios de Transición Justa, indica que «también podrán incluir el acceso prioritario a una parte o a la totalidad de la capacidad de evacuación eléctrica, en los términos previstos en la Disposición Final cuarta de esta ley, así como el acceso prioritario al uso del agua objeto de concesiones al amparo de lo previsto en el artículo 59 del Real

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 204

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que queden extinguidas tras el cierre de instalaciones de generación de energía eléctrica».

Por otro lado, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC), en su circular CIR/DE/001/19, por la que establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica, en el caso de solicitudes vinculadas a la nueva capacidad disponible (artículo 8) contempla la subasta, según el siguiente texto:

«1. El cierre de instalaciones de producción de potencia instalada superior a 200 MW, la aplicación de los criterios indicados en esta Circular, o en general, cualquier hecho que motive un incremento sobrevenido de la capacidad disponible en un nudo que permita una nueva potencia instalada superior a 200 MW, implicará un tratamiento diferenciado de las solicitudes asociadas a la citada capacidad disponible, que no seguirán el orden de prelación temporal general que se establece en el artículo 7.

2. Los permisos de acceso y conexión sobre la mencionada capacidad disponible serán otorgados siguiendo el orden resultante de un procedimiento de concurrencia competitiva (subasta).

3. El producto objeto de subasta será la potencia instalada para la que se pretende obtener permisos de acceso y de conexión en un determinado nudo.

4. Como consecuencia de las obligaciones de publicación de información establecidas en el artículo 23, los productores conocerán con antelación suficiente la capacidad que queda disponible y en qué nudo o nudos de las redes se produce dicha disponibilidad. Para eso, los gestores de las redes de transporte y distribución deberán publicar la potencia máxima disponible por nudo, así como la potencia instalada correspondiente, por lo menos, a las dos tecnologías con mayor número de solicitudes en curso en el momento de la publicación.

5. El proceso de adjudicación se realizará mediante subasta de sobre cerrado con sistema marginal, en el que se ofertará, para una determinada potencia instaladas y tecnología, el importe en el €/MW que está dispuesto a ofrecer el solicitante.

6. Como resultado de la subasta se obtendrá la potencia instalada y la tecnología asignada a cada participante, así como el importe resultante en €/MW. Los recursos dinerarios generados por la subasta recibirán la consideración de ingresos del sistema eléctrico [...].

7. El resultado de la subasta se aplicará en la ordenación de las en la ordenación de las solicitudes, que deberán ser presentadas conforme a lo previsto en el artículo 6 por los titulares de las instalaciones de producción en un plazo no superior a 40 días a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución por la que se apruebe el citado resultado.

8. La convocatoria y reglas que regirán dicha subasta serán establecidas por resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.»

El Miteco, en su informe sobre la Circular, entiende «que debe residir en el Gobierno, con independencia de que órgano gestione el procedimiento final, la decisión sobre la posibilidad de realizar subastas, concursos u otros procedimientos para otorgar el acceso en nudos concretos de la red. Esta capacidad obedece no solo a criterios de política energética sino también a criterios de política económica o social [...] la propuesta de Circular de la CNMC no contempla la posibilidad de prever el mantenimiento de capacidad disponible por el cierre de centrales para atender a situaciones de transición justa. Por tanto, este artículo 8 de la propuesta de Circular, entraría en conflicto con el mecanismo de transición justa previsto en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en el que se habilitaría para hacer posible que aquellas instalaciones de combustibles fósiles o termonucleares cuyo titular decida sustituir esa tecnología por otra que utilice fuentes de energías renovables puedan mantener su capacidad de acceso...».

En el mismo marco de actuaciones, el 22 de noviembre de 2019, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobaba el Real Decreto-ley 17/2019, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación, disposición validada por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados el 27 de noviembre, y con la que, según el gobierno en funciones se «refuerza la transición justa, habilitando la posibilidad de que los permisos de acceso a las redes y las concesiones de agua en los territorios afectados por cierres de centrales térmicas se otorguen incorporando criterios sociales, económicos y ambientales». Con la Disposición Final primera se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 205

Legislativo 1/2001) mediante la introducción de la Disposición Adicional décimo sexta, en los siguientes términos:

«Concesiones de agua para la transición justa. Cuando quede extinguida una concesión al amparo de lo previsto en el texto refundido en la ley de Aguas, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, debido al cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear, se podrá decidir el otorgamiento de una nueva concesión para el uso privativo de las aguas a nuevas iniciativas y proyectos en el área geográfica donde se encontraba la instalación. Para el otorgamiento se ponderarán criterios económicos, sociales y ambientales. Para estos efectos, los usos del agua que se prevean en tales iniciativas y proyectos prevalecerán sobre el orden de preferencia establecido en los planes hidrológicos de cuenca o, en su defecto, en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas, con la excepción del uso para abastecimiento de población, que será siempre prioritario.»

También modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, con la introducción de una Disposición adicional vigésimo segunda, entre otros cambios, con el siguiente texto:

«Otorgamiento de los permisos de acceso y conexión para garantizar una transición justa. No obstante lo dispuesto en el artículo 33 de esta Ley, cuando se proceda al cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear, y para promover un proceso de transición justa, la Ministra para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá regular procedimientos y establecer requisitos para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de evacuación de los nudos de la red afectados por los antedichos cierres a las nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovable que, además de los requisitos técnicos y económicos, ponderen los beneficios ambientales y sociales.»

En todo el proceso descrito con anterioridad se evidencia que, tanto la posición estrictamente economicista de la CNMC como la garantista de los supuestos derechos de propiedad de los grandes grupos energéticos representada por el Ministerio, no contemplan todos aquellos aspectos positivos e importantes publicitados oficialmente: la oportunidad para posicionarse cuanto antes en la innovación, las tecnologías, y la industria punteras, con el objetivo de aprovechar al máximo las oportunidades que presenta y que sirva de palanca para el progreso, para la modernización de la economía, la creación de empleo, el desarrollo del medio rural, la mejora de la salud de las personas y el medio ambiente, la justicia social, una estrategia de acompañamiento solidario y de transición justa, para asegurar que las personas y los territorios aprovechan las oportunidades de esta transición y nadie queda atrás. Si coinciden ambas posiciones en la visión uniformadora y homogeneizadora de los distintos territorios de aplicación, sin contemplar sus singularidades y condiciones características actuales para la implantación de las energías renovables, fundamentalmente solar y fotovoltaica, resultando en una discriminación de unos frente a otros, ya que no todos poseen las mismas potencialidades; olvidan ambas posiciones que la implantación de las centrales de carbón se produjo por decisiones políticas estatales en aquellas zonas con recursos propios susceptibles de ser aprovechados para los intereses del propio estado y, por lo tanto, ser expoliados, como en el caso de Galicia.

El BNG cree necesario y obligatorio introducir aspectos correctores, desde el punto de vista de justicia social y transición justa, en los mecanismos de acceso a las redes y a las concesiones de agua en los territorios afectados por cierres de centrales térmicas, de forma que los citados recursos actúen como vectores de crecimiento económico en sentido amplio, y supongan progreso social, pero no únicamente para los promotores de los proyectos sino para el conjunto de la ciudadanía gallega, estrechando el vínculo entre energía y sociedad.

Por todo lo expuesto con anterioridad, el BNG presenta la siguiente

Proposición no de Ley

Para instar al Gobierno a:

«1. Modificar la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en particular la disposición adicional vigésima segunda introducida por el Real Decreto-ley 17/2019, con la siguiente redacción:

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 206

“Disposición adicional vigésima segunda. Otorgamiento de los permisos de acceso y conexión para garantizar una transición justa.

No obstante lo dispuesto en el artículo 33 de esta Ley, cuando se proceda al cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear, y para promover un proceso de transición justa, el Ministerio competente, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá regular procedimientos de concurrencia competitiva y establecer requisitos para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de evacuación de los nudos de la red afectados por dichos cierres a las nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables que se implanten, en su totalidad, en los municipios afectados por el cierre y/ o en los límites; además de los requisitos técnicos y económicos, se deberán ponderar los beneficios medioambientales, sociales, los proyectos de desarrollo económicos o planes industriales asociados propuestos para su implantación en los citados municipios, y los compromisos adicionales de participación pública en el capital social del proyecto de nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables a través de entes de derecho público que tengan como objeto social o función la implantación de sistemas de producción de energía y que puedan constituir o participar en sociedades, cualquiera que fuese su forma, con un objeto que se relacione con sus fines; o de instrumentos financieros que canalicen el ahorro de particulares, particularmente de aquellos que afectados por los proyectos de nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables, hacia las inversiones vinculadas a tales proyectos; o de determinación del modo de implicación de los propietarios de los terrenos donde se implante el proyecto de nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables a través de fórmulas que vinculen la producción de la instalación con las rentas derivadas de las fórmulas de traslación o cesión de uso o aprovechamiento, tales como arrendamientos, censos o superficie, entre otras, en el caso de que el promotor opte por esta forma de disposición de las parcelas que precise.”

2. Modificar el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en particular la disposición adicional decimosexta introducida por el Real Decreto-ley 17/2019, con el siguiente tenor literal:

“Disposición adicional decimosexta. Concesiones de agua para transición justa.

Cuando quede extinguida una concesión al amparo de lo previsto en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, debido al cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear, se podrá decidir el otorgamiento de una nueva concesión para el uso privativo de las aguas a nuevas iniciativas y proyectos que se implanten en el término municipal donde se encontraba la instalación. Para el otorgamiento se deberán ponderar criterios económicos, sociales, medioambientales, los proyectos de desarrollo económicos o planes industriales asociados propuestos para su implantación en los citados municipios, y los compromisos adicionales de participación pública en el capital social del proyecto de nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables a través de entes de derecho público que tengan como objeto social o función la implantación de sistemas de producción de energía y que puedan constituir o participar en sociedades, cualquiera que fuese su forma, con un objeto que se relacione con sus fines; o de instrumentos financieros que canalicen el ahorro de particulares, particularmente de aquellos que afectados por los proyectos de nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables, hacia las inversiones vinculadas a tales proyectos; o de determinación del modo de implicación de los propietarios de los terrenos donde se implante el proyecto de nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables a través de fórmulas que vinculen la producción de la instalación con las rentas derivadas de las fórmulas de traslación o cesión de uso o aprovechamiento, tales como arrendamientos, censos o superficie, entre otras, en el caso de que el promotor opte por esta forma de disposición de las parcelas que precise. A estos efectos, los usos del agua que se prevean en tales iniciativas y proyectos prevalecerán sobre el orden de preferencia establecido en los planes hidrológicos de cuenca o, en su defecto, en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas, con la excepción del uso para abastecimiento de población, que será siempre prioritario.”»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.—**Néstor Rego Candamil**, Diputado.—**Laura Borràs Castanyer**, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 207

161/000177

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancia de Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre cogeneración en el sector cerámico, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

En los últimos años, la participación de la industria en el valor añadido de algunos países europeos como Alemania u Holanda ha permanecido prácticamente invariable mientras que el sur de Europa ha afrontado un fenómeno de desindustrialización de sus economías. La participación mediana de la industria en nuestro PIB ha caído al 15,8 % del PIB.

La cerámica es una de las principales industrias de las comarcas de Castelló, especialmente en el área delimitada al norte por l'Alcora y Barriar, al oeste por Onda, al sur por Nules y al este por Castelló de la Plana. En las comarcas de Castelló se concentra aproximadamente el 94 % de la producción española y el 81 % de las empresas del sector, que da trabajo a más de 20.000 personas directamente, y muchos millares más indirectamente.

La industria es una fuente indispensable de trabajo y de riqueza y, por lo tanto, tiene que ser una prioridad de nuestros gobiernos que tienen que crear el marco legislativo idóneo y políticas que fomentan la competitividad y sostenibilidad del tejido productivo.

La cogeneración es un sistema por el cual la industria aprovecha el mismo calor que se genera en el proceso de producción para reintroducirlo en el sistema. Así, la cogeneración reduce el consumo de energía primaria y es, por lo tanto, una herramienta de competitividad para las industrias intensivas en consumo energético, como la cerámica. Teniendo en cuenta que el 80 por ciento de la producción del sector se dirige a mercados exteriores muy competitivos, la cogeneración es clave para aminorar los altos costes energéticos incrementando la competitividad y la capacidad exportadora del sector.

El sector cerámico ha sido pionero en la aplicación de la cogeneración para aumentar la eficiencia y ahorro de sus procesos industriales. Sus primeras instalaciones fueron puestas en operación a mediados de los años ochenta en la provincia de Castellón. Ya desde un principio cumplían la etiqueta de excelencia ahora definida en la norma europea como «cogeneraciones de alta eficiencia», pues tenían una eficiencia global que puede alcanzar niveles superiores al 95 % y suponían un ahorro de energía primaria superior al 20 %.

La reforma energética llevada a cabo por el Gobierno en los últimos años ha tenido un fuerte impacto económico en el sector. El actual régimen retributivo para las renovables y cogeneración, aprobado en 2014, supuso una merma de competitividad para estas instalaciones, que ya fueron perjudicadas por las medidas fiscales para la sostenibilidad energética que entraron en vigor en 2012 (impuesto al gas natural e impuesto a la generación eléctrica).

El actual régimen regulatorio retributivo se extingue cuando la instalación alcanza el periodo de vida útil, establecido en 25 años. La gran mayoría de cogeneraciones cerámicas se pusieron en marcha en los años 90 por lo que en los próximos años muchas habrán cumplido los 25 años. Ello supone que pasarán a percibir exclusivamente la retribución por la energía vendida a precio de mercado, lo que las hace económicamente inviables.

Por otra parte, recientemente hemos conocido la Propuesta de Orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2025. De aprobarse dicha propuesta, prevista como fecha límite el 29 de febrero de 2020, supondría un recorte del 43 % a la retribución de las cogeneraciones en la industria cerámica (alrededor de unos 19 millones de euros anuales), lo cual supondría un nuevo varapalo para la competitividad del sector.

Por ello, para mantener y potenciar la contribución de la cogeneración a la transición ecológica, al ahorro de energía primaria, al impulso a la generación distribuida y a la competitividad industrial española, es necesario, un marco regulatorio que aporte certidumbre y seguridad para permitir planificar la actividad

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 208

industrial a medio y largo plazo, garantizando una retribución adecuada para que las instalaciones que terminan su vida útil puedan seguir funcionando.

Por todo lo anteriormente expuesto se realiza la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso insta al Gobierno a:

1. Establecer un marco jurídico específico de apoyo y fomento a la cogeneración, herramienta clave para la eficiencia energética, la sostenibilidad, la reindustrialización y la competitividad del sector del azulejo, y garantizar la seguridad jurídica de las inversiones en cogeneración.

2. Recapacite sobre la propuesta de Orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que supondría un recorte del 43 % a la retribución de las cogeneraciones en la industria cerámica.

3. Poner en marcha un plan de renovación de las actuales plantas de cogeneración, puesto que si no corren el riesgo que se paran y por lo tanto dejan de aportar a la sociedad los beneficios de ahorro de energía primaria.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.—**Joan Baldoví Roda**, Diputado.—**Laura Borràs Castanyer**, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

161/000010

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre aumento y mejora del servicio ferroviario en la Estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La conexión entre territorios de la provincia de Córdoba con el resto de España es de suma importancia para el desarrollo económico de los municipios, la generación de empleo y el incremento del turismo.

A tal fin, el Gobierno del Partido Popular, en marzo de 2014, puso en marcha la Estación de alta velocidad de ADIF en la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches, dando servicio a trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia tras años de demandas de instituciones públicas y plataformas ciudadanas.

En la actualidad se dispone de tres trenes por sentido que permiten viajar de forma directa entre Villanueva de Córdoba-Los Pedroches y Algeciras, Villanueva de Córdoba-Los Pedroches y Madrid, Villanueva de Córdoba-Los Pedroches y Sevilla o Villanueva de Córdoba-Los Pedroches y Córdoba. Realizando trasbordo en otras estaciones, desde Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se puede llegar a diferentes destinos como Barcelona-Sants, Lérida y Toledo.

Desde las distintas Administraciones Públicas, como también por parte de diferentes organizaciones sociales y agentes económicos y sociales, se ha reivindicado en multitud de ocasiones al Ministerio de Fomento la necesidad de aumentar el número de paradas en cada sentido por la demanda existente; a esto se une el cupo establecido para la venta de billetes de trayectos con origen en la Estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches que limita el número de billetes de tren que se pueden vender para viajeros con salida en esta estación.

El Gobierno, al ser preguntado sobre sus previsiones en cuanto al aumento del número de trenes AVE que hacen parada en la Estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches, así como sobre sus

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 209

previsiones sobre la eliminación del cupo establecido para la venta de billetes con origen en la referida estación, contesta de manera clara y rotunda que los servicios que existen «satisfacen la demanda existente» y por tanto no se prevén acometer mejoras de ninguna índole.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ampliar el número de trenes que realizan parada en la Estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches y a eliminar el cupo establecido para la venta de billetes de trenes con origen en la referida estación.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Andrés Lorite Lorite, María de la O Redondo Calvillo y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000011

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la conversión en autovía de la carretera N-432 Badajoz-Córdoba-Granada, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Las provincias de Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada están unidas tradicionalmente por estrechos lazos sociales, económicos y culturales. En conjunto reúnen a una importante población, con un censo de más de 2 millones de habitantes y, además, albergan sectores productivos muy importantes que en muchos casos son comunes. Todo esto provoca que exista un gran flujo de intercambios entre ellas, en todos los ámbitos, que hoy en día no encuentra un adecuado soporte en las infraestructuras existentes.

La carretera N-432 es el eje de comunicación más directo que las conecta entre sí. Sin embargo, las características de esta vía, de un solo carril en cada sentido, con un trazado sinuoso en muchas partes y con travesías por cascos urbanos, obligan a buscar rutas alternativas a muchos ciudadanos, tanto en su actividad privada como laboral o empresarial, con el consiguiente incremento en los costes de desplazamientos.

El desdoblamiento de la N-432 y su conversión en autovía es, pues, una prioridad estratégica para los territorios por los que transcurre, ya que mejoraría las relaciones sociales, culturales y económicas, tanto entre los mismos como con otras zonas de España y Portugal, e impulsaría su desarrollo y la generación de empleo y riqueza.

La Autovía Badajoz-Córdoba-Granada serviría también para mejorar la vertebración y el reequilibrio territorial interno dentro de estas cuatro provincias y dentro de Andalucía, creando un eje de comunicación rápida entre el Atlántico y el mediterráneo andaluz, como zonas de gran flujo turístico.

En definitiva, el desdoblamiento de la N-432 supone una importante plataforma para el desarrollo y el progreso de muchos municipios andaluces y extremeños, y para el conjunto de los ciudadanos de estas dos Comunidades Autónomas.

El Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy contempló, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, una dotación de 3 millones de euros para la elaboración del estudio previo del proyecto de construcción de la Autovía A-81, cumpliendo así con los compromisos asumidos previamente. Dicha actuación, por tanto, se encuentra recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 una vez que las Cortes Generales aprobaron al mencionado proyecto legislativo. Toda vez que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 han sido prorrogados para el ejercicio 2019, hoy están en vigor.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 210

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la ejecución inmediata de las partidas consignadas en el anexo de inversiones del Ministerio de Fomento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (hoy prorrogados) relativas a la conversión en la autovía A-81 de la actual carretera N-432.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Andrés Lorite Lorite, María de la O Redondo Calvillo y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000012

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración de Obligación de Servicio Público en el servicio ferroviario de Cercanías en el Valle del Guadalquivir (Córdoba), para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El tren de cercanías se considera de vital importancia para la economía y el desarrollo del Valle del Guadalquivir cordobés, incluida la capital de la provincia. Tanto para el desarrollo del sector turístico, como para el comercio y la agricultura y evidentemente para el bienestar de los ciudadanos de poblaciones que, desde Palma del Río hasta Villa del Río, también tienen derecho a transporte público, para poder desplazarse a la capital y viceversa. Este es el caso de los cientos de estudiantes que en estas poblaciones se tienen que desplazar hasta Córdoba para cursar sus estudios universitarios. Además, son miles los desplazamientos por carretera que se podrían evitar con un buen servicio de cercanías. Ello redundaría, por un lado, en la seguridad vial y en evitar accidentes y por otro, con las miras puestas en las exigencias y compromisos por el cambio climático, una minoración considerable de las emisiones de CO₂.

Valga para avalar lo anteriormente señalado que existen más de 1.000 estudiantes matriculados en la Universidad de Córdoba de los municipios del Valle del Guadalquivir, ello sin contar los que están matriculados en los diversos ciclos formativos en los distritos Centro de Córdoba capital. Por otro lado, en el eje de carreteras del Valle del Guadalquivir, sólo contando los desplazamientos de la A-431 y los que se desarrollan por la A-4, sin tener en cuenta otras vías de comunicación que llegan hasta Córdoba capital, el flujo diario de vehículos es de más de 60.000. Traducido a emisiones esto significa más de 290 toneladas de CO₂ diarias.

Todos son factores positivos para un servicio que se lleva demandando sin respuesta desde hace décadas por los ciudadanos de estas poblaciones del Valle del Guadalquivir cordobés y que en reiteradas ocasiones ha sido solicitado por el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir.

La puesta en marcha no supondría una inversión excesiva, pues la línea férrea existe y está en funcionamiento, y prácticamente todas las estaciones existen y muchas de ellas en funcionamiento.

Este servicio no sólo sería un beneficio para los habitantes de los municipios del Valle del Guadalquivir que están en el eje ferroviario sino también de todos los municipios aledaños. Por tanto, se hablaría de incrementar el servicio de cercanías que existe actualmente en Córdoba y tendría a más de 400.000 personas potencialmente beneficiadas por este servicio, sin contar los flujos que se pueden inducir en visitantes que, por motivos turísticos, puedan utilizar este medio de transporte.

La puesta en funcionamiento de este servicio también supondría un fuerte empuje económico para la provincia en general, contando con unas infraestructuras mucho mejores que ayudarían a que el turismo siga creciendo como motor clave para el desarrollo de la capital y del eje del Valle del Guadalquivir.

Para el caso en el que hablamos, la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario prevé en su artículo 59 la posibilidad de declaración por parte del Gobierno de la Nación, que la prestación de

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 211

determinados servicios de transporte ferroviario de competencia estatal sobre las líneas o los tramos que integran la Red Ferroviaria de Interés General quede sujeta a obligaciones de servicio público.

Dicha declaración trae como consecuencia la compensación del déficit que pueda sufrir el operador que explota el servicio.

La respuesta del Gobierno a la pregunta formulada sobre las previsiones de declarar la Obligación de Servicio Público con respecto al servicio de Cercanías entre Palma del Río y Villa del Río ha sido negativa, asegurando el Ejecutivo que no se tiene prevista ninguna modificación de los servicios de Cercanías declarados como obligaciones de servicio público.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar la “obligación de servicio público” del servicio ferroviario de Cercanías entre las localidades cordobesas de Palma del Río y Villa del Río de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Andrés Lorite Lorite, María de la O Redondo Calvillo y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000024

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Edmundo Bal Francés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el análisis exhaustivo de las posibilidades de cambio de ancho de vía, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En 1855, el Gobierno de España, apoyado en un informe técnico del ingeniero Juan Subercase, decidió que todos los ferrocarriles interurbanos tendrían un ancho de vía de 1.668 mm, frente al estándar europeo o internacional de 1.435 mm que ya empezaba a imponerse en aquel momento. Fue una decisión controvertida, que con el tiempo ha contribuido a mantener muy aislado al ferrocarril ibérico (ya de por sí perjudicado por su propia situación geográfica periférica) respecto del resto de Europa, condenándolo a transbordar tráficos completos (no solo locomotoras o personal) en las fronteras del norte, lo que supone un importante contratiempo, así como a desarrollar internamente y fabricar trenes específicos para este ancho, en un mercado pequeño.

La decisión en 1988 de construir la nueva línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla en ancho internacional y la decisión posterior de construir los principales ejes de la red de alta velocidad en este mismo ancho han agravado el problema: se han generado fronteras ferroviarias interiores entre las redes de ambos anchos. Además, se ha creado la falsa sensación en los ciudadanos españoles de que el ancho es un parámetro crítico para el desarrollo de la Alta Velocidad. Sin embargo, la realidad es que, aunque la red de Alta Velocidad en España se haya construido casi en su totalidad en ancho europeo, el ancho de vía no influye significativamente en el comportamiento dinámico de los trenes, y no es necesario el ancho estándar europeo para circular a Alta Velocidad. Entre Ourense y Santiago circulan trenes de Alta Velocidad en ancho ibérico a 250 km/h y la infraestructura permite que lo puedan hacer a 300 km/h.

En la actualidad, por tanto, tenemos dos redes prácticamente separadas: una de 2.800 km en ancho estándar y otra de 11.250 km en ancho ibérico. La diferencia de ancho se da, además de en la frontera con Francia, en muchos otros puntos. Las tecnologías de cambio de ancho y de ancho mixto permiten resolver determinadas problemáticas, pero están lejos de salvar los enormes condicionantes de explotación que impone la diferencia de anchos. Además, estas tecnologías son costosas, cautivas de unos pocos proveedores y tienen ciertos inconvenientes.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 212

La lógica dice que realizar una estandarización del ancho de vía, cambiando toda la red a 1.435 mm, puede generar ventajas para el transporte por ferrocarril en España, suficientes al menos para que se considere su planificación. Sin embargo, además del coste, un cambio de ancho generalizado presentaría importantes inconvenientes que es necesario tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión. De hecho, en los foros de discusión de expertos en el transporte ferroviario se generan fuertes discusiones técnicas sobre la conveniencia o no de realizar esta operación o sobre la forma de abordarla para afectar lo mínimo posible a la explotación ferroviaria: tanto partidarios como detractores lamentan que no existan estudios que permitan evaluar en términos de coste y beneficio socioeconómico las ventajas e inconvenientes del cambio de ancho.

En este sentido, las obras de cambio de ancho de vía obligan a establecer restricciones de tráfico, e incluso a cerrar corredores completos desde el inicio hasta la finalización completa de los trabajos, puesto que no es posible compatibilizar los dos anchos en la misma línea. Además, debe acometerse al mismo tiempo el cambio de ancho de la infraestructura y el material móvil. En núcleos de cercanías, las afectaciones a los viajeros pueden ser muy importantes, y en otros tramos de la red no existe una ruta alternativa para los tráficos de mercancías durante las obras, por lo que estos pueden llegar a perderse y no recuperarse después.

Las ventajas del cambio de ancho, o más bien los costes de no realizarlo, residen sobre todo en las dificultades de mantener y operar dos redes casi totalmente separadas. La diferencia de anchos obliga a construir accesos separados en las grandes ciudades, incrementa los costes e impide aprovechar al máximo la capacidad de algunos tramos de la red de Alta Velocidad. Las vías en ancho estándar europeo que se utilizan para la Alta Velocidad no pueden ser utilizadas por los trenes de Cercanías ni viceversa, por lo que no se pueden compatibilizar servicios como se hace en otros países de Europa. También se dificulta la segregación de tráficos rápidos regionales y los de mercancías, además del ya citado problema del transbordo del tráfico de mercancías en la frontera francesa: los operadores españoles no pueden utilizar material rodante de otros países europeos en la red convencional, lo que limita su competitividad.

El cambio de ancho tiene un importante coste, porque exige renovar muchos activos en infraestructura y material móvil al mismo tiempo. Aun así, en la evaluación del coste hay que tener en cuenta que una parte importante de la infraestructura está ya amortizada, por lo que la necesidad de renovación puede ser una oportunidad de mejora. Por otro lado, el cambio de ancho no solucionaría por sí mismo muchos de los problemas del ferrocarril español, como la falta de capacidad y fiabilidad en los núcleos de cercanías, las carencias en terminales de mercancías, los problemas de mantenimiento, la falta de vías de apartado de 750 metros o incluso 1.500 metros, las fuertes pendientes..., aunque puede ser un aliciente para modernizar la red convencional si se toman las decisiones adecuadas.

En cualquier caso, se trata de un asunto complejo que no debe ser objeto de frivolidades ni de opiniones meramente políticas: el cambio de ancho debe ser estudiado convenientemente, huyendo de apriorismos y urgencias, e incluso de la necesidad de su generalización a absolutamente toda la red. Por tanto, se debe abordar este proceso con racionalidad técnica y transparencia, realizando una planificación concienzuda que no solo aborde este problema, sino todos los que lastran el transporte ferroviario.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar un estudio exhaustivo, dentro de la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, de las ventajas e inconvenientes, tanto sociales como económicos, que conllevaría el cambio de ancho antes de tomar cualquier decisión a este respecto en cualquier tramo. Dicho estudio deberá ser realizado preferentemente por la Oficina Nacional de Evaluación y ser multidisciplinar, contando con la participación de Adif y Renfe y con la colaboración de los operadores ferroviarios y las principales empresas del sector.
2. Realizar un estudio de los problemas de capacidad y fiabilidad que también lastran al transporte ferroviario en España, con objeto de dar una solución global a este modo de transporte.
3. Si finalmente se tomase la decisión de cambiar el ancho de vía, este debe planificarse de manera integral (considerando la infraestructura, el material rodante, las instalaciones logísticas, etcétera), de tal

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 213

modo que se minimicen las afecciones a los servicios. Por tanto, deberá introducirse en la planificación estratégica ferroviaria general de la que deba formar parte, detallándose todas las actuaciones:

- a) Valoración de las ventajas para la explotación que generaría el cambio de ancho en cada tramo (posibles nuevas conexiones entre la red de ancho ibérico y la red de ancho normal, optimización de estaciones, continuidad de tráfico en ancho normal hasta la frontera, etcétera).
- b) Costes que supondría tanto para la infraestructura como para el material móvil, incluyendo los costes de explotación durante el proceso de todos los operadores ferroviarios.
- c) Plazo y planificación de las obras, incluyendo el plan de contingencia durante el periodo en que se compatibilizaran los dos anchos, con especial atención a las afecciones al tráfico de cercanías en los grandes núcleos.
- d) Un estudio detallado sobre la potencial pérdida de tráfico de mercancías durante el proceso, períodos de afección y consecuencias, y una estimación de si se podría recuperar este tráfico y en qué grado, cuando se concluya.
- e) Un estudio comparado de los beneficios (o del coste de no realizar el cambio) a obtener en los próximos 30 años respecto a la opción de no acometer el cambio.

4. En cualquier caso, en tanto en cuanto no se estudie y se decida qué hacer con el cambio de ancho, no realizar actuaciones locales que puedan perjudicar al ferrocarril en el futuro, como, por ejemplo, instalar un ancho que impida el uso por parte de los trenes de distinto ancho o realizar renovaciones de vía con soluciones que no permitan el cambio de ancho.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**María Muñoz Vidal y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000025

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Edmundo Bal Francés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la red denominación del Aeropuerto de Valladolid a «Aeropuerto de Valladolid-Miguel Delibes», para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El 17 de octubre de 2020 se cumplen cien años del nacimiento de Miguel Delibes, uno de los escritores más importantes en lengua castellana de todos los tiempos, con una amplia influencia dentro y fuera de nuestras fronteras. Su obra literaria se centra en la narrativa, pero también cuenta con obras teatrales, y llevada al cine en una docena de películas, además de una extensa carrera periodística e incluso, como ilustrador y caricaturista en sus inicios. Valladolid tiene el honor de haber sido el lugar en que nació Delibes, en el año 1920.

Fue miembro de la Real Academia de la Lengua Española, a cuyo diccionario incorporó múltiples términos relacionados con el mundo rural. Se hizo acreedor de numerosos galardones entre ellos, por citar solo algunos de los más importantes, el Cervantes en 1993, el Príncipe de Asturias de las Letras en 1981, el Nadal, en 1947, el nacional de las Letras españolas en 1991 y el Nacional de Narrativa en dos ocasiones (1955 y 1999).

Así mismo, recibió el reconocimiento del mundo académico con Doctorados Honoris Causa en múltiples universidades, tales como la Universidad de Valladolid, Complutense, la Universidad de Salamanca o la Universidad del Sarre, en Alemania. Y no solamente eso, sino que en el año 2000 se creó la Cátedra Miguel Delibes, con sede en las universidades de Nueva York y Valladolid, con el objetivo de abrir un foro de debate sobre la literatura española contemporánea y facilitar su difusión en Estados Unidos, así como promover proyectos de divulgación de la literatura de nuestro país.

Miguel Delibes fue autor de más de cincuenta obras, habiendo alcanzado muchas de ellas fama inmortal, tales como El Hereje, El Camino, El disputado voto del señor Cayo o Los Santos Inocentes.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 214

También, como se ha dicho antes, se prodigó en otras artes, tales como el periodismo, alcanzando la dirección de El Norte de Castilla durante cinco años, o la caricatura. Cronista imprescindible de la segunda mitad del siglo XX para una España devastada por la guerra, su obra se convirtió rápidamente en un clásico.

Porque Delibes dio voz a las zonas rurales de España, a su Castilla querida y al abandono de las mismas. Defensor de las tradiciones, y firmemente comprometido con la justicia, la paz y la naturaleza, se opuso a la censura de un régimen franquista que quiso silenciarlo en numerosas ocasiones y dio la palabra a aquellos que no podían tenerla en un país arrasado por la guerra. Cuando falleció, el presidente por aquel entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, lo llamó «la voz austera de un país sumido en el silencio, la más alta cima de la literatura española», y Mariano Rajoy lo definió como «el gran escritor de la lengua castellana, el campo y la gente». No hubo nadie que no reconociera la trascendencia del momento. La pérdida de una de las grandes voces, de uno de los grandes clásicos, de la literatura castellana.

Y, ahora, cuando confrontamos la «árida y desarreglada» España de provincias que Delibes veía en su tiempo, despoblándose y con cada vez menos oportunidades ante la pasividad del gobierno, ha de reivindicarse como nunca su figura. La reivindicación de la naturaleza y de considerar la tradición no como adoración de cenizas, sino como transmisión del fuego, que hubiera dicho Gustav Mahler. La lucha por un humanismo militante, basado en la tolerancia a las ideas del otro. Y la idea de evitar que España volviera a partirse en dos mitades irreconciliables. Unas enseñanzas atemporales que debemos mantener vivas hoy.

Es por ello que consideramos que es deber de Valladolid rendir homenaje a uno de sus hijos ilustres. Esta tierra, de reyes, reinas, artistas y tantos personajes relevantes para la historia de este país, se siente especialmente orgullosa del hombre que siempre quiso ser libre, que luchó desde sus obras por mejorar las condiciones de aquellos que más sufrían durante los años de guerra y represión, y el que renovó la literatura y vocabulario castellano tras el dolor del conflicto. Miguel Delibes es una figura capital de la Historia de España, uno de los grandes orgullos de Valladolid, y es de justicia que su nombre presida nuestro aeropuerto, como homenaje a todo aquello que nos ha dado.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Considere cambiar la denominación del aeropuerto de Valladolid y pase a llamarse “Aeropuerto de Valladolid-Miguel Delibes”.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Edmundo Bal Francés**, Diputado.

161/000026

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de los Corredores Atlántico y Mediterráneo en España, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El transporte juega un papel crucial para la consecución de las libertades y derechos que la Unión Europea garantiza a sus ciudadanos en todo el territorio de la Unión, y especialmente en aquellas regiones periféricas que cuentan con una desventaja competitiva, por cuestiones geográficas, respecto a otras regiones europeas.

En esta línea, en 1996, el Parlamento Europeo, junto con el Consejo, adoptó la decisión de desarrollar una red transeuropea de transporte común, una de las principales políticas de la Unión en materia de transporte, con el objetivo de hacer efectivos los principios fundacionales de la UE. Recientemente, la

Unión Europea ha adoptado la planificación, el desarrollo y la explotación de las red transeuropea de transporte, definidas en los Reglamentos UE 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de Diciembre de 2013 sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de Diciembre de 2013 por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», de acuerdo con los objetivos, en particular, de la Estrategia Europa 2020 y del Libro Blanco de la Comisión «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible. La normativa europea obliga al Gobierno en el marco de las Directivas Europeas contempladas en el Tercer y Cuarto Paquete Ferroviario y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, la elaboración de una Estrategia Indicativa del Desarrollo, Mantenimiento y Renovación de la Infraestructura Ferroviaria. Esta estrategia acumula un retraso de más de dos años sobre el plazo fijado en la normativa y puede resultar en sanciones a España por parte de la Comisión Europea.

La política de la Unión Europea respecto a la red de transeuropea de transporte comprende 9 corredores. El objetivo es coordinar y combinar financiación de los instrumentos internos y externos pertinentes, tales como los Fondos Estructurales y de Cohesión, el Instrumento de Inversión de la Política de Vecindad (NIF) y el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA), financiación del Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, entre otros.

No obstante, los Estados Miembros son el actor principal responsable para el desarrollo de la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras de transporte. En este sentido, tres de los 9 corredores de la red TEN-T pasan por España y son responsabilidad del Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento. Se trata del Corredor Atlántico y del Corredor Mediterráneo y que transcurren, respectivamente, por un gran número de Comunidades Autónomas: Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Navarra, País Vasco y Cataluña.

Muchas son las razones para apostar por la red transeuropea de transportes en España:

a) Favorece el comercio, las exportaciones y la competitividad, enlazando puertos, aeropuertos, personas y empresas, es especialmente necesario en la era de la globalización para facilitar el libre comercio interior y las exportaciones a Europa y al mundo, de nuestros productos a precios más competitivos. La finalización de la red transeuropea de transportes convertirá a España en una plataforma continental de conexión con Europa, y vía de entrada para los productos procedentes y con destino a América del Sur, Estados Unidos y Canadá. Se reforzarán nuestras relaciones económicas con la DE, y diversas organizaciones de mercados comunes como MERCOSUR en América Latina, o el APTA (Acuerdo Comercial Asia-Pacífico), actuando como gran puerto intercontinental competitivo.

b) Vertebrar los territorios. Se trata de una infraestructura que contribuye a unir y conectar mejor España, las personas y sus territorios, que huye de un modelo excesivamente radial de infraestructuras.

c) Incentivar el turismo nacional. Las comunidades autónomas por donde transcurrirá esta infraestructura reciben gran parte del turismo de España. Solo para la Comunidad Valenciana, la Asociación Valenciana de Empresarios estima que el aumento del número de visitantes nacionales se situaría en el 16,3 % y el 10,6 % para los turistas internacionales gracias a la disponibilidad de la nueva red ferroviaria.

d) Apuesta de país por el medio ambiente y la lucha contra la contaminación proporcionando una alternativa más sostenible al transporte de mercancías y pasajeros por carretera. También se podría reducir la siniestralidad del tránsito de estas rutas. En total, los efectos positivos para la economía en estos aspectos de bajada de la siniestralidad y emisiones podrían superar a unos 15.000 millones de euros en los próximos cuarenta años.

e) Cuenta con un amplio consenso social y económico. Existe una clara y mayoritaria demanda social y empresarial que piden una infraestructura para vender sus productos de forma más competitiva e incrementar la eficiencia en los desplazamientos entre las ciudades del arco mediterráneo y atlántico.

Sin embargo, hoy siguen sin acabarse y sin desarrollarse de forma completa varios de los trayectos y servicios que comprenden dichos Corredores. El retraso y demora en su construcción es consecuencia de la falta de voluntad política para establecer un modelo real de movilidad territorial en toda España basado en criterios de eficiencia económica y retorno económico y social de las mismas. Éste y los gobiernos previos han considerado la política de infraestructuras como moneda de cambio para conseguir apoyos electorales. Después de tantos años de promesas incumplidas, es hora de impulsar y acelerar la

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 216

construcción de la red transeuropea de transporte en España en el marco de una España productiva y garantizando la conexión de todas las regiones españolas con Europa.

Desde Ciudadanos defendemos el impulso de las infraestructuras de los Corredores a través de actuaciones a lo largo de todos los recorridos y tramos y con un calendario anual de ejecuciones, al mismo tiempo que una dotación presupuestaria de inversiones realista y sostenible.

Por todo ello, teniendo presente la importancia estratégica que posee la red transeuropea de transporte para la definición del modelo territorial y de movilidad y para la dinamización de la economía de España, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Garantizar la eliminación de las barreras en los enlaces transfronterizos, cuellos de botella y nodos intermodales en territorio español.
2. Adoptar con los grupos parlamentarios y el conjunto del sector, un Pacto Nacional sobre Infraestructuras y Transporte que impulse los Corredores Atlántico y Mediterráneo en España.
3. Presentar al Congreso de los Diputados, en un plazo máximo de un año y en línea con el cumplimiento de las Directivas Europeas contempladas en el Tercer y Cuarto Paquete Ferroviario y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, una Estrategia Indicativa del Desarrollo, Mantenimiento y Renovación de la Infraestructura Ferroviaria.
4. Fortalecer la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) con el objetivo de crear un modelo de inversión en infraestructura basado en criterios de rentabilidad socioeconómica y no electoralista, así como promover la transparencia, imparcialidad, eficiencia y racionalidad de la política de infraestructuras.
5. Dotar de fondos las partidas presupuestarias necesarias para la ejecución y finalización del Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico en su totalidad.
6. Elevar en el seno de las instituciones europeas la necesidad de cumplir con los compromisos de financiación de las infraestructuras de la red transeuropea de transporte, especialmente a aquellas que se refiere al Corredor Atlántico y al Corredor Mediterráneo.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**María Muñoz Vidal y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000039

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la línea de AVE Madrid-Granada, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El AVE ha supuesto un importante revulsivo económico y social para la provincia de Granada, cuyo impacto ya se está notando tras los meses que esta línea lleva en funcionamiento. No obstante, y en seno del mismo argot, aún queda «un largo recorrido» de mejoras y asentamientos que catalicen el propio potencial de la línea. Unas de estas mejoras pueden ser los servicios de bajo coste. Los servicios de alta velocidad a bajo coste anunciados para la línea Madrid-Barcelona se han de extender a la línea Madrid-Granada, con el fin atraer nuevos usuarios e incentivar el turismo y las inversiones económicas.

Con los trenes «low cost» los granadinos podrán beneficiarse de unas tarifas más bajas y asequibles y, a su vez, se contribuirá a consolidar Granada como «capital de Congresos». La capacidad de transformación de la capital granadina, y por ende, de toda la provincia puede ser de unas dimensiones asombrosas si continúa la mejora de infraestructuras que, con acierto, se acometió esencialmente en el último lustro. La provincia podrá disfrutar de las ventajas que tiene el AVE a precios asequibles, unas ventajas que no tienen que ser exclusivas de otros destinos.

De la misma forma, y en el ámbito de la mejora de la competitividad que es posible alcanzar con ciertas reformas de carácter técnico y estructural, entendemos necesaria la realización de los estudios técnicos y la adopción de medidas imprescindibles para reducir el tiempo de trayecto del AVE Granada-Madrid por debajo de las tres horas; así como el estudio de la viabilidad técnica y económica para incrementar las frecuencias de la línea.

En este sentido, hay que traer a colación, a modo de necesario recordatorio, el fuerte compromiso que ha tenido siempre el Gobierno del PP con la provincia de Granada. Es necesario que el potencial de crecimiento que ya ha florecido continúe alimentándose de inversiones necesarias que además cuentan con un altísimo impacto económico y social como retorno positivo.

El AVE, es una infraestructura que ya se está mostrando «clave» para el desarrollo de la provincia, y ahora queda realizar todo el esfuerzo posible por asentarla, mejorarla y volverla más competitiva.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Extender los servicios de bajo coste a la línea ferroviaria AVE Madrid/Granada.
- Dar prioridad a la variante de Loja y, al mismo tiempo, realizar los estudios técnicos y adoptar las medidas necesarias para reducir el tiempo del trayecto del AVE Granada/Madrid por debajo de las tres horas.
- Estudiar la viabilidad técnica y económica para incrementar las frecuencias de la línea AVE Madrid/Granada.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Carlos Rojas García y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Diputados.

161/000062

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las conexiones ferroviarias de Talavera de la Reina, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La avería del pasado mes de enero de 2019 en el tren de la línea Madrid-Extremadura, que dejó tirados a 163 pasajeros, 24 de la provincia de Toledo, en medio de la noche, incomunicados, sin luz y calefacción, fue un escándalo nacional que llegó a calificarse como el «tren de la vergüenza». Esta avería es el mayor exponente de la incompetente gestión de esta línea ferroviaria por parte del Ministerio Fomento, ADIF y RENFE, manteniendo unos trenes tercermundistas y una infraestructura antigua y mal conservada que provoca averías, incidentes y accidentes de forma reiterada, continua, constante y cada vez más graves.

La línea ferroviaria Madrid-Extremadura es vital para la comunicación de los municipios de Oropesa, Talavera de la Reina, Torrijos e Illescas de la provincia de Toledo con Madrid. A lo largo del año 2019 han sido numerosos los accidentes, averías e incidencias en los diferentes servicios ferroviarios, con los consiguientes riesgos y perjuicios permanentes para pasajeros y vecinos de estas comarcas de la provincia de Toledo.

El anterior Gobierno del Partido Popular incluyó en los PGE de 2018 partidas presupuestarias, solo para la provincia de Toledo, por valor de 16 millones de euros, con el fin de llevar a cabo una serie de actuaciones y mejoras de la línea, tales como obras de instalación y protección automática, tratamiento y mejora de los terraplenes, renovación de las vías y electrificación de tramos e instalaciones de Bloqueo Automático Banalizado (BAB) en varios tramos.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 218

A las graves deficiencias del tren convencional de Talavera de la Reina hay que sumar la demora injustificada de la conexión ferroviaria de Madrid-Extremadura por AVE, un proyecto que lleva más de diez años de retraso. La llegada en 2004 del gobierno socialista, a pesar de ser años con superávit económico, supuso la paralización del proyecto durante ocho años, caducándose el Estudio Informativo y la Declaración de Impacto ambiental (DIA).

Tras superar la grave crisis económica, el gobierno popular impulsó el proyecto en el tramo Oropesa-Talavera-Madrid adjudicando la redacción de un nuevo Estudio Informativo, de este tramo de línea del AVE Madrid-Extremadura, en agosto de 2017, por un importe de 975.000 euros y dentro del PITVI 2012-2014. Fomento tenía el compromiso de presentarlo en el mes de julio de 2018 para proceder, de inmediato, a sacar el trazado a Información Pública y llevar a cabo de forma paralela la Evaluación de Impacto Ambiental (DIA), comenzar los Proyectos Constructivos y licitar las obras acortando plazos.

Tras la moción de censura, el gobierno actual ha paralizado nuevamente el proyecto y no ha contestado a las preguntas formuladas por los parlamentarios populares sobre el grado de ejecución presupuestaria de las partidas incluidas en los PGE de 2018, por lo que entendemos que la ejecución es cero. En los PGE 2018 se incluyeron inversiones plurianuales de 25 millones para 2019, 85,5 millones en 2020, y 175 millones en 2021. El coste total del proyecto era de 1.120 millones, 795 millones del coste del tramo Madrid-Talavera y 325 millones del coste de tramo Talavera de la Reina-Oropesa.

Asimismo, el gobierno anterior venía trabajando en la implantación de una Plataforma Logística y un Puerto Seco en Talavera de la Reina, tras la firma del Protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y el Ministerio de Fomento el 25 de noviembre de 2014, por ello el gobierno incluyó una partida presupuestaria de 200.000 euros para finalizar los estudios de viabilidad económico-financiera. En el año y medio del actual gobierno no se ha dado ni un solo paso en la implantación de dicha plataforma, ni en la presentación del estudio de viabilidad, ni la firma del acuerdo inicial para la redacción del proyecto, de la construcción y de la explotación de las terminales ferroviarias de la Plataforma Logística. El ministerio de Fomento no ha contestado a las preguntas formuladas por los parlamentarios populares de la provincia de Toledo por lo que deducimos que no se ha ejecutado nada.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Ejecutar todas las inversiones previstas en los PGE 2018, prorrogados en 2019 y 2020, y todas aquellas inversiones que se estimen necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros y la prestación digna de los servicios de ferrocarril entre Madrid-Oropesa-Talavera de la Reina-Torrijos-Illescas-Extremadura.

2. Agilizar todos los estudios, proyectos y obras del AVE a Talavera de la Reina en el corredor de Extremadura, cumpliendo los siguientes plazos de finalización.

- Presentar el Estudio Informativo del tramo Madrid-Oropesa en el plazo de quince días.
- Sacar a Información Pública el trazado del tramo Talavera-Madrid-Talavera en el plazo de 3 meses.
- Remitir al Ministerio toda la información para tener la Declaración de Impacto Ambiental en el plazo de 6 meses.

3. Proceder a la firma del acuerdo entre el Gobierno autonómico y Ministerio de Fomento para la redacción del proyecto, la construcción y la explotación de las terminales ferroviarias de la Plataforma Logística de Talavera de la Reina.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2020.—**Carmen Riobos Regadera y Vicente Tirado Ochoa**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 219

161/000075

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación del Puerto de Fonsalía en Tenerife, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El puerto de Fonsalía se plantea como puerto alternativo al de Los Cristianos en Tenerife, ya que este último tiene problemas irresolubles en sus accesos y conectividad terrestre que provocan permanentes colapsos y cuellos de botella en el intercambio de los modos marítimos a terrestres, generando numerosos problemas en el núcleo de Los Cristianos y un coste añadido, tanto para viajeros como para empresas.

La solución a estas ineficiencias entendemos que debe pasar por la reubicación del puerto, de manera que pueda estar conectado con el sistema viario terrestre y sea factible la conexión intermodal. Para ello, el desarrollo del puerto de Fonsalía no es algo novedoso, ya que tiene sus orígenes en la década de los 90 y existe un proyecto oficial desde 2001, año en que se inicia su tramitación. En 2006 se declaró de Interés Estratégico y en 2014 tuvo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable.

En 2015 se solicitó a Costas la adscripción del dominio público marítimo y terrestre a la que ha respondido recientemente el Ministerio de Transición Ecológica con un informe desfavorable a la petición; algo inexplicable después de un trámite y conversaciones de más de cuatro años.

Existen estudios suficientes que avalan la inversión en Fonsalía, que se estima en unos 200 millones de euros, dedicando el nuevo puerto al tráfico de ferrys, náutica deportiva y pesca, desarrollando en una superficie de 6,4 hectáreas, como se contiene en el proyecto, cinco atraques para buques comerciales, cuatrocientos setenta para barcos deportivos y un área destinada para barcos de pesca.

Una vez construido y operando Fonsalía, la solución para el caos del muelle de Los Cristianos sería trasladar la actividad de los ferrys al nuevo puerto, pudiendo incluso revalorizar el municipio de los Cristianos con una actividad exclusivamente turística deportiva, de ocio, y pequeños cruceros.

Esto, de acuerdo a la legislación actual, no es posible si no existe un intercambio de titularidad de forma que Fonsalía pase a ser Puerto de Interés General del Estado y Los Cristianos un Puerto de Interés Autonómico. Las vías legales para ello pueden ser desde un Convenio entre Administraciones a una modificación legislativa que ampare jurídicamente la implantación y posterior funcionamiento del Puerto de Fonsalía para el tráfico marítimo interinsular.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, a desbloquear el Puerto de Fonsalía:

1. Garantizando el intercambio de titularidad entre el nuevo puerto y el actual de Los Cristianos, de manera que el puerto de Fonsalía, sea considerado de Interés General del Estado y pueda albergar el tráfico de ferrys entre islas.
2. Con la adscripción de la parcela sobre la que se ejecutará el futuro puerto, ahora mismo dentro del dominio público marítimo terrestre.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2020.—**Ana María Zurita Expósito**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000076

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 220

de Ley para la modificación del Convenio de Carreteras con Canarias, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Las competencias en materia de infraestructuras viarias en Canarias las ostenta la propia Comunidad, por lo que no existe Red de Carreteras del Estado. El Ministerio de Fomento interviene financiando obras de carreteras en las islas mediante la firma de convenios debido a la obligación que establece la Ley 19/1994, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. El Convenio de Carreteras con Canarias ha sido objeto de múltiples controversias con el Gobierno central, principalmente debido a la mala gestión del Gobierno autonómico en la ejecución de las obras y a la reducción de la financiación como consecuencia de la crisis económica.

El Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias se firmó inicialmente en 2006 y fue modificado por la adenda suscrita en 2009 para el período 2006-2017, contemplando un total de 60 actuaciones. Este Convenio caducaba en diciembre de 2017 y, con carácter previo a su caducidad, el Gobierno del Partido Popular firmó una segunda Adenda al Convenio en la que se indicaba que: «Con el fin de que se puedan analizar nuevas actuaciones en materia de carreteras con los Presupuestos Generales del Estado 2017 prorrogados, en enero de 2018 comenzará a negociarse un nuevo convenio entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar nuevas actuaciones». Esta segunda Adenda pretendía prorrogar el Convenio y su Adenda inicial por un plazo de 14 meses, a contar desde el 1 de enero de 2018, al efecto de realizar la liquidación del mismo y dar continuidad a las obras en esta etapa transitoria.

Con estos objetivos se consignaron en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 una cantidad próxima a los 340 millones de euros, entre Convenio y obras que se habían valorado fuera del mismo. Desde el Partido Popular entendíamos que para poner en marcha y ejecutar estos presupuestos era necesaria la firma de un nuevo Convenio, como marco que diera seguridad jurídica y continuidad a la inversión estatal, que debía cumplir dos requisitos:

— Incluir las obras nuevas de acuerdo a las prioridades establecidas en cada isla por sus Cabildos Insulares.

— Establecer un acuerdo extrajudicial para determinar el prorrateo de los pagos de la Sentencia núm. 2075/2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 22 de diciembre de 2017, y siguientes, cuatro Sentencias hasta junio de 2018 o establecer un pago único.

Todo ello, entendiendo que la continuidad del Convenio de Carreteras y su desarrollo a corto plazo es de vital importancia para el desarrollo de nuestras islas y para solucionar graves problemas de movilidad que se agravan día a día y que son el resultado, no solo de la falta de financiación sino de una mala planificación y gestión por parte del Gobierno de Canarias que es, por su régimen competencial, a quien corresponde la ejecución de las obras.

La respuesta del nuevo Gobierno central socialista a las demandas de Canarias fue un documento de Convenio de Carreteras firmado el 22 de diciembre de 2018 con una dotación de 1.200 millones de euros que elude tanto la deuda contraída con Canarias como las cuantías a las que hacen alusión las Sentencias Judiciales referidas, que suman casi 1.000 millones de euros.

Asimismo, se especifica que esos 1.200 millones de euros estarán destinados a las obras incluidas en el anexo I (único) y las expropiaciones necesarias, en un período que comprende desde el 2018 al 2025, pero no se definen prioridades, ni importes, ni tiempos de ejecución de las vías a las que se refiere el mismo, tal y como reclamábamos desde el Partido Popular.

Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que el Convenio de Carreteras tiene que ser una planificación temporal y una planificación financiera, que defina las obras que son realmente prioritarias y que respondan a las necesidades de las islas. Así como debe permitir recuperar el dinero de la sentencia, estableciendo claramente las formas de pago, como ya se había negociado con el Partido Popular.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar y reestructurar el Convenio de Carreteras con Canarias, de manera que se definan las obras prioritarias para cada isla y se recoja su planificación

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 221

temporal y financiera, así como se establezcan de inmediato los mecanismos necesarios para el pago de las cantidades que se adeudan establecidas por las cuatro Sentencias Judiciales de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 22 de diciembre de 2017, y siguientes, hasta junio de 2018.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2020.—**Ana María Zurita Expósito**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000078

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ampliación del Aeropuerto Tenerife Sur, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En un territorio insular y alejado geográficamente del continente europeo, como es el caso de Tenerife, los aeropuertos constituyen infraestructuras estratégicas para el tráfico de personas. Este carácter diferencial de los aeropuertos insulares se ve reforzado por el papel que juegan como puerta de entrada/salida de la práctica totalidad de turistas que llegan a Tenerife. Este hecho pone de manifiesto la importancia de establecer una adecuada planificación de las instalaciones aeroportuarias que permita atender de forma satisfactoria el flujo continuo de residentes y visitantes a la isla.

Desde las instituciones insulares (Administración y grupos sectoriales) se ha entendido siempre que estas infraestructuras son estratégicas para mantener y mejorar el posicionamiento social y económico de la isla y que se deben garantizar, por tanto, unos adecuados niveles de calidad de servicio.

El aeropuerto de Tenerife Sur es considerado como un aeropuerto que compite por destino turístico (CNMC, 2014). En esta categoría se engloban los aeropuertos que tienen un tráfico superior a los 700.000 pasajeros mensuales y cuentan con un elevado porcentaje de pasajeros internacionales (superior al 50 %). Estos aeropuertos se encuentran más expuestos a la competencia de otros destinos turísticos internacionales. El aeropuerto de Tenerife Sur es el que muestra el mayor porcentaje medio de los últimos catorce años. Por ello, la competitividad de un destino turístico como Tenerife depende de la calidad y competitividad de su aeropuerto y viceversa, el éxito de un aeropuerto como Tenerife Sur depende de la competitividad y calidad de la isla como destino turístico.

El Documento de Regulación Aeroportuaria vigente (DORA 2017-2021) garantiza que la capacidad del Aeropuerto Tenerife Sur será suficiente para atender a la demanda y que se van a realizar las inversiones necesarias para optimizar la capacidad proporcionando unos servicios de calidad, en condiciones óptimas de funcionamiento. Estas inversiones incluyen:

- Proyecto de Edificio de Unión entre terminales.
- Proyecto de Adaptación del edificio T2 a procesos de embarque.
- Proyecto de Actuaciones estratégicas del plan de calidad.
- Proyecto de Adecuación plataforma de estacionamiento de aeronaves.

En concreto, las mejoras funcionales en el Área Terminal (edificio de unión T1-T2), según el citado documento, tienen como objeto mejorar la operatividad de los terminales, en lo que respecta a los flujos de los pasajeros y a la distribución de las áreas de tratamiento, para aumentar la calidad del servicio, dotando al edificio terminal de una importante superficie adicional para el tratamiento de los pasajeros que permitirá en el largo plazo adaptar la capacidad de la infraestructura a un posible crecimiento del tráfico, si este se produjera.

La aprobación y licitación de esta ampliación no ha contado, por parte de AENA, con la necesaria colaboración y supervisión del Cabildo insular, contrariamente a lo acordado en sucesivas reuniones mantenidas con el ente, y en el proyecto licitado persisten los problemas estructurales de la actual Terminal, construida con urgencia hace más de cuarenta años, y mantiene el principal inconveniente que

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 222

hoy lastra su funcionamiento al ser un edificio excesivamente estrecho para garantizar el correcto flujo de pasajeros de entrada y salida.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través del Ministerio de Fomento, requiera a AENA para que:

1. De manera inmediata, inicie los trabajos técnicos necesarios para un nuevo edificio terminal en Tenerife Sur, con el compromiso que pueda ejecutarse al principio del período cubierto por el DORA 2022-2026.

2. Las decisiones sobre el futuro de los aeropuertos de la isla cuenten con el máximo consenso técnico e institucional conforme a lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias, manteniendo para ello el programa de trabajo, a través de equipos técnicos, pactado con la dirección de AENA y con el concurso de las Administraciones canarias.

3. El nuevo edificio terminal Tenerife Sur permita la integración y coordinación funcional con el intercambiador previsto en el proyecto del Tren del Sur.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2020.—**Ana María Zurita Expósito**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000079

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la alta velocidad ferroviaria en la línea Salamanca-Madrid a través de Medina del Campo, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Salamanca es una de las provincias españolas con menor densidad de población, 27 habitantes por km², muy por debajo de la media nacional, y con mayor porcentaje de pequeños municipios: de los 362 municipios que la componen sólo 10 tienen más de 5.000 habitantes. De hecho, Salamanca capital concentra casi el 44 % de los habitantes de la provincia, porcentaje muy por encima de la media del resto de capitales de provincia españolas, que concentran en torno al 32 % de la población.

Con estas condiciones demográficas es imprescindible disponer de infraestructuras modernas y de la mejor conexión ferroviaria con Madrid, ya que permiten un dinamismo económico que contribuye a la creación de empleo y al desarrollo económico de toda la provincia.

Así lo entendimos en el Partido Popular y, estando en el Gobierno, siempre fijamos como objetivo mejorar la comunicación tanto entre los distintos municipios de la provincia entre sí, como la conexión de Salamanca capital con el resto de provincias, y particularmente con Madrid. En concreto, la inauguración en diciembre de 2015 de la línea de alta velocidad que permite conectar Salamanca con Madrid en poco más de una hora y media supuso un verdadero hito para toda la provincia.

Primero, porque permite que cientos de salmantinos se desplacen diariamente a la capital de España, tanto por motivos profesionales, familiares o de ocio, sin tener que renunciar a seguir viviendo en Salamanca y los municipios de su provincia.

Segundo, porque permite explotar todo el atractivo patrimonial, cultural y turístico de Salamanca y su provincia que, no en vano, es uno de los destinos de interior preferidos de turismo nacional. Según el INE, en 2018 llegaron a Salamanca 677.396 viajeros, de los que casi un tercio eran extranjeros y dos tercios nacionales, acumulando un total de 1.122.430 pernoctaciones, un 1,75 % más que en 2017, marcando así una cifra récord.

Acercar Salamanca y Madrid a través de la alta velocidad ha permitido diversificar el tipo de visitante que llega a esta ciudad y así hoy conviven el turista idiomático, el cultural, el rural o el que visita la ciudad

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 223

en un solo día. También ha servido para impulsar el turismo de congresos, convenciones y otros eventos, el llamado turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), con iniciativas como la promovida desde el propio ayuntamiento, en colaboración con Rente, para promocionar la ciudad como centro de convenciones.

En definitiva, la llegada de la alta velocidad ha beneficiado a todos los salmantinos en general; y de una manera más específica a los pasajeros habituales que se desplazan diariamente a Madrid por cuestión de trabajo y a aquellos comerciantes y empresarios del sector servicios que se han beneficiado de una mayor afluencia de turistas, y de unos turistas con intereses cada vez más diversos.

Casi 4 años después de su inauguración, se hace necesario realizar mejoras en esta línea de alta velocidad en términos tanto de reducción de tiempos de recorrido como de frecuencia de paso. Para lo primero, es imprescindible que el gobierno socialista deje de retrasar y agilice la ejecución de las inversiones que el Partido Popular ya había dejado previstas, especialmente en lo relativo a las obras para la supresión de los pasos a nivel y el cerramiento completo de las vías entre Salamanca y Medina del Campo.

Para lo segundo, basta con recuperar el compromiso que había asumido el gobierno del Partido Popular que, atendiendo a las reivindicaciones tanto de las instituciones como de la plataforma de usuarios frecuentes del tren rápido, se comprometió a analizar la viabilidad técnica y económica de las mejoras que éstos solicitan, especialmente en lo referido a una quinta frecuencia en el horario de tarde en el trayecto del Alvia Madrid-Salamanca.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

— Agilizar la ejecución de todas las inversiones presupuestadas que afectan a la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Salamanca; en especial, las referidas a las obras para la supresión de los pasos a nivel y el cerramiento completo de la vía entre Salamanca y Medina del Campo, así como cualquiera otra que tenga como objetivo reducir el tiempo de viaje por debajo de los 90 minutos.

— Estudiar la viabilidad técnica y económica para aumentar las frecuencias de viaje, incorporando una quinta frecuencia en el horario de tarde en el trayecto del Alvia Madrid-Salamanca.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020.—**José Antonio Bermúdez de Castro Fernández y María Jesús Moro Almaraz**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000102

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, por iniciativa del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los servicios ferroviarios deficientes y discriminatorios en Galiza y a las medidas urgentes que debe impulsar el Ministerio de Fomento.

Exposición de motivos

El transporte por ferrocarril debe promoverse y garantizarse desde las administraciones públicas, pues se trata de un servicio público básico que contribuye a la sostenibilidad y la salvaguarda del medio ambiente y que puede, y debe, favorecer la cohesión social y a la vertebración territorial.

Sin embargo, históricamente el ferrocarril ha sido un elemento de discriminación y agravio comparativo con Galiza. Debe recordarse, que el desarrollo de las redes ferroviarias ha obedecido en el Estado español a un modelo claramente centralista, primando las conexiones con Madrid en lugar de la movilidad interior de los diferentes territorios, resultando un mapa de condiciones diversas y desiguales. Así, en el caso gallego, nunca se potenció la conexión interior que sirviera para enlazar las principales poblaciones entre sí, ni tampoco se fomentó la posibilidad de abrir vías de comunicación ferroviarias ágiles hacia Portugal, negando así una vía de desarrollo económico y de cohesión territorial indudable y primando exclusivamente la conexión con la Meseta.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 224

Esta situación supone, a día de hoy, numerosos problemas, entre los que cabe destacar la deficiente conexión con Portugal desde la provincia de Pontevedra, que se convierte en inexistente en la de Ourense; el total abandono de la línea del eje cantábrico entre Ferrol y Ribadeo (Feve); el aislamiento ferroviario de Lugo provincia y más concretamente de su ciudad, que ni siquiera está conectada con Santiago de Compostela, y con una conexión deficiente con A Coruña; el desuso de las líneas llamadas regionales, como sucede en el eje Santiago-Ourense-A Gudiña donde se han cerrado numerosas estaciones y se han eliminado paradas, situación que también se ha da en el tramo Coruña-Vigo en el eje atlántico, donde también destaca la falta de conexiones adecuadas entre Ferrol y A Coruña.

Además, Galiza carece hoy en día de tren de cercanías, servicio que si tienen otros territorios como Asturias, Valencia o Cantabria. Históricamente fueron negadas o ejecutadas con muy baja intensidad las inversiones necesarias para modernizar la red ferroviaria gallega. En la actualidad no existe una red suficiente de conexión que compatibilice el transporte de personas viajeras y mercancías y ni siquiera una doble vía electrificada en todo el territorio.

Para empezar a corregir esta situación y atender adecuadamente la modernización de la red ferroviaria interior, en el Acuerdo firmado entre el BNG y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, se recoge en su punto cuarto como compromisos:

b) Modernizar la red interior ferroviaria gallega, acelerando la modernización, con actuaciones concretas a lo largo de la presente legislatura, para los siguientes tramos, como mínimo: A Coruña-Ferrol, A Coruña-Lugo y Vigo-Frontera Portuguesa en el eje atlántico ferroviario, así como la electrificación del tramo Ourense-Lugo. Modernizar, así mismo, la línea de FEVE que conecta Ferrol con Gijón.

c) Actuar sobre la red ferroviaria de mercancías (Corredor Atlántico en Galicia), presentando proyectos que permitan acceder a los fondos europeos CEF cuando se abra el nuevo plazo de ayudas en el año 2021. Completar la conexión de los puertos exteriores de Ferrol y Coruña la red ferroviaria, durante el año 2020. Además, cabe destacar que la propuesta presentada por España ante la Comisión Europea contempla la inclusión del itinerario A Coruña-Vigo-Ourense-León como ampliación del Corredor Atlántico en Galicia, y por consiguiente que este itinerario se incluya en el nuevo Reglamento de financiación de la Red transeuropea de transportes (a partir de 2021).

En todo caso, la actual situación de deterioro de los servicios ferroviarios se ha agravado tras la subida del precio de los títulos de transporte, el cierre de las dependencias de venta física de billetes en varias estaciones, y los continuos retrasos y averías. Estas recientes decisiones son inaceptables y deben ser inmediatamente corregidas por parte del Gobierno, y particularmente por el Ministerio de Fomento, departamento del que dependen Adif y Renfe.

La política de subida de precios.

A finales de diciembre el Consejo de Administración de Renfe decidía actualizar a partir del 1 de enero de 2020 la tarifa media de los títulos de transporte de media y larga distancia en un 1,1%, y un 1,2%, la más alta, para los trenes Avant. Desde el BNG consideramos que esta subida y sus consecuencias en el territorio gallego son un abuso, si tenemos en consideración las condiciones del servicio antes descritas. Subir la tarifa del Avant en Galiza supone una discriminación respecto de los territorios que sí tienen cercanías, que curiosamente no ha experimentado subidas recientes en los precios, mientras que en Galiza en el 2019 ya se produjo un incremento de un euro y diez céntimos para la conexión entre Ourense y Santiago.

Con esta subida, se van a ver afectados todos los recorridos por territorio gallego. Al producirse también una subida en la larga distancia, las poblaciones que tienen en ellos la única posibilidad de interconexión se van a ver gravemente afectadas, pues son aprovechados como forma de comunicación interna, aprovechando los trayectos que discurren por territorio gallego antes de salir hacia la Meseta. Por ejemplo, éste es el caso de personas que deseen desplazarse desde O Barco de Valdeorras o Monforte a Ourense y de ahí a otros puntos.

Mención singular merece la subida de los precios en la línea Avant entre A Coruña-Santiago-Ourense, que ya tenía un precio muy superior al que tienen otras líneas que emplean media distancia, como es el caso del eje Coruña-Vigo. No sólo tiene un precio hasta un 60% más caro en comparación con el eje atlántico, si no que sus frecuencias y horarios son menores, pues se hacen coincidir con las conexiones con Madrid desde Ourense, lo que hace traslucir el centralismo que preside la organización de las líneas.

En este sentido, el 7 de febrero de 2018 el Pleno del Parlamento Gallego debatía una Proposición no de Ley del BNG que acabaría suscitando un acuerdo unánime sobre las demandas que debían

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 225

hacerse llegar al Gobierno central, entre las que se incluían: la equiparación de las políticas y modalidades tarifarias en todo el territorio gallego, la ampliación de las frecuencias horarias que comunican las principales ciudades o reformular las condiciones de los bonos de transporte para aumentar el período de uso. Así, se puede deducir claramente, que el aumento de precios, y el resto de decisiones adoptadas por el Gobierno central, van en contra de lo demandado por el conjunto del arco parlamentario gallego.

Privatización, precarización y cierre de servicios.

A pesar de que el transporte ferroviario es un servicio público básico, las medidas adoptadas lo amenazan frontalmente, como la clara apuesta por la privatización de servicios elementales como la atención a las personas usuarias, al que ahora se le une el cierre de numerosos puntos físicos de venta de billetes en varias estaciones gallegas.

Ya en febrero de 2017 se anunciaba por la operadora ferroviaria la eliminación del servicio de atención al público y de la venta presencial de billetes, en estaciones como O Barco de Valdeorras, A Rúa, O Carballiño, Ribadavia, Sarria o Guillarei, que dieron lugar a protestas populares e institucionales solicitando la anulación de estas decisiones. En aquel momento se retiraron, pero poco tiempo después pudimos conocer como Adif daba un paso más en la pérdida del carácter público de los servicios al sacar adelante la privatización del servicio de atención al cliente y venta de billetes de las estaciones de A Rúa-Petín y O Barco de Valdeorras. En junio del pasado año, Adif continuaba con este modus operandi en las estaciones de Ribadavia y O Carballiño. A finales de diciembre se conocía la decisión de la operadora de cerrar a partir del 31 de diciembre de 2019 los servicios de venta de Ortigueira, Burda, Sarria, Viveiro, Guillarei y Redondela, además de las ya citadas de Ribadavia y O Carballiño, lo que menoscaba la adecuada atención y supone un paso más en la reducción de los servicios en el rural. Finalmente, ante la contestación social, Adif se ha comprometido a seguir prestando este servicio de forma temporal hasta el 31 de marzo. No obstante, Renfe ya avanzó a comienzos de año que su intención es facilitar la venta en taquilla sólo en aquellas estaciones por las que pasen al menos unos cien viajeros al día y tengan un «determinado volumen de venta» en dichas taquillas.

Deterioro en los servicios prestados.

En los últimos meses se han sucedido diversos acontecimientos que ponen de manifiesto las deficiencias en los mantenimientos de las vías, y el envejecimiento de los trenes destinados al transporte de viajeros en Galiza. Por ejemplo, el pasado 29 de octubre numerosos estudiantes denunciaban en redes sociales y en la prensa la situación vivida por la avería de un tren regional Ourense-Santiago al averiarse y pretender la operadora sustituirlo por un tren turístico de menos plazas obligando a los usuarios y usuarias a ir de pie o a renunciar al viaje. Este hecho, lejos de ser aislado, es una constante en los fines de semana cuando universitarios de diferentes localidades se desplazan, y ejemplifica una situación de constantes problemas con los trenes y de constantes abusos. La habitualidad de este tipo de incidencias hace evidente las necesidades de modernización del servicio.

Por todo lo expuesto con anterioridad, el BNG presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«Para instar al Gobierno a:

1. Elaborar a lo largo del año 2020 los proyectos necesarios para poder actuar en la modernización de la red ferroviaria gallega, conforme a lo recogido en el Acuerdo de investidura.
2. Poner en marcha un plan de auditorías de las vías ferroviarias que discurren por Galiza y un Plan de modernización de los ferrocarriles empleados para el transporte de viajeros y viajeras en Galiza.
3. Derogar la subida de precios en Galiza como compensación inicial por la degradación del servicio.
4. Retirar de forma definitiva el plan de cierre de los servicios presenciales de venta de billetes de las estaciones de Ortigueira, Burela, Sarria, Viveiro, O Carballiño, Ribadavia, Guillarei y Redondela y rectificar la política de privatización de servicios.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.—**Néstor Rego Candamil**, Diputado.—**Laura Borrás Castanyer**, Portavoz del Grupo Plural.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 226

161/000103

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la total gratuidad de la autopista AP7 en todos los tramos de su recorrido, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La desaparición de los peajes en la autopista AP7, en su tramo entre Tarragona y Alicante, ha supuesto su plena gratuidad desde el pasado 31 de diciembre de 2019. Dicha medida, sin duda positiva para los ciudadanos que transitan por dicha vía, supone sin embargo un flagrante caso de agravio comparativo para los demás españoles que lo hacen por el resto de tramos sujetos a peaje de la citada infraestructura.

En este sentido, circulan ya informaciones sobre que es asimismo intención del Gobierno el extender próximamente dicha gratuidad al tramo entre Tarragona y La Junquera, abarcando de esta forma también esa liberalización al resto de la provincia de Tarragona, así como a las provincias de Barcelona y Gerona. Sin embargo, nada se comenta o anuncia en relación con el resto de tramos de esta gran infraestructura que comunica por carretera más de 1.000 kilómetros del litoral mediterráneo español.

Por tal motivo, desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular exigimos al Gobierno de la Nación que extienda la total gratuidad de la autopista AP7 a lo largo de todo su recorrido, incluyendo también los tramos en las provincias de Alicante, Murcia, Almería, Málaga y Cádiz actualmente gravados con el pago de peajes.

A nuestro juicio, es inadmisibles que, siendo la misma autopista, no se pague peaje si se circula por Tarragona, Castellón o Valencia, curiosamente provincias gobernadas por partidos de ideología independentista —la primera— o socialista —la segunda y la tercera—, pero sí se tenga que hacer si se transita por una provincia gobernada por el Partido Popular, como ocurre con los casos de Alicante, Murcia, Almería y Málaga.

La autopista AP7 es una de las infraestructuras que más prosperidad, riqueza y empleo ha generado en España desde que abrió su primer tramo allá por 1969. Sin embargo, ese progreso que la construcción de la AP7 llevó a Cataluña y a la Comunidad Valenciana, llegó con casi 40 años de retraso al sur de Alicante, a la Región de Murcia, a Almería y a Málaga, que vieron como sus respectivos tramos tardaron mucho más tiempo en ejecutarse.

Por esta razón, no podemos permitir que ahora se quiera hacer lo mismo desde el actual Gobierno, penalizando con peajes, y durante varias décadas más, a los habitantes de aquellas provincias que han decidido libremente en las urnas ser gobernados por un color político distinto al del Ejecutivo central o al de sus socios.

El deber del Gobierno es velar porque todos los españoles seamos tratados por igual, y no discriminados según vivamos en uno u otro territorio. La eliminación del peaje en las provincias gobernadas por el independentismo y el socialismo, en contraposición con su mantenimiento en aquellas otras regidas por el Partido Popular, sólo puede ser considerado como muestra del peor sectarismo y objeto del rechazo frontal de quienes creemos en la igualdad y libertad de todos los españoles.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente.

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que acuerde la aprobación de la total gratuidad de la autopista AP7 en todos los tramos de su recorrido.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.—**Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés, Juan Luis Pedreño Molina, Miguel Ángel Castellón Rubio, Juan José Matarí Sáez, César Sánchez Pérez, Macarena Montesinos de Miguel y Agustín Almodóbar Barceló**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000111

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la creación de una estación ferroviaria de mercancías en el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, en la provincia de Ourense, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, en la provincia de Ourense es el de mayor superficie de Galicia, con más de 400 empresas instaladas y 8.000 puestos de trabajo. En sus inmediaciones se ubican otros polígonos empresariales como el de Pereiro de Aguiar, el Parque Tecnológico de Galicia y la Zona Comercial de Barreiros.

Pese a este gran potencial industrial, el citado Polígono sólo dispone de un apartadero-cargadero ferroviario que da servicio exclusivamente a una gran empresa agroalimentaria, y es una reivindicación constante desde hace años y que ahora se hace muy necesaria, la de proceder a la construcción de una nueva estación ferroviaria de mercancías que permita la intermodalidad y que aumente la competitividad de las empresas.

Con esta nueva instalación, para la que hay suelo disponible cerca de la vía férrea, se podría dar servicio además de la gran empresa antes mencionada a otras de diferentes sectores: automoción, maderero, aceitero, hormigón, etc. Y asimismo cabría pensar en trasladar aquí los contenedores de basura de Sogama que se transfieren hoy del camión al tren en la estación de Taboadela.

La construcción de esta nueva estación en el Polígono, permitiría que Adif pudiera liberar en la estación Ourense-Empalme la zona de depósito y carga que está claramente infrautilizada y ocupando una ingente cantidad de metros cuadrados, al trasladar esas instalaciones a la citada área industrial.

Esta reivindicación está promovida por la asociación de empresarios del Polígono de San Cibrao, pero está secundada por diferentes administraciones: Ayuntamientos, Diputación, Xunta de Galicia. Y también cuenta con un fuerte respaldo empresarial y de partidos políticos y sindicatos de diferente signo.

Entendemos que el primer paso formal que debe darse es que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana apoye esta justa iniciativa y acuerde la redacción del proyecto de esta nueva estación ferroviaria de mercancías.

Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, y más en concreto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a que acuerde la redacción del proyecto de una nueva estación ferroviaria de mercancías en el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, en la provincia de Ourense.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.—**Celso Luis Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000113

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso y la ejecución del Proyecto «Tercer Carril» en la Autovía A-7 entre Roquetas y Almería (tramo enlace 429-enlace 438), para su debate en la Comisión de Fomento.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 228

Exposición de motivos

El proyecto para ampliar con un tercer carril la Autovía A-7 entre Roquetas y Almería, exactamente entre los enlaces 429 y 438 es una de las obras más importantes que necesita la provincia de Almería y por ello es el momento de que sea impulsada y ejecutada de una manera decidida y definitiva.

Un proyecto demandado desde hace años y que originariamente abarcaba el tramo entre Roquetas y Viator, quedando posteriormente acotado al tramo Aguadulce-Bayana, que es el que presentaba y presenta mayor problemática, mayor intensidad de tráfico y por tanto mayores retenciones y accidentalidad. Y todo ello particularmente desde la apertura definitiva y completa de la A-7 entre Almería-Granada-Málaga.

En momentos actuales, como ocurrió en 2015, en los que la carretera de la conocida como «carretera del Cañarete», es cortada al tráfico por desprendimientos de la montaña se echa, todavía más en falta la necesidad de este tercer carril.

Es verdad que los problemas que ocasiona el cierre estos días por las obras en la N-340 A el Cañarete son menores que los que se produjeron en 2015 y 2016. Y esto es debido a las actuaciones que llevaron a cabo con carácter urgente el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Roquetas ejecutando dos accesos. Uno de ellos desde la autovía en el sentido Almería-Málaga realizado totalmente por el Ayuntamiento de Roquetas. Y otro, el ramal de incorporación sentido Almería desde la vía de servicio de Aguadulce Norte realizado en una semana por el Ministerio de Fomento.

El BOE de 19 de octubre de 2017 publicó la licitación del contrato de servicios para la redacción del Proyecto de construcción del «Tercer Carril de la A-7, tramo enlace 429 (Roquetas)-enlace 438 (Almería)». En septiembre de 2018 el BOE publicó la formalización del contrato que tiene por objeto la redacción del Proyecto.

Han pasado pues 16 meses y de acuerdo con una contestación parlamentaria del Gobierno «El proyecto del tercer carril en la A-7 entre el enlace de Roquetas y el enlace de Almería se encuentra en redacción. Una vez aprobado el proyecto se procederá a licitar las obras. Dada la situación en que se encuentra el expediente, no es posible dar una fecha de aprobación del proyecto».

Este tercer carril por calzada en la A-7 entre Roquetas y Almería es uno de los proyectos más importantes que en carreteras tiene pendiente el Ministerio de Fomento en la provincia de Almería. Y como su necesidad y urgencia están fuera de toda duda el Grupo Parlamentario Popular presenta esta iniciativa para impulsarlo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y ejecutar con carácter prioritario el proyecto Tercer carril en la autovía A-7 entre Roquetas y Almería (tramo enlace 429-enlace 438).»

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.—**Juan José Matari Sáez y Miguel Ángel Castellón Rubio**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000130

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar mejoras en los servicios ferroviarios convencionales que presta RENFE en Galicia, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

Asistimos a un progresivo y alarmante deterioro del servicio ferroviario convencional que presta Renfe en Galicia, circunstancia que se viene agravando de una manera creciente en los últimos meses. Afecta a prácticamente todas las líneas ferroviarias que discurren por Galicia, con excepción del Eixo Atlántico

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 229

(Vigo-Pontevedra-Vilagarcía-Santiago-A Coruña) y del corredor Ourense-Santiago-A Coruña, que disponen de infraestructura y material de mejor calidad.

El deterioro es especialmente significativo en la línea Vigo-Redondela-Guillarei-Porriño-Ribadavia-Ourense-Monforte-Quiroga-A Rúa-O Barco-Ponferrada-Astorga-León. Por esta línea circulan los trenes más antiguos del parque móvil de Renfe, entre ellas las unidades 470 que realizan el servicio regional diurno.

Existe un evidente problema de falta de trenes y de obsolescencia del material rodante (trenes regionales, tren hotel, etc) que provoca constantes averías. También faltan maquinistas, lo que provoca anulaciones de trenes, y personal de mantenimiento del material rodante que pueda atender con prontitud las incidencias que se producen. Se aprecia también un defectuoso mantenimiento de la infraestructura por parte de ADIF que se evidencia en las muy frecuentes caídas desde las trincheras de árboles o piedras sobre la vía y catenaria, fallos en la electrificación, etc.

Además, se pueden constatar fallos en los protocolos de atención a los viajeros cuando se producen incidencias. La respuesta es tardía, falta información a los viajeros, los autobuses y taxis llegan con retraso, etc. Los usuarios padecen constantes demoras, se producen anulaciones de trenes sin previo aviso. Tampoco hay horarios adecuados y en muchas ocasiones faltan plazas en los trenes de largo recorrido.

En definitiva, se está perjudicando gravemente a los usuarios del ferrocarril que esperan fiabilidad y calidad y se encuentran con lo contrario, degradación del servicio e incertidumbre. Además, las constantes incidencias en los trenes regionales afectan a los trenes Intercity y Alvia que ven muy difícil cumplir con sus horarios.

Ante esta lamentable situación que diariamente reproducen los medios de comunicación de Galicia, constatamos que ni el Ministerio de Transportes, Sostenibilidad y Agenda Urbana ni Renfe, ni ADIF reaccionan y arbitran soluciones.

Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, y más en concreto a RENFE, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a ADIF, a que con urgencia pongan en marcha planes que pongan freno al deterioro de los servicios ferroviarios en Galicia, y muy especialmente en la línea Vigo-Redondela-Guillarei-Porriño-Ribadavia-Ourense-Monforte-Quiroga-A Rúa-O Barco de Valdeorras-Ponferrada-Astorga-León.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2020.—**Celso Luis Delgado Arce**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000131

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a restituir el servicio de autobús por carretera que une Casas Bajas (Valencia) con Teruel (VAC-218), para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

El transporte de viajeros por carretera a través de servicios regulares constituye una de las principales herramientas de conexión y comunicación de nuestro país. En 2018 el sector del transporte en autobús aportó 5.679 millones de euros al PIB (0,56 % del total), mantuvo 95.122 puestos de trabajo (0,52 % del total) y contribuyó con 1.551 millones de euros a las arcas públicas (0,4 % del total de la recaudación conjunta de las AAPP). Las externalidades negativas asociadas a este medio de transporte son menores que las de otros: en términos de viajero-km, un pasajero de automóvil y de avión contaminan 2,4 veces más que uno de autobús.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 230

El transporte en autobús constituye un factor estratégico para la cohesión y el equilibrio territorial, en un contexto de pérdida de población en gran parte del país. Gracias al modelo concesional, el autobús es un modo accesible en todo el territorio nacional y se erige como un transporte clave para atender la demanda de movilidad de colectivos con menor acceso, como los jóvenes, mayores y personas con movilidad reducida. Además, las previsiones demográficas de envejecimiento sitúan al autobús como un modo decisivo para garantizar la movilidad sostenible en el futuro.

Por otra parte, la configuración del territorio en España y su morfología forman un condicionante para la articulación de la movilidad. La abundancia de zonas montañosas y la elevada dispersión y desigual de densidades de población a lo largo del territorio aconseja que, en determinadas zonas, el grueso del tráfico se genere en infraestructuras terrestres no ferroviarias, por las elevadas inversiones asociadas a su construcción y la rigidez de su infraestructura dedicada.

Desde el día 22 de enero la línea regular de autobuses Casas Bajas-Teruel (VAC-218) deja de prestar servicio. Ante esta situación, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha resuelto incorporar el servicio de autobús por carretera que une Casas Bajas (Valencia) con Teruel (y que da servicio a los municipios del Rincón de Ademuz, VAC-218) a la línea de transporte regular Cuenca-Barcelona (VAC-230), cuyos horarios no se adecúan a las necesidades de los ciudadanos de la zona. Esta situación ha encontrado el rechazo frontal de los municipios afectados, cuyos ayuntamientos se ven desamparados con la decisión tomada desde el Ministerio.

Durante el curso escolar, la ruta suprimida es utilizada a diario mayoritariamente por estudiantes de los municipios del Rincón de Ademuz, así como los de los municipios turolenses de la vega del río Turia desde Casas Bajas hasta Teruel. El servicio da soporte para acudir a citas sanitarias en el hospital Obispo Polanco de Teruel, para los alumnos de Formación Profesional y demás servicios generales, como trámites jurídicos y administrativos.

Además, se trata de una decisión que deja desatendidas a las localidades de Castielfabib, Cuesta del Rato y El Cuervo, ya que la línea alternativa que se propone (Cuenca-Barcelona) pasa por el término municipal de Castielfabib, pero no por la localidad, quedando a una distancia de casi 3 kilómetros la parada más cercana. El nuevo servicio que se propone va a impedir que un vecino de Ademuz, por ejemplo, pueda realizarse una analítica de sangre o que los estudiantes de la zona lleguen a su hora a clase.

La solución global pasa, inexcusablemente, por dotar a la comarca valenciana del Rincón de Ademuz de un servicio de transporte público adecuado a las necesidades de sus vecinos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Restituir el servicio de autobús por carretera que une Casas Bajas (Valencia) con Teruel (VAC-218).
2. Desarrollar un sistema de transporte orientado al ciudadano y basado en la movilidad, que constituya un transporte seguro, de calidad e inclusivo.
3. Priorizar las inversiones en mantenimiento, reparación y nuevas infraestructuras de transporte y comunicación que acerquen a los municipios de menor tamaño y a aquellas zonas con menor densidad de población.
4. Garantizar la igualdad de oportunidades y libertades para todos los españoles independientemente de donde residan.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2020.—**Belén Hoyo Juliá, Vicente Betoret Coll, Luis Santamaría Ruiz, Óscar Gamazo Mico y José Alberto Herrero Bono**, Diputados.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 231

161/000132

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la vivienda en Andalucía, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

El Gobierno de la Junta de Andalucía, en su primer año de gestión, ha buscado una solución para sacar del limbo a las 327.000 viviendas irregulares de las que el PSOE se desinteresó por completo durante décadas. Para ello, tramitó el Decreto Ley para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones en Andalucía que, el pasado mes de octubre de 2019, fue convalidado por el Parlamento andaluz con el respaldo del PP, CS, VOX y PSOE, y el voto en contra de Adelante Andalucía. Una vez más el PP logró acuerdos con grupos de distinto signo político buscando siempre el bien de los andaluces.

El Decreto-ley pone el acento en dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación de los procesos, y el objetivo principal es «mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares».

Hay que precisar que este decreto no es una amnistía. Permite, con algunas excepciones, que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento en las viviendas. Además, todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU.

Este decreto, por tanto, ofrece soluciones a problemas que tienen en torno a 300.000 viviendas construidas en todas las provincias durante el Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía y a las que este partido nunca quiso poner solución, a pesar de representar una seria amenaza para el medio ambiente, un peligro para las personas y una absoluta dejadez por parte del gobierno que tiene las competencias exclusivas en materia de ordenación urbanística en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por estas razones, esta medida ha sido alabada por presidentes de diputaciones y ayuntamientos de todos los partidos e ideologías, a los que ayuda y soluciona un problema que estaba enquistado desde hace años.

Por eso sorprende enormemente la carta recibida en la consejería de Fomento el pasado mes de diciembre de 2019, en la que el Gobierno le plantea un conflicto de competencias y amenaza con llevar el Decreto-ley para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones en Andalucía al Tribunal Constitucional, lo que podría paralizar su aplicación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que mantenga un contacto inmediato y leal con la Junta de Andalucía, con la intención de llegar a un acuerdo de manera urgente respecto al Decreto Ley para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones en Andalucía aprobado por amplia mayoría en el Parlamento andaluz, y desista de la interposición de recurso de inconstitucionalidad alguno, que causaría un daño irreparable a casi un millón de personas en toda la Comunidad Autónoma.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2020.—**Miguel Ángel Castellón Rubio**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 232

161/000133

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa del trazado más accesible y sostenible de la línea ferroviaria del Tren de la Costa a su paso por la comarca de la Safor en Valencia, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

En diciembre de 2017 el Ministerio de Fomento presentó el Plan Director de Mejora de los Servicios de Cercanías en la Comunitat Valenciana con una inversión de 1.436 millones de euros hasta 2025. Un plan que contemplaba, entre otras iniciativas vitales para el desarrollo y cohesión de la Comunitat Valenciana, la primera fase del Tren de la Costa con la duplicación de la línea 1 del núcleo de Cercanías de Valencia entre Cullera y Gandia, y la conexión con el último municipio del litoral de la provincia de Valencia, Oliva.

Ante la inacción del Gobierno de España, el pasado 12 de noviembre de 2019 las Cortes Valencianas aprobaron en la Comisión de Infraestructuras, por unanimidad, que se reactivara por parte del Ministerio de Fomento el Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana anteriormente citado.

El Ministerio de Fomento ha expuesto de nuevo al público el estudio informativo relativo al trazado ferroviario Cullera-Gandia y Gandia-Oliva-Denia, también conocido como Tren de la Costa, debido a la solicitud al Ministerio de Transición Ecológica para que formulara la declaración de impacto ambiental del trazado Cullera-Gandia-Oliva-Denia, dividiendo el proyecto en dos expedientes distintos y en dos tramos la actuación a ejecutar.

El 10 de febrero de 2020 se cumplirán 46 años desde que partió de Denia el último tren a Gandia. Entonces se prometió que se trataba de un cierre provisional para reconvertir en vía ancha la línea férrea que unía la provincia de Valencia con la de Alicante, en definitiva, transformar la línea e integrarla en la red de Renfe. Lo que nadie se imaginaba un 10 de febrero de 1974 es que se estaba dando el último adiós a la conexión entre las capitales de la comarca alicantina de La Marina Alta, Denia, y de la comarca valenciana de La Safor, Gandia.

Pero en lugar de adaptar la vieja línea del siglo XIX por Carcaixent, se consideró que el acceso a Valencia mejoraría si se enlazaba directamente el ferrocarril que llevaba desde Denia hasta Gandia por Cullera, para aprovechar el ferrocarril ya existente desde esta última localidad hasta Silla. Esa fue la razón por la que ya en 1969 se suprimió primero el tramo de Carcaixent a Gandia. Se consideraba que sólo la vía ancha podría resistir la dura competencia de la carretera y el coche.

Tal y como recoge la memoria del estudio informativo «el territorio litoral comprendido entre las áreas metropolitanas de Valencia y Alicante constituye un espacio de la máxima importancia social, económica y medioambiental, tanto dentro del ámbito particular de la Comunidad Valenciana como para el propio estado español. Sin embargo, dentro de este espacio, el sistema de comunicaciones internas cuenta tan solo con un elemento de gran capacidad, la autopista AP-7, lo que limita enormemente su eficacia en la canalización de flujos de transporte. No existe actualmente, por tanto, una conexión ferroviaria entre Valencia y Alicante por la costa. Únicamente se encuentra construido y en servicio el tramo Valencia-Gandia pero sin continuidad hacia el sur, por lo que poblaciones como Oliva, Denia o Benidorm, entre otras, no cuentan con conexión ferroviaria a la Red Ferroviaria de Interés General. Por otra parte, el tramo Cullera-Gandia se explota en la actualidad en vía única con los consecuentes problemas que ello supone para la explotación de la relación Valencia-Gandia. Esta situación implica que en el arco litoral Alicante-Valencia exista una amplia franja (en concreto, el tramo Alicante-Gandia), que se encuentra ferroviariamente incomunicada con el resto de la red estatal y de ahí se deduce la necesidad de resolver esta problemática a través de la actuación objeto del presente trabajo».

Respecto al estudio informativo de la línea ferroviaria Valencia-Alicante (Tren de la Costa) promovido por el Ministerio de Fomento, este afecta a distintos términos municipales de la comarca de la Safor. Por lo que respecta al término municipal de Xeraco, la alternativa 0A es la más beneficiosa al suponer una menor afección ambiental y no desmantelar la actual estación ferroviaria de ADIF en la que se acaban de

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 233

invertir cerca de 2'3 millones de euros en la construcción de un paso inferior para peatones con ascensores en sus accesos comunicando los andenes de la estación.

En Gandia le afecta el Tramo 1 (Alternativa 1A y 1B), siendo la más beneficiosa para los intereses de la ciudad ducal y de la comarca de la Safor la alternativa 1A que comienza con la duplicación de la vía actual desde Xeraco hasta la llegada a la Estación de Gandia, manteniendo la ubicación de la actual estación de viajeros pero remodelándola para aumentar la longitud de sus andenes. Eso evitaría tener que trasladar la actual estación de viajeros a las afueras de Gandia, en concreto a la antigua estación de mercancías situada en el Polígono Alcodar como refleja la alternativa 1B en la memoria justificativa cuya modificación causaría importantes perjuicios y afecciones a la ciudad de Gandia y comarca.

Así mismo, la alternativa 1A es la única que permite en un futuro habilitar una parada en el Hospital Comarcal Francesc de Borja. La inclusión de un apeadero en el hospital comarcal, obviado en el Estudio Informativo del Ministerio, dará soluciones de movilidad a la población que acude al hospital bien como usuarios de cualquiera de sus servicios o como acompañantes de los usuarios o bien como visitantes de las personas hospitalizadas. La parada del hospital facilitará el acceso desde todos los rincones de la comarca, tanto desde Oliva o Belfreguard, como desde las estaciones de Tavernes, Xeraco o Gandia, al mismo que tiempo que descongestionará la red viaria.

La captación de la demanda de viajeros que generará el apeadero del hospital comarcal, con un coste ínfimamente respecto a los 5 millones de euros de coste de una estación, sólo con los datos de la memoria de actividad que anualmente publica el departamento de salud 12 de Gandia justifica la construcción del apeadero cerca del hospital. Así, según la memoria de actividad del año 2017 del departamento de salud de Gandia, el área sanitaria del departamento 12 representa una población de 177.000 habitantes aproximadamente y corresponde a los 31 municipios de la comarca de la Safor y a 10 de la comarca de la Vall d'Albaida. En el hospital Francesc de Borja según esa memoria trabajan 1.105 profesionales. El numero de pacientes atendidos sin contar sus acompañantes o visitantes en el caso de hospitalizaciones es el siguiente: 14.165 usuarios que recibieron la alta hospitalaria; 11.354 intervenciones quirúrgicas, de ellas 9.800 fueron programadas; 273.776 usuarios que fueron atendidos en actividad ambulatoria, Consultas externas; 45.287 Exploraciones y técnicas realizadas y 79.717 Urgencias atendidas.

Por otro lado, la alternativa 1A es la única que evita que el término municipal de Daimús sea fraccionado en dos, destrozando ampliamente la zona agrícola protegida del municipio y creando una nueva barrera arquitectónica.

Finalmente la alternativa 1A del tramo 1 también resulta ventajosa para el municipio de Bellreguard. Con esta alternativa es posible construir una estación o apeadero contemplados en anteriores estudios en los últimos 800 metros de las Alternativas 1A con los primeros 300 metros de las Alternativas 2A y 2B (aproximadamente), desarrollando una alineación recta con pendiente del 0,5% en donde se podría ejecutar una estación que diera servicio al núcleo de población conformado por los municipios de Bellreguard, L'Alqueria de la Comtessa, Piles, Guardamar de la Safor, Miramar y Palmera, permitiendo una mayor movilidad entre los distintos municipios y zonas de la Safor.

En el tramo 2-Oliva la alternativa 2A es la más ventajosa al proponer la construcción de la estación ferroviaria de ADIF en el interior del núcleo urbano del municipio de Oliva.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

— Considerar tanto las resoluciones adoptadas por los Ayuntamientos valencianos en defensa del trazado más accesible y sostenible de la línea ferroviaria del Tren de la Costa a su paso por la Safor como las alegaciones presentadas al “Estudio informativo de la línea ferroviaria Valencia-Alicante (tren de la costa)” ante la Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Fomento por parte de los Ayuntamientos de Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia, Daimús, Bellreguard y Oliva.

— Impulsar como única opción viable, desde todos los puntos de vista, del “Estudio informativo de la línea ferroviaria Valencia-Alicante (Tren de la Costa)” a su paso por la comarca de la Safor aquella que contempla la Alternativa 0A del “Tramo 0-Corredor actual Valencia-Gandia”; la Alternativa 1A del “Tramo 1-Gandia” y la Alternativa 2A del “Tramo 2-Oliva”. Un trazado ferroviario que no destroza el término municipal de Daimús; que garantiza los accesos al hospital comarcal Francesc de Borja de Gandia y que permite conectar con las poblaciones de Bellreguard y el centro del casco urbano de Oliva.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 234

— No dismantelar las actuales estaciones ferroviarias de ADIF en el centro de la ciudad de Gandia y en el municipio de Xeraco.

— Incluir en el trazado de la línea ferroviaria del Tren de la Costa (Alicante-Valencia) el apeadero del “Hospital Comarcal Francesc de Borja” y las estaciones de “Bellreguard” y “Oliva” en el centro del casco urbano de este municipio.

— Reactivar y ejecutar desde el Ministerio de Transportes y el Grupo Fomento las inversiones previstas en el Plan Director de Mejora de los Servicios de Cercanías en la Comunitat Valenciana presentado en diciembre de 2017.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2020.—**Óscar Gamazo Micó**, Diputado.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000175

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la modificación del Decreto Legislativo 2/2011, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

En las últimas décadas hemos visto como la original relación entre puerto y ciudad ha ido experimentando grandes cambios. Los desarrollos inmobiliarios transformaron nuestros puertos históricos, donde convivían usos tradicionales como la pesca, actividades portuarias residuales y usos intensivos (la náutica popular, las golondrinas, las zonas de baño o el paseo).

En concreto, a partir de la década de los años ochenta, los puertos dejaron de ser puertos fluviales o dársenas interiores protegidas por diques de abrigo, cercanos a la ciudad y rodeados de barrios marineros, para convertirse de manera hegemónica en almacenes de contenedores. Así pues, los puertos históricos protagonizaron procesos desiguales de renovación urbana que fueron expulsando los usos portuarios, pesqueros e industriales para fomentar una economía terciaria basada en el ocio y el consumo.

Estos cambios produjeron tal transformación que pasaron a ser, en la gran mayoría de las ocasiones, una recurrente fuente de conflictos, tanto entre administraciones como a escala vecinal. En la mayoría de los casos, dichos conflictos ocurren cuando los puertos crecen hasta colindar sus instalaciones industriales y de almacenamiento de contenedores con los barrios tradicionales portuarios. Dicha transformación se entronca con la tradición central de la gestión española en materia de puertos, por la cual las Juntas de Obras se fueron convirtiendo en Autoridades Portuarias, y se fue sustrayendo la gestión que las autoridades locales desempeñaban. De este modo, a día de hoy, las Autoridades Portuarias han quedado configuradas como espacios de gestión ajenos a la gobernanza municipal que no deben rendir cuentas ante los gobiernos locales.

La Constitución Española contempla en su artículo 149.1.20 la reserva de la Administración General del Estado la competencia sobre los puertos de interés general, que la Ley de Puertos del Estado enumera explícitamente. De esta manera la legislación en materia portuaria, Decreto Legislativo 2/2011 por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, TRLPEMM, concede manga ancha a las Autoridades Portuarias para autorizar actividades y otorgar concesiones en su ámbito, siendo en cambio enormemente restrictiva para implantar determinados usos urbanos y ciudadanos.

El resultado de todo ello es que, actualmente, la Administración General del Estado puede delimitar suelo, definir su régimen de usos, afectar y desafectar espacios de manera unilateral y vaga transparencia en los procesos de toma de decisiones. De tal manera, las Autoridades Portuarias han adquirido unas competencias sobre una serie de espacios y actividades sin apenas contrapesos.

Este es el caso de lo que ocurre por ejemplo con la ampliación del puerto de Valencia, en la que la Autoridad Portuaria sacó, en abril a 2019, a licitación un proyecto sustancialmente diferente al que se había hecho público en 2001. El objetivo del nuevo plan es dedicar toda la ampliación norte al tráfico de

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 235

contenedores y la reubicación de la actual terminal de cruceros que supondría una concesión administrativa de 35 años para la ocupación de 4.700 metros a manos de una empresa privada.

La Declaración de Impacto Ambiental para la ampliación del Puerto de Valencia otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2007 se pronunció favorablemente y establece condicionantes exclusivamente sobre una de las alternativas propuestas por los promotores del proyecto.

Somos conocedores de una modificación sustancial del proyecto de la ampliación del Puerto de Valencia que afecta a la ubicación de la terminal de contenedores, a la eliminación de un contradique, prolongar 500 metros el actual dique de abrigo, incremento de áridos de relleno, cambio de localización del canal de acceso de los grandes barcos mercantes y, por lo tanto, de la zona de dragado. El alcance de las consecuencias ambientales del proyecto modificado no han sido evaluadas ni son equiparables a las de la alternativa constructiva aprobada.

Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Valencia afirma explícitamente que esta terminal de contenedores necesita, para poder ser operativa y viable, la construcción de un acceso viario diferenciado por la parte norte del Puerto de Valencia. En este sentido, hay que recordar que la Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto no incluye y, por tanto, no evalúa los impactos sobre la contaminación del aire ni de los impactos vinculados al tráfico rodado derivadas de este nuevo proyecto.

Así mismo, es importante tener en cuenta que el contexto jurídico de protección y planificación territorial valenciana ha variado sustancialmente entre 2015 y 2019 respecto al de 2007. En estos años se ha aprobado la Ley de l'Horta en las Cortes Valencianas, el Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de l'Horta de Valencia y el PATIVEL. Además, el Consell de la Generalitat Valenciana, aprobó la Declaración de Emergencia Climática en la Comunidad Valenciana. Entre los compromisos incluidos en dicha Declaración consta el de garantizar que la situación de emergencia climática se tenga en cuenta el diseño, desarrollo y aplicación de las diversas políticas sectoriales incluidas las de transporte y territorio. Llama la atención que ante esta situación no se haya tenido en cuenta las repercusiones y el impacto ambiental en las playas del sur de la ampliación del Puerto de Valencia. Un proyecto que generará un gran impacto sobre la gestión de los residuos generados por los barcos, la cualidad del aire, los fondos marinos, la fachada litoral con la erosión de las playas del sur de la ciudad y la salinización del Parque Natural de la Albufera.

Todo esto hace necesaria una revisión y análisis de la viabilidad ambiental integral del proyecto de ampliación del Puerto de València, incluyendo la de todas las actuaciones territoriales derivadas y vinculadas a la viabilidad económica de dicha ampliación.

Así pues, el exceso en la acumulación de competencias por parte de la Autoridad Portuaria, vienen dadas por la falta de transparencia y la nula participación de las administraciones autonómicas locales, vecinales y sociales sobre el nuevo proyecto de la ampliación del puerto de València; todo ello ha condicionado a una ciudad que pretende que el puerto sea una parte integral de la ciudad. A todo ello, se le añade la ausencia en la concreción y conclusiones fehacientes de los efectos positivos que la ampliación propuesta reportaría sobre la economía y el empleo valenciano.

En Compromís, entendemos que los puertos históricos son ciudad y por ello, consideramos necesario aprovechar su valor público y productivo implicando a toda la ciudadanía en la toma de decisiones, colaborando entre instituciones, recuperando el espacio público y manteniendo la gestión pública de los activos para impulsar el desarrollo urbano sostenible y la prosperidad inclusiva. Por todo ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso insta al Gobierno a modificar el Decreto Legislativo 2/2011, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, que permita:

1. Incorporar las recomendaciones de la agenda AIVP 2030 relativas a la interacción puertos-ciudad, para humanizar y democratizar los puertos, que genere espacios de interrelación, movilidad sostenible y conectada con la ciudad, energías limpias, economía sostenible y protección de la salud de las personas y el planeta, como ejes básicos.

2. Una gestión transparente y multilateral en la toma de decisiones, en la que la administración local y la autonómica, como titulares de la competencia en materia de ordenación del territorio, hayan de aprobar con la Administración General del Estado, la afección, desafectación, ampliaciones y modificaciones

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 236

del entorno portuario que le atañe, así como autorizar, regular, y gestionar los espacios y usos que se encuentren fuera del ámbito estricto de la competencia exclusiva estatal.

3. Democratización del espacio, incorporando la ciudadanía y a sus representantes en los consejos y espacios de decisión del diseño de planes estratégicos y de interacción con las ciudades.

4. Una definición objetiva y más concreta del concepto de interés general aplicado a los ámbitos estrictamente portuarios (actividades industriales, comerciales, logísticas y de tráfico de pasajeros) y que tenga en cuenta su relación con el urbanismo y la ordenación del territorio.

Adicionalmente, y de manera urgente el Congreso insta al Gobierno a paralizar la ampliación norte del puerto de València hasta que no se lleve a cabo una nueva Declaración Estratégica de Impacto Ambiental que sustituya a la de 2007 que realice un análisis integral del proyecto de ampliación modificado incluyendo aspectos como los accesos o las nuevas concesiones previstas. Dicha OEA deberá incluir todas las actuaciones territoriales derivadas y vinculadas en la viabilidad económica de dicha ampliación, teniendo en cuenta las condiciones actuales de emergencia climática y las exigencias de protección ambiental y territorial derivadas de la normativa autonómica vigente.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.—**Joan Baldoví Roda**, Diputado.—**Laura Borràs Castanyer**, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

161/000176

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancia de Joan Baldoví Roda Diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la mejora del parque central de Alicante, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

La ciudad de Alicante lleva esperando décadas el proyecto de Parque Central como actuación de transformación urbana que, además de conformar un pulmón urbano en plena ciudad, resuelva los problemas de desconexión de diversos barrios de la ciudad a causa de las vías del tren.

Hace años del soterramiento de parte de las vías ferroviarias, con la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad, pero el antiguo parque de vías se ha convertido en una escombrera, en un inmenso solar con problemas de limpieza que sigue ejerciendo el papel de frontera interna que separa la ciudad.

Afortunadamente en el pasado mandato se avanzó en la viabilidad y futuro Parque Central gracias al acuerdo entre los socios de AVANT para dar viabilidad económica a la sociedad y elaborar un calendario de actuaciones para hacer realidad el proyecto de Parque Central. Estos avances fueron avalados por la firma de la Adenda al Convenio de AVANT que actualizaba las condiciones y objetivos del convenio.

Pero la realidad es que, yendo todos los trámites administrativos con normalidad, las obras del futuro Parque Central no están previstas que empiecen hasta el año 2024, lo que implicaría que los vecinos y las vecinas de los barrios de la Florida, PAU1, Princesa Mercedes, Ciudad de Asís tengan que vivir separados por un espacio que presenta serios problemas de acumulación de basura, con el riesgo de incendios que eso provoca, e incomunicados.

Por todo ello y teniendo en cuenta esta reivindicación histórica del asociacionismo vecinal de los barrios alicantinos, presento la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso insta al Gobierno a:

1. Asumir la limpieza y mantenimiento de los terrenos del futuro Parque Central, que es propiedad del Estado, para evitar la acumulación de basura y la generación de problemas de salubridad, y riesgos de incendio.

2. Habilitar pasos peatonales, con carácter provisional, y que puedan ser desmontados en el momento del inicio de las obras, para romper la incomunicación de paso de la ciudadanía de los barrios colindantes al futuro Parque Central, y acabar con una barrera urbana de Alicante.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.—**Joan Baldoví Roda**, Diputado.—**Laura Borràs Castanyer**, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital

161/000023

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por una ambiciosa Agenda Digital para España, para su debate en la Comisión de Economía y Empresa.

Exposición de motivos

La actual agenda digital está en vigor desde el 15 de febrero de 2013 y se planteó a partir de un informe de expertos y un análisis de la situación realizado en 2012 con unos objetivos marcados hasta 2015. El seguimiento de la agenda se hizo de manera exhaustiva por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital hasta el año 2015 inclusive, contando con el último informe completo relativo a 2015 publicado en julio de 2016. Desde 2015 España, el décimo país por producto interior bruto total de la OCDE, carece de un rumbo claro para su digitalización y modernización tecnológica.

En 2017 la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital inició los procedimientos para redactar una nueva agenda digital, con el ánimo de alinearnos con las exigencias de la Unión Europea y acercarnos a la postura de otras potencias europeas que ya cuentan con una agenda de transformación digital con objetivos estratégicos hasta más allá de 2020. Teniendo en cuenta los plazos ejecutados en anteriores procedimientos de redacción, y solo si se aceleraran los plazos, para junio de 2018 se podría contar con un nuevo plan de digitalización para España, lo que nos dejaría «solo» dos años y medio sin unos objetivos concretos y un rumbo marcado para las políticas sectoriales tan importantes como las marcadas por la agenda digital. Sin un rumbo claro no se puede transformar un país.

En paralelo, la Unión Europea aprobó en mayo de 2015 su programa de agenda digital, conocido como «Digital Single Market Strategy» (DSMS), realizando una revisión del mismo en mayo de 2017.

Conviene recordar que hay 360 millones de europeos, de los cuales 23 millones son españoles, que se conectan a Internet cada día para estudiar, trabajar, comprar o vender. Entre los países de nuestro entorno, Francia actualizó su agenda digital en junio de 2015, en paralelo con la comisión; Alemania la actualizó en abril de 2016, mientras que el Reino Unido lo hizo en marzo de 2017 con su ambiciosa agenda hasta 2020, que incluye las mayores inversiones conocidas hasta la fecha por un Estado miembro para abordar la revolución que supone la transición hacia la 5G.

España, lejos de aprovechar el impulso que pudiera darnos la DSMS, se ha quedado rezagada en sus políticas, no ha dado un impulso a su estrategia digital y parece reticente a aprobar una nueva agenda digital en 2018.

El documento de trabajo preparado por la Secretaría de Estado del anterior Gobierno para su consulta pública distaba mucho de contar con el rigor que se le exige a un asunto de tal importancia estratégica para el sector. El análisis de la situación actual que se planteaba es ingenuo, poco detallado e ignora aspectos muy importantes que nos permitan saber con más exactitud el punto de partida.

Además, la propuesta realizada es una mera traslación de los pilares y objetivos fijados por el DSMS, sin hacer el esfuerzo necesario para atender a las necesidades específicas y capacidades potenciales de nuestro país, ni abordar hechos diferenciales respecto a Europa que permitan posicionarnos en una situación de mejora competitiva respecto a la Europa de los 27 en 2020.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 238

Pero, sin duda, lo más preocupante no es lo que dice la propuesta del Gobierno, que dice más bien poco o nada, con palabras huecas, faltas de significado y concreción, el problema es lo que no se dice o aborda con suficiente profundidad. No se habla de Industria, no se habla de contenidos digitales, no se habla de ciencia y no se habla de igualdad en oportunidades y acceso a la tecnología.

La situación con el anterior Gobierno no dista mucho de la situación actual. Si bien es cierto que España ha publicado y está implementando la Estrategia Nacional de Banda Ancha, convirtiendo a España en una de los países de la Unión Europea con una red más extensa de fibra óptica con más de 33 millones de puntos de acceso y con cobertura para un 75 % de la población, otros puntos crucial de la transformación digital se han quedado aparcados. De este modo, el Gobierno está desaprovechando las sinergias de la agenda digital para construir una economía productiva y, por ejemplo, alcanzar el objetivo de que la industria represente al menos el 20 % del PIB en el año 2020, desde el 16 % actual, y revertir la destrucción de nuestro tejido industrial.

Respecto a los contenidos digitales, sabiendo que España tiene vínculos tan importantes con América, con quien conforma una de las comunidades lingüísticas más importantes del mundo, la Estrategia digital no puede pasar por alto la industria de creación de contenidos, apoyándose y brindando nuevas oportunidades a nuestra industria cinematográfica y a los creadores de extraordinaria creatividad para producir contenidos de nueva generación.

Adicionalmente a la producción de contenido, debemos adaptar los medios audiovisuales para mejorar el acceso a la cultura online y asegurar remuneración a autores cuando se accede a contenido, música o libros online, es importante establecer nuevos modelos para acceder a la información y nuevas vías online para acercar la cultura al ciudadano.

La convergencia entre los medios tradicionales e Internet, así como el cambio de hábitos de consumo y dispositivo de acceso al contenido, ha traído tanto grandes transformaciones como oportunidades interesantes.

Las grandes tendencias en los medios y sector audiovisual son: una mayor interacción, experiencia «omnicanal», televisión a la carta, contenidos móviles o producciones audiovisuales en tiempo real (streaming).

Hay sectores en los que España tiene grandes profesionales en sus diferentes áreas de tecnología de reconocimiento mundial cuyo talento se debería retener como creación de contenidos, animación, videojuegos, desarrollo de sistemas IT o programación, entre otros. Los cambios en los hábitos de consumo marcarán los modelos de negocio y hacen que sea necesaria que los profesionales de este sector se adapten a las nuevas necesidades y demandas de acceso al contenido audiovisual. Se necesitará un reciclaje continuo que permita adaptarse a este entorno dinámico y de cambio continuo. Este nuevo cambio de paradigma va a abrir una oportunidad para mejorar la integración laboral de las personas con discapacidad, incluida la deslocalización del trabajo.

Respecto a la ciencia, el estado de la inversión en I+D+i está muy por debajo de los valores medios de la Unión Europea, y casi a la cola de nuestros países vecinos. Se debería de invertir en tecnología, investigación y creación de nuevas tecnologías, con planes específicos que fortalezcan sectores en los que España tiene un papel líder en el mundo (Robótica-País Vasco, Automoción (2,5 % del mercado mundial), eHealth (España líder en calidad de los Servicios médicos), Big Data (Cataluña a la cabeza de Europa en empresas del sector), 5G (varios proyectos H2020 liderados por organismos españoles), Smart cities (España a la cabeza con algunas ciudades pioneras, como Santander o Málaga).

Por último, Ciudadanos cree en la necesidad de que el Gobierno actúe proactivamente para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos españoles, independientemente de su ubicación geográfica, el tamaño de su municipio y sus capacidades económicas. Según varios estudios, entre un 20 y un 25 % de los de los ciudadanos españoles no puede acceder a Internet. Esta llamada «brecha digital» se concentra en municipios de pocos habitantes y resulta especialmente grave entre el colectivo de mujeres. Así, nos encontramos con una presencia principalmente masculina entre los tecnólogos de nuestro país.

En resumen, España se merece un plan ambicioso, con las ideas claras y mayor seguridad en nuestras capacidades y cualidades. No podemos resignarnos en ser un país en el pelotón de cola, debemos ser líderes y para ello hay que primero aspirar a serio. El conformismo nos está dejando atrás y no nos conformamos con la mediocridad de la propuesta presentada, sino que animamos al Gobierno, y trabajaremos con él, para hacer una propuesta para España que realmente genere riqueza, bienestar y prosperidad.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 239

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados presenta lo siguiente:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a darle la máxima prioridad a la aprobación de una nueva estrategia digital para España, que permita a nuestro país:

1. Desarrollar dentro de la agenda digital un objetivo concreto de Industria 4.0 y que se dote a su desarrollo de medios económicos para garantizar la modernización de nuestro tejido industrial. Esto requerirá:

a) La introducción en áreas estratégicas de nuestro sector industrial de nuevas tecnologías como: el internet de las cosas (IoT), la computación en la nube, el tratamiento masivo de datos y la inteligencia artificial. Para lo cual es necesario que la administración se centre en tener un diagnóstico claro de las barreras (fragmentación de plataformas, datos y sensores, privacidad y seguridad, interoperabilidad, etc.).

b) El desarrollo de las redes móviles de baja potencia, que ya son una realidad en España sobre espectro no licenciado (e.g. Sigfox), pero es igual de importante apoyar a los proveedores de Telecomunicaciones también para que encuentren los casos de uso que les permitan invertir en nuevas redes de Internet de las Cosas Móvil (M-IoT) sobre espectro licenciado.

c) Tecnologías como LTE-M (4G para Máquinas) o Narrow Band-IOT (NB-IOT) que permitirán superar la cifra de 10 millones a corto plazo y alcanzar cientos de millones de potenciales nuevas conexiones entre máquinas que se esperan en los próximos diez años. Estas tecnologías permitirán la masificación de sensores en movimiento (LTM-E) o estáticos (NB-IOT) que costarán menos de un euro y su batería durará diez años.

2. Establecer incentivos para recompensar el proceso de transferencia de tecnología entre organismos académicos e industria nacional, así como la atracción de financiación internacional y procedente de la colaboración con el ámbito privado, mediante:

a) La creación de un fondo de prueba de concepto a nivel nacional para probar la viabilidad de mercado de tecnologías disruptivas, que incluirían muchas de las tecnologías TICs. De manera similar al programa Collider, pero a nivel nacional, abierto a empresas, centros de investigación y universidades que cuenten con resultados de investigación que quieran trasladar al mercado.

b) Reforma del sexenio tecnológico: Hay que reconocer en el CV investigador la movilidad de los investigadores entre el sector público y privado y premiaremos sus actividades de transferencia.

c) Reformas legislativas que eliminen la burocracia y faciliten la permeabilidad de los investigadores entre el sector público y el privado.

d) Favorecer el emprendimiento en tecnologías digitales, poniendo en marcha el fondo de capital riesgo, como el fondo EmprendEspaña, incluido en el preacuerdo de presupuestos generales en 2018 y dotado con 480 M €.

3. Incrementar los recursos no financieros destinados a I+D+i en los PGE a una tasa anual acumulativa media por encima del incremento del PIB, hasta recuperar niveles de inversión previos a la crisis para alcanzar el objetivo del 2 % del PIB. En este sentido, se considera urgente la puesta en marcha de la Red Cervera de transferencia de tecnología, entendida como un mecanismo de cooperación en investigación aplicada entre Centros Tecnológicos, Universidades y otros agentes del sistema de I+D con empresas. Esta iniciativa cuenta con presupuesto no ejecutado en 2017 (20 millones de euros en subvenciones y 480 millones en préstamos) y podría ser decisiva para la adopción de algunas de las tecnologías facilitadoras claves para el desarrollo de una Agenda Digital verdaderamente transformadora.

4. Avanzar en la ciencia digital, con planes específicos que fortalezcan sectores en los que España tiene un papel líder en el mundo, como, por ejemplo, la robótica, “eHealth, Big Data, Smart cities o 5G” mediante:

a) El desarrollo, la atracción y consolidación de Digital Hubs, en coordinación con la iniciativa de la comisión europea y con la participación de todos los agentes del sistema.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 240

b) La dotación de doctorados industriales a dichos clústeres que permitan la colaboración industria-centros de investigación sería una excelente manera de dar impulso real a dichos polos tecnológicos.

5. Desarrollar medidas para la atracción y retención de talento tecnológico en nuestro país, con especial énfasis en la incorporación de la mujer a dicho colectivo. En esta dirección, se debería fortalecer e impulsar los estudios relativos a las TICs y aumentar las campañas orientadas a su mejor aceptación social. De manera más concreta, se propone desarrollar medidas para la difusión temprana de los estudios TICs entre los estudiantes de Educación Secundaria, así como aumentar la dotación asignada a programas como el Ramón y Cajal o Juan de la Cierva en las áreas relativas a las TICs.

6. Impulsar el trabajo conjunto de los diferentes sectores y todas las administraciones (e incluso otros países) en un entorno de economía colaborativa para convertir nuestro país en un referente europeo (incluido en 5G o ciberseguridad), mediante:

a) Promover la inversión y la construcción de redes de alta velocidad de tal manera que en 2025 haya 5G en cualquier rincón de Europa.

b) Priorizar la ciberseguridad.

c) Plan para el desarrollo de redes 5G en España que incluya una mesa Sectorial donde no solo estén las administraciones regionales y locales que ya están trabajando en Tecnología, sino también representantes de Centros de Investigación que trabajen en cooperación.

d) Uso y desarrollo de avances tecnológicos de código abierto (Open source).

e) La compartición, si no se limita a nuestro territorio, permitiría un avance exponencial en los desarrollos permitiendo el intercambio de conocimiento no solo entre comunidades, sino con otros países europeos, enriqueciendo el resultado final y garantizando la interoperabilidad con otras soluciones de otros países.

7. Eliminar definitivamente la brecha digital en España. Para ello se propone:

a) La creación de un plan nacional de cobertura wifi a dos años y una mayor coordinación de la administración central con los Ayuntamientos para acceder a los fondos europeos que se liberaron a finales del 2017 para el fomento de la Digitalización. En el plan de la Comisión Europea wifi4EU se incluye una partida de 120 millones de euros a desembolsar hasta 2019 para ayudar a las administraciones locales a ofrecer wifi gratis.

b) Medidas para la universalización del acceso a internet como: una estrategia de acceso wifi público, más la extensión del abono social a desempleados de larga duración y parados de más de 45 años.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Edmundo Bal Francés y Marcos de Quinto Romero**, Diputados.

Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad

161/000029

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prohibición de la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad.

Exposición de motivos

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue aprobada en el año 2006, ratificada posteriormente por España, entrando en vigor en el año 2008.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 241

En su articulado, la Convención recoge una serie de artículos específicos sobre los derechos de las personas con discapacidad en relación a la formación de una familia, un hogar, ser padres y madres y las relaciones personales de los mismos. En concreto, su artículo 23 recoge lo siguiente:

«Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia.

1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:

a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges.

b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos.

c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.»

Sin embargo, lo recogido en este artículo no tiene total vigencia en nuestro país. En España, todavía, a día de hoy, se sigue practicando la denominada «esterilización forzada o no consentida» a personas con discapacidad o incapacitadas judicialmente. Así lo permite nuestro Código Penal en su artículo 156.

«Artículo 156.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será válido el prestado por estos ni por sus representantes legales.

No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil.»

La permanencia en nuestro Derecho nacional de esta posibilidad legal, más de una década después de la entrada en vigor del Tratado internacional de las personas con discapacidad, constituye una grave anomalía en términos de estrictos derechos humanos. Que nuestro Estado siga permitiendo que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad por mitos tales como «el bien de la familia», «la incapacidad de las mujeres con discapacidad para ser madres» o «por su bien», atenta directamente contra el artículo 23 de la Convención.

Cabe decir que la esterilización forzada es una práctica más extendida de lo que la opinión pública considera. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la última década se han practicado en España más de un millar de esterilizaciones forzadas, la mayoría de ellas en mujeres. Sólo en el año 2016 el CERMI, basándose en datos oficiales, señala que hubo 140 casos, dándose 865 casos más entre los años 2005-2013.

También Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, ya recomendó oficialmente al Reino de España, en el año 2011, acomodación de su ordenamiento interno (Código Penal) en este punto, para que no se vulnerara esta garantía. Igualmente, en su Informe de observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España, concretamente en su recomendación 34, este Comité reitera «la recomendación que formuló en sus observaciones finales anteriores (CRPD/C/ESP/C0/1, párr. 38) e insta [a España] a que derogue el artículo 156 de la Ley Orgánica núm. 10/1995 a fin de acabar por completo con la práctica de la

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 242

esterilización forzada de personas con discapacidad, así como con los tratamientos médicos y las investigaciones que se administren o realicen sin el consentimiento pleno e informado del afectado».

Asimismo, cabe subrayar el artículo 39 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), en vigor en España en 2014, que prohíbe expresamente las esterilizaciones forzadas o no consentidas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a modificar el artículo 156 del Código Penal a fin de prohibir la práctica de la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente y penarla en concordancia con los derechos recogidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000033

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la desprotección de menores y colectivos vulnerables por el retraso en la elaboración de los informes psicosociales, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

Los informes psicosociales sobre menores inmersos en procedimientos judiciales, tales como de separación o divorcio, agresiones, o relativos a la custodia de los mismos, son una pieza clave para salvaguardar su interés superior, así como la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, en numerosas ocasiones se producen retrasos —a veces, de hasta dos años— en la elaboración de los mismos, suponiendo un menoscabo evidente en la protección de los menores y desvirtuando el fin mismo de los informes psicosociales, como es la ajustada toma de decisiones por parte de los órganos judiciales, salvaguardando en todo caso los derechos de los menores.

Algunas de las medidas tomadas, como la firma de convenios de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, no ha solucionado esta problemática, optando además con ello a externalizar un servicio que debería ofrecer la propia Administración de Justicia a través de empleados públicos independientes y con la exigible y controlable especialización y profesionalización.

Los Equipos Psicosociales siguen saturados en cuanto a la carga de trabajo, y la esperada agilización en la ejecución de pericias sigue sin producirse. Asimismo, y a mayor abundamiento, se ha producido en los últimos años un aumento progresivo de las demandas judiciales para la elaboración de informes periciales en un elevado y heterogéneo número de asuntos, tanto civiles como penales, que no ha sido solventado con el incremento de los Equipos Técnicos, generando desigualdad e injusticia. Hay que señalar que se han originado una serie de cambios a nivel social y legislativo que confluyen precisamente en ese incremento del número de demandas periciales: cambios legislativos regulando la custodia compartida, una cada vez mayor intolerancia social hacia la violencia de género y doméstica o un incremento de solicitudes periciales relacionadas con abusos sexuales a menores. Todos ellos son asuntos presentes, como decimos, en la vida social y en los medios de comunicación, y que afectan profundamente a las familias y a la sociedad en que vivimos.

Entendemos que es manifiesta la necesidad de contar con estos profesionales, reflejada en diversas medidas legislativas, entre ellas, la Ley de Enjuiciamiento Civil o el Estatuto de la Víctima, donde se hace referencia explícita a la labor de los especialistas y al «Equipo Técnico Judicial» en las exploraciones de menores en los procedimientos civiles y penales.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 243

Desde Ciudadanos consideramos que esta situación es inaceptable, primero, porque atenta contra los derechos e intereses de los menores de edad y de las personas más vulnerables, abriendo la puerta a que sigan produciéndose agresiones y abusos al dilatarse las decisiones judiciales por falta de personal y, segundo, porque la lentitud que esta falta de personal ocasiona en la resolución de los procedimientos no garantiza su tutela judicial efectiva.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Implementar medidas concretas que garanticen los medios necesarios a los equipos psicosociales para el correcto desempeño de su labor. Concretamente, esta puesta a disposición de medios suficientes es fundamental para la agilización en la ejecución de las pericias en los procedimientos judiciales que afecten a menores y población vulnerable, previa evaluación de las necesidades existentes y con la colaboración, en todo caso, del Consejo General del Poder Judicial.

2. Reconocer el desempeño profesional de los Equipos Psicosociales y crear un Cuerpo Nacional de Psicólogos Forenses y de Trabajadores Sociales Forenses, funcionarizado, con una normativa propia y que facilite la necesaria colaboración de estos profesionales con el conjunto de Operados Jurídicos.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2019.—**Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

161/000093

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prohibición de la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue aprobada en el año 2006, ratificada posteriormente por España, entrando en vigor en el año 2008.

En su articulado, la Convención recoge una serie de artículos específicos sobre los derechos de las personas con discapacidad en relación a la formación de una familia, un hogar, ser padres y madres y las relaciones personales de los mismos. En concreto, su artículo 23 recoge lo siguiente:

«Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia.

1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:

a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges.

b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos.

c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 244

Sin embargo, lo recogido en este artículo no tiene total vigencia en nuestro país. En España, todavía, a día de hoy, se sigue practicando la denominada «esterilización forzosa o no consentida» a personas con discapacidad o incapacitadas judicialmente. Así lo permite nuestro Código Penal en su artículo 156.

«Artículo 156.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será válido el prestado por estos ni por sus representantes legales.

No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil.»

La permanencia en nuestro Derecho nacional de esta posibilidad legal, más de una década después de la entrada en vigor del Tratado internacional de las personas con discapacidad, constituye una grave anomalía en términos de estrictos derechos humanos. Que nuestro Estado siga permitiendo que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad por mitos tales como «el bien de la familia», «la incapacidad de las mujeres con discapacidad para ser madres» o «por su bien», atenta directamente contra el artículo 23 de la Convención.

Cabe decir que la esterilización forzada es una práctica más extendida de lo que la opinión pública considera. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la última década se han practicado en España más de un millar de esterilizaciones forzadas, la mayoría de ellas en mujeres. Sólo en el año 2016 el CERMI, basándose en datos oficiales, señala que hubo 140 casos, dándose 865 casos más entre los años 2005-2013.

También Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, ya recomendó oficialmente al Reino de España, en el año 2011, acomodación de su ordenamiento interno (Código Penal) en este punto, para que no se vulnerara esta garantía. Igualmente, en su Informe de observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España, concretamente en su recomendación 34, este Comité reitera «la recomendación que formuló en sus observaciones finales anteriores (CRPD/C/ESP/C0/1, párr. 38) e insta [a España] a que derogue el artículo 156 de la Ley Orgánica núm. 10/1995 a fin de acabar por completo con la práctica de la esterilización forzada de personas con discapacidad, así como con los tratamientos médicos y las investigaciones que se administren o realicen sin el consentimiento pleno e informado del afectado».

Asimismo, cabe subrayar el artículo 39 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), en vigor en España en 2014, que prohíbe expresamente las esterilizaciones forzadas o no consentidas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a modificar el artículo 156 del Código Penal a fin de prohibir la práctica de la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente y penarla en concordancia con los derechos recogidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.—**Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés**, Diputados.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 245

161/000105

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el restablecimiento de los fondos estatales para la atención de menores extranjeros no acompañados, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

Recientemente, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Servicios para la Infancia y la Familia, ha informado por carta a las Comunidades Autónomas de que no mantendrá las ayudas concedidas para complementar los recursos de los que disponen las entidades públicas de protección de menores de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla que recibieron un gran número de menores extranjeros no acompañados durante 2018, las cuales ascendieron hasta los 40 millones de euros en total, y que no libraré ninguna otra partida para colaborar en la financiación de estos servicios a lo largo del año 2020.

Esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez resulta especialmente perjudicial para Andalucía, que recibió 26 millones procedentes de estas ayudas, y para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. En el caso andaluz, si bien es cierto que la afluencia de menores extranjeros no acompañados durante este año ha sido inferior a la de 2018, en que ésta creció un 115 %, también lo es que el número de menores inmigrantes atendidos por las instituciones públicas andaluzas es de 2.174, muy similar a los 2.274 en plazas públicas el año anterior. Si a este número se suma el de las plazas no dependientes de forma directa de la Junta de Andalucía, la cifra de menores inmigrantes atendidos asciende a los 5.600.

Los fondos estatales cuya retirada ha sido decretada ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez no sólo se destinan a complementar la atención a estos menores a su llegada a nuestro país, sino que también a dar respuesta a sus necesidades de alojamiento y manutención, así como a su acompañamiento y a la definición de itinerarios para su inclusión social. Este último aspecto resulta especialmente relevante dado que muchos de estos menores se encuentran próximos a cumplir la mayoría de edad y, por tanto, a perder la tutela de las instituciones públicas. En Andalucía, por ejemplo, el 57 % de estos menores, la mayoría, tienen 17 años.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, aun cuando podamos compartir la necesidad de someter a revisión el actual modelo de atención en aras a mejorar su eficacia, creemos totalmente injustificada la retirada de los fondos estatales decidida por el Gobierno de Pedro Sánchez, además de perjudicial, por cuanto mermará la capacidad de atención de los menores no acompañados que llegan a nuestro país, y por ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a reconsiderar su decisión de no mantener los fondos estatales para complementar los recursos de los que disponen las entidades públicas de protección de menores de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para atender a menores extranjeros no acompañados, manteniendo su aportación durante todo el tiempo que resulte necesario y, en todo caso, en tanto se lleve a cabo la revisión del modelo de atención en aras a mejorar su eficacia.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.—**Sara Giménez Giménez**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000117

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para reforzar los

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 246

protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de abuso, agresión y explotación sexual como las que se han conocido que han tenido lugar de manera continuada en centros de menores tutelados dependientes del Consell de Mallorca y sobre las actuaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en torno a este caso en concreto, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

Recientemente se conocía a través de los medios de comunicación que la presunta agresión sexual cometida por varios jóvenes a una menor en Palma entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre podría haber destapado una red de drogas y prostitución de menores internos en centros de menores en Palma. Tanto la menor como varios de los presuntos agresores residen en la actualidad en centros tutelados de la isla de Mallorca.

Tanto la Policía Nacional y la Guardia Civil confirman que han detectado «casos de personas que prostituyen a adolescentes que residen en centros tutelados por el Consell de Mallorca». En la misma línea, la prensa local se hacía eco de la opinión de varios educadores que trabajan en estos centros de protección de menores, los cuales denunciaban que la «prostitución de las niñas acogidas en estos centros de la isla está totalmente extendida, y que en algunos casos afecta a la práctica totalidad de las menores ingresadas».

Por otra parte, fuentes policiales involucradas en las investigaciones sobre este caso declaraban que «hay una negligencia absoluta por parte de los servicios sociales» y que, pese a las denuncias reiteradas de los trabajadores, cuando estas llegan a los niveles superiores del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) «los casos se minimizan, porque no tienen medios para evitarlo» y que «prefieren mirar para otro lado».

A raíz de estos acontecimientos y del elevado número de denuncias sin atender que se ha puesto de manifiesto, el IMAS ha terminado por reconocer que tiene constancia de 16 casos de explotación sexual infantil. Se trata de 15 niñas y un niño, dos de ellos residen en centros de acogida de la Península por su seguridad. El conseller ejecutivo del IMAS, Javier de Juan, minimizó las críticas y señaló que los casos señalados se encontraban bajo la investigación de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional como con el Equipo de Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil. La posterior comparecencia de la Consellera d'Afers Social del Govern balear, Fina Santiago, tampoco aportó luz sobre este asunto.

De estas situaciones de explotación sexual se hacen eco informes de hace más de tres años, sin que hasta el momento parezca ni que el IMAS, ni tampoco por el Consell de Mallorca ni la Consellería d'Afers Socials del Govern balear, formados ambos por PSOE, Podemos y partidos nacionalistas desde el año 2015, hayan asumido ninguna responsabilidad por estos casos ni hayan adoptado ninguna medida para ponerles freno.

Resulta absolutamente intolerable que menores que están bajo la tutela de la administración por padecer situaciones de vulnerabilidad, desamparo o abuso en su entorno familiar y que residen en centros de su titularidad puedan convertirse en víctimas de abusos y agresiones sexuales, e incluso situaciones de explotación sexual continuada, y lo es más aún que la administración, siendo conocedora de tales situaciones, parezca mirar hacia otro lado en lugar de hacer todo lo que esté a su alcance para prevenir, detectar e investigar estos posibles casos y, en su caso, actuar con la mayor contundencia para atajarlos lo antes posible.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección integral y la asistencia de los menores tutelados residentes en centros de responsabilidad pública ante situaciones de abuso, agresión y explotación sexual y a que, con tal finalidad, emprenda, entre otras medidas, las siguientes:

1. Promover el establecimiento o, en su caso, revisión, de directrices comunes para el diseño y evaluación de los protocolos de prevención, detección y actuación en casos de abuso, agresión o explotación sexual de menores tutelados en centros públicos, así como impulse, en colaboración con las

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 247

Comunidades Autónomas, la revisión de los protocolos autonómicos vigentes para asegurar la eficacia de su respuesta ante estas situaciones.

2. Impulsar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con las autoridades competentes, para esclarecer los casos de abuso, agresión y explotación sexual de menores tutelados residentes en centros dependientes del Consell de Mallorca de las que se ha tenido recientemente conocimiento, y para asegurar la detección y puesta a disposición de la justicia de los presuntos responsables.

3. Aprobar y presentar ante esta Cámara un Proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que asegure la protección y asistencia de todos los menores que sean víctimas de cualquier forma de violencia, incluidos casos de agresión, abuso y explotación sexual que suponen una grave violación de sus derechos fundamentales, y que contemple disposiciones específicas para garantizar la protección de los menores tutelados residentes en centros de responsabilidad pública.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2020.—**Sara Giménez Giménez y Pablo Cambroneró Piqueras**, Diputados.—**Inés Arrimadas García**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000125

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación y dotación efectiva de la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

El 8,5 % de la sociedad española presenta algún tipo de discapacidad, lo que supone que más de 4 millones de personas tengan que enfrentarse, en su día a día, a numerosas barreras para vivir su vida con plena autonomía, arquitectónicas, cognitivas, sensoriales y también, no menos importantes, socioeconómicas. Es por ello que la accesibilidad universal representa un objetivo trascendental, pues no se trata simplemente de favorecer las condiciones de vida de un colectivo necesitado de apoyos específicos, sino de garantizar la plena inclusión y la igualdad social de las personas con discapacidad con el resto de ciudadanos, permitiendo con ello el pleno desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Teniendo esto presente, resulta necesario poner en valor la labor realizada por las Secciones de Protección de Personas Vulnerables del Ministerio Fiscal español. Estas se constituyeron a raíz de la nueva configuración dada a la institución fiscal por la Constitución española de 1978, que, en su artículo 124, y sin perjuicio de sus funciones en el proceso penal, confiere a la Fiscalía la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados. Esta labor naturalmente incluye la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores, la cual se garantiza de manera expresa en los artículos 49 y 50 del texto constitucional, en estrecha relación con el mandato que el artículo 9.2 de nuestra Norma Fundamental hace a todos los poderes públicos de promover las condiciones de libertad y de igualdad para todos los ciudadanos y de remover los obstáculos que impidan o dificulten que estas sean reales y efectivas.

De este modo, el Ministerio Fiscal no actúa únicamente ante los tribunales penales, sino también fuera de ellos, ante la jurisdicción civil, al objeto de señalar aspectos, hechos o circunstancias que puedan estar limitando los derechos de las personas vulnerables, mediante escritos realizados a instancias de los particulares en los que se advierten incumplimientos o insuficiencias subsanables. Tales escritos reciben el nombre de «diligencias informativas», que pueden concluir con un «decreto», cuando se refieren a hechos o personas individuales, o con un «dictamen», si se refieren a un fenómeno o situación generalizada.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 248

Estas funciones se han consolidado con el paso del tiempo gracias al empeño de los sucesivos Fiscales Generales del Estado, que han entendido que esta faceta corresponde al Ministerio Fiscal tanto como la penal. En ese sentido, el Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes, contempla la creación de una «Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores».

Sin embargo, esta Fiscalía de Sala, pese a su previsión reglamentaria, aún no se ha creado de modo efectivo, ni existe previsión de dotación, lo que incluye su correspondiente memoria económica y la adscripción de Fiscales adjuntos, como el resto de Fiscalías de Sala penales.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos entendemos que resulta injustificable que la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores no se encuentre creada y dotada de forma efectiva, sobre todo teniendo presente que su ámbito de actuación concierne a colectivos vulnerables especialmente numerosos, como las personas con discapacidad y las personas mayores, cuya protección viene amparada, como se ha señalado, en los artículos 49 y 50 de la Constitución, y por ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar todas las medidas que sean necesarias para proceder a la creación y dotación económica efectivas de la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, con la finalidad de consolidar la protección por el Ministerio Fiscal de los derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores en ámbitos no penales.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2020.—**Sara Giménez Giménez**, Diputada.—**Edmundo Bal Francés**, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000141

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación y a la puesta en marcha de una estrategia nacional con la que mejorar la prevención y el abordaje de la soledad crónica en las personas mayores, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La soledad es definida literalmente por la Real Academia Española como la «carencia voluntaria o involuntaria de compañía» y es, según la Organización Mundial de la Salud, una de las causas principales del deterioro del bienestar físico y mental de las personas, especialmente de las personas mayores.

Esta situación es representativa en España, donde cada vez vivimos más años (nuestra esperanza de vida al nacer es de 83,4 años, es decir la mayor de la Unión Europea y la segunda del mundo solo por detrás de Japón) y con mayor calidad de vida.

De esta forma, en 2019, según los datos que ofrece del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 19,4 % de los ciudadanos de nuestro país tiene más de 65 años, el 9,61 % es mayor de 75 años, el 3,24 % supera los 85 años y el 0,25 % ya ha cumplido los 95 años. Además, y también de acuerdo con el INE, hay 368.400 personas mayores de 85 años que viven solas y cerca de 4,7 millones de hogares unipersonales en España, de los que 2 millones (el 42,5 por ciento), según la Sociedad Española de Geriátrica y Gerontología, están habitados por personas mayores de 65 años.

La complejidad que en términos generales conlleva esta situación —característica de Comunidades Autónomas como Castilla y León, el Principado de Asturias, Galicia, el País Vasco y Aragón— se ve incrementada por fenómenos sociales, demográficos y epidemiológicos como la pluripatología, la fragilidad, la dependencia, la discapacidad... y se verá acrecentada todavía en mayor medida con el transcurso del tiempo, en tanto que en el año 2050, según se plantea en proyecciones tanto de organismos nacionales como internacionales, las personas con más de 65 años supondrán más del 30 % de la población española total (con casi 13 millones) y los octogenarios superarán la cifra de 4 millones.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 249

España, en consecuencia, será el país más envejecido del mundo en el largo plazo, una situación que, ligada a otras variables como la dispersión poblacional o el incremento progresivo de la cantidad de zonas en riesgo de despoblación que afecta a nuestro país —rurales en su mayoría—, hace que resulte más que necesaria la implementación de medidas concretas con las que prevenir y mejorar el abordaje de la soledad crónica que afecta a nuestros mayores, así como para preservar y desarrollar su bienestar físico, su salud mental y su seguridad.

Países Bajos y Reino Unido son ejemplos de países de nuestro entorno que bien en forma de intervenciones, estrategias y planes de acción «ad hoc», bien mediante la creación de estructuras y el nombramiento de responsables específicos en el marco de la administración pública, llevan varios años trabajando e invirtiendo recursos públicos para comprender en mayor medida el fenómeno y sus consecuencias, así como para frenar los efectos negativos que la soledad produce en nuestros mayores.

De igual modo, el pleno del Congreso de los Diputados, celebrado el 11 diciembre de 2018, aprobó con 332 votos a favor, siete abstenciones y cero votos en contra una Proposición no de Ley impulsada y defendida por el Grupo Parlamentario Popular en la que se instaba al Gobierno a impulsar el envejecimiento activo, a desarrollar el voluntariado relacionado con los mayores, a poner en marcha medidas de apoyo integral e individualizado, a apostar por iniciativas de convivencia intergeneracional como el «cohousing», a ofrecer una atención sociosanitaria, y a investigar y elaborar estadísticas sobre las que incrementar el conocimiento existente de la soledad y su impacto en los mayores para incrementar la visibilidad del problema.

No obstante, desde diciembre de 2018 hasta el momento, no ha trascendido públicamente medida tangible alguna por parte del actual Gobierno de España para dar pleno cumplimiento a la referida Proposición no de Ley y desarrollar la prevención y un abordaje temprano, integral y transversal de la soledad crónica en las personas mayores.

Por todo ello, partiendo de las medidas contempladas en la citada proposición no de ley, teniendo presente el trabajo desarrollado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y el Comisionado del Gobierno frente al reto Demográfico, y en el marco de trabajo que establecen iniciativas vigentes como la «Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y para su buen trato 2018-2021.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar y a poner en práctica una Estrategia Nacional contra la Soledad Crónica que, desde la total colaboración con las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las organizaciones del tercer sector, preserve y desarrolle el bienestar físico, la salud mental y la seguridad de los mayores.

La referida estrategia deberá:

— Impulsar la sensibilización y la concienciación en la sociedad sobre la soledad crónica en las personas mayores —especialmente en el ámbito rural y en las zonas con riesgo de despoblación—, para procurar avances en su conocimiento y en la comprensión de sus consecuencias.

— Promover medidas con las que desarrollar la prevención, la detección y el abordaje temprano, el voluntariado y la proactividad y corresponsabilidad de los ciudadanos frente a la soledad crónica en las personas mayores.

— Posibilitar un tratamiento integral, transversal, personalizado, humanizado, profesionalizado y multidisciplinar (sociosanitario, educativo) de la soledad crónica en las personas mayores.

— Fomentar la investigación en torno a la soledad crónica en las personas mayores para optimizar el uso de los avances tecnológicos, adaptar entornos y desarrollar la innovación social en su abordaje.

— Analizar las buenas prácticas y las experiencias de éxito implementadas en otros países para, a partir de su adaptación a las características sociodemográficas de nuestra sociedad, replicarlas en nuestro país.

— Estimular el abordaje de la soledad crónica en las personas mayores en el marco de la agenda social de la Unión Europea para generar sinergias entre los Estados miembros con las que agilizar la consecución de avances.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.—**Alicia García Rodríguez**, Diputada.—**Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos**, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 250

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.

Comisión de Hacienda

181/000010

Grupo Parlamentario Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda

Diputado don Néstor Rego Candamil (BNG)

Dirigida a María Jesús Montero Cuadrado (Ministra de Hacienda)

Texto:

¿Va el Ministerio de Hacienda del que es usted titular a dar cumplimiento a la reclamación que realiza la Xunta de Galiza sobre los 370 millones que se le adeudan, 200 millones del IVA correspondiente a 2017 y 170 de los incentivos habilitados para las autonomías cumplidoras de la regla de gasto? ¿Se plantea iniciar una reforma del sistema de financiación autonómica en esta legislatura? ¿En qué términos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2020.—**Néstor Rego Candamil**, Diputado.

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

181/000001

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Celso Delgado Arce

Texto:

¿Por qué el Ministerio de Fomento está demorando continuamente las actuaciones necesarias para impulsar las autovías A-76 entre Ourense y Ponferrada —todavía sin ningún tramo en obras y la A-56 entre Ourense y Lugo— con solo un tramo en obras y sin finalizar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2019.—**Celso Luis Delgado Arce**, Diputado.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 251

181/000002

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Celso Delgado Arce

Texto:

¿Cómo va el Ministerio de Fomento a cumplir los compromisos contraídos en relación con las partidas inversoras que afectan a la red estatal de carreteras en la provincia de Ourense que no fueron respetados el pasado año 2019?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2019.—**Celso Delgado Arce**, Diputado.

181/000003

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Celso Delgado Arce

Texto:

¿Cuáles son los motivos por las que se ha incumplido el cronograma comprometido por ADIF-AV —y confirmado repetidamente por el Ministro de Fomento— para la conclusión antes de que finalizase 2019 de las obras de la LAV a Galicia entre Pedralba de la Pradería y Ourense y cuando finalizarán definitivamente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2019.—**Celso Delgado Arce**, Diputado.

181/000004

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Celso Delgado Arce

Texto:

¿Cómo va el Ministerio de Fomento a cumplir los compromisos contraídos en relación con las partidas inversoras que afectan a la red estatal de carreteras en la provincia de Ourense que no fueron respetados el pasado año 2019?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2020.—**Celso Delgado Arce**, Diputado.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 252

181/000005

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Diputada doña Ana María Zurita Expósito

Texto:

La limitación de los precios del alquiler de viviendas fue una de las «medidas estrella» del acuerdo que selló la alianza con el PSOE y Unidas Podemos.

¿Cuándo la piensa poner en práctica y con qué hoja de ruta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.—**Ana María Zurita Expósito**, Diputada.

181/000006

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Diputada doña Ana María Zurita Expósito

Texto:

A finales del mes de enero, ha tenido lugar en Canarias una «cumbre del Transporte», a efectos de estudiar conjuntamente con este Ministerio soluciones para el abaratamiento de los billetes aéreos de territorios extrapeninsulares.

¿A día de hoy podría informar sobre las conclusiones y soluciones a las que se ha llegado al respecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.—**Ana María Zurita Expósito**, Diputada.

181/000007

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Diputada doña Ana María Zurita Expósito

Texto:

Dentro del Plan 20.000 viviendas anunciado por ese Ministerio, hay dos actuaciones específicas para Canarias, según se desprende de su propia contestación a pregunta escrita de esta Diputada, Una en Sta Cruz de Tenerife y otra en Telde.

¿Podría aclarar qué plazos baraja para el desarrollo de esas actuaciones concretas?

¿Cree realmente que esa será la medida «estrella» para resolver la escasez de oferta de vivienda en Canarias y en el resto del territorio español?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.—**Ana María Zurita Expósito**, Diputada.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 37

20 de febrero de 2020

Pág. 253

181/000008

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Joaquín María García Díez

Texto:

¿En que situación se encuentra y que previsiones maneja el gobierno en relación a los proyectos de electrificación entre Lugo y Monforte de Lemos, así como los de renovación de la vía en el trazado entre Lugo y Ourense, incluyendo la correspondiente a las variantes previstas de Os Peares, Canabal y Rubián?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.—**Joaquín María García Díez**, Diputado.

181/000009

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Diputada doña Ana María Zurita Expósito

Texto:

¿Qué normativas o textos legales piensa modificar el Gobierno para impulsar la bajada de los precios de alquiler de viviendas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2020.—**Ana María Zurita Expósito**, Diputada.

OTROS TEXTOS

PREMIOS

292/000007

Advertido error en el núm. expte. 292/000007, publicado en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 36, de 19 de febrero de 2020, el Jurado de la II Edición del Premio «Josefina Carabias» de periodismo parlamentario, queda integrado por las siguientes personas:

- Excm.a Sra. D.^a Meritxell Batet Lamaña, Presidenta, que lo presidirá.
- Excmo. Sr. D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Vicepresidente Primero.
- Excm.a Sra. D.^a Ana María Pastor Julián, Vicepresidenta Segunda.
- Excm.a Sra. D.^a María Gloria Elizo Serrano, Vicepresidenta Tercera.
- Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Vicepresidente Cuarto.
- Sra. D.^a Lucía Méndez Prada, ganadora del Premio en su primera edición.
- Sra. D.^a Anabel Díez, Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, o miembro de la Junta Directiva en quien delegue.
- Sra. D.^a Elisenda Guardino Cusó, Directora de Comunicación de la Presidencia del Congreso de los Diputados.
- La Ilma. Sra. D.^a María Rosario Rodríguez García, Directora de Comunicación de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretaria del Jurado.

Palacio del Congreso de los diputados, 19 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Carlos Gutiérrez Vicén**.